

Editorial

Múltiples y variados procesos sociales y políticos en curso en algunas regiones de Latinoamérica parecen encaminados a construir una alternativa superadora del rumbo neoliberal adoptado por la casi totalidad de los gobiernos de la región en décadas pasadas. Esta nueva situación ha tenido como una de sus consecuencias promover un debate sobre las características, posibilidades y dificultades con que se enfrentan los sujetos sociales involucrados en la construcción de un proyecto que, a falta de mejor término, podría denominarse como "post-neoliberal". Las controversias suscitadas en torno a esta problemática recuperan las reflexiones que sobre el poder y el lugar que le cabe al estado-nación desde una estrategia de emancipación popular produjera el pensamiento crítico de nuestros países al calor de las experiencias de resistencia y lucha acumuladas por los movimientos sociales en la última década.

Con la intención de abordar esta compleja problemática reunimos, para el dossier que abre la revista, seis contribu-

ciones que, desde diferentes planos y perspectivas, aportan al mencionado debate. Tres de las mismas reflexionan a partir de una mirada más general y teórica. Inicia dicho dossier la contribución de Aníbal Quijano quien, a partir del señalamiento de las principales cuestiones que signan el panorama actual en la región (tanto en relación a las características que adoptó y promueve hoy el neoliberalismo como respecto de la constitución de nuevos movimientos sociales y los horizontes de conflicto que se plantean), analiza los procesos de cambio en Latinoamérica, los límites históricos de la emergencia de un capitalismo nacional y la constitución molecular de nuevas formas de autoridad a partir de la experiencia de estos nuevos movimientos. Por otro lado, Atilio Boron examina los desafíos y obstáculos que afronta la pluralidad de fuerzas sociales y políticas que hoy configuran el complejo y heterogéneo espacio de la izquierda latinoamericana en la construcción de una salida efectiva a un modelo neoliberal que, profundamente cuestionado en su legitimidad, conserva, al decir del autor, una arraigada presencia en el terreno de la economía y de los "hacedores" de políticas públicas. Finalmente Sergio Tischler nos plantea una reflexión alrededor del concepto de "clases" en tanto sujetos colectivos constituidos en el conflicto y sobre la idea de la revolución que, entendida desde la perspectiva de la emancipación social, subraya la superioridad de las formas autodeterminantes y autoconstitutivas de las masas por comparación con las tradicionales estructuras del partido y el estado.

Completan este dossier tres artículos que, asentados sobre similares preocupaciones, reflexionan en torno a los procesos sociales y políticos concretos que enfrentan hoy los movimientos populares en Brasil, Venezuela y Ecuador. En este sentido, publicamos una entrevista realizada a João Pedro Stédile, dirigente del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) de Brasil, en la que éste desarrolla su visión sobre la lucha actual por la reforma agraria, la caracterización del gobierno de Lula y la necesidad de avanzar en un nuevo proyecto de país, al paso que expone sus concepciones sobre la política y el estado desde una perspectiva transformadora. A continuación Edgardo Lander analiza los cambios ocurridos en el proceso sociopolítico en Venezuela a partir de la derrota del paro petrolero de 2003 en relación con la profundización del rumbo social que anima la gestión del gobierno del presidente Hugo Chávez y su impacto sobre el entramado de las organizaciones populares y sobre el camino que parece adoptar la oposición con la iniciativa de referéndum revocatorio del mandato presidencial. Finalmente, Ana María Larrea aborda la experiencia forjada por el movimiento indígena ecuatoriano a lo largo de la última década, caracterizando su doble estrategia de participación y cuestionamiento de la institucionalidad político-estatal, para concluir en el análisis de los desafíos que dicho movimiento enfrenta en la actualidad ante la embestida neoliberal promovida por el gobierno de Lucio Gutiérrez y los intentos de silenciarlo y desarticularlo.

El segundo dossier que incluimos en el presente número está dedicado a analizar las experiencias de convergencias internacionales que han tenido lugar a lo largo de los últi-

mos años en Latinoamérica de cara a las negociaciones de los llamados acuerdos sobre liberalización comercial y particularmente frente a la iniciativa norteamericana de subsumir a los países de la región bajo un Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). Estos procesos de resistencia que supusieron la constitución de espacios de coordinación a nivel regional y nacional –por ejemplo, las diversas campañas nacionales contra el ALCA– son expresión y prolongación del movimiento altermundialista que emergió y se consolidó en la última década por oposición a la “globalización neoliberal” y que tuvo sus principales manifestaciones en la realización de los multitudinarios Foros Sociales Mundiales de Porto Alegre y Mumbai y en las movilizaciones globales contra la guerra de Irak. En números anteriores hemos dedicado diferentes artículos a abordar estos procesos tanto en lo que refiere al FSM (*OSAL* N° 6 y 9) como a las resistencias al ALCA (*OSAL* N° 11). En relación a esta última cuestión, la experiencia de las convergencias en nuestra región se remonta a las protestas que despertó la negociación y puesta en marcha (1994) del NAFTA (Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte), la realización del Encuentro por la Humanidad y contra el Neoliberalismo impulsado por el Zapatismo (1996), la creación de la Alianza Social Continental (1997), la organización de la I Cumbre de los Pueblos de las Américas (1998) en oposición a la II Cumbre de Presidentes de los 34 países americanos que participan de la negociación del ALCA, y la puesta en marcha de los Encuentros Hemisféricos contra el ALCA (La Habana, Cuba, 2002 al 2004).

Dada la dinámica y características que asumen estas negociaciones a partir de 2003 –signadas por la proximidad de la fecha prevista para su finalización (2005), las intensas presiones de la Casa Blanca, las dificultades y resistencias que enfrentan, y la aceleración de los TLC plurilaterales– los procesos de convergencia y protesta se intensifican a nivel regional, y en este sentido el dossier que presentamos intenta dar cuenta de estas experiencias. Inicia el mismo una contribución de Jaime Estay que, en el marco de la nueva normativa supranacional que promueve la mundialización neoliberal durante la década de los noventa, analiza las raíces y razones de los conflictos que en 2003 conducen a un estancamiento de las negociaciones tanto en la OMC como respecto del ALCA, y las estrategias, desafíos y peligros que se plantean a partir de allí. A su vez Carlos Aguilar analiza las formas y consecuencias que estos procesos adoptan en Mesoamérica en relación con las negociaciones en la OMC, el ALCA, el TLC entre Centroamérica y EE.UU., y particularmente las iniciativas contenidas en el Plan Puebla Panamá (PPP). En relación a ello, el autor explora los procesos de convergencia forjados en dicha región, desde la creación y desarrollo de los Foros Mesoamericanos hasta el llamado Bloque Popular Centroamericano. A continuación Rafael Freire y Gonzalo Berrón presentan un análisis de las características que asumieron en el último año las Campañas contra el ALCA en los países que integran el MERCOSUR, particularmente significativas en este período con las consultas populares realizadas en Argentina y Paraguay. Así, los autores señalan también la evolución de las mismas hacia el creciente cuestionamiento del “libre

comercio" de frente a las diferentes negociaciones comerciales que encaran los gobiernos (ALCA, MERCOSUR-UE, entre otras) y los desafíos que afrontan estas confluencias multisectoriales en el plano regional y nacional. Finalmente, Pablo Solón examina la experiencia del Movimiento Boliviano de Lucha contra el ALCA y su articulación con las convergencias regionales e internacionales y con los procesos y conflictos a nivel nacional, desde la llamada "guerra del agua" (2000) hasta la reciente "guerra del gas" (2003). Cierra este dossier una cronología que incluye, para el período que va de enero de 2003 a abril de 2004, tanto las principales acciones de convergencia y protesta en oposición al "libre comercio y la guerra" como los eventos más destacados en relación con los procesos de negociación de los llamados acuerdos de "liberalización comercial" en América Latina. La misma prolonga, para este período, una tarea ya realizada por el OSAL que fuera publicada en anteriores números, y que ofrece, en su amplitud, un mapa sobre las confluencias internacionales hasta la actualidad.

Asimismo, estos procesos son también abordados en el artículo que introduce a la sección Cronología del conflicto donde se presenta además un análisis sobre la evolución de la conflictividad social durante este primer cuatrimestre del año así como sobre las características que adopta la misma en el marco de los diferentes procesos sociopolíticos que atraviesan a la región latinoamericana.

Completan este número tres trabajos que sirven de introducción a la lectura de las cronologías del conflicto social que –realizadas por el OSAL con la participación de investigadores y centros miembros de la red CLACSO– presentan, ordenados por región, los principales hechos de conflicto y políticos del primer cuatrimestre de 2004. En primer lugar incluimos la contribución de Marielle Palau y Regina Kretschmer que, en el marco del proceso social en Paraguay, estudia las movilizaciones y conflictos campesinos, en particular la llamada "guerra de la soja". Posteriormente Miguel Urioste analiza, a la luz del período abierto en los años ochenta con la recuperación de la democracia, la actual situación político-social en Bolivia y la coyuntura que se abre como resultado de las pasadas "jornadas de octubre". Finalmente, la contribución de Gerard Pierre-Charles nos ofrece un análisis del proceso de conflictos que desembocó en la crisis y caída del gobierno de Aristide en Haití y sobre la naturaleza y consecuencias de la intervención militar internacional en dicho país.

Esperamos que el conjunto de estas contribuciones –así como las que pueden consultarse en la página web <<http://osal.clacso.org>>– sirvan para enriquecer y estimular los análisis y debates latinoamericanos en el camino de imaginar –y también hacer– colectivamente esa otra América posible que tanto reclaman nuestros pueblos.

Análisis de casos

Movimientos sociales y desafíos políticos

Aníbal Quijano **El laberinto de América Latina:
¿hay otras salidas?**

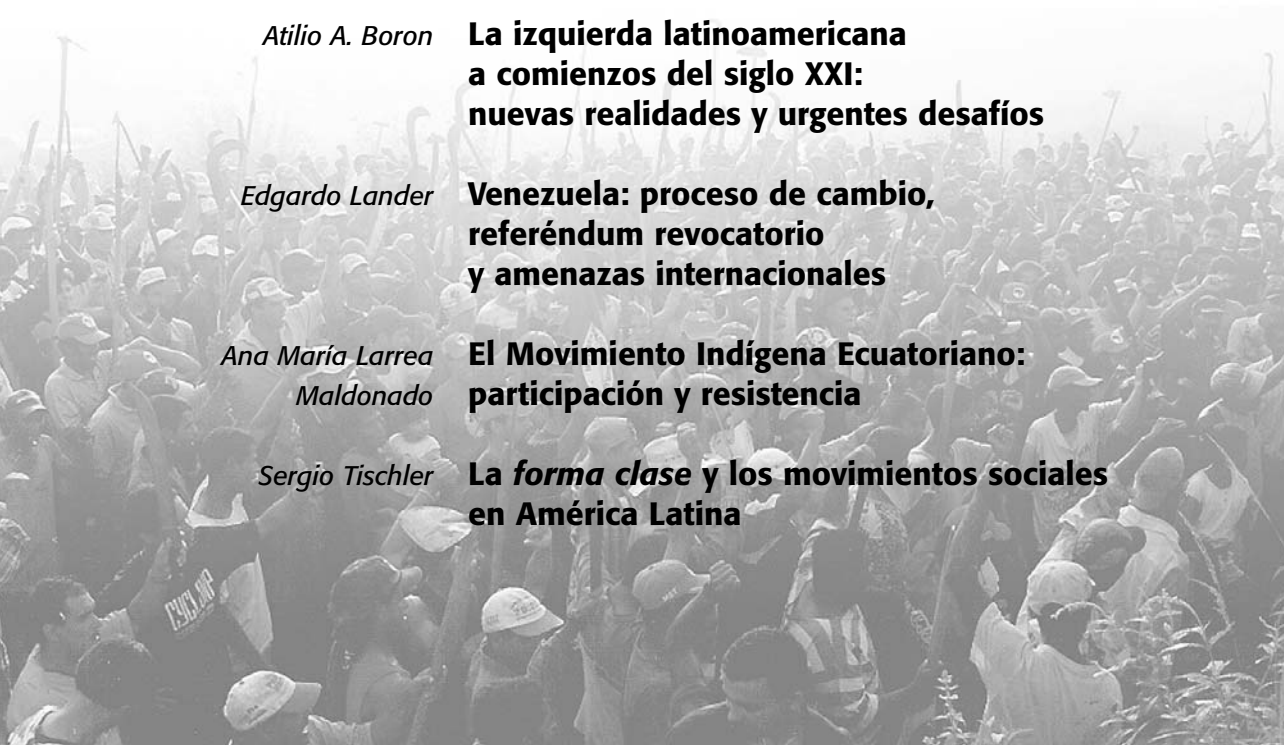
João Pedro Stédile **El MST y las disputas
por las alternativas en Brasil**

Atilio A. Boron **La izquierda latinoamericana
a comienzos del siglo XXI:
nuevas realidades y urgentes desafíos**

Edgardo Lander **Venezuela: proceso de cambio,
referéndum revocatorio
y amenazas internacionales**

*Ana María Larrea
Maldonado* **El Movimiento Indígena Ecuatoriano:
participación y resistencia**

Sergio Tischler **La *forma clase* y los movimientos sociales
en América Latina**



El laberinto de América Latina: ¿hay otras salidas?¹

Aníbal Quijano*

* *Director del Centro de Investigaciones Sociales (CEIS) de Lima, Perú. Profesor de Binghamton University, Nueva York.*

América Latina, tres décadas después del comienzo de la neoliberalización capitalista², se mira hoy con su economía estancada, con la más alta tasa de desempleo y con el más alto porcentaje de pobres de su historia³, atravesada por revueltas sociales, sumergida en la inestabilidad política, y por primera vez en más de un siglo –es decir, después de la conquista del norte de México a mediados del siglo XIX, y de Cuba, Puerto Rico, Guam y Filipinas al fin de ese mismo siglo–, con su integridad territorial y su independencia política explícitamente en cuestión.

Al final de los ochenta había consenso en la región en denominar a esos años como *la década perdida*, pues ya en 1982 América Latina sufría la más grave crisis económica en cincuenta años. Veinte años después, no hay dificultad en señalar que el proceso ha sido no sólo una pérdida sino una auténtica catástrofe. Ciertamente, en primer lugar para los explotados, los dominados, los discriminados. Pero esta vez el proceso ha ampliado largamente el



universo de sus víctimas, abarcando también a las capas medias urbanas de profesionales y tecnoburócratas y aun a los propios grupos de la burguesía dependiente vinculados al mercado interno.

Empero, la creciente marejada de resistencia mundial contra los efectos de la neoliberalización del capitalismo y de la reconcentración del control imperialista de la autoridad estatal también tiene en América Latina uno de sus espacios más activos. Y la ahora continuada movilización popular contra la situación actual y contra los regímenes políticos responsables de haberla producido ha llevado a una deslegitimación universal del neoliberalismo, no sólo en su condición de eje de control de las políticas del estado y del movimiento de la economía, sino también como lo que virtualmente había llegado a ser, una suerte de sentido común hegemónico para el conjunto de la existencia social.

Esa deslegitimación ideológica y política del neoliberalismo plantea ahora un debate sobre las opciones de orientación de las políticas económicas, sobre las perspectivas inmediatas y futuras de acción, y respecto de las más graves consecuencias sociales del prolongado dominio del capitalismo neoliberalizado: el creciente desempleo y la expansión del número de pobres y de la extrema pobreza. Para explorar sus perspectivas, es indispensable mirar de nuevo y más de cerca ese panorama.

El panorama actual de América Latina

Los procesos mayores que conducen y ordenan la actual perspectiva sobre América Latina son los siguientes.

- **La continuada y creciente polarización social de la población**

Las estadísticas sobre el desempleo, la distribución de ingresos, la proporción de pobres y los niveles de pobreza apuntan a que dicha tendencia es el más abultado rasgo de la presente situación latinoamericana, producida, como en todo el mundo, por los programas de "ajuste estructural" que han sido impuestos en estos países para sostener el pago continuo de los servicios de una deuda internacional que, sin embargo, crece sin cesar.

- **La reprivatización social del Estado**

El Estado reduce continuamente los gastos fiscales en servicios públicos, educación, salud, seguridad social, infraestructura urbana y de transportes. Privatiza o, en más de los casos, remata los recursos de producción bajo control estatal y las empresas estatales destinadas a la producción de mercaderías de exportación y de servicios públicos. Y procura, también continuamente, aumentar la deuda externa y la deuda interna de modo de mantener en aumento las sumas pagaderas por servicios a la deuda internacional. Y para obtener recursos para dichos pagos, en un momento de contracción económica generalizada en toda la región y en el mundo, impone siempre nuevos impuestos sobre la población. Esas medidas del Estado denuncian, a las claras, que los socios, agentes y sirvientes de los capitalistas globales han logrado un control virtualmente privado del Estado, como lo tenía, antes de la Segunda Guerra Mundial, la coalición oligárquica⁴.

- **La recolonización del control de los recursos de producción y del capital en su conjunto**

El control de los recursos de producción y en general de acumulación de capital se ha concentrado y aún tiende a concentrarse en manos de las corporaciones transnacionales o globales, las cuales reducen el número de sus trabajadores, depredan y contaminan la naturaleza, y exportan todas sus ganancias ya que en la mayoría de los países no pagan impuestos a los respectivos estados, o sólo algunas y muy poco. Esto implica, en

rigor, la conversión de los antiguos centros productivos en una suerte de factorías coloniales. La vieja categoría de “enclave colonial” recobra todo su perverso sentido. El control del capital financiero está en manos de la burguesía global salvo, quizá, en un país. Y la especulación financiera, inclusive ilegal, es protegida por el Estado, como ha ocurrido, sucesivamente, en México, en Venezuela, en Ecuador, en Perú, en Argentina.

- **La expansión de la resistencia popular y la deslegitimación del neoliberalismo**

Aquellas políticas fueron impuestas en estos países con poca o a veces ninguna resistencia y han logrado operar, también con poca resistencia, por más de dos décadas consecutivas. Pero desde el fin de la década pasada, sobre todo, aunque el Caracazo de 1989 debe ser considerado el punto de partida de esta tendencia, las víctimas de esas políticas han comenzado a movilizarse y a organizarse de muchos modos para protestar contra tales procesos y para resistir su continuidad y profundización. En algunos casos, esas protestas y movilizaciones han producido auténticos estallidos sociales y también la crisis y la remoción de varios gobiernos, llegando a gravitar en la elección de gobiernos con discursos anti-neoliberales, como en Venezuela, en Argentina y en Brasil. Del mismo modo en Cochabamba, Bolivia, han logrado impedir la imposición del control de una corporación estadounidense –Bechtel– sobre el agua. O en el Perú, han bloqueado el remate de los servicios públicos de una ciudad y un año después han obligado al aumento de salarios del magisterio público, congelados por más de una década.

- **La acentuación de la inestabilidad política, pero aún con el voto como mecanismo de alternancia de gobiernos**

El estancamiento económico, la revuelta social y la inestabilidad política de América Latina se enmarcan en un período de recesión mundial, reducción del comercio internacional y retracción de inversiones, inclusive parcialmente de la propia especulación financiera. Parecería, en consecuencia, que se insinúa un horizonte de crisis político-social más turbulento. No obstante, es también por primera vez que todos los gobiernos, sin excepción, han sido elegidos mediante el voto universal. Inclusive los sucesivos recambios de gobiernos han sido hechos de algún modo por cauces legales e institucionales. Así, por primera vez a escala regional, la continuada inestabilidad política y la agitación social creciente no son enfrentadas inmediatamente por sangrientos golpes militares y regímenes autoritarios y represivos. Y las reivindicaciones y los discursos de la revuelta social que siguen al agotamiento del neoliberalismo, aunque podrían implicar un período de abiertas disputas por el control del poder, no parecen anunciar, no

todavía en todo caso, una inminente puesta en cuestión del patrón mismo de poder, como ocurría entre el fin de la Segunda Guerra Mundial y mediados de la década del setenta.

- **Un proceso de nueva subjetivación social o constitución de nuevos sujetos sociales**

“En algunos casos, las protestas y movilizaciones han producido auténticos estallidos sociales y también la crisis y la remoción de varios gobiernos, llegando a gravitar en la elección de gobiernos con discursos anti-neoliberales, como en Venezuela, en Argentina y en Brasil”

En efecto, se han ido formando nuevos sujetos sociales, con reivindicaciones, discurso y formas de organización y de movilización nuevos, y han hecho ya su ingreso en la escena política como actores decisivos en algunos países. Se trata, en primer término, del llamado movimiento de los indígenas que, aunque de dimensión continental, actuando desde Alaska hasta Tierra del Fuego, en América Latina tiene sus más importantes sedes nacionales en Ecuador, México y Bolivia, además de sedes locales y regionales importantes en toda la cuenca amazónica. En el caso de los indígenas, aunque todavía *motejados* de movimientos “étnicos”, se dirigen a la redefinición de la cuestión nacional de los actuales estados y a la autonomía territorial de las nacionalidades dominadas. Ya han comenzado a cambiar la geografía política de América Latina y en Ecuador y Bolivia ya son, de hecho, los actores políticos más importantes. Los líderes de la Confederación Nacional de Indígenas del Ecuador (CONAIE) llegaron incluso a ocupar el sillón presidencial, efímeramente es cierto, junto con el entonces Coronel Lucio Gutiérrez, después elegido presidente del Ecuador, precisamente con el apoyo del movimiento de los indígenas. Y notablemente, el proceso de reidentificación social y nacional de esas poblaciones conlleva la reorganización comunal de sus pueblos, de sus instituciones, de sus formas de organización del trabajo y de la producción⁵.

Una parte importante del movimiento de los indígenas latinoamericanos corresponde al campesinado. Eso quiere decir que una parte del campesinado latinoamericano asocia hoy sus problemas de control de la tierra para

sembrar y para habitar con su situación nacional dentro del Estado. Pero la mayoría del campesinado de esta región no ha vuelto a forjar los grandes movimientos que produjeron cambios profundos en la estructura de tenencia de la tierra y en la estructura de poder rural entre 1950 y 1970. Sin embargo, en el caso brasileño, donde la derrota de esos movimientos fue total con el golpe militar de 1964 y donde por lo tanto los cambios fueron tan profunda y largamente regresivos, se ha desarrollado lo que posiblemente es el más grande movimiento organizado de los trabajadores del campo en todo el mundo: el Movimiento de los Sin Tierra (MST), que coordina y comanda cientos de miles de personas nucleadas en comunidades, cooperativas, poblaciones; invade y ocupa tierras; enfrenta la creciente violencia armada de los terratenientes. El MST no es un movimiento interesado solamente en la redistribución de la tierra agraria, sino que se orienta a la formación de nuevos modos de organización de producción y de gobierno. Es, en ese sentido, uno de los más importantes modos del proceso de nueva subjetivación social que atraviesa América Latina⁶.

• Creciente ocupación militar del territorio latinoamericano por las fuerzas armadas de Estados Unidos

Sin duda por todo aquello se ha desatado una nueva preocupación para los que tienen posición hegemónica en el control del poder en América Latina. Con la complicidad activa o pasiva de los gobiernos latinoamericanos, Estados Unidos está instalando desde fines de la década del ochenta, y más rápidamente ahora, bases militares, sedes y redes de servicios, de transporte y de aprovisionamientos bélicos, conocidas como Locaciones de Operaciones de Avanzada (FOL) y Sitios de Operaciones de Avanzada (FOS), virtualmente en toda la región aunque más concentradamente en el área andino-amazónica. A sus anteriores bases en Puerto Rico y en Guantánamo, en Panamá, en Honduras y en El Salvador, y a sus FOL en Costa Rica, Belice, Islas Caimán, Aruba-Curaçao, se añaden ahora la base de Manta en Ecuador; las de Caquetá, Leticia y Putumayo en Colombia; los FOL y FOS en Iquitos, Perú; en Chapare y la "unidad anti-terrorista" en Santa Cruz, Bolivia; y las de Salta, Chubut y Río Negro en Argentina. En este último país, antes del fin del gobierno de De la Rúa, se habría acordado una sede de investigaciones nucleares para fines científicos en la Patagonia⁷; están aún en curso las negociaciones sobre la base de Alcántara en Brasil⁸. Con Perú se negoció en marzo de 2002 un acuerdo por el cual el Estado peruano otorgaba a las fuerzas armadas de Estados Unidos el derecho de libre tránsito por el territorio peruano y de transporte de toda clase de equipos militares, incluyendo aviones, barcos, tanques, sin ingerencia alguna del Estado y protegidos de toda actividad de la población local (Quijano, 1993[a]; 2002[a]). El famoso Plan Colombia es, obviamente, uno de los nombres de todo este despliegue militar en América del Sur, y la lucha contra el tráfico de drogas

fue el más socorrido argumento inicial. Posteriormente fue presentada como una reacción contra la extensión de la subversión de Sendero Luminoso en el Perú de la década del ochenta y de las FARC y otros grupos en Colombia. Después del infausto 11 de septiembre de 2001, proclamada la *guerra infinita* contra el terrorismo, el Estado hegemónico del Bloque Imperial cubre con el mismo membrete de "terroristas" no sólo a dichas organizaciones subversivas sino a todos los movimientos de protesta social, muy en especial a los movimientos de indígenas.

Esa expansión del aparato militar de control de América Latina implica, de todos modos, el reconocimiento de que Latinoamérica –la región más rica del mundo en materias primas minerales y vegetales, agua y biodiversidad– es también ahora política y socialmente una de las regiones más convulsas. Por eso, sólo un exceso de ingenuidad haría admitir que el despliegue de instalaciones militares y el entrenamiento y equipamiento de las fuerzas armadas locales en Centro y Sur América están destinados solamente a ayudar a estos países a luchar contra el tráfico de drogas y el terrorismo. En verdad, son la integridad territorial, la independencia jurisdiccional o soberanía y la independencia política de los países latinoamericanos las que están en cuestión⁹.



© Patricio Realpe - ANPE

- **Un horizonte de conflictos de poder**

Si no se pierde de vista todo lo anterior, es pertinente admitir un nuevo sentido en la versión latinoamericana del proceso mundial. Ha ido creciendo en la región la parte de la población mundial colocada en las trampas creadas por el capitalismo actual. En primer término, nadie puede hoy vivir sin el mercado. Pero una creciente mayoría de la población no puede vivir sólo con el mercado. En segundo término, nadie puede vivir sin el Estado. Pero una creciente mayoría de esa misma población ya no puede vivir con el Estado. La población atrapada en esas trampas específicas de la fase actual del capitalismo por un lado se ve forzada a aceptar cualquier forma de explotación para sobrevivir. En este sentido se re-expanden la esclavitud, la servidumbre personal, la pequeña producción mercantil independiente, que es el corazón de la llamada "economía informal". Por otro lado, al mismo tiempo, se extienden formas de reciprocidad, es decir, de intercambio de fuerza de trabajo y de productos sin pasar por el mercado, aunque con una relación inevitable, pero ambigua y tangencial, con él. Y también, nuevas formas de autoridad política de carácter comunal, que operan con y sin el Estado y cada vez más, si no siempre, contra él (Quijano, 1998).

Así, la creciente masa de desempleados, en especial de los sectores industriales, urbanos y modernizados de la región, ha comenzado a orientarse más allá del reclamo de empleo, salarios y servicios públicos, organizándose en redes de producción autogestionaria y de autogobierno de tipo comunal. Por ejemplo, la reciente crisis argentina puso en relieve mundial el movimiento de los "piqueteros", que ya estaba en acción desde unos años antes, asediado y reprimido por el Estado. Éste es un movimiento de trabajadores desempleados, sobre todo urbanos, que no solamente protesta por su situación y reclama empleo y salarios, sino que tiende hacia la organización de núcleos de producción orientados por la reciprocidad, hacia la ocupación y la gestión colectiva de tie-

"... sólo un exceso de ingenuidad haría admitir que el despliegue de instalaciones militares están destinados solamente a ayudar en la lucha contra el terrorismo. En verdad, son la integridad territorial, la soberanía y la independencia política de los países latinoamericanos las que están en cuestión"

rras y de fábricas abandonadas. En países como Argentina es un fenómeno relativamente nuevo, pero tiene raigambre e historia prolongadas en países como Perú, Ecuador o México (Quijano, 1998).

Así, tres décadas de neoliberalismo en América Latina han creado las condiciones, las necesidades y los sujetos sociales de un horizonte de conflictos sociales y políticos que podrían no agotarse solamente en la protesta y la oposición a la continuación del neoliberalismo o en la disputa por la distribución de ingresos y de recursos de sobrevivencia. Y los nuevos sujetos sociales que emergen no solamente están ya en la escena del conflicto, sino que tienen todas las condiciones para crecer precisamente por las propias determinaciones de la crisis.

La sociedad neoliberalizada en América Latina

Sobre esta cuestión, lamentablemente, no podemos ir muy lejos, ni muy hondo, en la indagación. Hay consenso en el debate acerca de una reprimarización y terciarización de la estructura productiva de América Latina, con la parcial excepcionalidad de Brasil, como resultados del proceso iniciado desde fines de la década del setenta. Eso implica, en primer término, que en estos países son extremadamente débiles o inexistentes la burguesía industrial por un lado y, por el otro, la antes llamada "clase obrera industrial".

Ese proceso de reconversión de la estructura productiva de América Latina conllevó, como es obvio, el cambio de su lugar en la cadena mundial de producción y de transferencia de valor y de plusvalor, pero igualmente el cambio del lugar y del papel de las burguesías de la región respecto de las del "centro". La precaria y relativa autonomía que estaba en proceso de constitución, sobre la base de la producción industrial, del proceso de articulación de circuitos regionales o locales de acumulación y transferencia de valor, y del beneficio fundado ante todo en el mercado interno¹⁰, terminó abruptamente y cedió ante la más completa subordinación bajo las burguesías "centrales".

Dentro de los grupos burgueses latinoamericanos, aparte de Brasil, sólo lograron sostenerse y enriquecerse aquellos que pudieron asociarse a la producción primaria para la exportación, a la importación de mercaderías industriales, al capital financiero y a los servicios. Como en la producción primaria el control de los recursos decisivos ya estaba bajo dominio de la burguesía internacional, así como el capital financiero y los servicios asociados, en rigor la burguesía local sobreviviente emergió no solamente más subordinada que nunca antes, sino sobre todo socialmente mutada en una nueva versión de burguesía compradora empujada a la especulación comercial y financiera, y de ese modo directamente subordinada a la burguesía financiera globalizada desde comienzos de la

década del setenta. Paralelamente, el control del capital en cada uno de los sectores productivos, primarios, secundarios y terciarios, se desplazó largamente a la burguesía internacional o global. Y en este sentido las burguesías locales no son solamente subordinadas en las transacciones financieras y comerciales, sino que ante todo tienen un lugar secundario en el control del capital en la región.

Los efectos de esos procesos sobre los trabajadores han sido espeluznantes. Lanzados en su vasta mayoría al desempleo, la precarización y la flexibilización de las condiciones de empleo, la reducción o el desmantelamiento de la producción industrial produjo su dispersión y la fragmentación social, el debilitamiento de sus instituciones gremiales, la crisis de su identidad social. La violencia de esos procesos ha traído problemas excepcionalmente graves en la vida social de los trabajadores y sus familias. En términos de la estructura social de la sociedad latinoamericana es necesario señalar que las relaciones entre capitalismo y trabajo son ahora, y no sólo en América Latina, mucho más complejas que poco antes; que el mundo del trabajo es mucho más heterogéneo y además disperso y fragmentado. La crisis de identidad social que todo eso conlleva ha empujado a muchos a un proceso de reidentificación en términos no vinculados a la relación entre capital y trabajo, sino en otros muy distintos entre los cuales los criterios de "pobreza", de "etnicidad", de oficios y actividades "informales", y de comunidades primarias son, probablemente, los más frecuentes¹¹.

Se puede identificar a la burguesía "compradora" y especuladora, adversaria del mercado interno, como hegemónica social y políticamente entre los dominantes locales, asociada y subordinada a los intereses de la burguesía central o global. Pero es difícil, en cambio, identificar un sector de trabajadores como el hegemónico en el heterogéneo, disperso, fragmentado y cambiante universo del trabajo. La creciente mayoría de ellos está caracterizada por la actividad "informal" y por la multi-inserción en el mundo del empleo, esto es insertado de manera precaria y muy diversa, y en distintas actividades. Y sólo una minoría muy reducida está agrupada en instituciones sociales de tipo gremial o político, a diferencia de lo que ocurría hace tres o aún dos décadas atrás.

La cuestión del Estado

Como puede ser advertido en todo lo anterior, los procesos que han llevado a América Latina a la situación actual han sido, en verdad, muy profundos. Han producido una genuina reconfiguración de la existencia social, de las relaciones sociales básicas, de los intereses sociales, de sus agentes, de sus instituciones, tanto en la dimensión material como en la intersubjetiva. En esa perspectiva, tienen el carácter de toda una contrarrevolución.



© Patricio Realpe - ANPE

El agente central de ese proceso de neo-liberalización de la economía latinoamericana y de la reconfiguración de la estructura de poder, de los intereses sociales, de sus agentes, de sus agrupaciones e instituciones, ha sido el Estado. Y eso indica que los grupos de interés social asociados a esos procesos y beneficiarios de ellos obtuvieron la fuerza necesaria para llegar al control del mismo y de las condiciones adecuadas para imponer sus políticas.

Es inevitable preguntarse ahora, en medio de la crisis latinoamericana y del debate y la confrontación social y política que observamos, y a la vista de los intereses sociales y agentes de la estructura de poder producidos por el neoliberalismo, cuáles serán o podrán ser las opciones dotadas de las condiciones y de la fuerza capaces de conquistar el control efectivo del Estado, y cuáles tendencias o cuáles propuestas podrán llevar adelante.

Es cierto que ya en varios países, algunos muy importantes, el descrédito del neoliberalismo ha llevado al gobierno a los partidarios del capitalismo nacional. ¿Significa eso que por lo menos en esos países se han establecido las condiciones del desarrollo capitalista bajo el control de una burguesía y de un estado nacionales? Difícilmente. No existe, salvo parcialmente en Brasil, una burguesía local con alguna fuerza propia. Pero la misma tiene un conflicto insanable con todo desarrollo capitalista nacional continuado. Y aunque determinados gobiernos pudieran ser admitidos como nacionalistas, eso no califica necesariamente a los respectivos Estados como nacionales, como es el caso de Venezuela y de Argentina.

Es cierto también de otro lado que, aparte de los discursos, son aún inexistentes las acciones concretas que puedan dar rumbo al curso histórico próximo hacia las metas prometidas. Y es cierto ya, en cambio, que donde el discurso comenzó a afilarse y parecieran comenzar las acciones, como en la Venezuela de Chávez, los grupos de interés social asociados al neoliberalismo y al imperialismo no han tardado en organizarse y pasar a la ofensiva contra el régimen chavista, con el ostensible apoyo de Estados Unidos y de los gobiernos latinoamericanos que son sus aliados, encaminándose claramente en dirección de una contrarrevolución (Quijano, 2002[b]). Ésa es, en todo caso, una indicación de que si en Brasil o en Argentina se comenzaran acciones concretas e importantes en dirección del capitalismo nacional, los grupos sociales con intereses contrarios no tardarían en organizar la resistencia, si es que no están ya preparándola.

Las condiciones y los rasgos de un capitalismo nacional no imperialista y sin embargo capaz de desarrollo no son desconocidas. Aunque por períodos más bien cortos y por lo tanto sin las condiciones de desarrollo continuado, inclusive América Latina no es ajena a esa experiencia. Aunque eso no sea el objeto de esta discusión, están en juego, entre otras, las siguientes condiciones básicas: el control nacional de los recursos y de los productos; una estructura productiva capaz de proveer a las demandas del mercado interno y complementariamente también del externo, y de defender su independencia sin perjuicio de su inserción y de su asociación mundial; la expansión y el control del mercado interno; y el control de las transacciones internacionales del país.

Todas esas condiciones se ordenan en torno de un factor central: la distribución relativamente democrática del acceso a recursos de producción y a ingresos para usar y consumir lo que la sociedad produce; la provisión democrática de servicios públicos; la relativamente democrática distribución del acceso a las instancias de generación y de gestión de la autoridad pública, esto es, del Estado. En otros términos, la condición histórica del desarrollo capitalista nacional, en los períodos en que eso llegó a ser posible, fue y es la democracia básica de la sociedad y su expresión política en el Estado. Y ésa es, precisamente, la condición ausente hoy en América Latina.

Por otro lado, la experiencia de capitalismo nacional en Latinoamérica tuvo lugar sólo cuando algunas fracciones de la burguesía tuvieron que aliarse, o admitieron hacerlo, con las capas medias modernizantes y ganar el respaldo de los trabajadores explotados, ya sea para destruir el estado oligárquico, como en el caso mexicano, o para imponer la modernización básica, como en los casos de Argentina, Uruguay, Chile o Colombia (Quijano, 1993[b]). Pero en ninguno de esos casos la democratización de la sociedad y la nacionalización del Estado pudieron ser consolidadas de modo de garantizar la continuidad del desarrollo capitalista *nacional*. Por esas razones, el desarrollo capitalista posible ha sido solamente como neoliberalización y por lo tanto contra la creciente mayoría de su población.

***“... la condición
histórica del
desarrollo capitalista
nacional,
en los períodos
en que eso llegó
a ser posible,
fue y es
la democracia básica
de la sociedad
y su expresión
política en el Estado.
Y ésa es,
precisamente,
la condición
ausente hoy
en América Latina”***

El Estado en todos los países ha operado en estos últimos treinta años, en mayor o menor medida, en contra de la mayoría de la población. Esto es, no sólo como articulación política del dominio de una minoría sobre la mayoría, como en todas partes, sino como garante y administrador de la continuada y creciente exclusión social de la mayoría. A menos que alguien tuviera el desparpajo de sostener que, en los últimos diez años en especial, en Argentina, en Brasil, en Perú, en Ecuador, en Bolivia o en México, el Estado haya trabajado en beneficio de esa población. Dicho de otro modo, hemos sido víctimas de un proceso de reprivatización del Estado.

La determinación histórica central en esas relaciones entre capitalismo y Estado en América Latina consiste en la colonialidad básica del patrón de poder mundial imperante, originada precisamente con la propia América (Quijano, 2001; 2000[a]).

Con todos los obligados recaudos, no parecen ser muy notables las condiciones que permitirían establecer o restablecer un capitalismo nacional, mucho menos democrático. El cambio histórico necesario para lograrlo sería tan profundo que implicaría en realidad una revolución. Y tampoco parecen estar a la vista, en el corto plazo, las condiciones y las fuerzas sociales y políticas que pudieran llevar a cabo un proceso de ese carácter y de esa orientación. De una parte, una revolución social para imponer un capitalismo nacional, democrático, choca en primer término con la propia burguesía, local e internacional. De la otra, las únicas fuerzas sociales y políticas que están en curso de constitución, si se desarrollaran y se hicieran efectivamente fuertes como para disputar el control del poder en esta sociedad, probablemente se orientarían más a la producción democrática de una sociedad democrática. En tal caso, el patrón de poder capitalista estaría en cuestión, incluido por cierto su Estado.

Si se observa con cuidado lo que ocurre con una mayoría creciente de la población latinoamericana y probable-

mente mundial, así como no puede vivir sin el mercado ni puede vivir con el mercado, no puede tampoco vivir sin el Estado ni puede vivir con él. Para las víctimas que son empujadas al polo de miseria del capitalismo, por eso mismo, en adelante toda conquista o reconquista del acceso a los bienes y servicios que el trabajo produce no puede realizarse sino como democratización radical de la existencia social. Tenderá también por eso, no mucho más tarde, hacerse sin el Estado o contra él.

Nuevas formas de autoridad están en pleno curso de constitución en todas partes, de manera molecular si se quiere. Ellas tienden a ser de carácter o de orientación comunal. Sus muchas formas de conflicto y de combinación con el Estado ya están presentes. Así ocurrió con las experiencias de Villa El Salvador¹² o de Huaycán, en el Perú, de las comunidades que reorganiza el movimiento de los indígenas en Ecuador y Bolivia, o que va ampliando el MST en el Brasil. Y así han estallado a la mirada mundial en la reciente crisis argentina. Fuera de esas tendencias, la heterogeneidad histórico-estructural de la sociedad contemporánea, dentro y fuera de América Latina, no podría expresarse democráticamente, en una sociedad democrática. Y sin una sociedad democrática de ese carácter, la polarización social que produce el capitalismo actual, arrastrando a la especie a una catástrofe demográfica y social sin precedentes, no podría ser controlada.

Bibliografía

Arancibia, Fabiana 2003 "Patagonia, la codiciada", en *América Latina en Movimiento* (Quito) N° 366, marzo.

Coronado, Jaime y Pajuelo, Ramón 1996 *Villa El Salvador. Poder y Comunidad* (Lima: CEIS-CECOSAM).

de Sousa Santos, Boaventura (ed.) 2002 *Produzir para viver. Os caminhos da produção nao capitalista* (Rio de Janeiro: Civilização Brasileira).

Delgado Ramos, Gian Carlo 2003 "Geopolítica Imperial y Recursos Naturales", en *Memoria* (México) N° 171, mayo.

Macas, Luis 2000 "A diez años del levantamiento del Inti Raymi en Ecuador", en *América Latina en Movimiento* (Quito) N° 315, junio.

Mendonça, María Luisa 2003 "La Ofensiva Militar de EE.UU.", en *América Latina en Movimiento* (Quito) N° 371, julio.

Quijano, Aníbal 2003 "El Trabajo al Final del Siglo XX", en Founou-Tchuigoua, Bernard; Dine, Sams et Dieng, Amady A. (comp.) *Pensée sociale critique pour le XXI siecle. Melanges en l'honneur de Samir Amin* (París: L'Harmattan).

Quijano, Aníbal 2002[a] "El Fujimorismo del Gobierno Toledo", en *OSAL* (Buenos Aires: CLACSO) N° 7, junio.

Quijano, Aníbal 2002[b] "Venezuela, ¿un nuevo comienzo?", en *América Latina en Movimiento* (Quito) mayo <<http://alainet.org/docs/1961.html>>

Quijano, Aníbal 2001 "Colonialidad, Globalización y Democracia", en *Tendencias básicas de nuestra época* (Caracas: Instituto de Altos Estudios Diplomáticos "Pedro Gual").

Aníbal Quijano 2000[a] "Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina", en Lander, Edgardo (comp.) *La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas* (Buenos Aires: CLACSO).

Quijano, Aníbal 2000[b] "The Growing Significance of Reciprocity from Below. Marginality and Informality in Debate", in Tabak, Faruk and Crichlow, Michaeline A. *Informalization: Process and Structure* (Baltimore-London: Johns Hopkins University Press) 133-166.

Quijano, Aníbal 1998 *La Economía Popular en América Latina* (Lima: CEIS-Mosca Azul).

Quijano, Aníbal 1993[a] "¿A América Latina Sobrevivera?", en *São Paulo em perspectiva* (Sao Paulo: SEADE) Vol. 7, N° 2, 60-67.

Quijano, Aníbal 1993[b] "América Latina en la Economía Mundial", en *Problemas del desarrollo* (México: Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM) Vol. XXIV, N° 95, octubre-diciembre.

Notas

1 El presente artículo es un extracto del ensayo de Aníbal Quijano publicado bajo el mismo título en el dossier "Resistencia popular y cambio político en América Latina" de la *Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales*, Vol. 10, N° 1, enero-abril de 2004, editada por la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela. Agradecemos al autor y a la directora de dicha publicación la posibilidad de presentar esta versión del referido texto. Para consultar el artículo completo y la *Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales*, ver <www.revele.com.ve>

2 El 11 de setiembre de 2003 se cumplieron treinta años del golpe de Pinochet en Chile, que dio comienzo al proceso de neoliberalización del capitalismo en América Latina.

3 Sobre el desempleo, ver el Informe de la *CEPAL*, 2002; y sobre la pobreza, el Informe sobre Desarrollo Humano del *PNUD* 2002, difundido el 8 de julio de 2003 en Dublín, Irlanda.

4 Sobre el Perú véase Aníbal Quijano (2002[a]).

5 Un breve pero útil recuento de la trayectoria del movimiento indígena ecuatoriano en Macas (2000: 12-16).

6 Un interesante debate sobre la experiencia del MST, ver de Sousa Santos (2002: 81-114 y 189-283).

7 De hecho la Patagonia parece haberse convertido en un serio problema de soberanía en Argentina. En marzo de 2002, una encuesta dirigida por Jorge Giacobe preguntó a los pobladores de la zona si estarían de acuerdo en entregar la Patagonia para cancelar la deuda externa del país. Esa encuesta fue usada por el economista Rudiger Dornbusch,

entonces profesor del MIT, recientemente fallecido, en relación con su propuesta de entregar Argentina a la administración de un comité internacional. Y *Liberation*, de París, publicó el 5 de marzo de 2003 la lista principal de nuevos dueños y compradores extranjeros de extensas áreas de la región. Ver Fabiana Arancibia (2003: 3-5).

8 El Comando Sur de las FFAA. de Estados Unidos cubre 32 países, 19 en Centro y Sur América, 12 en el Caribe. Véase mapa en <<http://www.southcom.mil/pa/idxfacts.htm>> También información en Gian Carlo Delgado Ramos (2003: 35-39) y en Maria Luisa Mendonça (2003: 17-19).

9 Debe recordarse que la primera gran reacción antiimperialista de América Latina en la segunda mitad del siglo XIX emergió precisamente frente a la conquista de la mitad Norte de México. La expansión territorial de Estados Unidos aparecía entonces como una amenaza a la soberanía de la región. Ahora estamos en una circunstancia dramatizada por la ocupación colonial de Irak y las amenazas contra los demás países del Medio Oriente. Es inevitable, en consecuencia, la inquietud latinoamericana por su independencia territorial y política cuando Estados Unidos declara "terroristas" a todos los movimientos de protesta social y política de la región, incluyendo a los movimientos indígenas, y al mismo tiempo acelera y expande la instalación de sus bases militares en todo el territorio latinoamericano.

10 Valga señalar que entre 1970 y 1980 el llamado sector externo como componente del PBI regional pasó del 20% al 50%. En trece de los países saltó hasta el 70%, y solamente en seis países más pobres se mantuvo por debajo del 50%.

11 He adelantado el debate sobre algunas de estas cuestiones en Quijano, 2003.

12 Ver Jaime Coronado y Ramón Pajuelo (1996) y Quijano (2000[b]; 1998).

El MST y las disputas por las alternativas en Brasil¹

João Pedro Stédile*

* *Miembro
de la Coordinación Nacional
del Movimiento
de los Trabajadores Rurales
Sin Tierra (MST)
de Brasil.*

Contexto y balance de las jornadas de lucha del “abril vermelho”

La victoria del presidente Lula en las últimas elecciones cambió la correlación de fuerzas de la lucha por la reforma agraria en Brasil. Por los compromisos históricos del PT, su liderazgo y como partido de izquierda, tenemos ahora un gobierno federal que apoya la reforma agraria, al contrario de lo que fue el gobierno de Fernando Henrique Cardoso. Por lo tanto, la disputa se sitúa en otro nivel. Sin embargo, hay otras fuerzas poderosas que se oponen a la reforma agraria como lo son el latifundio, el modelo neoliberal del agro-negocio, la clase dominante como un todo, el estado burgués brasileño y los medios de comunicación que actúan como un espacio de lucha ideológica que disputa la hegemonía en la sociedad contra nosotros. En este nuevo contexto el MST evalúa que ahora sí se puede avanzar en la reforma agraria, pero que es un momento de acumulación de fuerzas y no de grandes

definiciones que consoliden la reforma agraria de nuevo tipo que nosotros defendemos. Es decir, estamos acumulando para el futuro.

Así, el año pasado hemos priorizado la organización de campamentos, y hoy tenemos 200 mil familias –más de un millón de personas– acampadas en las haciendas, en las orillas de los caminos, presionando. A fines de 2003, después de varios meses de disputas y debates, hemos llegado a un acuerdo con el gobierno respecto de un Plan de Reforma Agraria. Había sectores de éste que querían proporcionar tierras solamente para 80 mil familias en los tres años venideros. Y había un equipo de técnicos del Ministerio de Reforma Agraria que planificó la posibilidad de asentar un millón de familias en cuatro años. Así, llegamos a un acuerdo respecto de las metas para los próximos tres años por el cual el gobierno se comprometió a asentar a 400 mil familias. Sin embargo, como tenemos otros enemigos contra la reforma agraria tal como he comentado anteriormente, el acuerdo “no salió del papel”. Y entonces, en el mes de abril, organizamos una jornada nacional que tenía como objetivo presionar por la reforma agraria, denunciar el latifundio y mostrar que aquélla es una forma de combatir la pobreza y la miseria en el campo. La jornada fue un éxito total porque hicimos una lucha ideológica en los medios de comunicación, movilizamos toda nuestra base social a nivel nacional y logramos hacer más de 140 tomas de tierras en todos los estados del país.

Una reforma agraria de nuevo tipo

El MST, así como el PT y otros movimientos sociales que hay en Brasil, es fruto de un proceso de reascenso del movimiento de masas que ocurrió como parte de la lucha por derrotar a la dictadura militar brasilera a fines de la década del setenta. Al principio de la historia del MST, es verdad, nuestra lucha era más bien por la tierra, por resolver los problemas sociales de las familias campesinas; y nos concentramos en la prioridad de tomar tierras y enfrentar al latifundio. Sin embargo, con el pasar de los años, como resultado de nuestra propia experiencia y del desarrollo del capitalismo en la agricultura, hemos percibido que la lucha por la tierra tiene que superar su carácter corporativo. Y por eso avanzamos hacia una concepción según la cual hay que luchar por una reforma agraria de nuevo tipo. La reforma agraria en esta etapa del desarrollo capitalista, aún más ahora, dominada por el capital financiero internacional y sus transnacionales, necesita de una nueva interpretación, de una nueva concepción de medidas. Por eso el MST y la Vía Campesina defienden una reforma agraria de nuevo tipo que no se reduce a la distribución de tierras, como lo hicieron las reformas agrarias clásicas desarrolladas en la época del capitalismo industrial e impulsadas por la propia burguesía nacional en la mayoría de los países hoy desarrollados.

“Esta reforma agraria de nuevo tipo significa que además de la tierra tenemos que democratizar el capital y construir nuestras propias agroindustrias cooperativizadas para que el campesino se quede con el valor agregado y no termine sometido a la explotación de las empresas transnacionales agroindustriales”

Esta reforma agraria de nuevo tipo significa que además de la tierra tenemos que democratizar el capital y construir nuestras propias agroindustrias cooperativizadas para que el campesino se quede con el valor agregado y no termine sometido a la explotación de las empresas transnacionales agroindustriales, y sobre todo para que se amplíen los niveles de empleo para la juventud en el campo. Hay que democratizar también la educación y llevarla hacia el campo, a todos los niveles. Sin educación, sin el desarrollo del nivel cultural y educacional, no se puede alcanzar la ciudadanía plena de las masas campesinas. También hay que desarrollar nuevas tecnologías agrícolas adecuadas al medio ambiente y a la explotación familiar y cooperativa, evitando y combatiendo la llamada “revolución verde” que utiliza altos niveles de agro-tóxicos. Y finalmente, priorizar la reorganización de la agricultura para que produzca alimentos y trabajo para la gente. Ésa es la reforma agraria de nuevo tipo que necesita ser hecha de forma simultánea.

Es evidente que esta propuesta sólo puede desarrollarse en matrimonio con un nuevo modelo económico en nuestro país, que no es el socialismo pero que demanda una forma de organizar la economía volcada hacia los intereses del pueblo y de la nación. Es por eso que las transnacionales, los neoliberales y la burguesía nos combaten tanto por los medios de comunicación; porque saben que nuestra propuesta no implica únicamente desapropiar algunas haciendas mal utilizadas sino que significa producir cambios profundos en el modelo de desarrollo agrícola.

Potencialidades y dificultades para avanzar en la reforma agraria

La victoria electoral del PT y la elección del presidente Lula, aunque han cambiado la correlación de fuerzas, no han significado una derrota estratégica para la clase dominante y su modelo neoliberal. ¿Por qué? Porque la victoria



ocurrió en un período de descenso del movimiento de masas y eso le quita poder al gobierno central. Y por eso estamos viviendo un período complejo, de transición, de intensas y crecientes disputas y pugnas, en que la clase dominante procura mantener todo el tiempo encorsetado al gobierno de Lula para impedir que avance y le impone así, por sus compromisos y alianzas electorales, una política económica neoliberal.

Ante esta situación, se nos plantea la pregunta: ¿cuál es la salida, no solamente para avanzar en la reforma agraria, sino también para conseguir adelantos sociales en el terreno más general? Esto sólo será posible si se produce un proceso de luchas sociales y de movilización que provoque una nueva etapa de reascenso del movimiento de masas, capaz de alterar fundamentalmente la correlación de fuerzas en la sociedad y garantizar que el gobierno haga cambios efectivos en la política económica actual y adopte el modelo económico propuesto históricamente por el PT. Ésa es la prioridad del MST y de la Vía Campesina, y por ello estamos impulsando un frente de masas de todos los movimientos sociales de Brasil, que es la Coordinadora de Movimientos Sociales (CMS), con el fin de articular luchas sociales comunes. En esta coyuntura elegimos como bandera principal la lucha contra el desempleo porque creemos que pequeños cambios en la política económica no van a alterar la situación del empleo. Entendemos así que luchando por empleo ponemos en jaque al modelo neoliberal y forzamos la discusión sobre un nuevo proyecto para el país. Este proceso, como ya comenté, pasa tanto por generar los cambios necesarios a nivel general, como también los específicos en el modelo agrícola y la lucha por la reforma agraria.

Perspectivas a un año del gobierno de Lula

Como he dicho anteriormente, el gobierno de Lula fue elegido en condiciones adversas porque, por un lado, el movimiento de masas estaba en descenso y, por el otro, para ganar las elecciones hizo alianzas con sectores de la clase dominante. De eso resultó un gobierno compartido con sectores neoliberales. Esos sectores se quedaron con el área económica y, hasta ahora, mantienen una política económica neoliberal. Lo dicen y lo defienden y, aún más, anuncian que si dependiera de ellos la misma continuaría por diez años más.

La aplicación de esta política económica neoliberal, claro está, no ha enfrentado los problemas estructurales que sufre la sociedad brasileña, entre los que se cuentan la dependencia externa, la dependencia del capital financiero internacional, la concentración de la riqueza y de la renta, la concentración de la tierra, y el monopolio de los medios de comunicación. Por el contrario, la política económica neoliberal sólo agravó aún más las consecuencias de esos problemas y nuestra sociedad es más pobre y más desigual. Y eso se demuestra en el hecho de que, aun con crecimiento de la economía, el desempleo, la pobreza y la desesperanza también crecen.

Lo que nos salva es que la población se dio cuenta y ha empezado a hablar. Primero, como es normal, los sectores intelectuales, luego los sectores de las organizaciones sociales y ahora las iglesias e incluso algunos partidos de la base aliada al gobierno, como el Partido Liberal (PL), el Partido Comunista do Brasil (PCdoB), el Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) o el Partido Popular Socialista (PPS) ya empiezan a pedir cambios en la política económica. Creo que el gobierno está metido en una emboscada y que, más tarde o más temprano, tendrá que decidirse por cambiar la política económica o caer en el descrédito ante la población. Por otro lado, el país es grande, rico, tiene muchas posibilidades, y podemos a corto plazo construir una política alternativa, otro proyecto de desarrollo.

La convergencia hacia un nuevo proyecto de país

El MST, junto a otras fuerzas sociales, está ayudando a construir un frente de masas que se llama Coordinadora de Movimientos Sociales. En esa coordinadora están aglutinados veintitrés sectores y movimientos sociales entre los más importantes de nuestro pueblo, entre ellos la Central Única dos Trabalhadores (CUT), la União Nacional dos Estudantes (UNE), la Vía Campesina, las iglesias, el Grito de los Excluidos, etcétera. Hemos debatido mucho entre nosotros la necesidad de construir un movimiento de masas y de tener unidad alrededor de algunos puntos, y la unidad que estamos construyendo se basa,

cada vez más, en la idea de que no basta solamente con criticar al modelo neoliberal o pedir cambios puntuales en la actual política económica, sino que es necesario avanzar en un nuevo proyecto de desarrollo. Nuestra unidad se construye entonces sobre la base de que es posible otro proyecto de desarrollo fundado en la recuperación de la soberanía nacional, es decir que tenemos que romper con el FMI y rediscutir los términos de la deuda externa. Un proyecto que reformule la deuda interna para que la acumulación social recolectada a través de los impuestos no vaya al pago de intereses financieros como ocurre hoy cuando el gobierno de Lula gasta casi el 60% de toda la recaudación en el pago de intereses a la banca. En tercer lugar, un proyecto que dé prioridad absoluta a la generación de empleo para garantizar el derecho al trabajo a todos los brasileños; y que distribuya equitativamente la renta para que todas las personas puedan vivir mejor. Y por último, un proyecto que recupere el rol del estado como inductor de las inversiones públicas, tanto en la industria de bienes de consumo de masas como también en el área de los servicios públicos de salud y educación, cuya universalización debe garantizar.

Pero para que estas propuestas de un nuevo proyecto salgan de la teoría y se transformen en lucha política efectiva por la hegemonía en la sociedad, la CMS considera que su papel en este momento consiste fundamentalmente en estimular por un lado todo tipo de luchas sociales del pueblo, para que eso conlleve un reasenso del movimiento de masas, y por otro lado fortalecer también la unidad alrededor de la construcción de un movimiento de desempleados. Para eso estamos censando y nucleando a los desocupados, vamos a hacer una gran jornada de sensibilización sobre esta cuestión en el mes de julio y pensamos culminar este proceso con grandes movilizaciones el día 7 de septiembre, que es el día de los excluidos y el día de la patria. También estamos haciendo esfuerzos para llevar a toda la sociedad, y en especial a los sectores más organizados, el debate sobre la necesidad de este nuevo proyecto. Es imprescindible que la sociedad, que por ahora está callada asistiendo solamente a la impotencia del gobierno de Lula por hacer cambios, se involucre en esta discusión.

Los desafíos para avanzar en un camino de salida del neoliberalismo

Hay muchos desafíos. Hay desafíos determinados por la correlación de fuerzas adversa de este momento histórico. Hay otros desafíos relacionados con la crisis orgánica e ideológica de la llamada izquierda partidaria y social. En realidad, en Brasil tendremos que reconstruir una práctica de izquierda. En los últimos veinte años nos quedamos solamente acumulando fuerzas en el terreno electoral e institucional y eso no fue suficiente para alterar la correlación de fuerzas en la sociedad. Tendremos que recuperar al querido Gramsci para comprender los diferentes espacios de organización que se deben dar



los trabajadores para poder hacer la verdadera disputa por la hegemonía en la sociedad, que no se reduce a la lucha por cargos públicos sino que, por el contrario, es mucho más amplia.

Y hay también algunos desafíos internos, de nuestras propias formas de organización, frente a los que estamos todavía muy débiles. Nosotros defendimos la urgencia y necesidad de recuperar los métodos del trabajo de base, es decir, volcarse al trabajo de hormiga; ir adonde el pueblo vive, trabaja y estudia, y debatir ideas y organizarlo. La izquierda social brasileira ha abandonado hace muchos años este tipo de trabajo de base. Tenemos que recuperar la formación política de militantes y de cuadros capacitándolos para los desafíos que plantea la lucha de clases. Y debemos recuperar en nuestra práctica cotidiana los valores humanistas y socialistas que forman parte de nuestro proyecto de sociedad. La práctica institucional de la izquierda produjo desviaciones de todo tipo en los dirigentes y los militantes, que van desde oportunismos personales hasta, infelizmente, la corrupción. Por otra parte, afrontamos también el desafío de construir nuestros propios medios de comunicación de masas para poder hacer efectivamente la disputa de la hegemonía en la sociedad. Esos son, a mi entender, los principales desafíos que los movimientos y organizaciones populares tienen en Brasil, y si no los superamos difícilmente podamos lograr cambios efectivos en el terreno de las políticas gubernamentales.

Política, partidos y movimientos

De cierta forma la izquierda latinoamericana también sufrió el mal de la colonización ideológica de la izquierda europea. Sólo ahora empezamos a comprender la importancia de entender nuestra propia realidad socioeconómica, de desarrollar esta comprensión nosotros mismos superando los esquematismos y sin esperar las evaluaciones de afuera. Hace poco tiempo aprendimos a valorar a nuestros grandes pensadores latinoamericanos, como Martí, Mariátegui, el Che y tantos otros en nuestros países, que han logrado interpretar nuestras realidades a partir de un método dialéctico y de las necesidades de los pueblos.

Y también padecemos mucho la colonización en los métodos y formas de organización, donde las corrientes europeas priorizaban y sólo valorizaban el partido, y donde el sindicato y otros movimientos eran correas de transmisión de la voluntad de éste. Ahora, creemos que hay una lectura más amplia, más plural, del rol de los movimientos sociales, de las diferentes formas de organización política y de las diferentes formas de organización popular, y sobre el papel mismo de los partidos. Pero lo principal, me parece, es la capacidad de construir juntos un proyecto político estratégico común y mantener la autonomía y la independencia organizativa, respetando los papeles y las formas de cada sector social. Ésa es nuestra visión de lo que representa el desafío aquí en Brasil. Por otro lado, tuvimos la dificultad de que los partidos políticos tendieron a limitarse sólo a los aspectos electorales y prácticamente abandonaron la construcción de proyectos políticos estratégicos, lo que dificultó un poco la relación en términos de alianzas estratégicas.

El Movimiento Sin Tierra es un movimiento social que lucha por una reforma agraria de nuevo tipo; pero lucha también por una nueva sociedad y para eso tiene que enfrentarse con muchos enemigos de la clase dominante. En ese sentido tiene un carácter político, pero seguramente no partidario. Jamás el MST se transformará en un partido, eso lo acabaría; pero seguirá siendo cada vez más político en el sentido de disputar un proyecto de país y la hegemonía en la sociedad. Como decía Gramsci, de nuevo lo recordamos, hay muchas formas de disputar el poder en la sociedad y hay muchas formas de disputar el estado, más allá de la contienda en las elecciones.

La autonomía en la experiencia de los asentamientos

Los asentamientos que tenemos se inscriben en un proceso de acumulación social, donde la gente recupera la ciudadanía plena y su capacidad de decidir sobre su vida, su destino y su futuro. Pero no pueden entenderse tampoco y simplemente como "islas socialistas". Al contrario, dentro de los asentamientos se reproducen todas las contradic-

ciones de la sociedad capitalista en la cual vivimos. Lo que procuramos construir en los asentamientos es precisamente la autonomía, que la gente sepa que su destino está en sus manos y a la vez siga organizada para presionar al estado y al gobierno para que cumplan con sus obligaciones en lo referente a los servicios y las políticas públicas. Por otro lado, vamos impulsando en los asentamientos la implementación práctica de esta concepción de reforma agraria de nuevo tipo, que combina la democratización de la propiedad de la tierra con la democratización del capital y la agroindustria, con acceso a educación en todos los niveles y con el desarrollo y la aplicación de nuevas técnicas agrícolas.

Estado y poder desde el horizonte de la transformación social

Éste es un tema muy complejo. No concebimos al poder como un espacio autoritario para imponer a los demás sectores nuestras ideas o proyectos. Concebimos al poder como todos los espacios que existen en la sociedad donde las personas participan y pueden decidir. En ese sentido debatimos y concientizamos a nuestras bases en el camino de la necesidad que tenemos de participar y disputar en todos los espacios de poder, que van desde tener nuestra propia agroindustria y el control sobre nuestra producción, pasando por tener nuestra radio comunitaria o nuestro periódico, hasta tener influencia en los métodos de enseñanza que se utilizan en nuestras escuelas primarias.

Pero, por otro lado, el estado es un espacio de poder de toda la sociedad que los trabajadores también tienen que disputar aunque no sea el único espacio de poder en la sociedad. La reflexión, que es todavía insuficiente, apunta a cómo los trabajadores van a influenciar el control del estado. Porque tampoco creemos que la única forma sea la contienda electoral para llegar a ser gobierno, ya que ser gobierno se ha vuelto insuficiente para democratizar el estado burgués. En realidad necesitaremos de una gran acumulación de fuerzas sociales, desde el punto de vista organizativo e ideológico, que sea capaz de aglutinar a las mayorías en torno a un proyecto de construcción de nuevas políticas públicas. En el pasado reciente, la izquierda superó la visión idealista del "asalto al poder" como si éste fuera un "pase de magia" donde las guerrillas o un proceso de insurrección lograban tomar los palacios e implementar un proyecto popular. Ahora tendremos que superar la visión estrecha que colocó todas las energías en imaginar que bastaba disputar y ganar una elección para dirigir el estado. En esto reside nuestra debilidad teórica, que es fruto también de la crisis ideológica que tenemos en la izquierda social sobre cómo construir los instrumentos políticos que organicen al pueblo, politicen y construyan proyectos verdaderamente populares que controlen el estado y lo transformen de estado burgués a estado al servicio de las mayorías.

América Latina y los tratados de libre comercio

El MST, la Vía Campesina y la mayoría de los movimientos sociales estamos involucrados en la campaña contra el ALCA. En Brasil hemos desarrollado grandes movilizaciones con la consulta popular donde participaron más de 10 millones de electores que se manifestaron contra el ALCA.

El ALCA es el aparato jurídico que el capital internacional necesita para ampliar su dominio sobre nuestro territorio y nuestra economía, pero está enfrentando muchas contradicciones. En Brasil esas contradicciones se manifiestan incluso dentro del gobierno, que tiene posiciones diferenciadas entre los distintos ministerios. Lamentablemente, la campaña contra el ALCA no ha logrado todavía consolidar un gran movimiento de masas, de lucha. Por ahora, creo que estamos todavía en una etapa de concientización. Por suerte las contradicciones entre los gobiernos nos han dado un tiempito más, pues los acuerdos parecen postergarse para 2006. Pero necesitamos urgentemente pasar del período de información y concientización, que también es pequeño, a una etapa de luchas masivas, coordinadas entre todos los países.

Es prioritario que todos los movimientos y las fuerzas sociales y partidarias asuman la posición de que el ALCA será el fin de la posibilidad a corto plazo de proyectos de desarrollo nacional, será la recolonización en beneficio de los capitales de Estados Unidos; y que, por lo tanto, estamos librando una batalla no solamente puntual sino estratégica. Esperamos que en los próximos meses, con la realización del Foro Social de las Américas en Quito, Ecuador (julio 2004), y otros eventos, podamos seguir reflexionando y articulando todas las fuerzas latinoamericanas para hacer frente a los intereses del capital. Pero eso también dependerá de nuestra capacidad de recuperar el ascenso del movimiento de masas en nuestros países. Si esto no sucede tendremos un período duro, de enfrentamiento y de resistencia. Si el pueblo se alza más rápido, más rápido podremos derrotar al capital del norte y sus aliados nacionales. Nosotros somos optimistas porque, en tanto el capital internacional financiero no ha logrado responder a las necesidades mínimas de nuestros pueblos, las contradicciones económicas y sociales nos ayudan a avanzar en la idea de que necesitamos construir otro proyecto.

Notas

1 Transcribimos aquí, bajo formato de artículo, las respuestas de João Pedro Stédile al cuestionario que se le hizo llegar desde el OSAL. Aprovechamos para agradecerle la posibilidad de contar con sus opiniones en esta publicación.

La izquierda latinoamericana a comienzos del siglo XXI: nuevas realidades y urgentes desafíos

Atilio A. Boron*

* *Secretario Ejecutivo
del Consejo
Latinoamericano
de Ciencias Sociales
(CLACSO).
Profesor de Teoría Política
y Social en la Universidad
de Buenos Aires (UBA).*

El objetivo de este trabajo es examinar algunos aspectos de la renovada presencia de la izquierda en la vida política latinoamericana. Presencia que se observa no tanto en los escenarios tradicionales –el sistema de partidos, la representación parlamentaria, etc.– como en el surgimiento de una serie de gobiernos que, vagamente, es cierto, se identifican como de “centro-izquierda” o “progresistas” y, de modo muy especial, en la tumultuosa aparición de nuevos movimientos sociales que, en algunos países, adquirieron una enorme gravitación. Ésta se expresó de formas variadas, desde la “conquista de calles y plazas” para resistir a las políticas del neoliberalismo hasta la irrupción de masivas insurgencias que ocasionaron, en los últimos años, el derrumbe de sucesivos gobiernos en el Perú, Ecuador, Argentina y Bolivia.

La paradójal crisis del neoliberalismo

El punto de partida de nuestra reflexión es el fracaso del neoliberalismo. En efecto, luego de una prolongada

hegemonía, las ideas y las políticas neoliberales se encuentran hoy a la defensiva, jaqueadas tanto por fuerzas internas crecientemente movilizadas como por una expansiva coalición de actores globales que pasaron de la tenaz resistencia a su proyecto a desplegar una ofensiva que se siente, si bien con desigual intensidad, en los cuatro rincones del planeta.

Grandes movimientos sociales han florecido en la última década del siglo pasado a partir de las pioneras revueltas de los zapatistas en 1994, la aparición de los piqueteros argentinos, las grandes huelgas ciudadanas y de trabajadores en Francia y Corea del Sur poco después y, hacia finales de siglo, la maduración y consolidación internacional de estas protestas en Seattle y en Porto Alegre. Consecuentemente, nuevas fuerzas políticas han pasado a controlar los gobiernos (en países como Venezuela y Brasil, por ejemplo) o se aprestan a hacerlo, como en Uruguay; y distintos gobiernos se plantean la necesidad de abandonar las políticas que, en el pasado, causaran los estragos por todos conocidos, como lo demuestra, entre otros, el caso argentino. No obstante, es preciso aclarar que en la generalidad de los casos los cambios más importantes se produjeron en el terreno más blando del discurso y la retórica, y no en el más duro y áspero de las políticas económicas. Pero, aun con estas limitaciones, ese cambio es muy significativo y sería erróneo subestimar sus alcances.

En un trabajo reciente pasábamos revista a algunas de las transformaciones más importantes ocurridas en los países latinoamericanos, todas las cuales incidieron fuertemente en la aparición de nuevas formas de protesta social y organización política antagónicas al proyecto neoliberal (Boron, 2003[b]: 7-16). En él se subraya la extraordinaria complejidad y la naturaleza contradictoria que ha adquirido el lento pero progresivo agotamiento del neoliberalismo en estas tierras. Es indudable que su declinante curso a partir de mediados de los noventa revirtió la arrolladora influencia que había adquirido desde la década de los setenta de la mano de las dos más sangrientas dictaduras que se recuerden en Chile y la Argentina. Si es incorrecto sostener que hoy el neoliberalismo se encuentra ya en retirada, no lo es menos afirmar que su ascendiente sobre la sociedad, la cultura, la política y la economía latinoamericanas se ha mantenido incólume con el transcurso de los años. En este sentido, el espectacular derrumbe del experimento neoliberal en la Argentina, el “país modelo” por largos años del FMI y el BM, ha cumplido un papel pedagógico de extraordinarias proporciones. Resultados no más alentadores produjo la aplicación de las políticas del Consenso de Washington en México: después de veintidós años ininterrumpidos de hegemonía absoluta de dicha orientación, el ingreso per cápita de los mexicanos aumentó en todo ese período tan sólo el 0,3% y esto gracias a que en ese mismo lapso (1982-2003) abandonaron el país algo más de 10 millones de personas. A pesar de sus promesas, el neoliberalismo –reforzado por el ingreso al Tratado de Libre Comercio en 1994– no generó crecimiento económico, al

***“Lo que se
comprueba
en el momento
actual es una
llamativa disyunción
entre el inocultable
debilitamiento
del impulso
neoliberal
en los ámbitos
de la cultura,
la conciencia pública
y la política y,
al mismo tiempo,
su arraigada
persistencia
en el crucial terreno
de la economía
y el policy making”***

paso que empeoraba radicalmente la distribución del ingreso, ahondando la injusticia social prevaleciente en México (Guadarrama H., 2004: 10). Si a esto le sumamos las graves dudas que plantean la extrema vulnerabilidad externa del crecimiento económico de Chile y su crónica ineptitud para revertir la escandalosa regresividad de la distribución del ingreso, llegamos a la conclusión de que los tres países modelo otrora ensalzados por la literatura convencional se encuentran en serios problemas. Las crisis enseñan, y vastos contingentes de nuestras sociedades han aprendido gracias a ellas qué es lo que se puede esperar de las políticas neoliberales.

Lo que se comprueba en el momento actual es pues algo bastante peculiar: una llamativa disyunción entre el inocultable debilitamiento del impulso neoliberal en los ámbitos de la cultura, la conciencia pública y la política y, al mismo tiempo, su arraigada persistencia en el crucial terreno de la economía y el *policy making* (es decir, en las cabezas y en las decisiones de funcionarios, ministros de hacienda y economía, presidentes de bancos centrales, dirigencia política, etcétera). Las políticas económicas del neoliberalismo siguen su curso y a veces hasta lo profundizan, como lamentablemente lo demuestra el Brasil de Lula; pero a diferencia de lo ocurrido en los ochenta y comienzos de los noventa, ya no cuentan con el apoyo –manipulado, es cierto, pero apoyo al fin– que antaño le garantizaba una sociedad civil que pugnaba por dejar atrás el horror de las dictaduras y aceptaba, casi siempre a regañadientes, la receta que impulsaban los amos imperiales y sus representantes locales. La amenaza del desborde hiperinflacionario y el chantaje de los organismos financieros internacionales –agitando el espantapájaros del “riesgo país”, la fuga de capitales, la especulación contra las monedas locales, etc.– cumplieron un notable papel en el “disciplinamiento” de pueblos y gobiernos díscolos, y en la resignada aceptación de la amarga medicina neoliberal.

En todo caso, este desfasaje entre los componentes económicos e ideológico-políticos de la hegemonía está lejos



de ser inédito en la historia latinoamericana, como lo demuestra la prolongada crisis de la hegemonía oligárquica en nuestra región. Tal como lo demostrara Agustín Cueva en un texto ya clásico de la ciencia social latinoamericana, el irreversible deterioro de los fundamentos materiales de la hegemonía oligárquica no ocasionó su instantáneo derrumbe sino que transitó por una diversidad de caminos que mediatizaron y en algunos casos postergaron por décadas su ocaso definitivo, exactamente hasta la irrupción de los regímenes populistas (Cueva, 1976). Si bien no se pueden extraer conclusiones lineales de la experiencia histórica, podría plantearse una hipótesis –desalentadoramente pesimista, por cierto– que pronosticara que la indudable bancarrota de las condiciones económicas, sociales y políticas que hicieron posible el auge del neoliberalismo no necesaria ni inmediatamente irá a producir su desaparición de la escena pública. Los componentes ideológicos y políticos amalgamados en su proyecto económico pueden garantizarle una inesperada sobrevida, aun en medio de condiciones sumamente desfavorables. Parfraseando a Gramsci podría decirse que la lenta agonía del neoliberalismo es una de esas situaciones en las cuales lo viejo no termina de morir y lo nuevo no acaba de nacer; y como lo recordaba el gran teórico italiano, en tales coyunturas suelen aparecer toda clase de fenómenos aberrantes. Ejemplos de tales aberraciones sobran

entre nosotros: el clamoroso incumplimiento del contrato electoral perpetrado por gobiernos que llegan al poder para romper de inmediato con sus promesas de campaña; la descarada traición a los principios por parte de ciertos partidos y organizaciones de "izquierda"; la dilatada supervivencia de personajes nefastos como Pinochet, Menem, Fujimori, el ahora difunto Banzer; o la escandalosa situación social de Argentina, Brasil y Uruguay son algunos de los ejemplos más notables al respecto.

Raíces de la resistencia al neoliberalismo

¿Cuándo aparecen, y bajo qué formas lo hacen, estas nuevas fuerzas políticas y sociales contestatarias? Las razones de la irrupción de nuevos sujetos políticos son múltiples y complejas, pero existen algunas que se reiteran en todos los casos.

En primer lugar, por el fracaso económico ya anotado que acentuó las contradicciones desencadenadas por la reestructuración económica y social precipitada por la crisis y agudizada después por las políticas de "ajuste y estabilización" implementadas como respuesta a la misma. Esto tuvo consecuencias bien significativas en lo relativo a la constitución de nuevos sujetos políticos, por cuanto:

a) generó nuevos actores sociales como, por ejemplo, los piqueteros en la Argentina; los pequeños agricultores endeudados de México, nucleados en "El campo no aguanta más"; los jóvenes y una variedad de movimientos de inspiración identitaria (de género, opción sexual, etnia, lengua, etc.) hastiados por la mercantilización de lo social y las políticas de supresión de las diferencias promovidas por el neoliberalismo; y los movimientos "alterglobalización", sobre los cuales volveremos después, que modificaron el paisaje sociopolítico de sus países;

b) potenció la gravitación de otras fuerzas sociales y políticas ya existentes pero que, hasta ese momento, carecían de una proyección nacional al no estar suficientemente movilizadas y organizadas. En una enumeración que no pretende ser exhaustiva señalaríamos a los campesinos en Brasil y México, o los indígenas en Ecuador, Bolivia y partes de México y Mesoamérica;

c) atrajo a las filas de la contestación al neoliberalismo a grupos y sectores sociales intermedios, las llamadas "clases medias", a causa de sus impactos pauperizadores y excluyentes o, como en el caso argentino, por la expropiación, practicada por los grandes bancos y avalada por el gobierno, de sus ahorros. Los "caceroleros" argentinos son un ejemplo muy concreto, como también lo son los médicos y trabajadores de la salud en El Salvador; o los grupos movilizados por

la “Guerra del agua” en Cochabamba; o la resistencia a las políticas privatizadas del gobierno peruano en Arequipa.

En segundo término es preciso decir que el surgimiento de estas nuevas expresiones de la política de izquierda se relaciona íntimamente con el fracaso de los capitalismo democráticos en la región. Baste con señalar que la frustración generada por el desempeño de los regímenes llamados democráticos en esta parte del mundo ha sido intensa, profunda y prolongada (Boron, 2000: 149-184). Fue de la mano de estas peculiares “democracias”, que florecieron en la región a partir de los años ochenta, que las condiciones sociales empeoraron dramáticamente. Mientras que en otras latitudes el capitalismo democrático aparecía como promotor del bienestar material y cautelosamente tolerante ante las reivindicaciones igualitaristas que proponía el movimiento popular —e insistamos en eso de que *aparecía* porque, en realidad, tales resultados son consecuencia de las luchas sociales de las clases subalternas en contra de los capitalistas—, en América Latina la democracia trajo bajo el brazo políticas de ajuste y estabilización, precarización laboral, altas tasas de desocupación, aumento vertiginoso de la pobreza, vulnerabilidad externa, endeudamiento desenfrenado y extranjerización de nuestras economías. Democracias pues vacías de todo contenido, reducidas —como recordaba Fernando H. Cardoso antes de ser presidente del Brasil— a una mueca sin gusto ni rabia incapaz “de eliminar el olor de farsa de la política democrática”, causado por la inoperancia de ese régimen político para introducir reformas de fondo en el sistema productivo y “en las formas de distribución y apropiación de las riquezas” (Cardoso, 1982; 1985). Tal como lo planteáramos en *Tras el Búho de Minerva*, nuestra región apenas si ha conocido el grado más bajo en la escala de desarrollo democrático posible dentro de los estrechos márgenes de maniobra que permite la estructura de la sociedad capitalista. Democracias meramente electorales, es decir, regímenes políticos sustantivamente oligárquicos, controlados por el gran capital con total independencia de los partidos gobernantes que asumen las tareas de gestión en nombre de aquél, pero en donde el pueblo es convocado cada cuatro o cinco años a elegir quién o quiénes serán los encargados de sojuzgarlo. Con democracias de este tipo no es casual que, al cabo de reiteradas frustraciones, se produzca el renacimiento de fuerzas sociales de izquierda.

En tercer lugar habría que decir que este proceso ha sido también alimentado por la crisis que se ha abatido sobre los formatos tradicionales de representación política. Pocas dudas caben de que la nueva morfología de la protesta social en nuestra región es un síntoma de la decadencia de los grandes partidos populistas y de izquierda, y de los modelos tradicionales de organización sindical. Decadencia que, sin duda, se explica por las transformaciones ocurridas en la “base social” típica de esos formatos organizativos debido a: (a) la creciente heterogeneidad del “universo asalariado”; (b) la declinante gravitación cuantitativa del proletariado industrial en el conjunto de las cla-

ses subalternas; (c) la aparición de un voluminoso “subproletariado” –denominado “pobretariado” por Frei Betto– que incluye a un vasto conjunto de desocupados permanentes, trabajadores ocasionales, precarizados e informales, cuentapropistas de subsistencia (los futuros “empresarios schumpeterianos”, en la delirante visión de Hernando de Soto) y toda una vasta masa marginal a la que el capitalismo ha declarado como “redundante” e “inexplotable” y que por lo tanto, en una sociedad basada en la relación salarial, no tiene derecho a vivir. De ahí que el neoliberalismo practique una silenciosa pero efectiva eutanasia de los pobres.

La decadencia de los formatos tradicionales de organización se relaciona, como si lo anterior fuera poco, con la explosión de múltiples identidades (étnicas, lingüísticas, de género, de opción sexual, etc.) que redefinen hacia la baja la relevancia de las tradicionales variables clasistas. Si a esta enumeración le añadimos la inadecuación de los partidos políticos y los sindicatos para descifrar correctamente las claves de nuestro tiempo, la esclerosis de sus estructuras y prácticas organizativas, y el anacronismo de sus discursos y estrategias comunicacionales, se comprenderán muy fácilmente por un lado las razones por las cuales estos entraron en crisis y, por el otro, las que explican la emergencia de nuevas formas de lucha y movimientos de protesta social. Unas y otros son también síntomas elocuentes de la progresiva irrelevancia de las llamadas instituciones representativas para canalizar las aspiraciones ciudadanas, lo que a su vez explica, al menos en parte, el visceral –iy suicida!– rechazo de las fuerzas sociales emergentes a enfrentar seriamente la problemática de la organización que tantos debates originara a comienzos del siglo XX en el movimiento obrero, y el creciente atractivo que sobre dichos sujetos ejerce la “acción directa”.

Un cuarto y último factor, en una lista que no intenta ser exhaustiva, es la globalización de las luchas en contra del neoliberalismo. Estas luchas comenzaron y se difundieron rápidamente por todo el orbe a partir de iniciativas que no surgieron ni de partidos ni de sindicatos ni, menos todavía, se generaron en la “escena política oficial”. En el caso latinoamericano el papel estelar lo cumplió el zapatismo, al emerger de la Selva Lacandona el 1° de Enero de 1994 y declarar la guerra al neoliberalismo. La incansable labor del MST en Brasil, otra organización no tradicional, amplificó considerablemente el impacto de los zapatistas. Luego, en una verdadera avalancha, se sucedieron grandes movilizaciones de campesinos e indígenas en Bolivia, Ecuador, Perú y en algunas regiones de Colombia y Chile. Las luchas de los piqueteros argentinos, lanzadas como respuesta a las privatizaciones del menemismo, son de la misma época y se inscriben en la misma tendencia general. Los acontecimientos de Seattle y otros similares escenificados en Washington, Nueva York, París, Génova, Gotemburgo y otras grandes ciudades del mundo desarrollado le dieron a la protesta en contra del Consenso de Washington una impronta universal, ratificada año tras año por los impresionantes progresos experimen-

tados por la convocatoria del Foro Social Mundial de Porto Alegre. Se produjo así una especie de “efecto dominó” que, sin lugar a dudas y contrariando una teorización muy difundida en nuestro tiempo, la de Hardt y Negri en *Imperio*, reveló la comunicación existente entre las luchas sociales y procesos políticos puestos en juego en los más apartados rincones del planeta.

La maldición del posibilismo conservador

Llegados a este punto cabe preguntarse: ¿hay espacio para ensayar políticas post-neoliberales? La respuesta tiene que ser matizada. En algunos casos es positiva; en otros también, pero con algunas reservas. Veamos el caso del Brasil. Los defensores del rumbo actual seguido por ese país dicen que Brasil necesita atraer la confianza de los inversionistas internacionales, y que esto se logra con una muy estricta disciplina fiscal y un total apego a la ortodoxia. Digamos sin rodeo alguno que esta argumentación es insostenible y que si hay un país que tiene todas las condiciones para ensayar exitosamente una política post-neoliberal en el mundo, ese país es Brasil. Si Brasil no puede, ¿quién podría? ¿El Ecuador de Lucio Gutiérrez? ¿Un eventual gobierno del Frente Amplio en el Uruguay? ¿Un posible gobierno de Evo Morales en Bolivia? La Argentina, tal vez, pero sólo si hubiera condiciones internacionales muy favorables. Brasil, en cambio, por sus inmensos recursos de todo tipo, si quiere puede.

El corolario del “posibilismo conservador”, hijo dilecto del pensamiento único, es que nada se puede cambiar, ni siquiera en un país de las excepcionales condiciones del Brasil. Ensayar lo que está fuera del horizonte de lo posible y abandonar el consenso económico dominante, aseguran algunos encumbrados funcionarios, expondría al Brasil a terribles penalizaciones que liquidarían al gobierno de Lula. Sin embargo, una atenta mirada a la historia económica reciente de la Argentina demostraría que lo que condujo a ese país a la peor crisis de su historia fue la subordinación de la voluntad política y la gestión del Estado a los caprichos y la codicia de los mercados.

Tal como lo reconocíamos en un análisis efectuado antes de la asunción de Lula a la presidencia, la tentación posibilista está siempre al acecho de cualquier gobierno animado por intenciones reformistas (Boron, 2003[a]). Ante la imposibilidad objetiva y subjetiva de la revolución, rasgo que caracteriza al momento actual no sólo de Brasil sino de toda la región, una mal entendida cordura impulsa a contemporizar con los adversarios y a buscar en los entresijos de la realidad alguna pequeña ruta de escape que evite una capitulación *tout court*. El único problema con esa estrategia es que la historia nos enseña que después es imposible evitar el tránsito del falso realismo del posibilismo al inmovilismo y, luego, a una catastrófica derrota. Ésa fue claramente la

***“Quien invoca
a la reforma
en América Latina
conjura en su contra
a todos
los monstruos
del establishment:
los militares
y los paramilitares;
la policía secreta
y la CIA; la embajada
norteamericana
y la ‘prensa libre’;
los ‘combatientes por
la libertad’
y los terroristas
organizados
y financiados por las
clases dominantes.
El camino de las
reformas está lejos
de ser un paseo
por un prado
rebosante de flores”***

experiencia argentina con el gobierno de “centroizquierda” de la Alianza y, más generalmente, de la socialdemocracia en España, Italia y Francia. En términos más generales, esa fue también la conclusión teórica de Max Weber al afirmar, en el párrafo final de su célebre conferencia “La política como vocación”, que tal como “lo prueba la historia (...) en este mundo no se consigue nunca lo posible si no se intenta lo imposible una y otra vez” (Weber, 1982). Las palabras de Weber son tanto más importantes en un continente como el nuestro, en donde las enseñanzas de la historia demuestran de modo inapelable que hubo que intentar lo imposible para lograr modestos avances; que se necesitaron verdaderas revoluciones para instituir algunas reformas en las estructuras sociales de la región más injusta del planeta; y que sin una utopía política audaz y movilizadora los impulsos reformistas se extinguen, los gobernantes capitulan y sus gobiernos terminan asumiendo como su tarea fundamental la decepcionante administración de las rutinas cotidianas.

Las esperanzas depositadas en un vigoroso reformismo, posible sin duda alguna, no significan hacer oídos sordos a las sabias advertencias de Rosa Luxemburgo cuando decía que las reformas sociales, por genuinas y enérgicas que sean, no cambian la naturaleza de la sociedad preexistente. Lo que ocurre es que al no estar la revolución en la agenda inmediata de las grandes masas de América Latina, la reforma social se convierte en la coyuntura actual en la única alternativa disponible para hacer política. Pero la reforma, también recordaba nuestra autora, no es una revolución que avanza lentamente o por etapas hasta que, con la imperceptibilidad del viajero que cruza la línea ecuatorial –para seguir con la famosa metáfora de Edouard Bernstein–, se llega al socialismo. Un siglo de reformismo socialdemócrata en Occidente demostró irrefutablemente que las reformas no son suficientes para “superar” el capitalismo. Produjo cambios importantes, sin duda alguna, “dentro del sistema”, pero fracasó en su declarada intención de “cambiar el sistema”.

En la actual coyuntura nacional e internacional, el reformismo aparece como la única oportunidad de avanzar mientras las fuerzas populares trabajan para modificar las condiciones objetivas y subjetivas necesarias para ensayar alternativas más prometedoras. El error de muchos reformistas, no obstante, ha sido el de confundir necesidad con virtud. Aun cuando en el momento actual —signado por la agresividad sin precedentes del imperialismo, la lenta recomposición de las fuerzas populares luego de los retrocesos experimentados a finales del siglo pasado, el acrecentado predominio de los monopolios en la economía y los medios de comunicación, etc.— las reformas sean lo único que pueda hacerse, eso no las convierte en instrumentos adecuados para la construcción del socialismo, si bien podrían, si se dan bajo una cierta forma, constituir un aporte para avanzar en esa dirección. En la presente coyuntura son lo posible, si bien no lo suficiente, a la hora de actuar en un mundo barbarizado que requiere transformaciones de fondo y no tan sólo ajustes marginales. Si como dicen los zapatistas “de lo que se trata es de crear un mundo nuevo”, tal empresa excede con mucho los límites cautelosos del reformismo. Pero no se puede permanecer cruzados de brazos hasta que llegue el “día decisivo” de la revolución. Y debemos recordar, además, que en nuestros países los desafíos que las reformas plantean a los “señores del dinero” dieron lugar a feroces contrarrevoluciones que ahogaron en un baño de sangre a las tentativas reformistas. De modo que nadie crea que al hablar de reformas se piensa en un debate cortesano y caballeresco acerca de los bienes públicos. Quien invoca a la reforma en América Latina conjura en su contra a todos los monstruos del *establishment*: los militares y los paramilitares; la policía secreta y la CIA; la embajada norteamericana y la “prensa libre”; los “combatientes por la libertad” y los terroristas organizados y financiados por las clases dominantes. En América Latina el camino de las reformas está lejos de ser un paseo por un prado rebosante de flores.

Sucesivos presidentes latinoamericanos optaron por desestimar el camino de las reformas profundas y gobernar según las reglas del posibilismo, “tranquilizando” a los mercados y satisfaciendo puntualmente cada uno de sus reclamos. Los resultados están a la vista en Argentina y Brasil. Es cierto que no hay parangón alguno entre figuras tan distintas como Lula y De la Rúa. Tampoco hay paralelismo alguno entre el partido justicialista o la Alianza (esa insípida mezcla del diletantismo radical y el oportunismo frepamista) y el PT, una de las construcciones políticas más importantes a nivel mundial. Pero, como dolorosamente lo comprueba la experiencia brasileña durante el primer año y medio del gobierno de Lula, ni un liderazgo respetable ni un gran partido de masas garantizan el rumbo correcto de una experiencia de gobierno. El gobierno de Lula está avanzando por el camino equivocado, al final del cual no se encuentra una nueva sociedad más justa y democrática —cuya búsqueda fue lo que dio nacimiento al PT hace poco más de veinte años— sino una estructura capitalista más injusta y menos democrática que la anterior. Un país en donde la dictadura del capital, revestida con un leve ropaje

pseudo-democrático, será más férrea que antes, demostrando dolorosamente que George Soros tenía razón cuando le aconsejaba al pueblo brasileño no molestarse en elegir a Lula porque de todos modos gobernarían los mercados. Sería bueno que Brasil se ahorrara los horrores que el “posibilismo” y la política de “apaciguamiento de los mercados” produjo en la Argentina contemporánea.

El difícil tránsito hacia el post-neoliberalismo: algunas claves interpretativas

Un breve repaso a la historia reciente de América Latina sirve para ilustrar los graves obstáculos con que parecen tropezar los gobiernos animados –al menos en principio y por su retórica– por su afán de poner fin a la triste historia del neoliberalismo en la región. Lo cierto es que, a veces de una manera grotesca y otras trágica, se perpetúa la continuada supremacía del neoliberalismo en la esfera económica a pesar de que en las urnas la ciudadanía le haya dado la espalda de manera rotunda. No obstante, los gobiernos que llegan al poder sobre los hombros de una impresionante marejada de votos populares y con un mandato expreso de poner término al primado del neoliberalismo claudican a la hora de instituir una agenda post-neoliberal. ¿Por qué?

En primer lugar, por el acrecentado poder de los mercados; en realidad, de los monopolios y grandes empresas que los controlan, frente a las deterioradas fuerzas gubernamentales luego de décadas de aplicación de las políticas neoliberales de “achicamiento” del estado, desmantelamiento de sus agencias y organismos, y privatización de las empresas públicas. Todo esto le confiere a los sectores dominantes una capacidad de chantaje –fuga de capitales, huelga de inversiones, presiones especulativas, soborno de funcionarios, etc.– sobre los gobiernos si no imposible por lo menos muy difícil de resistir. Este tema subraya de manera contundente los efectos políticos de largo plazo del programa neoliberal. Al desprestigiar ideológicamente al estado y al achicarlo y mutilarlo de mil maneras, logró sentar las bases de un predominio político fundado en una muy favorable correlación estructural de fuerzas entre el sector privado –eufemismo con que se designan a los monopolios y la coalición dominante– y el gobierno, cada vez más privado de recursos, debido, por una parte, al peso creciente de la deuda externa y las acrecentadas exigencias de lograr superávits fiscales cada vez más abultados y extravagantes, todo lo cual atenta contra las capacidades financieras del estado y la posibilidad de formular políticas alternativas; y, por la otra, a las consecuencias de las políticas de desregulación, apertura comercial, liberalización y privatizaciones que despojaron a los estados de instrumentos estratégicos y de las agencias específicas idóneas para intervenir en los mercados y controlar a los monopolios, lo que los deja prácticamente inermes frente a estos.



En segundo lugar es preciso mencionar la visceral desconfianza que los gobiernos de la llamada "centro-izquierda" han manifestado en relación a los movimientos populares y fuerzas sociales contestatarias. Cautivados por las sirenas neoliberales han caído en la estúpida creencia de que los problemas de los estados son cuestiones que deben ser tratadas por expertos y con criterios supuestamente "técnicos", y que la vocinglería de la calle impediría un adecuado tratamiento de las mismas. La consecuencia de esta actitud, cultivada con esmero por los representantes políticos e ideológicos, nacionales e internacionales, del capital financiero y los monopolios, es una especie de *harakiri* estatal en donde éste, desvinculado de una sólida base social movilizadora y organizada, es fácil presa de los intereses imperiales. Esta tendencia ha potenciado la regresión antidemocrática que padecen los estados de América Latina que, como hemos dicho más arriba, han ido vaciando de todo contenido al proyecto democrático y debilitado irremediablemente, en el marco de la actual organización institucional, sus capacidades de intervención en la vida social. Uno de los rasgos definitorios de esta crisis es el progresivo desplazamiento hacia ámbitos supuestamente más "técnicos" –y, por consiguiente, alejados de todo escrutinio popular y democrático– de un número creciente de temas que hacen al bienestar colectivo y que lejos de ser debatidos públicamente son tratados por "expertos" en las sombras, y al margen de cualquier tipo de control público. Pese a su enorme impacto social, estas cuestiones son resueltas por acuerdos sellados entre los capitalistas y sus representantes estatales. Toda esta operación fraudulenta se rodea de justificaciones absurdas, tales como que "la economía es una cuestión técnica que debe manejarse con independencia de consideraciones políticas". La economía, ciencia de la

escasez y por eso mismo ciencia política por excelencia, pretende pasar por un mero saber técnico. La ideología de la “independencia del Banco Central”, aceptada a pie juntillas por los gobiernos “progresistas”, es un ejemplo elocuente de este bárbaro disparate. Su tan mentada independencia lo es tan solo en relación a la soberanía popular pero no con relación al capital financiero y el imperialismo, a los cuales sirve incondicionalmente y sin pausa.

Un tercer factor que juega decisivamente en impedir el tránsito al post-neoliberalismo es la persistencia del imperialismo que a través de sus múltiples lazos y mecanismos y organizado a escala planetaria por el gobierno de Estados Unidos, disciplina a los gobernantes díscolos mediante una variedad de instrumentos que aseguran la continuada vigencia de las políticas neoliberales. Por un lado, las presiones derivadas de la necesidad que tienen gobiernos fuertemente endeudados de contar con la benevolencia de Washington para viabilizar sus programas gubernamentales sea por la vía de un “trato preferencial” que garantice el acceso al mercado norteamericano de sus productos, la eterna renegociación de su deuda externa, o su visto bueno para facilitar el ingreso de capitales e inversiones de diverso tipo. Todo esto se plasma en la larguísima lista de “condicionalidades” que los “perros guardianes” del imperialismo –principalmente el FMI y el BM, pero también la OMC y el BID– les imponen a los gobiernos de la región (Boron, 2004: 135-153). Por otra parte, la coerción ejercida por el imperialismo transita también por otros senderos que van desde las exigencias políticas directas planteadas en el contexto de los programas de ayuda militar, erradicación de cultivos de coca, asistencia técnica y cooperación internacional, hasta el apoyo incondicional a las actitudes y políticas de Estados Unidos en los diversos foros internacionales o en las distintas iniciativas, inclusive de tipo militar, adoptadas por la superpotencia en defensa de sus intereses.

Los desafíos de la hora actual

Las fuerzas de izquierda, en el gobierno como en la oposición, se enfrentan pues a formidables desafíos. Las que se hallan en la segunda condición, como opositoras a una variedad de gobiernos burgueses, porque deben honrar la propuesta gramsciana de construir partidos, movimientos y organizaciones genuinamente democráticos y participativos como una forma de prefigurar la naturaleza de la ciudad futura que quieren construir. Pero como si lo anterior no fuera una tarea enorme, la izquierda opositora debe también demostrar su capacidad para neutralizar el accionar de los aparatos ideológicos de la burguesía y hacer llegar su mensaje y su discurso al conjunto de la población, que por cierto no tiene sus oídos preparados para escuchar un mensaje socialista. Antes bien, los prejuicios cultivados e inculcados con habilidad por los publi-

cistas de la derecha la tornan profundamente refractaria ante cualquier discurso que hable de socialismo o comunismo. Ante sus ojos eso equivale a violencia y muerte; y pese a que la izquierda ha sido víctima de ambas cosas en la historia reciente de nuestra región, se la acusa de ser la representante y portadora de esas desgracias. Hay en esta actitud promovida incesantemente por los ideólogos de la derecha un importante componente de resignación y pesimismo que no puede ser ignorado, y que plantea la futilidad de cualquier tentativa de superar al capitalismo. La osadía podría ser seguida por un baño de sangre, y nadie quiere esto. El desafío de la credibilidad de la izquierda es, por lo tanto, considerable. Se ha progresado bastante en este terreno pero aún queda mucho por hacer.

En relación a la izquierda “gobernante” los retos son de otro tipo. Tal como ya ha sido señalado, la victoria de Lula constituye un hito en la historia de la emancipación popular de nuestros pueblos. Era fundamental ganar las elecciones brasileñas y acceder al gobierno. Pero mucho más importante era construir el poder político suficiente como para “gobernar bien”, entendiéndose por esto honrar el mandato popular que exigía poner fin a la pesadilla neoliberal y avanzar en la construcción de una sociedad diferente. No obstante, hasta ahora los resultados han sido decepcionantes y la demora de Brasilia en poner en marcha un proyecto alternativo comienza a aparecer como una inexplicable capitulación. Retos semejantes se le plantean al presidente Hugo Chávez en Venezuela, debiendo transitar por el estrecho desfiladero delimitado, por un lado, por una profunda revolución en las conciencias y en el imaginario popular –tema que ha sido subestimado en los análisis tradicionales de la izquierda– y, por el otro, por esa verdadera espada de Damocles que significan la riqueza petrolera de Venezuela y, simultáneamente, su condición de abastecedor estratégico del imperio. Luego de una serie de vacilaciones iniciales la “revolución bolivariana” está finalmente dando muestras de haber encontrado un rumbo de salida del neoliberalismo, rumbo que, digámoslo al pasar, está erizado de acechanzas y amenazas de todo tipo como lo demuestra la historia venezolana de estos últimos años.

En todo caso, conviene recordar aquí, para concluir, el caso cubano. Si pese a los formidables obstáculos que se le han presentado durante casi medio siglo Cuba pudo avanzar significativamente en la construcción de una sociedad que garantiza un acceso universal a un amplio conjunto de bienes y servicios, ¿qué no podrían hacer países dotados de muchos más recursos de todo tipo (y alejados de la enfermiza obsesión norteamericana con la isla caribeña) como la Argentina, Brasil y Venezuela? Si pese a tan desfavorables condiciones –como el bloqueo de cuarenta y cinco años y la beligerancia permanente de Estados Unidos– ese país logró garantizar para su población estándares de salud, alimentación, educación y derechos generales (de la mujer, de los niños, de los discapacitados, etc.) que ni siquiera se obtienen en algunos países

del capitalismo desarrollado, ¿cuáles serían los insalvables obstáculos que impiden, en países que disfrutaban de circunstancias muchísimo más promisorias, acceder a logros semejantes?

La respuesta no se halla en determinismos económicos, un conveniente pretexto las más de las veces, sino en la debilidad de la voluntad política. Sin una decidida voluntad de cambiar el mundo éste seguirá siendo lo mismo. Pero quien pretenda acometer esa tarea deberá saber dos cosas: primero, que al hacerlo se enfrentará con la tenaz y absoluta oposición de las clases y grupos sociales dominantes que no dejarán recurso por utilizar, desde la seducción y persuasión hasta la violencia más atroz, para frustrar cualquier tentativa transformadora. De ahí nuestra grave preocupación por ciertas formulaciones de los zapatistas, como “la democracia de todos”, que trasuntan un alarmante romanticismo en relación a la reacción de las clases y grupos desplazados del poder (Boron, 2001). Segundo, que no hay tregua posible en ese combate: si el gobernante que presuntamente intenta cambiar al mundo es halagado por la “prensa libre”, los “gurúes” de Wall Street y sus papagayos locales y, en general, la opinión “bienpensante” de nuestros países (que en realidad piensa poco y mal), es porque su accionar ha caído en la irrelevancia o, hipótesis perversa, porque se ha pasado al bando de sus enemigos. Las clases dominantes del imperio y sus aliados jamás se resignarán a perder sus prerrogativas, sus privilegios y su poder. Si no atacan no es porque se han convencido de la superioridad ética, económica y política del socialismo sino porque se han dado cuenta de que su eventual oponente ha depuesto las armas y ya no les hace daño.

Bibliografía

Boron, Atilio A. 2004 (2002) *Imperio & Imperialismo. Una lectura crítica de Michael Hardt y Antonio Negri* (Buenos Aires: CLACSO) [quinta edición].

Boron, Atilio A. 2003[a] “Brasil 2003: ¿los inicios de un nuevo ciclo histórico?”, en *OSAL* (Buenos Aires: CLACSO) N° 9, Enero.

Boron, Atilio A. 2003[b] *Estado, capitalismo y democracia en América Latina* (Buenos Aires: CLACSO) [cuarta edición].

Boron, Atilio A. 2001 “La selva y la polis. Interrogantes en torno a la teoría política del zapatismo”, en *Chiapas* (México DF: Instituto de Investigación Económicas-UNAM/ERA) N°12.

Boron, Atilio A. 2000 *Tras el búho de Minerva. Mercado contra democracia en el capitalismo de fin de siglo* (Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica).

Cardoso, Fernando H. 1985 “La democracia en América Latina”, en *Punto de Vista* (Buenos Aires) N° 23, Abril.

Cardoso, Fernando H. 1982 “La democracia en las sociedades contemporáneas”, en *Crítica & Utopía* (Buenos Aires) N° 6.

Cueva, Agustín 1976 *El desarrollo del capitalismo en América Latina* (México: Siglo XXI Editores).

Gentili, Pablo y Sader, Emir (compiladores) 2003 *La trama del neoliberalismo. Mercado, crisis y exclusión social* (Buenos Aires: CLACSO).

Guadarrama H., José de Jesús 2004 "Fatiga social y nostalgia por el populismo en México, advierte Slim", en *El Financiero* (México) 24 de marzo.

Weber, Max 1982 *Escritos políticos* (México: Folios).

Venezuela: proceso de cambio, referéndum revocatorio y amenazas internacionales

Edgardo Lander*

* *Profesor de la Escuela
de Sociología
de la Universidad Central
de Venezuela*

La derrota del paro petrolero empresarial y las nuevas direcciones del modelo económico

El fin del paro empresarial-petrolero de diciembre 2002-febrero 2003 marca un punto de inflexión a partir del cual comienzan a producirse reorientaciones en el proceso político venezolano. El paro tiene un severo costo económico. No sólo se suspende por tres meses la exportación de hidrocarburos, la principal fuente de divisas del país, sino que se hace necesario importar gasolina para evitar que se detengan por completo el proceso productivo y la distribución de bienes básicos. Las pérdidas han sido calculadas en unos 10 mil millones de dólares.

Culmina el paro con una oposición políticamente golpeada, después de haber sido derrotada nuevamente –como en el golpe de Estado de abril de 2002– en su intento de derrocar a Chávez. El gobierno, con un apoyo popular que se vigoriza en la resistencia al paro, con la disposición de

la Fuerza Armada a actuar en defensa del orden constitucional y gracias a las posibilidades que las reservas internacionales brindan para realizar importaciones de emergencia, no sólo derrota al paro sino que, después de largos meses a la defensiva en que consume una alta proporción de sus energías en resistir los ataques de la oposición, recupera la iniciativa política.

Desde el punto de vista del gobierno es posible identificar en esta nueva coyuntura varios ejes problemáticos básicos a los cuales es indispensable dar respuestas inmediatas.

En primer lugar, dada la intensidad del conflicto con la oposición y la profundidad de la polarización de la sociedad venezolana, se acorta drásticamente el tiempo político con el cual cuenta el gobierno para llevar a cabo su programa de cambio. Las reformas políticas de los primeros años de gobierno habían contribuido a su legitimidad y apoyo popular, como quedó demostrado en el golpe de abril de 2002 y en el paro empresarial y petrolero. Pero en términos de condiciones materiales de los sectores populares, especialmente en salud, empleo, ingreso y seguridad pública, no se habían producido cambios, sin los cuales no era previsible conservar el apoyo social, que es una condición necesaria para consolidar y profundizar el proceso. Se hacen urgentes políticas que tengan impacto social a corto plazo.

En segundo lugar, el paro no sólo confirmó el nivel de dependencia de alimentos importados, sino igualmente el elevado nivel de concentración existente en el procesamiento y en la distribución de estos y otros productos básicos, quedando al desnudo la extrema vulnerabilidad de la economía venezolana y de su actual proceso político a las manipulaciones (precio y acceso) en el comercio internacional y a la voluntad de los sectores empresariales oligopólicos.

En tercer lugar, el paro petrolero y su devastador efecto económico confirmaron que Petróleos de Venezuela no operaba como una empresa pública sino que actuaba con la lógica de una gran transnacional energética en función de los intereses corporativos de su abultada planta gerencial (la autodenominada *meritocracia*) y de sus socios transnacionales. La principal fuente de riqueza del país estaba –en lo esencial– fuera del control del sistema político democrático.

Por último, existe el reconocimiento implícito o explícito de que había dos condiciones básicas que parecían haberse asumido como premisas en el diseño del proyecto de cambio y que, sin embargo, resultaron tener un sustento en extremo precario: la existencia de un sector empresarial nacional sólido con el cual impulsar políticas de desarrollo nacional¹, y el contar con un aparato administrativo del Estado con capacidad de responder a las incrementadas demandas y exigencias que se le asigna a la gestión pública.

“Posibilitado por las condiciones particulares que se dan como consecuencia de la renta petrolera en manos del Estado, se formulan los lineamientos de los ejes principales del nuevo modelo económico. Éste se define como endógeno y basado en la prioridad de la economía social, la generación de fuentes de trabajo y la democratización de la producción”

Las principales políticas del gobierno posteriores al paro pueden ser entendidas como respuestas a los retos planteados por la presencia entrelazada de este conjunto de condiciones.

La decisión más inmediata se refería a la empresa petrolera. No era posible pensar en reincorporar a sus funciones anteriores a quienes no sólo utilizaron sus posiciones en la industria para intentar derrocar a un gobierno democrático, sino que además realizaron múltiples saboteos a la industria con costos de millones de dólares. A pesar de las advertencias de la oposición y de comentaristas internacionales de que sin la meritocracia de Petróleos de Venezuela no sería posible reactivar la producción, fueron despedidos unos 17 mil gerentes y trabajadores y, en menos tiempo del previsto incluso por el propio gobierno, se recuperaron los niveles de producción.

Posibilitado por las condiciones particulares que se dan como consecuencia de la renta petrolera en manos del Estado, se formulan los lineamientos de los ejes principales del nuevo modelo económico. Éste se define como endógeno² y basado en la prioridad de la economía social³, la generación de fuentes de trabajo y la democratización de la producción. Se establece una política de control de cambios que produce una acelerada recuperación de las reservas internacionales.

A través de diversas modalidades de micro y pequeños créditos otorgados por entes financieros del Estado se fomentan organizaciones productivas de la economía social: pequeñas y medianas empresas, cooperativas y demás formas productivas asociativas. Se le da un extraordinario impulso a la utilización de las compras y la contratación de servicios y obras de todo el sector público para generar capacidad productiva. Petróleos de Venezuela y otras empresas del Estado, como las empresas hidrológicas y las empresas básicas de la Corporación Venezolana de Guayana, impulsan programas de capaci-



© Marcelo Rodríguez

ANÁLISIS [VENEZUELA: PROCESO DE CAMBIO, REFERENDUM REVOCATORIO Y AMENAZAS INTERNACIONALES]

tación y financiamiento para la creación de cooperativas con las cuales establecer contratos de compras, mantenimiento y *outsourcing* de servicios diversos. Dada la particular debilidad del sector agrícola y pecuario —el país importa cerca del 70% de sus alimentos— en estos programas se le da especial énfasis a estos sectores.

A partir del reconocimiento de la precariedad de las estructuras de la gestión estatal para impulsar las políticas públicas, particularmente las nuevas políticas sociales, se concluye que los tiempos políticos del conflicto venezolano no permiten esperar a que se impulsen reformas administrativas para mejorar dicha capacidad de gestión en función de las nuevas y urgentes exigencias. Por ello el ejecutivo opta por la creación de las *misiones*, una gama de programas extraordinarios que, haciendo un *by-pass* parcial de la burocracia estatal, busca responder a cada uno de los principales problemas sociales que, habiendo sido identificados como críticos, requieren respuestas urgentes. La *Misión Robinson* es un programa cívico militar que tiene por objetivo lograr la alfabetización a corto plazo de las 2 millones de personas que se estima que no saben leer y escribir en el país. En etapas posteriores del programa está contemplado que los recién alfabetizados realicen estudios de primaria. La *Misión Rivas* tiene por objetivo incorporar a estudios secundarios a personas de cualquier edad que, habiendo finalizado la primaria, no han realizado o culminado dichos estudios. La *Misión Sucre* se propone la incorporación masiva de bachilleres a estudios universitarios, dándole prioridad a los estudiantes de

sectores de clase media baja y pobres. La *Misión Mercal* tiene por propósito la comercialización de productos alimenticios y otros de primera necesidad para garantizar el suministro de bienes de calidad y bajo precio a los sectores de menores ingresos en todo el país. En el proceso de creación de canales alternativos de comercialización se propone fomentar cooperativas y pequeñas empresas. La *Misión Barrio Adentro*, con la participación masiva de médicos cubanos, es un programa para llevar atención médica primaria directa a sectores populares en todo el país. El Plan o *Misión Zamora* se propone la entrega de tierra a los campesinos, acompañada de capacitación, asistencia técnica, mercadeo, infraestructura, servicios y financiamiento. Con la *Misión Vuelvan Caras* se busca la generación de empleo permanente mediante la capacitación para el trabajo, la formación socio-cultural y la creación de núcleos de desarrollo endógeno en turismo, agricultura, infraestructura, servicios e industria. En contraste con las políticas sociales focalizadas que prevalecieron en todo el continente en los últimos lustros, estas políticas están orientadas al logro de la equidad social y a la superación de las desigualdades políticas y de las exclusiones culturales. Se enfatiza para ello la participación y la construcción de ciudadanía (Parra y Lacruz, 2003). No se conciben como políticas compensatorias de los efectos sociales negativos de las políticas económicas, sino como parte integral de éstas. La meta anunciada es que las misiones irán logrando niveles crecientes de coordinación para ir construyendo el tejido productivo y social de la nueva Venezuela y las nuevas instituciones estatales.

Es muy temprano para evaluar la viabilidad de este conjunto de programas y las posibilidades de su permanencia en el tiempo. Son altamente dependientes del ingreso petrolero, por lo que bajas significativas en éste pondrían en peligro su continuidad. Por otra parte, la improvisación y los bajos niveles de institucionalización que necesariamente están presentes en estos programas constituyen un peligroso caldo de cultivo para la corrupción. Lo que es indudable es que estos programas llegan a millones de personas y tienen un extraordinario impacto social y político. Si bien no parecen contribuir con una necesaria ampliación de la base de apoyo social del gobierno, sí han incidido en la consolidación del apoyo popular con el cual cuenta el proceso de cambio, e incrementado los niveles organizativos.

La oposición y el referéndum

En la fase posterior al paro empresarial-petrolero, en la Mesa de Negociación y Acuerdo, con la facilitación del Centro Carter y de la Organización de Estados Americanos (OEA), gobierno y oposición llegan a un acuerdo político para "una solución constitucional, pacífica, democrática y electoral"⁴. Habiendo sido derrotada en sus dos intentos por derrocar a Chávez por la vía del golpe de Estado y mediante el paro insurreccional, la oposición

anuncia que logrará su objetivo mediante el *referéndum revocatorio* que está contemplado en la Constitución⁵.

Combinando 2.700 centros fijos y la colecta itinerante, durante cuatro días del mes de diciembre de 2003 la oposición recoge firmas para el revocatorio. Anuncia que tiene un millón de firmas más de las requeridas. Sin embargo, cuando concluye el proceso de recolección, en las zonas del Este de Caracas –su principal base de apoyo– hay un silencio sepulcral. No sólo no hay ambiente de celebración sino que ni siquiera se realiza la concentración prevista para esa noche. Los líderes de la oposición ni asisten a ésta ni hacen declaraciones públicas.

En la medida en que el Consejo Nacional Electoral (CNE) va analizando las firmas, quedan claras las razones de este silencio. Decenas de miles de planillas no cumplen con las normas básicas que permitan su validación. Decenas de miles de firmas corresponden a muertos, menores de edad, extranjeros o personas que no están inscritas en el Registro Electoral Permanente. Miles de planillas han sido llenadas con la misma caligrafía, muchas de ellas con firmas similares (planillas planas). A finales de febrero de 2004 el CNE anuncia el resultado preliminar de su evaluación de las firmas presentadas. Rechaza las firmas que claramente no cumplen con los requisitos establecidos, reconoce alrededor de 1.900.000 firmas como válidas y somete a reparo (ratificación) un número significativo de firmas con algún defecto y las llamadas planillas planas.

La oposición responde a esta decisión con extrema virulencia. Algunos dirigentes de su Coordinadora Democrática llaman a desconocer al árbitro electoral. Varios gobernadores de la oposición se declaran en rebelión contra el gobierno nacional. A partir de una confrontación violenta con la Guardia Nacional que se produce en una marcha de la oposición el 27 de febrero, los sectores más radicalizados organizan la llamada *Operación*

“... gobierno y oposición llegan a un acuerdo político para “una solución constitucional, pacífica, democrática y electoral”.

Habiendo sido derrotada en sus dos intentos por derrocar a Chávez por la vía del golpe de Estado y mediante el paro insurreccional, la oposición anuncia que logrará su objetivo mediante el referéndum revocatorio que está contemplado en la Constitución”

Guarimba. Durante cinco días cierran calles y queman neumáticos y basura en sectores de clase media alta de Caracas. La policía de estos municipios de la oposición deja hacer e incluso apoya las acciones violentas. Con presencia de francotiradores se producen nuevos enfrentamientos con la Guardia Nacional, con un saldo de nueve muertos y decenas de heridos⁶.

Este clima de violencia se da en un contexto en el cual la oposición está profundamente dividida. Además de la posibilidad de que se realice a corto plazo un referéndum revocatorio para el presidente de la República, a mediados de este año están previstas las elecciones para gobernadores y alcaldes en todo el país. Ello significa que, al mismo tiempo en que la oposición tenía que decidir si acudía o no a los reparos, debía decidir si presentaba candidatos a las elecciones o se abstenía. Difícilmente podía justificar que no participaría en el proceso de reparos para el referéndum revocatorio por considerar ilegítimo al poder electoral y declarar con ello cerrada en forma definitiva la vía institucional, y simultáneamente postular candidatos a gobernadores y alcaldes ante ese mismo cuerpo. Para un sector de la oposición, especialmente para su partido más grande –Acción Democrática–, la prioridad está en las elecciones y, en consecuencia, han concentrado sus esfuerzos en prepararse para ellas. De acuerdo a otros partidos de la oposición como Proyecto Venezuela y Primero Justicia, así como varias organizaciones de la autodenominada sociedad civil, ya el gobierno había traspasado el límite y era un régimen autoritario que había dado fin a la democracia en el país. El calificativo más suave utilizado por estas organizaciones para referirse a otros sectores de la oposición que seguían negociando una salida electoral al conflicto fue el de cómplices del gobierno dictatorial. La mayor parte de los medios de comunicación privados han mantenido una sistemática campaña de denuncia a los traidores que, con sus actitudes poco combativas, le hacen el juego “al dictador”.

Atravesados por estas profundas tensiones, todos los partidos de la oposición postularon candidatos a alcaldes y gobernadores. Con pocas excepciones, expresión de su creciente fragmentación, no se pusieron de acuerdo para la presentación de candidaturas unitarias. La Coordinadora Democrática continuó reuniéndose para negociar con el CNE las condiciones para la realización de los reparos, mientras que otros de sus voceros continuaban refiriéndose al carácter “dictatorial” del “régimen”.

Aun sin haber superado estas tensiones, a finales de abril la Coordinadora Democrática oficializó su disposición a participar en el proceso de reparos decidido por el CNE y continuaba en el desarrollo de sus respectivas campañas electorales a lo largo y ancho del país. El reparo se realizará a finales del mes de mayo, y el referéndum revocatorio, en caso de que la oposición obtenga las firmas requeridas, sería en el mes de agosto. Las elecciones de gobernadores y alcaldes están previstas para el mes de septiembre.

Las amenazas internacionales

Este período se caracteriza igualmente por cambios en el contexto geopolítico hemisférico. A diferencia del momento en que Chávez llegó a la presidencia, los cambios de gobierno en Brasil, Argentina e incluso en Bolivia, han permitido superar las condiciones de aislamiento del gobierno venezolano. Es creciente la solidaridad con que cuenta el proceso bolivariano por parte de organizaciones sociales populares en todo el continente, especialmente las que están articuladas en la resistencia a la globalización neoliberal. Las anteriores dudas de muchos sectores de izquierda y de movimientos sociales sobre un proceso encabezado por un líder militar carismático más, con sus potencialidades autoritarias, han ido cediendo al reconocimiento de la profundidad de los procesos de cambio que ocurren en el país y la importancia de las orientaciones de la política internacional del gobierno, en particular en la lucha contra el ALCA.

En esa misma medida se incrementan las amenazas externas que confronta el proceso, especialmente por parte de la Administración Bush. Además de las reiteradas "advertencias" y denuncias formuladas por los más representativos funcionarios de dicho gobierno y el apoyo al golpe de 2002, ha sido sistemático el sostén político y financiero a prácticamente todos los partidos y organizaciones sociales que forman hoy parte de la oposición venezolana, apoyo que se incrementó significativamente después de la derrota del golpe⁷. En marzo de 2004, el General James T. Hill, Jefe del Comando Sur de Estados Unidos, caracterizó al gobierno de Venezuela como parte de un "populismo radical" que representa "una amenaza creciente para los intereses de Estados Unidos"⁸.

Particularmente peligrosa es la insistencia en crear un ambiente de tensión con Colombia a propósito de un supuesto apoyo del gobierno venezolano a la guerrilla o su intención de exportar la revolución. Expresión de la complicidad de la derecha colombiana con esta política fue la decisión del Senado de dicho país de respaldar a la oposición, exigir la realización del referéndum revocatorio, denunciar al gobierno de Chávez ante la OEA y solicitar la aplicación de la Carta Democrática (*El Universal*, 2004[b]). A los pocos días, el diario *El Universal* (2004[a]) de Caracas destaca con un titular de primera plana ("Chávez es un peligro continental") las declaraciones de Enrique Gómez Hurtado, uno de los máximos voceros del conservadurismo colombiano. Dada la extrema agresividad de la política exterior de Bush y el total apoyo con que ésta cuenta por parte del gobierno colombiano, no puede descartarse la posibilidad de que, ante el fracaso de la desestabilización interna, se genere una situación conflictiva que sirva de justificación para una intervención externa vía Colombia.

Bibliografía

Aporrea 2004 "Organizaciones de DD.HH. exigen fin de la violencia, garantizar la voluntad popular, la institucionalidad democrática y piden a medios promover tolerancia. Derecho a la manifestación implica un ejercicio 'pacífico y sin armas'", 2 de marzo <www.aporrea.org>

El Universal 2004[a] (Caracas) 18 de abril <www.el-universal.com>

El Universal 2004[b] (Caracas) 14 de abril <www.el-universal.com>

Parra, Matilde y Lacruz, Tito 2003 *Seguimiento activo a los programas sociales en Venezuela, Caso de los Multihogares de Cuidado Diario, Informe final* (Caracas: CISOR-Centro de Investigaciones en Ciencias Sociales, Proyecto Observatorio Social) p. 80 <<http://www.apalancar.org/archivos/1006/Seguimiento%20Programas%20Sociales%20GSCESAP.pdf>>

República Bolivariana de Venezuela, Ministerio de Producción y Comercio 2003 *Declaración de Pozo de Rosas: Principios rectores de la política industrial de la República Bolivariana de Venezuela* (Caracas) mimeo.

Vila Planes, Enrique 2003 "La economía social del proyecto bolivariano", en *Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales* (Caracas: Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, UCV) Vol. 9, N° 3, septiembre-diciembre.

Notas

1 Esto remite a viejos debates sobre las implicaciones de la ausencia de una burguesía nacional para el desarrollo capitalista en el mundo periférico.

2 Los lineamientos principales de esta propuesta de raíces en el desarrollismo cepalino están contenidos en República Bolivariana de Venezuela, Ministerio de Producción y Comercio (2003).

3 De acuerdo al equipo que ha trabajado estas propuestas en el Ministerio de Planificación y Desarrollo, la economía social "es una economía alternativa", donde "privan las prácticas democráticas y autogestionarias". Está "motorizada por las formas de trabajo asociado y no asalariado" y "la propiedad sobre los medios de producción es colectiva (salvo en el caso excepcional de las microempresas)". Está "centrada en el reparto igualitario del excedente", es "solidaria con el entorno social en que se desarrolla" y está "aferrada a su propia autonomía frente a los centros monopólicos del poder económico o político" (RBV, Ministerio de Planificación y Desarrollo, Coordinación de Economía Social, 2004). Para una discusión más amplia del sentido de la economía social dentro del proyecto de cambio en Venezuela, ver Vila Planes (2003).

4 "Acuerdo entre la representación del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y los factores políticos y sociales que lo apoyan y la Coordinadora Democrática y las organizaciones políticas y de la sociedad civil que la conforman", Caracas, 29 de mayo de 2003 <http://asesormesanegociacion.com/DocMesa/DocMesa_20030523_acuerdo.htm>

5 El Artículo 72 de la Constitución establece que todos los cargos electos son revocables mediante referéndum después de haber pasado la mitad del período para el cual los fun-

cionarios o funcionarias fueron electos. Para activar el referéndum se requiere un total de firmas no menor al 20% de los electores inscritos en la correspondiente circunscripción. Para destituir al funcionario o funcionaria se requiere que el voto a favor de su sustitución sea mayor que el número de votos en contra y adicionalmente que sea superior al número de votos obtenidos por el funcionario o funcionaria cuando fue electo/a. Para revocar el mandato a Chávez, la oposición requiere aproximadamente 2.450.000 firmas para activar el revocatorio y más de 3.757.773 votos en el referéndum.

6 Estos muertos y heridos forman parte, como durante el golpe de 2002, de un objetivo expreso de la oposición con el propósito de denunciar al gobierno por la violación de los derechos humanos. Son hechos que requieren ser investigados, ya que con seguridad hubo excesos de las fuerzas armadas y, en contra de las normas establecidas, en algunos casos se utilizaron armas de fuego en contra de manifestantes. Las denuncias de torturas generalizadas y de desaparecidos forman parte del espectáculo mediático de la oposición, y de su nueva agenda en el campo internacional. Ver *Aporrea*, 2004.

7 Para una extensiva documentación del financiamiento y asesoría del gobierno de Bush a todos los principales partidos y organizaciones de la oposición venezolana, ver *Venezuelafoia.info*, un sitio web dedicado a investigar la intervención de EE.UU. en Venezuela <<http://www.venezuelafoia.info>>

8 "Testimony of General James T. Hill United States Army Commander United States Southern Command Before the House Armed Services Committee United States House of Representatives" House Armed Services Committee, 24 de marzo de 2004 <http://www.globalsecurity.org/military/library/congress/2004_hr/04-03-24hill.htm>

El Movimiento Indígena Ecuatoriano: participación y resistencia

Ana María Larrea Maldonado*

* *Antropóloga.
Directora
del Instituto
de Estudios
Ecuatorianos (IEE).*

La irrupción del movimiento indígena en el escenario social y político del Ecuador en las últimas décadas ha cuestionado profundamente el modelo de desarrollo vigente en el país y el tipo de democracia adscrito a este modelo. El movimiento indígena ha interpelado permanentemente a una sociedad excluyente, profundamente racista, que desconoce su historia y se niega a mirar su propia diversidad y reconocer la existencia de sujetos sociales cuya cultura y cosmovisión no caben en el modelo homogeneizador e integrista que esta sociedad ha creado.

La historia vivida por el movimiento indígena ecuatoriano da cuenta de un proceso de construcción de un sujeto social que busca constituirse en sujeto político y cuyos planteamientos son un referente ineludible para el análisis de las propuestas de cambio social en el país.

De las luchas agrarias a la construcción del Estado Plurinacional

El antecedente inmediato para el surgimiento del movimiento indígena en el Ecuador como sujeto social es la desestructuración del sistema de haciendas. La lucha por la tierra vino acompañada del fortalecimiento de las organizaciones rurales y la revitalización de procesos identitarios con profundos contenidos étnicos. Es importante resaltar el rol jugado por la Iglesia, los partidos políticos de izquierda, el Estado y las organizaciones no gubernamentales de desarrollo en el proceso organizativo indígena, pese a que cada uno de estos agentes externos partía de concepciones, objetivos y lógicas de intervención muy distintas y que probablemente ninguno de ellos podía avizorar la fuerza que tomaría el movimiento en los años siguientes (cfr. Larrea y Muñoz, 2000: 3-5).

El tejido organizativo que paulatinamente va creciendo empuja a la conformación de nuevas representaciones en los niveles regionales y nacionales, que muestran una clara confluencia entre historias locales y procesos organizativos de mayor escala. En 1972 surge la ECUARUNARI (Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador) en la sierra, en 1980 la CONFENIAE (Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana) en la Amazonía, y a comienzos de los ochenta se conforma el Consejo de Coordinación de las Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONACNIE) que devendría en 1986 en la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE). Al cerrar la década de los ochenta la CONAIE se constituye en la principal organización indígena del país, y cuenta con una intelectualidad indígena y una dirigencia autónoma formada en la lucha por la tierra y por el reconocimiento.

El levantamiento indígena de 1990 hizo visible ante la sociedad nacional un proceso organizativo de larga data. Mostró no solamente la existencia de un Ecuador profundo, con pueblos olvidados y excluidos, sino que además planteó serios cuestionamientos a un modelo de democracia absolutamente excluyente en el que los pueblos indígenas no tenían cabida y un modelo de desarrollo construido sobre ellos, de espaldas a ellos y sin ellos. A partir de los noventa, el movimiento indígena se constituye en el referente de los movimientos sociales en el Ecuador.

“El levantamiento jugó un papel cohesionador indiscutible... Muchas organizaciones dispersas, que mantenían lazos eventuales o no los tenían, empezaron a vincularse de forma permanente a la organización nacional. En cierto modo podríamos decir, aun a riesgo de exagerar, que la actual CONAIE es mucho más el resultado del levantamiento de 1990 que su productora” (Guerrero y Ospina, 2003: 37).

Durante y luego del levantamiento indígena de 1990, las bases de la CONAIE ejercieron presión sobre sus dirigentes para que mantuvieran una permanente negociación con el

“La participación electoral trajo consigo un nuevo desafío para el movimiento indígena: la necesidad de construir un proyecto de país basado en el planteamiento del Estado Plurinacional y Multiétnico. Un proyecto que pudiera cobijar y representar las demandas ya no solamente de los pueblos indígenas sino del conjunto de grupos sociales excluidos del quehacer democrático”

Estado con el fin de resolver sus apremiantes problemas. De esta manera se estaban abonando antecedentes para que se configurara una proyección de los dirigentes indígenas hacia la escena política formal. Aunque hasta 1993 existían temores sobre los riesgos de una participación electoral, en 1995 esta opción madura y se concreta con la formación del Movimiento Plurinacional Pachakutik-Nuevo País (cfr. Muñoz, 1999: 42).

Si bien desde la restauración de la democracia en el Ecuador varios dirigentes indígenas habían participado en los procesos electorales, nunca se trató de una participación orgánica. El antecedente a la creación del Movimiento Plurinacional Pachakutik-Nuevo País fue el triunfo de los movimientos sociales en el plebiscito de 1995 contra la privatización del seguro social, el intento de penalizar la huelga de los servidores públicos, y varias otras propuestas que intentaban acentuar el modelo neoliberal en el país. Para enfrentar el plebiscito propuesto por el presidente Sixto Durán Ballén confluyen varios movimientos que conforman la Coordinadora de Movimientos Sociales. Se crea así un espacio de acuerdo político no restringido únicamente a las organizaciones indígenas (cfr. Guerrero y Ospina, 2003: 194-195).

En el nacimiento de Pachakutik confluyen tres tendencias: la propuesta de las organizaciones amazónicas de crear un movimiento político exclusivamente indígena; el planteamiento de las organizaciones serranas y la izquierda política de contar con un movimiento político multiétnico; y la idea de generar alianzas más amplias con tendencias progresistas, promovida desde las actorías sociales urbanas del austro ecuatoriano. Finalmente se lo bautiza como “Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik-Nuevo País”, nombre que refleja estas tres vertientes (cfr. Guerrero y Ospina, 2003: 195-196).

Para el movimiento indígena se trataba de avanzar desde los aprendizajes micro hacia espacios mayores. Se privilegiaron los escenarios locales como laboratorios para la

construcción de un nuevo tipo de democracia, una democracia radical nutrida de la fuerza histórica y cultural de los pueblos indígenas. Ahí tenemos el *ama shwa, ama llulla, ama killa* –no robar, no mentir, no ser ocioso– como un mandato ancestral. Así también la práctica del consenso comunal andino, como mecanismo de decisión democrática y de resolución de conflictos, presentes ahora en las experiencias de los Parlamentos y Asambleas cantonales. Asimismo, la firma anticipada de las renuncias, no es más que la aplicación del viejo principio de la revocabilidad automática de los mandatos por las bases (cfr. Larrea et al., 2000: 3).

Los años noventa significaron para el Ecuador una doble crisis: una crisis económica sin precedentes en la historia republicana y la pérdida de legitimidad del régimen político. Este período es aquel también donde se aplican con mayor fuerza las políticas de ajuste estructural y se da por terminado el proceso de redistribución de la tierra que ya había venido extinguiéndose desde el inicio de la democracia.

Es en este contexto que el movimiento indígena cuestiona el sistema de partidos y a la denominada clase política tradicional por su carácter etnocéntrico, excluyente y corrupto, y participa en las lides electorales como movimiento político (cfr. Larrea et al., 2000: 3). En su primera campaña electoral Pachakutik plantea la necesidad de refundar el país a partir de una nueva constituyente. “Las exigencias de corte campesino, sin perderse, son absorbidas por las demandas nacionales” (Guerrero y Ospina, 2003: 39).

La participación electoral trajo consigo un nuevo desafío para el movimiento indígena: la necesidad de construir un proyecto de país basado en el planteamiento del Estado



© Patricio Realpe - ANPE

Plurinacional y Multiétnico. Un proyecto que pudiera cobijar y representar las demandas ya no solamente de los pueblos indígenas sino del conjunto de grupos sociales excluidos del quehacer democrático. Este desafío es particularmente relevante si consideramos que fue el ámbito local el escenario de configuración y crecimiento de las organizaciones indígenas. “El cambio de escala al escenario nacional supuso una nueva y desconocida esfera de participación para la que las herramientas de acción política hasta entonces conocidas eran insuficientes y sobre la cual los principales dirigentes no tenían antecedentes” (Guerrero y Ospina, 2003: 212).

Después de casi doce años de participación electoral aún no podemos hablar de haber podido configurar este gran proyecto político basado en la unidad en la diversidad. Si bien han existido momentos importantes donde la convergencia de distintas tendencias desde los movimientos sociales ecuatorianos ha permitido esbozar propuestas programáticas profundas, también han existido momentos críticos en los que la fragmentación y segmentación han imperado.

El planteamiento de refundar el país a partir de una nueva constitución es incluido en la agenda política nacional tras el derrocamiento del presidente Abdalá Bucaram en 1997. Aunque el movimiento indígena no logró conseguir la declaratoria del Estado Plurinacional, la Constitución de 1998 reconoció los derechos colectivos de los pueblos indígenas, su autodefinición como “nacionalidades” y las circunscripciones territoriales indígenas, entre otras reivindicaciones.

Participación en la institucionalidad pública y desconocimiento del régimen político

La lucha por el reconocimiento ha navegado entre los planteamientos de contar con instancias propias reconocidas en la institucionalidad oficial, como mecanismos de generación de políticas públicas específicas para los pueblos indígenas, y la creación de instancias de autogobierno paralelas a la institucionalidad pública. Los casos más relevantes que reflejan esta doble estrategia han sido los Parlamentos Indígenas y Populares y el Consejo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador.

La conformación de Parlamentos Indígenas y Populares ha sido una constante cuando las coyunturas políticas han llevado a la necesidad de crear un espacio de contrapoder. Durante el proceso de derrocamiento del presidente Jamil Mahuad, el movimiento indígena llama a desconocer a los tres poderes del Estado. Se crean una serie de parlamentos indígenas en varias provincias del país. El nombre no es casual: es una instancia de gobierno paralela al Parlamento de la República.

Frente a esta estrategia de contrapoder convive la participación en la institucionalidad pública. Sólo dos años antes de la reaparición de los Parlamentos Indígenas y Populares, el movimiento indígena promovió la creación de un Consejo de los Pueblos y Nacionalidades del Ecuador. En 1998 nace esta instancia como un organismo de representación de las distintas organizaciones nacionales indígenas y negras del país dentro del Estado. El Consejo empieza a administrar el Proyecto de Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Negros (PRODEPINE), financiado por el Banco Mundial. En el año 2000, la CONAIE impulsa la reestructuración del Consejo con el fin de que se convierta en el espacio de representación ya no de las organizaciones étnicas nacionales sino de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador. El proceso fue fuente de fuertes conflictos entre las organizaciones indígenas nacionales e implicó para la propia CONAIE una reestructuración interna de sus organizaciones de base en el intento de reconstituirse como "pueblos y nacionalidades".

En la estrategia del movimiento indígena convive el cuestionamiento al sistema político vigente y la construcción de un nuevo Estado plurinacional desde abajo. Empieza a hacerse evidente entonces una doble estrategia política que condensa "el ingreso al sistema político y la estrategia opuesta de deslegitimación del mismo régimen. Participación electoral, [gestión de instancias públicas centrales y locales] y movilización social. Ampliación de los cauces democráticos de la participación electoral y agudización del ataque frontal a un régimen desprestigiado... crítica radical a la institucionalidad excluyente y participación ordenada dentro de las reglas de juego del régimen institucional. Integrarse y contestar son elementos de la misma estrategia y de la misma comprensión de la situación política" (Ospina, 2002: 3).

La relación entre el movimiento indígena y el Estado ha producido cambios en las organizaciones indígenas y en el propio Estado. En ocasiones la participación en las orga-

"El movimiento indígena vivió durante seis meses la amarga experiencia de ser gobierno y no ser poder, dando lugar a una disputa tremendamente desgastante [...] y finalmente concluyó con la separación de Pachakutik del gobierno y el inicio de una oposición frontal al régimen"

nizaciones es vista como el trampolín necesario para acceder a cargos públicos, los conflictos internos se agudizan, se vive un proceso de vaciamiento de las organizaciones locales, se refuerza la percepción de que “la etnicidad es viable para tramitar demandas y obtener beneficios” (Guerrero y Ospina, 2003: 249). El Estado por su parte se ha visto obligado a generar políticas específicas para los pueblos indígenas y a modificar sus instituciones dando cabida a ese “otro cultural” por tantos siglos relegado.

Las distintas vías de acceder al poder

En el año 2000, la alianza del movimiento indígena con un grupo de jóvenes coroneles del ejército nacional trae como consecuencia el derrocamiento de Jamil Mahuad de la presidencia de la República. Se evidencian nuevamente las tensiones al interior del movimiento, reflejadas en el debate respecto de construir el poder desde abajo, o tomárselo. Los acontecimientos de 2000 son capitalizados por el movimiento en las elecciones seccionales: Pachakutik pasa de 11 alcaldías y ninguna prefectura en 1996 a 21 alcaldías y 5 prefecturas en 2000.

Al año siguiente, el movimiento indígena protagoniza un nuevo levantamiento que tiene características particulares. En primer lugar se trata de una movilización eminentemente indígena. Por primera vez en la historia se logra la unidad de las tres organizaciones indígenas nacionales –CONAIE, Federación Nacional de Organizaciones Campesinas e Indígenas y Negras del Ecuador (FENOCIN), Federación Ecuatoriana de Indígenas Evangélicos (FEINE)– que marcan distancias con sus antiguos aliados de los movimientos sociales. En segundo lugar, el levantamiento cuenta con una participación protagónica de las autoridades indígenas electas –Alcaldes y Prefectos– en 2000. Una tercera característica es la fuerte represión gubernamental que el levantamiento tiene que enfrentar, dejando un saldo de siete muertos, algo sin precedentes en movilizaciones anteriores. La última característica y quizá la más importante es el peso de las reivindicaciones nacionales en la protesta, reflejadas en el lema del levantamiento “Nada sólo para los indios” (cfr. Guerrero y Ospina, 2003: 236-238).

El crecimiento electoral de Pachakutik y el levantamiento del 21 de enero de 2000 sentarían las bases para las posteriores decisiones del movimiento en relación a su participación electoral en 2002. Si bien el levantamiento de febrero de 2001 “recompuso las fuerzas del movimiento indígena y la imagen pública de su fortaleza; no alcanzó para resolver las disputas internas” (Guerrero y Ospina, 2003: 238). En el año 2002, en el marco de un momento de profundas tensiones al interior del movimiento indígena, Pachakutik decide no participar en las elecciones presidenciales con candidato propio y apoyar una alianza electoral con el Partido Sociedad Patriótica.

El proceso de construcción de un proyecto político alternativo nutrido desde distintas tendencias y vertientes había tenido a los escenarios locales como su fuente principal. La estrategia electoral a escala nacional era vista como un mecanismo de acumulación de fuerzas: no se trataba de “llegar al poder”, sí de presentar al país los planteamientos, experiencias y propuestas del movimiento, generar el debate y promover alianzas con distintos sectores para la construcción de una nueva sociedad.

En las elecciones de 2002 el movimiento indígena protagoniza un sorpresivo triunfo electoral que lleva a la presidencia de la República al Coronel Lucio Gutiérrez. “La estrategia política del movimiento de construir desde abajo una propuesta de país se ve obligada a cambiar de escenarios y enfrentar la esfera nacional sin contar aún con una propuesta programática sólida... El salto demasiado apresurado hacia el gobierno ha demostrado la necesidad del movimiento de afinar sus planteamientos estratégicos de cambio social” (Bonilla y Larrea, 2003: 134).

El movimiento indígena vivió durante seis meses la amarga experiencia de ser gobierno y no ser poder, dando lugar a una disputa tremendamente desgastante, que pasó de las expectativas de dar una orientación históricamente coherente al régimen al planteamiento de gobernar resistiendo y resistir gobernando, y finalmente concluyó con la separación de Pachakutik del gobierno y el inicio de una oposición frontal al régimen.

La derechización del gobierno de Gutiérrez, que ha sido calificada por el movimiento indígena como una “traición al pueblo ecuatoriano”, marca el nuevo contexto que los movimientos sociales en el Ecuador tienen que enfrentar.

El nuevo régimen con claras características autoritarias se ha convertido en el mejor aliado del gobierno norteamericano, fiel cumplidor de los mandatos del Fondo Monetario Internacional. Pese a la creciente oposición de sectores muy diversos del Ecuador, el gobierno del Coronel ha establecido una estrategia clara de ingreso del país en el Plan Colombia. Ha promovido con mucha fuerza el proceso de negociación para la firma del Acuerdo de Libre Comercio de las Américas y del Tratado de Libre Comercio. Está empeñado en la privatización de las principales empresas públicas y prácticamente está regalando los recursos energéticos y biológicos del país.

Todo ello acompañado de una política de silenciamiento y represión hacia cualquier tipo de oposición. En diciembre de 2003, el presidente de la ECUARUNARI es encarcelado por haber calificado al presidente de la República de “incapaz, mentiroso e incoherente”. En enero de 2004, un funcionario de Petroecuador que investigaba el robo de gasolineras es asesinado. En febrero, el presidente de la CONAIE junto a su familia sufre un atenta-



© Patricio Realpe - ANPE

do en el que intentan asesinarlo. En marzo el presidente de un canal de televisión sufre un intento de homicidio y su chofer es asesinado. En el mismo mes, la casa de un periodista es baleada. Varios periodistas y medios de comunicación son amenazados. Se inicia un juicio para quitar la frecuencia a Radio La Luna, una de las más importantes radios de oposición en el país. El delito: haber abierto tribuna ciudadana frente a la prisión de Humberto Cholango, presidente de la ECUARUNARI.

El intento de asesinato al líder máximo de la CONAIE trajo consigo nuevas movilizaciones. La represión no se hizo esperar. En la provincia del Azuay una indígena de 63 años fue asesinada. Los militares quemaron los páramos para obligar a los indígenas a salir, al más puro estilo de una cacería.

El momento actual es un período sumamente crítico para el movimiento indígena y los movimientos sociales del Ecuador. La embestida neoliberal se consolida en el país. El movimiento indígena, tras su paso por el gobierno, vive un momento de recomposición que va a tomar algún tiempo y que se ve continuamente amenazado por los intentos de desarticulación del movimiento patrocinados por el gobierno nacional. Es necesario además tomar en cuenta que 2004 es un año electoral, de renovación de las autoridades seccionales y de renovación de la dirigencia de la CONAIE, lo que complejiza aún más el escenario.

La vocación de poder que el movimiento indígena ha ido configurando en las últimas décadas actualmente requiere ir acompañada de la construcción colectiva de un proyecto político más conciso, en el que el planteamiento del Estado Plurinacional es un centro aglutinante, pero no suficiente.

La tarea es compleja. Sin embargo, la reserva moral acumulada por el movimiento indígena sabrá enfrentar estos desafíos.

Bibliografía

Bonilla, Ángel y Larrea, Ana María 2003 "La ficción democrática: paradojas en las trincheras del poder", en *OSAL* (Buenos Aires: CLACSO) Año IV, N° 10, Enero-abril.

Guerrero, Fernando y Ospina, Pablo 2003 *El poder de la comunidad. Ajuste estructural y movimiento indígena en los Andes ecuatorianos* (Buenos Aires: CLACSO).

Larrea, Ana María y Muñoz, Juan Pablo 2000 *Los caminos para la construcción de una democracia participativa en Guamate* (Quito: Grupo Democracia y Desarrollo Local, IEE, ODEPLAN) mimeo.

Larrea, Ana María, et al. 2000 *Desarrollo local: Experiencias, tendencias y actores* (Quito: IEE, Terranueva Gestión Social) mimeo.

Muñoz, Juan Pablo 1999 "Indígenas y gobiernos locales: Entre la plurinacionalidad y la ciudadanía cantonal", en Hidalgo, Mauro et al. *Ciudadanías Emergentes* (Quito: Abya Yala, Grupo Democracia y Desarrollo Local).

Ospina, Pablo 2002 *Crisis institucional en Ecuador y participación política del movimiento indígena* (Quito: IEE) Proyecto de investigación, mimeo.

La *forma clase* y los movimientos sociales en América Latina

Sergio Tischler*

* *Profesor e investigador
del Postgrado
de Sociología del Instituto
de Ciencias Sociales
y Humanidades
de la Benemérita
Universidad Autónoma
de Puebla, México.*

Una de las consecuencias ideológicas del derrumbe del socialismo real fue poner definitivamente en crisis el canon clásico de la lucha de clases y, con él, la noción misma de revolución y de lucha de clases.

En medio de ese clima ideológico es normal que las resistencias y movimientos de las clases subalternas en América Latina fueran dejando el discurso clasista que los caracterizó por varias décadas. Dicho cambio, sin embargo, no fue una suerte de "giro discursivo" posmoderno. La crisis de la *forma clase* de los movimientos sociales fue precedida por el ciclo de la más violenta contrarrevolución en Latinoamérica. Fue así como la llamada transición a la democracia se produjo en un escenario donde la *forma clase* de la "sociedad civil" había sido desarticulada en el terreno organizativo. En el plano ideológico se produjo un cierre del discurso al identificarse el derrumbe del socialismo real con el fin de la lucha de clases y el advenimiento del sujeto liberal como la encarnación de la libertad universal.



© Martín Fernández

Aparentemente, los movimientos sociales que quisieran legitimarse tendrían que asumir esa realidad, es decir, promover sus intereses particulares sin alterar el orden “universal” de la democracia liberal. En otras palabras, la revolución, en el sentido de cambio social radical ligado a la lucha de las clases subalternas, era desalojada del marco conceptual de la política entendida como “el arte de lo posible”.

Sin embargo, las luchas recientes en América Latina, en particular las de los zapatistas, los indígenas, los campesinos y las experiencias urbanas de los piqueteros y asambleas de barrio en Argentina, han hecho evidente que el orden capitalista liberal es la negación de un mundo incluyente y justo. En mayor o menor grado, dichos movimientos han creado un ambiente de actualización de la cuestión de la clase y la lucha de clases. En este breve escrito plantearé algunos aspectos de carácter conceptual que me parece importante discutir al respecto.

Uno

El énfasis en la lucha como el nervio de lo colectivo implica una manera de pensar la fuerza de la resistencia que consiste en el encuentro de los explotados y dominados como una liberación de lo reprimido por el dominio del capital. Pero dicha liberación es

también un auto-conocimiento de las potencialidades de lo colectivo. Si lo colectivo no es un simple agregado de individuos, de grupos, de movimientos, sino una suerte de "iluminación" (Benjamín, 1982) de la cual surge una nueva subjetividad y un nuevo sujeto, entonces ¿qué es lo que le da sentido? Dicho de otra forma, ¿qué es lo que permite ese auto-conocimiento y lo colectivo mismo como emergencia de una realidad nueva en, y en contra de, el orden existente?

¿La lucha? ¿La resistencia? De inmediato surge la pregunta sobre el contenido de dichos conceptos y, ligada a ésta, la pregunta por el *quién*. Entonces es muy probable que nos encontremos con muchos quiénes, muchas luchas, y lo colectivo no como una abstracción compuesta por un aglomerado de sujetos que afirman su calidad de particulares, sino como forma real de existencia que se produce como "instante" de negación/superación (en la forma de colectivización) de la escisión en que se basan los particulares cerrados y el dominio del capital (escisión sujeto/objeto, trabajo/capital, estado/sociedad, etcétera). En ese sentido, lo colectivo es una acción que traspasa y hace estallar la forma aparential de la objetividad social, plasmada como un mundo separado y autónomo que somete a los seres humanos a su lógica. Y ese "instante" es la clase entendida como condensación de la insubordinación de la materialidad de la existencia humana en acto, condensación pues del trabajo como autodeterminación en contra de su existencia como trabajo asalariado (subordinado capital), o del *hacer* humano frente al *ser*, para decirlo en palabras de John Holloway (2002).

En otras palabras, la noción de clase no expresa su contenido crítico separada de la lucha, pues la clase como forma crítica de existencia de la sociedad capitalista es lucha. Ésta es una de las cuestiones que Marx resalta en los famosos capítulos sobre manufactura y gran industria del primer tomo de *El capital*. La tradicional separación entre la clase como existencia objetiva y la clase como sujeto es parte de la separación que realiza la dominación del capital internalizada en la médula del pensamiento revolucionario. En el mismo sentido, la tendencia al deslizamiento hacia un objetivismo positivista puede llegar a ser gratificante como proyección de certezas científicas que cubren lejanos miedos míticos (Horkheimer y Adorno, 1988). Pero la clave del asunto es que la clase, según Marx, no es un objeto sino el sujeto que lucha contra su reducción a objeto. Sólo puede ser entendida de manera radical y crítica como parte de esa lucha, de esa dialéctica.

Ciertamente existe una dialéctica de la enajenación, que es la dialéctica del poder o de las formas aparentiales. El fetichismo moderno, la reificación, entendido como "metafísica" del objeto o movimiento del objeto en forma de sujeto, es la esencia de dicha dialéctica. En ella, la clase aparece como un objeto, como fuerza de trabajo definida por las leyes del capital. La dialéctica como rompimiento de las formas aparentiales, reifi-

cadras, es el nervio crítico de la lucha de clases como práctica y como teoría. Es una dialéctica de la libertad, del aniquilamiento del objeto como dominación sobre el sujeto. Surge de la lucha y de la necesidad pero no se reduce a esta última, la supera en la forma de sujeto autodeterminante.

En ese sentido, se puede afirmar que la lucha de clases no tiene como horizonte el cambio del dominio de una clase por otra, sino el fin de la dominación y de la clase como forma de existencia del poder.

La lucha de clases, la historia de la lucha de los oprimidos y explotados, está plagada de esos "instantes" a que nos referimos con anterioridad.

Siguiendo a Walter Benjamin (1982), podríamos decir que esos "instantes" son tiempos que cortan la duración de la dominación y suspenden la cotidianeidad basada en la fragmentación de una objetividad reificada. Son tiempos en los cuales se produce una nueva subjetividad, la cual, si bien es cierto que tiene afirmaciones en su práctica inmediata (expresada en un lenguaje disruptivo, en nuevos conceptos, en ensayos de organización), es primordialmente negativa. Su sentido es la lucha *contra* las diversas formas de dominación. Es un ir a "contrapelo".

¿Cuándo termina ese proceso? ¿Cuándo las "iluminaciones" alumbrarán permanentemente el cielo nocturno? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que el "fin de la historia" es un discurso ideológico y que cada época actualiza el tema de la revolución.

En el canon clásico de la revolución, la historia se realiza con la toma de poder y en la consagración de la clase. En ese sentido, la lucha de clases se define como una lucha por la toma del poder y la estabilización de la figura de la clase; o mejor, la separación clase/partido, Estado/sociedad, es la ratificación del poder en base a la clase como relación de dominio/subordinación. El Estado congela

***"En otras palabras,
la noción de clase
no expresa
su contenido crítico
separada
de la lucha,
pues la clase como
forma crítica
de existencia
de la sociedad
capitalista
es lucha"***

dicha escisión en la forma de mito paralizante. Eso fue un producto del pragmatismo político acompañado de una concepción positivista de la lucha de clases, concepción que identifica la lucha con el poder.

En una noción a “contrapelo” se pensaría la clase como el despliegue de una nueva subjetividad cuya radicalidad implica la iluminación del poder como conciencia de lo que ha de ser negado. De tal suerte, la lucha de clases apunta a la libertad y no a la dominación.

Lo que unifica al colectivo de los explotados y dominados es la lucha contra las condiciones que niegan su libertad. De allí que la lucha de clases no esté dominada por la categoría de necesidad –crudo objetivismo y poder– sino por la categoría de libertad: lo colectivo implica a la clase como movimiento de negación del capital, lo cual es al mismo tiempo un movimiento de negación de la clase. Lo colectivo radical apunta a la aniquilación de la clase, no a su afirmación.

En el plano político eso es una crítica radical a la *forma Estado* como el lugar central de la política revolucionaria. Implica pensar la *forma soviét* como crítica radical a las formas de dominación (Debord, 2002). Porque el soviét es el intento de romper con la escisión, el dominio de la forma sobre el contenido: es una forma que surge como liberación del contenido y no una forma que se establece como dominio del contenido, como en la *forma Estado*. El rompimiento de la dominación del objeto implica la definición de la forma como mediación del flujo del hacer (para usar el lenguaje de Holloway), como forma-de-hacer, a diferencia de la forma como sometimiento-del-hacer. El Estado es una forma de sometimiento-del-hacer al flujo del capital. Aquí, la forma adquiere una dimensión abstracta, objetiva, independiente y mística, porque es parte de la separación entre hacer y poder. La *forma soviét* es el esfuerzo por romper la separación que hace de la forma una relación de dominio.

Dos

Cuando se hace la crítica al concepto de revolución codificado como leninismo (canon clásico), no se trata de decir que las luchas pensadas y orientadas a partir de éste no hayan sido verdaderas y moralmente legítimas. En muchos aspectos, esas luchas son la expresión de la verdad como insubordinación del sujeto frente a la falsedad ética de una existencia miserable. En ese sentido son, como dice Badiou (1999), “acontecimientos verdad”. Sin embargo, esas luchas también han sido contradictorias y sus resultados no siempre han sido los más deseados, ya no sólo como derrotas sino como cristalización de un nuevo poder.

Lo anterior puede detectarse con precisión en el ejemplo de la revolución rusa y en la trayectoria teórica de Lenin. En el *¿Qué hacer?* Lenin (1981) define la revolución como la obra del proletariado dirigido por una vanguardia, el partido revolucionario. El partido es el encargado de llevar a los obreros la “conciencia de clase”, pues “espontáneamente” estos sólo pueden lograr una conciencia gremial. La toma de poder por el partido es el nervio de su teoría de la lucha de clases; de allí que la revolución fuera pensada como una teoría general de la organización revolucionaria.

Sin embargo, la experiencia de la revolución rusa de 1905 hizo cambiar en Lenin esa percepción, digamos abstracta, basada en el predominio de la forma. De esa experiencia Lenin pudo ver en el *soviet* una forma revolucionaria, surgida directamente de la lucha de la clase obrera sin la mediación del partido. Es decir que la “espontaneidad” de la lucha de clases producía formas de conciencia y un tipo de subjetividad que el partido no podía alcanzar a partir de una teoría de la organización. Esta idea lo acompañó durante la primera fase de la revolución de 1917. La consigna de las Tesis de Abril (“Todo el poder a los soviets”) era el reconocimiento de que la



© Patricio Realpe - ANPE

revolución era la autodeterminación de la clase obrera en la forma de los consejos. No obstante, el proceso que va desde la toma del poder por los bolcheviques hasta la masacre de Cronstand marca un viraje radical. De una concepción del *soviet* como el núcleo de la revolución, a la concepción del partido y el Estado como el centro de la misma (a esto contribuyó el aislamiento de la revolución y la forma Estado nación en la que la revolución quedó incorporada, pero sobre ello no podemos hablar aquí en extenso).

El resultado fue la destrucción de los *soviets* como forma política de autodeterminación obrera, y con ello la instalación de la dictadura del partido (de una pequeña élite) en la forma de Estado proletario. La crisis de la revolución rusa se resolvió en términos de la estabilización de una nueva forma de dominación sobre los trabajadores; es decir, de una manera reaccionaria. Cuestión que puede ser pensada con relativa claridad en el presente, pero en los años inmediatos a la toma del poder por los bolcheviques implicaba un verdadero dilema político y teórico para los más lúcidos pensadores revolucionarios.

Piénsese, por ejemplo, cómo la crisis de la forma histórica del soviét (su negación en la forma de partido-Estado) atraviesa las reflexiones del joven Lukács, quien por muchas razones puede considerarse como el principal exponente filosófico de la revolución de octubre. Nos referimos, como es de suponer, a su obra *Historia y conciencia de clase*. Se podría consignar que las tensiones en la elaboración de los conceptos de “conciencia psicológica” y “conciencia de clase” están atravesadas por el problema de la definición de la lucha de clases en clave partidocéntrica; pero al mismo tiempo existe de su parte el reconocimiento del soviét como la forma de organización del proletariado que es “superación político-económica de la cosificación capitalista” (Lukács, 1969: 87). Sin embargo, el leninismo político le impide a Lukács radicalizar teóricamente ese aspecto de la lucha de clases, al introducir el tema de la conciencia de clase como asunto de una mediación teórica y organizativa radicalmente diferente al del movimiento “empírico” de la clase. La base de la que parte Lukács no es la lucha real de la clase, sino un sujeto teórico (hipotético) “conocedor” de la conciencia de clase. Por lo tanto, como en Lenin, la iniciativa en la lucha debe ser la de ese sujeto teórico-político, el partido. Desde una perspectiva semejante, Žizek (2002) define la pertinencia del leninismo hoy a partir de la forma de asumir (concientemente) la responsabilidad histórica de la toma del poder con todas sus posibles consecuencias éticas y morales.

En la actualidad, la discusión teórica se ha actualizado con la aparición del libro de John Holloway *Cambiar el mundo sin tomar el poder*. No es nuestra intención hacer un comentario sobre el libro y la polémica que ha desatado. Lo que quisiéramos consignar es que, desde nuestro punto de vista, este libro desarrolla una nueva formulación de la revolución a contrapelo del canon leninista y que, en ese sentido, despliega una teoría de la lucha de clases desde la radicalidad de la *forma soviét*. De allí que las acusaciones de algunos de los críticos del libro en el sentido de que éste carece de una perspectiva histórica son bastante infundadas (ver, por ejemplo, Boron, 2003). Estas críticas entienden por perspectiva histórica el canon burgués de la misma, una linealidad que suprime la multiplicidad de tiempos contenidos en una “constelación” histórica. A partir de lo cual la historia es lo-que-resultó-ser en términos pragmáticos y de poder, suprimiendo lo-que-pudo-ser en el sentido de la lucha del sujeto contra el poder. En ese sentido, recuperar una reflexión desde la dinámica de la lucha que conduce al soviét es actualizar el tema de la revolución que se “suspendió” cuando esa forma fue destruida.

Esto da pie para poder decir que pensar la revolución en las condiciones actuales es tomar conciencia de ese proceso; es decir, cómo la *forma partido* y la *forma Estado* del mismo condujeron a los resultados por todos conocidos. Pero es, al mismo tiempo, recoger la experiencia de la verdad de la revolución expresada en la *forma soviét*. En otras palabras, en las actuales circunstancias el asunto de la revolución no es algo que se pueda plantear nada más en términos empíricos o pragmáticos; por el contrario, es una actuali-

zación de la reflexión teórica como momento de la práctica. No una reflexión que se "separa" de la práctica inmediata para producir conceptos sobre lo que debe ser la revolución, sino una reflexión que es parte de la lucha como crítica real, en movimiento.

Tres

En las actuales circunstancias, reinventar la revolución es cambiar el sentido de las palabras, elaborar un lenguaje nuevo para nombrar el cambio radical.

El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) se ha distinguido de manera especial en ese esfuerzo. Un esfuerzo por imaginar la revolución, teniendo como terreno de elaboración la crisis del canon clásico, leninista. Ése es uno de los sentidos que encontramos en la crítica zapatista a la lucha por el poder y a las categorías de *vanguardia* y de *revolucionario clásico*.

¿Excluye ese nuevo lenguaje el concepto de lucha de clases? Evidentemente, hay un rechazo a su uso dogmático, clasificatorio y formal, ya que el zapatismo no pretende ser una suerte de figura contemporánea de la "conciencia de clase". Más bien, pretende romper el canon. Sin embargo, como ha sido planteado, lo radical del concepto de lucha de clases no es la sustitución de un poder por otro, sino el resaltar la potencialidad del sujeto social de poner en crisis toda forma de poder, toda forma de dominación. En ese sentido, cuando el zapatismo habla de una lucha contra el poder está aplicando un concepto *abierto* de lucha de clases, en contraposición al concepto cerrado del canon clásico. La revolución ya no es vista a partir de la categoría de poder, sino de la constante lucha del sujeto social contra el poder, contra sus distintas formas, entre ellas las de la política como cultura de la reificación.

El sujeto rebelde crea un lenguaje, el cual nos dice que el cambio deseado no será más otra trampa del poder verticalmente construido sino la auto-organización y autodeterminación de los explotados y dominados; algo que no se puede construir en la subordinación a una totalidad represiva que subsume la multiplicidad en un universal homogéneo y hegemónico (Subcomandante Insurgente Marcos, 2003).

Un pensamiento similar lo podemos encontrar en el movimiento de piqueteros del MTD de Solano (MTD Solano/Colectivo Situaciones, 2002).

Lo que están haciendo estos movimientos no es completamente nuevo. Se nutre de la experiencia y recupera antiguas banderas las cuales la izquierda "ya daba por perdidas" como libertad, democracia, justicia o dignidad (Rodríguez Lascano, 2003: 13).

Lo cual no es un juego de retórica, sino una transformación de las palabras, un hacer estallar el núcleo utópico de los significados, lo que estos guardan secretamente de *principio esperanza* (Bloch, 1979), como parte de una lucha contra el poder, es decir, del movimiento autodeterminante del sujeto social.

Por lo antes dicho, se puede afirmar que la lucha de clases en nuestros días es la fragua de una nueva forma de pensar la revolución, y que vivimos un tiempo de liberación de la imaginación revolucionaria. Podemos concluir entonces que movimientos sociales más significativos nos dicen que la demolición de los fetiches de poder es parte del complejo proceso de elaboración de un nuevo sujeto revolucionario.

Bibliografía

- Badiou, Alain 1999 *El ser y el acontecimiento* (Buenos Aires: Editorial Manantial).
- Benjamin, Walter 1982 "Tesis sobre filosofía de la historia", en *Para una crítica de la violencia* (México DF: Editorial Premiá).
- Bloch, Ernst 1979 *El principio esperanza* (Madrid: Editorial Aguilar).
- Boron, Atilio 2003 "Poder, 'contrapoder' y 'antipoder'. Notas sobre un extravío teórico-político en el pensamiento crítico contemporáneo", en *Chiapas* (México DF: Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM/Ediciones Era) N° 15.
- Debord, Guy 2002 *La sociedad del espectáculo* (Valencia: Editorial Pre-Textos).
- Holloway, John 2002 *Cambiar el mundo sin tomar el poder. El significado de la revolución hoy* (Buenos Aires: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla/Editorial Herramienta).
- Horkheimer, Max y Adorno, Theodor 1988 *Dialéctica del iluminismo* (Buenos Aires: Editorial Sudamericana).
- Lenin 1981 *¿Qué hacer?* (Moscú: Editorial Progreso).
- Lukács, Georg 1969 *Historia y conciencia de clase* (México DF: Editorial Grijalbo).
- MTD Solano/Colectivo Situaciones 2002 *La hipótesis 891. Más allá de los piquetes* (Buenos Aires: Ediciones De Mano en Mano).
- Rodríguez Lascano, Sergio 2003 "¿Puede ser verde la teoría? Sí, siempre y cuando la vida no sea gris", en *Rebelión* (México DF) N° 8, Junio.
- Subcomandante Insurgente Marcos 2003 "Comunicado del Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. México, 12 de abril de 2003", en *La Jornada* (México DF) 13 de abril.
- Zizek, Slavoj 2002 "¿Qué puede decirnos Lenin sobre la libertad hoy?", en *Cuadernos del Sur* (Buenos Aires: Editorial Tierra del Fuego) N° 34.

Cronología
Enero – abril 2004

Disputas sociales y procesos políticos en América Latina¹

Clara Algranati,
José Seoane
y Emilio Taddei

El proceso abierto en Latinoamérica en los últimos años –ante el agotamiento del modelo neoliberal tal cual éste cristalizó trágicamente en la década del noventa en nuestra región– se expresa crecientemente en la intensificación de las disputas e iniciativas alrededor del rumbo que adoptará una transición cuyo resultado deviene incierto. En este sentido, la realidad sociopolítica de los diferentes países aparece signada, como lo señalamos en ocasiones anteriores, entre otras cuestiones, por:

- Una renovada protesta social –que a nivel regional ha crecido en los últimos años– y la acción de movimientos sociales y populares con características diferentes de aquellos que habían ocupado el centro de la escena en el pasado inmediato.
- Este proceso, en el marco de la crisis económica que atravesó a la mayor parte de la región (y no solamente a ella) y frente a los intentos de profundizar las polí-

ticas neoliberales, se tradujo en algunos casos en “levantamientos populares” (que concluyeron, las más de las veces, en derrumbes de gobiernos), en la constitución de “mayorías electorales” críticas al neoliberalismo e incluso en la reaparición de una discursividad política que se diferencia del mismo. En su diversidad, estos procesos señalan la creciente crisis de legitimidad que cuestiona a las formas culturales, económicas y políticas que sostuvieron la aplicación del neoliberalismo en el pasado.

- Por otra parte, la profundización de las políticas neoliberales ha tendido a la creciente militarización de las relaciones de dominio (neoliberalismo de guerra), ha debido avanzar en procesos de reestructuración de la voluminosa deuda externa en términos de sostener la gobernabilidad sistémica y ha promovido la reconfiguración radical y aún más regresiva de la geografía política, social y económica de la región como resultado de la aceleración de los llamados “tratados de libre comercio” y de las iniciativas de intervención y control militar que los acompañan.

Entendido así, este proceso tendrá en el año 2004 y en los siguientes el tiempo de solidificación y consolidación de sus tendencias más importantes. Es nuestra intención abordar el mismo desde el análisis de la conflictividad social y de la experimentación que caracteriza a los movimientos sociales. Desde esta perspectiva, en este caso nos concentraremos en lo acontecido a lo largo del primer cuatrimestre del año, esperando también que estas reflexiones sirvan a la lectura de las cronologías del conflicto social que se publican a continuación. En este sentido, en el presente artículo intentaremos reseñar un esbozo del mapa que presenta la conflictividad social para el presente período, los procesos de lucha desde la mirada de los sujetos sociales que los protagonizan y desde los contextos y horizontes políticos en que estos se inscriben, así como un breve señalamiento de la marcha de los acuerdos económicos, políticos y militares y de las resistencias y convergencias que estos despiertan.

Una aproximación al mapa de la conflictividad social

El análisis de la distribución cuantitativa de los hechos de conflicto social relevados por el OSAL en la elaboración de las cronologías nos permite una primera aproximación a las características que presenta la conflictividad social en los meses que van de enero a abril de 2004. Si bien para una comprensión detenida de los procesos a los que nos referimos, la misma debe ser complementada con una reflexión cualitativa sobre estos, en la elaboración de un primer mapa de la conflictividad social y de su evolución en la región debe considerarse que:

- La conflictividad social del primer cuatrimestre de 2004 resulta, en relación a la cantidad de protestas, de una magnitud similar a la relevada para los últimos cuatro

meses de 2003 (+ 3%). Por otra parte, en el plazo de los últimos 2 años –a lo largo de los cuales los hechos de conflicto social se mantienen por encima de los 2.100 registros– la cantidad relevada para el presente cuatrimestre es menor a la registrada para iguales períodos de 2002 y 2003.

- Por otro lado, en comparación con el pasado cuatrimestre, pueden señalarse diferencias en relación a su distribución por país: mientras que por una parte la conflictividad se incrementa en Brasil, El Salvador, República Dominicana, Paraguay, Ecuador, Venezuela, Honduras y Puerto Rico, por la otra desciende en Chile, Panamá, Uruguay, Guatemala, Bolivia y Argentina.
- Considerando la evolución de la conflictividad social en términos regionales, el área andina concentra la mayor cantidad de hechos de protesta (40,7%), resultado que arroja el relevamiento por cuarto cuatrimestre consecutivo, siendo que para similar período los mismos tienden a crecer en el sur del continente y disminuir en el norte.

Finalmente, sobre la comparación entre el primer cuatrimestre de 2004 y el inmediatamente anterior en relación a los sujetos sociales que protagonizan estas luchas, puede señalarse tanto un crecimiento de aquéllas impulsadas por los movimientos de origen rural (que refiere, aunque no únicamente, a los conflictos en el campo brasileño y particularmente a la iniciativa de ocupación de tierras del MST en demanda de la reforma agraria) como una pequeña disminución de las promovidas por los asalariados en su conjunto que contrasta con un incremento de las acciones de los trabajadores de la educación y la salud públicas. Movimientos indígenas y campesinos y trabajadores del sector público se destacan así en la línea de la confrontación social que recorre la región latinoamericana, aunque este señalamiento está lejos de agotar la diversidad de los sujetos sociales que protagonizan la misma. En este sentido vale señalar también el crecimiento de las protestas multisectoriales motivadas por cuestionamientos de carácter político general, así como aquellas convocadas contra los tratados de libre comercio (particularmente el ALCA) y la guerra en Irak, y también las acciones impulsadas por movimientos territoriales urbanos (pobladores, sin techo, desocupados, entre otros) y aquellas dirigidas a cuestionar autoridades locales y provinciales (Perú, Bolivia y Argentina). Intentaremos abordar estas experiencias en el marco de las tres regiones (Cono Sur, Andina y Norte) en las que puede subdividirse América Latina.

Movimientos sociales y los “nuevos gobiernos” del Cono Sur

En esta región sur del continente pueden distinguirse, con bastante claridad, dos bloques de países. Uno de ellos, integrado por Argentina, Brasil y Paraguay, donde recientes cam-

bios de gobiernos, precedidos por “batallas” sociales significativas como en Argentina pero también por una más larga y firme construcción de movimientos sociales como en la experiencia brasileña, o por conflictos y una movilización campesina importante como en Paraguay, alumbran algunas esperanzas de cambio respecto de las políticas imperantes en la década pasada.

Por otra parte, en un segundo bloque podemos ubicar a Uruguay, donde el desgastado gobierno neoliberal de Batlle –a meses de unas elecciones presidenciales que alientan el triunfo de la coalición opositora impulsada por el Frente Amplio– busca acelerar privatizaciones socialmente resistidas e intensificar su alineamiento con las políticas promovidas por el gobierno de EE.UU. También en dicho agrupamiento puede incluirse a Chile, que siendo el país con menor protesta social del Cono Sur, se ubica regionalmente como vocero privilegiado del “libre comercio”², la “lucha contra el terrorismo” y el voto de condena a Cuba en la ONU, propagandizando internacionalmente su modelo aparentemente exitoso de “gobernabilidad”.

Volviendo al primero de los bloques mencionados, el de los “nuevos gobiernos”, la asunción presidencial de Kirchner en mayo de 2003 –que parece cerrar, en cierta medida, la crisis del régimen político abierta por la profundidad del cuestionamiento al neoliberalismo y la dinámica social a partir de 2001– tiene en común con el triunfo de Lula en Brasil el hecho de ser gobiernos que llegan al Estado con el mandato popular de poner fin a las políticas neoliberales. Esta situación ha producido una discursividad gubernamental “anti-neoliberal” de la que son muestras, por ejemplo, los discursos de los presidentes de Argentina y Paraguay en la reciente Cumbre de Monterrey, donde este último afirma incluso que “...sin una distribución de la riqueza no se podrá administrar la democracia en América Latina”. Sin embargo, estos gobiernos han alcanzado el poder a través de coaliciones electorales heterogéneas (en el caso de Brasil con la inclusión hasta del Partido Liberal) o bien a través de sectores políticos tradicionales (como el caso del Partido Justicialista en la Argentina) así como bajo la importante influencia de sectores económicos que promovieron y defienden políticas neoliberales acordes al rol que se postula para la región en las negociaciones que tienen lugar en diferentes instancias internacionales.

Este nuevo contexto político-social atraviesa la dinámica de los movimientos sociales y signa, en gran medida, los conflictos que los mismos protagonizan así como el campo de fuerzas y disputas alrededor de los rumbos efectivos de las políticas gubernamentales (sobre ello, ver los artículos de Aníbal Quijano y Atilio Boron en el presente número del OSAL). En este sentido, y en el marco del crecimiento que experimenta la conflictividad social en la región para este primer cuatrimestre de 2004, vale señalar algunas de estas experiencias.

En Paraguay y Brasil se incrementan los conflictos protagonizados por los movimientos campesinos. En el primero de estos países una parte importante de los mismos se orientan contra el “modelo sojero”, produciéndose importantes niveles de confrontación luego de que en febrero dos campesinos fueran muertos (y diez heridos) por la policía ecológica y rural. En este país, así como también en Argentina (y en menor medida en Brasil por las limitaciones legales que existían hasta hace muy poco) el área cultivada de soja transgénica –que exige el uso de herbicidas de alto impacto ecológico– creció a ritmos acelerados en los últimos años profundizando los procesos de concentración de la tierra y ocasionando daños irreversibles en los suelos. En el marco de este proceso de conflicto en Paraguay, bautizado como “la guerra de la soja”, el 16 de marzo las organizaciones campesinas convocan a una jornada nacional de lucha “Contra el modelo sojero y agrotóxico, por la vida, la soberanía y contra el ALCA”, realizando 17 cortes de ruta en varios departamentos del país (ver artículo de Marielle Palau y Regina Kretschmer en este número). Por otro lado, las crecientes demandas y ocupaciones de tierra fructifican el 29 de marzo cuando el presidente paraguayo legaliza una ocupación beneficiando a 5 mil familias. En abril los campesinos sin tierra ocupan nuevos terrenos, fundamentalmente en la región de San Pedro, ante lo que diferentes agrupamientos empresarios³ acusan al gobierno de incitar las invasiones. El gobierno, que pide la mediación de la Iglesia Católica, concluye al fin del mes ordenando el desalojo de los campesinos.

En el caso brasileño los Trabajadores Rurales Sin Tierra son el movimiento social más activo del período. Realizan diferentes acciones, según las particularidades regionales, que confluyen en las jornadas llamadas “Abril Vermelho” (abril rojo), donde el MST efectúa 150 ocupaciones de tierras, cortes de carreteras, ocupaciones en predios linderos a vías ferroviarias y de oficinas del Instituto Nacional por la Reforma Agraria (INRA). A lo largo de este mes estas protestas expresan la convergencia de diferentes organizaciones sociales –locales y nacionales– del país para exigir coordinadamente la agilización del Plan de Reforma Agraria acordado con el gobierno el pasado año (ver las reflexiones de João Pedro Stédile en este número). A partir de estas dinámicas se reabren debates jurídicos y mediáticos sobre el carácter de la reforma agraria, la productividad o improductividad de las tierras y la legalidad de las acciones desarrolladas por el movimiento campesino, en el medio de los cuales el presidente Lula manifiesta que no resolverá bajo presión.

Por otra parte, en Argentina se destacan las protestas de los trabajadores del sector público, especialmente en el ámbito de la salud, contra los despidos y la reducción salarial, así como docentes de numerosas provincias del país y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) protagonizan diferentes protestas en reclamo de aumento salarial. En este caso también en Uruguay hay numerosas protestas de trabajadores de la salud pública y privada que unifican sus luchas, y en Brasil diferentes sectores de la administración

pública realizan huelgas por aumento salarial. La acción de los trabajadores del sector privado se destaca también en Argentina, coincidentemente con el crecimiento que experimenta la economía en los primeros meses del año. Reaparecen así los conflictos por recomposición salarial de los trabajadores bancarios y de asalariados de distintas ramas del transporte tanto de pasajeros como de carga. Un ejemplo interesante es la huelga con piquetes de l@trabajador@s del subterráneo de la Ciudad de Buenos Aires contra la instalación de máquinas expendedoras de boletos y por una jornada de 6 horas por trabajo insalubre, donde la empresa termina cediendo a las demandas. Dicha huelga también señala cómo se agudizan los enfrentamientos entre las “burocracias sindicales” más tradicionales e incipientes recomposiciones organizativas de los trabajadores en comisiones internas de base, o bien entre diferentes centrales sindicales. Por último es también importante señalar las huelgas realizadas por los trabajadores petroleros en el sur del país y los de una de las empresas telefónicas (TELECOM). En el resto de la región se destaca el conflicto de los trabajadores portuarios despedidos en Chile. Sin embargo, para fines del cuatrimestre “la crisis energética” en Argentina instala en el debate mediático la demanda de las empresas del sector por aumento de tarifas –una de las condiciones expresada por el FMI para la renegociación de la deuda externa.

Un último rasgo que quisiéramos remarcar son las experiencias de los movimientos sociales de construir puntos de acción convergentes o coordinaciones sostenidas en espacios organizativos amplios para manifestarse contra las políticas económicas, tales como la “Coordinadora de los Movimientos Sociales” en Brasil y las jornadas de marzo en Paraguay contra la consolidación del modelo agro-exportador que experimenta la región. También se expanden las coordinaciones y campañas amplias y unitarias para combatir la implantación del ALCA (ver el artículo de Gonzalo Berrón y Rafael Freire en este OSAL), así como sobre el pago de la deuda externa y la criminalización de la protesta. En este sentido son también notables

“Un último rasgo que quisiéramos remarcar son las experiencias de los movimientos sociales de construir puntos de acción convergentes o coordinaciones sostenidas en espacios organizativos amplios para manifestarse contra las políticas económicas”

las iniciativas de los diferentes movimientos sociales de la región para aumentar sus lazos y debates, multiplicar sus encuentros organizativos y realizar asambleas nacionales y regionales, que fructifican en la construcción de planes de acción para el año 2004 y la creciente referencia a las formas en las que el “libre comercio” (que aparece tanto en las negociaciones del ALCA como con la Unión Europea), la militarización regional y las negociaciones con el FMI operan de forma articulada condicionando la posibilidad de salidas efectivas al neoliberalismo. Si bien estos gobiernos se han dado instancias de diálogo con algunas de estas campañas y coordinaciones y han impulsado una nueva orientación en las negociaciones comerciales a nivel regional e internacional (ver artículo de Jaime Estay en este número), hasta el momento se oponen a realizar las consultas populares vinculantes que sobre estas cuestiones constituyen una de las demandas centrales de los movimientos en la actualidad.

En este contexto, estos “nuevos gobiernos” —especialmente el de Argentina— han tenido algunos otros “gestos” hacia el movimiento social. Se subraya en este sentido la política seguida por el presidente Kirchner en materia de los derechos humanos conculcados por la pasada dictadura militar. Sin embargo, esta política, aún limitada para el movimiento de derechos humanos, se combina, en estos meses, con el endurecimiento de la legislación penal así como con la continuidad de la judicialización de la protesta social. Esta profundización de las políticas represivas, bajo el estímulo de miedos e inseguridades colectivas, constituye especialmente una de las demandas de sectores políticos y económicos conservadores en toda la región.

En este sentido, en Argentina, a partir del caso de un secuestro seguido de muerte —que singularmente toma estado público simultáneamente al acto oficial para transformar un emblemático centro clandestino de detención en museo de la memoria— se construye una operación de prensa “contra la inseguridad” que interpela a amplios sectores sociales a manifestarse en las calles y funciona como contracara fascizante de una sociedad injusta que quiere dejar de serlo profundizando las libertades democráticas. A comienzos de abril, con el peso de una opinión pública estimulada por los medios masivos de comunicación y algunas redes sociales de la derecha política, se impone como prioridad social la resolución del tema de la “inseguridad” que conlleva tanto la acelerada aprobación de reformas legislativas penales más duras como la agilización de la depuración de las principales fuerzas policiales que aparecen profundamente asociadas al delito. En este sentido vale mencionar el asesinato en la ciudad de Rosario de la dirigente sindical Sandra Cabrera, de la Asociación de Mujeres Meretrices de la República Argentina (AMMAR-CTA), luego de que denunciara a la policía local. También en Brasil y Paraguay los intentos de criminalizar y reprimir a los movimientos campesinos dejan un trágico saldo de muertes: a las ya referidas en el caso paraguayo, cabe agregar el asesinato de un dirigente de la Organización de Lucha del Campo (OLC) en Brasil.

En este cuadro, la promoción de la militarización regional toma cuerpo en la realización en Paraguay del seminario regional “Respuestas Cívico-militares al terrorismo” auspiciado por el departamento de defensa de EE.UU., así como, por ejemplo, en la aprobación parlamentaria de la ley sobre el ingreso de tropas extranjeras para operativos conjuntos en Argentina, y los anuncios en Brasil sobre la organización de una fuerza militar común con Argentina para integrar la intervención militar internacional promovida por la ONU en Haití.

Los diferentes escenarios de las disputas sociales en el área andina

En los países que integran el área andina, como señalamos anteriormente, se concentra una significativa proporción de los conflictos relevados para toda la región latinoamericana a lo largo del último año. La experiencia de los movimientos indígenas y campesinos (principalmente en Ecuador y Bolivia pero también en Perú y Colombia), las protestas impulsadas por los trabajadores del sector público frente a las políticas de ajuste neoliberal, la polarización política que atraviesa al proceso venezolano y las confrontaciones que despiertan el rumbo del gobierno emergido de las “jornadas de octubre” en Bolivia, las resistencias frente a los acuerdos de “liberalización comercial” y la creciente intervención militar promovida por EE.UU., los procesos de convergencia y el cuestionamiento a gobiernos que ostentan niveles de apoyo social cada vez más reducidos (Perú y Ecuador), caracterizan a grandes trazos la realidad de estos países. En cierta medida, los procesos que reseñamos para entender la compleja matriz de la actual “transición latinoamericana” parecen adoptar una singular intensidad en el período reciente y particularmente a lo largo de este primer cuatrimestre del año 2004. Y en este sentido, el análisis sobre las configuraciones que signan la acción de los movimientos sociales debe partir de los diferentes escenarios sociopolíticos que estos plantean.

En primer lugar, aquél donde el desarrollo de las políticas públicas adopta un sesgo contrario al recetario “neoliberal” en un contexto de creciente movilización y confrontación societal. Tal es el caso del proceso venezolano, particularmente con la radicalización de los proyectos sociales de cambio que resulta del ciclo de golpe de estado, *lock-out* patronal y paro petrolero impulsado por la oposición al gobierno del presidente Chávez, y que tras su fracaso parece orientar a ésta en la búsqueda de la revocatoria del mandato presidencial previsto por la nueva Constitución venezolana (ver artículo de Edgardo Lander en este número). La dinámica del conflicto y de los movimientos sociales se inscribe así en la creciente polarización político-social entre los proyectos “bolivariano” y “liberal”, siendo que, en el incremento de la protesta durante este primer cuatrimestre de 2004, el centro de la confrontación está puesto en el proceso de validación de las firmas recolectadas por la oposición hacia fines del pasado año para convocar al referéndum revocatorio⁴. En este proceso la confrontación callejera asume una

intensidad mayor entre fines de febrero y principios de marzo en relación a la resolución que debía adoptar el Consejo Nacional Electoral (CNE) respecto de las firmas presentadas por la oposición. Si bien la revalidación de las firmas necesarias para dicha convocatoria (fines de mayo) plantea un horizonte de resolución electoral de la confrontación social en el futuro inmediato, las pasadas críticas de la oposición al CNE, la reiterada búsqueda de una intervención militar (interna o externa), y las afirmaciones de diferentes miembros de la actual administración norteamericana, plantean serios interrogantes sobre el desarrollo de la misma.

Por otro lado, el proceso abierto en Bolivia tras el “levantamiento popular” de octubre pasado abre paso a una gestión gubernamental que bajo los compromisos que sellan dichas jornadas (referéndum sobre la política energética, recuperación social de los hidrocarburos, Asamblea Constituyente) se ve atravesada por un conjunto complejo de disputas y confrontaciones. En el marco de un pequeño descenso de la conflictividad social respecto del último cuatrimestre del pasado año (-13%), diferentes movimientos y organizaciones realizan numerosas acciones de protesta por reivindicaciones específicas. Entre ellas se destacan las ocupaciones de tierra del Movimiento Sin Tierra de Bolivia (MSTB) y las movilizaciones “cocaleras” (tanto en el Chapare como en los Yungas), así como también los maestros, los trabajadores de la salud y la comunidad universitaria (particularmente los estudiantes) que exigen aumentos salariales y presupuestarios: una muestra de las demandas sociales que estuvieron presentes en la condensación del conflicto que signó el “octubre boliviano” y que en algunos casos parecen obtener parciales conquistas. En el terreno de la política gubernamental, el incremento de los recursos fiscales en consonancia con los planteos del FMI, y la resolución de la política energética, concentran la atención y las disputas que tienen lugar tanto en las calles (diferentes manifestaciones multisectoriales exigiendo la nacionalización del petróleo y el gas) y en las presiones de los *lobbies* económicos, como a nivel parlamentario y gubernamental con diferentes renovaciones ministeriales. Así abril concluye con la aprobación de un impuesto sobre las transacciones financieras, la propuesta oficial de una nueva legislación sobre hidrocarburos y la convocatoria al referéndum sobre la política energética para julio próximo, sobre las que parecen concentrarse las disputas hacia adelante.

En segundo lugar, y por distintas razones, el área andina se convierte en uno de los escenarios de atención de la estrategia diplomática, económica y militar del gobierno norteamericano. Señalamos ya brevemente en relación a ello lo acontecido en Venezuela. Pero por otra parte, culminada la negociación del acuerdo de “libre comercio” con Centroamérica y en el marco de la orientación marcada por el llamado ALCA de dos pisos, la iniciativa norteamericana se concentra también en la apertura formal de negociaciones con la región andina, y especialmente con los gobiernos de Colombia, Ecuador y Perú, que se manifiestan deseosos de avanzar en ese sentido. A

lo largo de todo el cuatrimestre se realizan así diferentes reuniones intergubernamentales –formales e informales– en esta dirección. De cara a este proceso, cobran impulso tanto las convergencias sociales a nivel regional como las campañas contra dicho acuerdo a nivel nacional. En el primero de los casos, a principios de marzo, y en el marco de las jornadas preparatorias del Foro Social Américas, se realiza en Quito un encuentro andino de coordinación; en marzo un amplio arco de organizaciones de Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia envía una carta al Congreso de EE.UU. rechazando el TLC; a principios de abril las 16 centrales sindicales de la región manifiestan su adhesión e impulso a un plan de lucha regional sobre ello y, finalmente, tiene lugar hacia fines de abril, con epicentro en Bogotá, Colombia, la primera Jornada Andina de movilización contra estos acuerdos. A nivel nacional este proceso se expresa –especialmente en Ecuador, Colombia y Bolivia– en movilizaciones de rechazo a las negociaciones y en la creciente incorporación de esta demanda a los pliegos reivindicativos de los diferentes movimientos y de las convocatorias unitarias que estos forjan a nivel nacional (ver artículo de Pablo Solón en este número).

Por otra parte, el control y presencia militar norteamericana que acompaña al “libre comercio” se profundiza en la región bajo las proclamas de la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico. En este sentido, el gobierno de Toledo en Perú autoriza el ingreso de tropas de dicho país para ejercicios antinarcóticos en la región amazónica. Sin embargo, la operación regional más significativa durante este cuatrimestre, promovida por el Comando Sur de las FFAA. norteamericanas, persigue el fortalecimiento del control militar de la línea fronteriza de Colombia con Ecuador y Panamá. Dan cuenta de ello, durante el mes de abril, los diferentes operativos de rastillaje de posibles columnas de las FARC en la frontera norte ecuatoriana y la puesta en marcha por el presidente colombiano del llamado “Plan Patriota”, que persigue el despliegue de 15 mil hombres en el sur de dicho país⁵. En el marco de este proceso el gobierno de Bush pide autorización al Congreso para duplicar el número de sus tropas en Colombia.

Finalmente, en relación con las políticas represivas resulta por demás preocupante la reiterada y cada vez más significativa intervención de fuerzas militares en el conflicto social (en este caso en las movilizaciones indígenas en Cotopaxi, Ecuador; en llave, sur del Perú; y en la huelga petrolera en Colombia), a lo que deben sumarse, durante el primer semestre, sendos rumores y denuncias de preparativos de golpes de estado en Bolivia y Ecuador. Por último, respecto de la criminalización de la protesta, vale también señalar los atentados a dirigentes sociales (por ejemplo al presidente de la CONAIE Leonidas Iza) así como el reforzamiento de las legislaciones represivas (la aprobación parlamentaria de 5 de los 18 artículos del estatuto antiterrorista impulsado por el gobierno colombiano) y las iniciativas de reclutamiento ciudadano en organizaciones de apoyo a las fuerzas de seguridad (en este caso, en Perú y Colombia).

“... la polarización política venezolana y las confrontaciones que despiertan el rumbo del gobierno en Bolivia, las resistencias frente a los acuerdos de ‘liberalización comercial’ y la creciente intervención militar promovida por EE.UU., los procesos de convergencia y el cuestionamiento a gobiernos que ostentan niveles de apoyo social cada vez más reducidos (Perú y Ecuador), caracterizan la realidad de estos países”

En tercer y último lugar quisiéramos analizar brevemente la configuración que adopta la acción de los movimientos sociales particularmente en Ecuador y Perú, donde gobiernos inspirados en la aplicación de las políticas neoliberales (y en las orientaciones estratégicas de EE.UU.) parecen convivir, en una situación de precaria estabilidad, con una cada vez más escasa popularidad (ver artículo de Ana María Larrea en este número). En el caso ecuatoriano, y en el marco de diferentes conflictos impulsados por trabajadores del sector público por salarios y frente a las iniciativas privatizadoras, la confrontación social contra las políticas gubernamentales encuentra a mediados de febrero su mayor intensidad alrededor de las movilizaciones por “la soberanía y la dignidad del pueblo” y contra las negociaciones del TLC, el ALCA y las privatizaciones de reservas petroleras, empresas eléctricas y de telecomunicaciones que tienen en la región de Cotopaxi su máxima expresión y que convocan y articulan la acción de distintos movimientos y organizaciones indígenas, campesinas, sindicales y sociales. Por otro lado, en Perú la conflictividad se intensifica a lo largo del mes de abril, aunque sin la coordinación reseñada en el caso anterior, alrededor del paro por tiempo indeterminado promovido por la Federación Médica Peruana, la importante movilización que sectores de las organizaciones cocaleras realizan a Lima, y las protestas de los pobladores indígenas del municipio de Ilave que, en una extendida serie de conflictos, culmina trágicamente con el linchamiento del cuestionado alcalde que hecha luz sobre un proceso más amplio de cuestionamiento a autoridades locales que tiene lugar especialmente en el sur de dicho país.

Por último, en el caso colombiano, y prolongando de alguna manera las protestas docentes de los primeros meses del año, la declaración de huelga por tiempo indeterminado de los trabajadores de ECOPEPETROL ante la política gubernamental de privatización de la empresa y los pozos petroleros en la tercera semana de abril abre un proceso de confrontación que enfrenta la respuesta represiva del gobierno y parece despertar una más amplia solidaridad

social. En paralelo, también en dicho mes, se realiza el primer encuentro de la emergente Gran Coalición Democrática (que agrupa a todas las centrales sindicales y otras organizaciones sociales junto a un arco de fuerzas políticas desde la izquierda hasta el partido liberal), que resulta en un plan de acción común para derrotar el paquete legislativo que impulsa el gobierno, el TLC con EE.UU., el ALCA y la reelección que persigue el presidente Uribe.

Planes estratégicos y resistencias populares en Mesoamérica

La geografía política de la región mesoamericana y del Caribe aparece signada por la profundización de políticas ya reseñadas por el OSAL, en particular por el dinamismo que experimenta la reconfiguración de la hegemonía norteamericana en la región. La acelerada conclusión de los tratados de libre comercio, la creciente influencia militar y la agudización de los procesos de criminalización de la protesta y de control social resultan los vectores privilegiados de este proceso, a los que se suma también la interminable sucesión de paquetes de ajuste fiscal exigidos por los organismos internacionales.

Estos hechos resultan de significativa importancia para comprender la reconfiguración en curso de la hegemonía norteamericana, de sus estrategias de dominación regional y de los impactos políticos, económicos y sociales que las mismas encierran. La observación y análisis de las resistencias sociales que ya están despertando estas políticas son de una importancia decisiva para entender las dinámicas contrahegemónicas que probablemente se manifestarán en los próximos años contra los efectos de un proceso que busca consolidar un modelo de desarrollo basado en la sobreexplotación de los recursos naturales de Mesoamérica y el Caribe. Por otra parte, la reestructuración de la deuda completada por algunos países de la región guarda una importancia significativa en el período, ya que tiene como consecuencia inmediata la tentativa de implementación de nuevos ajustes fiscales y la emergencia de protestas que cuestionan dichas medidas. La huelga general multisectorial de enero en República Dominicana contra la política económica del presidente Mejía resulta en ese sentido el conflicto más significativo.

Es importante también señalar las elecciones presidenciales y los recambios de los equipos gobernantes que tienen lugar en diversos países, como la asunción en Guatemala a mediados de enero del presidente Oscar Berger, representante de sectores empresariales electo en diciembre de 2003 por la Gran Alianza Nacional (GANAN). En El Salvador las tentativas de cambio del rumbo neoliberal de la política económica encarnadas por el candidato del FMLN, Shafik Handal, se ven frustradas con la elección por el 57% de los votos

de Elías Saca, del oficialista ARENA, quien sucederá al presidente neoliberal Flores. En el mismo sentido cabe consignar la elección a inicios de mayo del opositor Martín Torrijos como nuevo presidente de Panamá con el 47% de los votos. Por último, y fuera del período analizado, vale señalar la elección presidencial en República Dominicana en la que resultó triunfador el opositor Leonel Fernández (Partido de la Liberación Dominicana, con el 57% de los votos). Estos dos últimos triunfos electorales de fuerzas de oposición parecen expresar, junto a los intensos conflictos que tuvieron lugar en los últimos meses en dichos países, la pérdida de legitimidad de la "gobernabilidad neoliberal" y las aspiraciones de amplios sectores de la sociedad a un cambio de rumbo en la política económica.

Como señalamos anteriormente, en el período tratado, diversos países de la región (Honduras, Nicaragua, República Dominicana) concluyen acuerdos de renegociación y reestructuración de sus deudas externas. El desbloqueo de créditos internacionales aparece asociado en todos los casos a renovadas exigencias de "modernización del sector público", ajuste fiscal y privatizaciones. Como respuesta a esta situación se registra un aumento de la conflictividad de los trabajadores del sector público en El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Honduras, Puerto Rico y República Dominicana con protestas asociadas a la lucha contra las privatizaciones, contra los despidos y las rebajas salariales y por incrementos en los haberes.

La Coordinadora por la Unidad y la Lucha de República Dominicana lleva adelante una huelga general de 48 horas los días 28 y 29 de enero contra la política económica del gobierno y contra la firma del TLC con EE.UU. La medida de fuerza a favor del aumento salarial y por el congelamiento de precios de los artículos de primera necesidad, entre otros, consigue una importante adhesión en el sector público, de transporte y comercial. El gobierno responde con una brutal represión que deja como saldo al menos 6 muertos y 450 personas heridas y/o detenidas.

En Honduras el año se inicia con las protestas de las enfermeras profesionales por nuevas contrataciones y reajuste salarial, y el reclamo de los docentes, que realizan masivas movilizaciones exigiendo respeto a los salarios y la renuncia del ministro de Educación. Frente al incumplimiento de aumento salarial anunciado por el presidente Bolaños, en Nicaragua, los docentes de este país, nucleados en la Asociación Nacional de Educadores de Nicaragua (ANDEN), desarrollan a mediados de marzo jornadas de protesta de alcance nacional, y logran obtener una promesa de pago por parte del Ejecutivo. También en Guatemala los docentes contratados realizan manifestaciones exigiendo al nuevo presidente la efectivización en sus puestos.

Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social realizan diferentes acciones durante febrero y marzo, reclamando el cumplimiento de los acuerdos que siguieron a

la huelga médica de 2003. En el marco de este proceso la policía reprime violentamente una jornada de protesta en marzo que logra la adhesión de otros sectores sociales. En Puerto Rico cabe señalar la paralización de actividades y manifestaciones de trabajadores de empresas estatales contra las privatizaciones (electricidad, telefónica).

En México, sectores del magisterio nucleados en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) desarrollan un ciclo de conflictos por aumento salarial desde enero, que se articulará con demandas por una democratización efectiva del sindicato de la educación (SNTE). Estas acciones convergerán en marzo con una multitudinaria manifestación en México DF convocada por el Frente Sindical, Campesino, Social y Popular contra la tentativa gubernamental de modificar los regímenes educativo, energético, laboral, de seguridad social y previsional. La lucha de los trabajadores del seguro social contra la reforma del régimen de jubilaciones dará lugar a mediados de abril a la manifestación multisectorial más importante del período convocada por la UNT, FSM y El Barzón, entre otras organizaciones.

Las protestas y acciones de coordinación de campesinos e indígenas mesoamericanos guardan también un lugar destacado en el escenario de los conflictos. Estos se articulan en torno a dos reivindicaciones fundamentales: el acceso a la tierra y el rechazo a las negociaciones de los TLCs. En México, el incumplimiento del gobierno del Acuerdo Nacional para el Campo convenido luego de las importantes manifestaciones de 2003 exigiendo la revisión del capítulo agrícola del TLCAN impulsa a las organizaciones agrupadas en la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (UNORCA) y a la coalición “El Campo no aguanta más” y el Consejo Agrario Permanente a realizar movilizaciones locales y foros de debate, respectivamente.

En Guatemala, campesinos e indígenas se movilizan hacia la capital para exigir al nuevo presidente la puesta en marcha de la reforma agraria y manifestar su rechazo al TLC entre Centroamérica y EE.UU. En Nicaragua, campesinos de Matagalpa se movilizan en abril en una marcha a la capital reclamando la entrega de tierras, y los ex trabajadores agrícolas de bananeras afectados por el pesticida Nemagón marchan hacia Managua exigiendo el respaldo del gobierno en su demanda contra varias transnacionales norteamericanas.

Las manifestaciones y procesos de convergencia popular –en las que se destaca la participación de movimientos campesinos– contra los procesos de liberalización comercial parecen ser uno de los ejes más dinámicos en la convergencia de las organizaciones de la sociedad civil mesoamericana que se oponen a la globalización neoliberal. Sin embargo, estas acciones aún se revelan limitadas para impedir la efectiva conclusión del CAFTA y para poner freno a la creciente represión (diferentes agresiones y desalojos de comu-

nidades zapatistas en Chiapas, continuación del Plan Antimaras en El Salvador) y militarización en los países (lanzamiento del Plan Nuevos Horizontes en Honduras).

En relación a esta última cuestión, sin dudas el dato más significativo y preocupante resulta el desenlace provisorio de la crisis haitiana, signada por el derrocamiento del presidente Jean Bertrand Aristide y la intervención militar internacional en Haití –promovida en el Consejo de Seguridad de la ONU por EE.UU. y Francia (ver artículo de Gerard Pierre-Charles en este número).

En el mes de marzo, organizaciones dominicanas, hondureñas y salvadoreñas llevan a cabo manifestaciones en sus respectivos países exigiendo el regreso de las tropas de Irak. En marzo se realiza el Tercer Encuentro Chiapaneco contra el Neoliberalismo para debatir contra la mercantilización de la biodiversidad, la militarización, el libre comercio y las represas. En Honduras el Bloque Popular inicia una recolección de firmas para exigir la no ratificación parlamentaria del CAFTA. En El Salvador, la Red Sintí Techan y la Unidad Ecológica Salvadoreña organizan sendas concentraciones contra el ALCA y el CAFTA. Por último cabe consignar la manifestación de carácter nacional en la capital guatemalteca en repudio al TLC México-Guatemala y al Plan Puebla Panamá (PPP).

Entre las múltiples negociaciones comerciales (Panamá-EE.UU., República Dominicana-EE.UU., Centroamérica-Canadá) que se inician y/o continúan en el cuatrimestre, el dato más destacado del afianzamiento de los planes hegemónicos imperiales en la región es la finalización en enero de las negociaciones entre Costa Rica y EE.UU. que allanan la participación de este país en el CAFTA (ver artículo de Carlos Aguilar en este *OSAL*). Por otra parte, el “relanzamiento” del PPP promovido por el presidente Fox es respaldado en la VI Cumbre del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla (presidentes de Centroamérica y México), realizada en Nicaragua. Por último, la firme voluntad del gobierno de Bush por lograr el apoyo de los gobiernos de la región a sus planes hemisféricos incidió en el adelantamiento de la Cumbre de las Américas (prevista en Buenos Aires para 2005), que tuvo lugar en la ciudad de Monterrey, México, a mediados de enero. Al cabo de la reunión, la aprobación de la Declaración de Nuevo León no logró ocultar las discrepancias entre la agenda de Washington centrada en la seguridad, la lucha contra el terrorismo y el ALCA, y la que mantienen algunos gobiernos latinoamericanos (Argentina, Brasil y Venezuela).

Conclusiones

Hemos intentando dar cuenta hasta aquí de los rumbos por los que transita y las características que adopta el proceso de disputa social y política abierto con la crisis del mode-

lo neoliberal forjado en la década de los noventa. Como hemos señalado, este proceso no resulta homogéneo y se expresa diferenciadamente en las regiones analizadas e incluso al interior de las mismas.

La evolución de la región norte –Mesoamérica y Caribe– en el cuatrimestre parece evidenciar una notoria consolidación de los procesos de liberalización comercial, que constituyen la piedra angular de los planes estratégicos de Washington. La convulsionada situación política en gran parte de la región andina es una manifestación de las fuertes tensiones sociales resultantes de los intentos de profundizar estos “nuevos” recetarios neoliberales que se traduce en la dificultad de estabilización de los regímenes políticos que impulsan estas políticas. El creciente descrédito popular de los gobiernos de Perú y de Ecuador podría desembocar, en un futuro próximo, en crisis políticas como las que ya se expresaron en Argentina (2001) y Bolivia (2003).

Por otra parte, el escenario abierto con el “octubre boliviano”, lejos de resolverse, parece también proyectar en el horizonte del país andino nuevas confrontaciones y posibles cambios. En el caso de Venezuela la batalla en torno al referéndum revocatorio presidencial para el próximo agosto cobrará sin lugar a dudas una dimensión regional. El desenlace de este proceso será fundamental en Latinoamérica frente a las aspiraciones hegemónicas de la Casa Blanca de impedir la consolidación de procesos políticos democrático-populares que cuestionen el modelo neoliberal. En la región sur los movimientos sociales enfrentan el gran desafío de aprovechar los intersticios abiertos con la pérdida de legitimidad del neoliberalismo para disputar el rumbo de los procesos en curso, manteniendo y profundizando su autonomía en relación a los gobiernos.

Más allá de las particularidades que presentan los procesos a nivel subregional, la generalización del libre comercio aparece en todos los países (con excepción del caso venezolano) como un eje privilegiado por las élites políticas y económicas para refundar el orden neoliberal y su legitimidad. Frente a esta tendencia los procesos de convergencia regional de los diferentes movimientos sociales que a escala nacional impugnan el modelo económico hegemónico y la mundialización neoliberal, guardan –como lo señala la cronología contra el “libre comercio” y la militarización que publicamos en este número– una importancia decisiva. La Conferencia Internacional de la Vía Campesina que se realizará en junio en San Pablo, Brasil, el Foro Social de la Triple Frontera (Argentina, Brasil, Paraguay) a finales del mismo mes, y la celebración del primer Foro Social Américas (Quito, Ecuador) en julio, aparecen así como nuevas oportunidades en este camino.

Notas

1 Para la elaboración del presente artículo se consideraron las cronologías del conflicto social y los informes elaborados sobre las mismas preparados por los integrantes del Equipo del OSAL. Agradecemos a ell@s y especialmente a Ivana Brighenti por sus sugerencias y observaciones así como por su dedicación en la revisión del texto.

2 Este país lidera en el Cono Sur las negociaciones y firmas de acuerdos de libre comercio en el último período.

3 En particular la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (FEPRINCO), la Cámara Paraguaya de Exportadores de Cereales y Oleaginosas y la Unión de Gremios de la Producción.

4 Casi el 50% de los conflictos relevados por el OSAL para el primer cuatrimestre de 2004 corresponden a esta disputa.

5 En el mismo sentido puede mencionarse la visita del Jefe del Comando Sur a la región en febrero, y en marzo tanto la reunión de mandos militares y policiales ecuatorianos, panameños y colombianos en Ecuador como la visita del presidente Lucio Gutiérrez a Colombia.

Región Sur

La “guerra de la soja” y el avance del neoliberalismo en el campo paraguayo

Marielle Palau*
y Regina Kretschmer**

* *Socióloga, Investigadora
y miembro del Consejo
de Coordinación
de BASE
Investigaciones Sociales.
Profesora
de la Universidad
Nacional
de Asunción
y de la Univesidad Católica
Nuestra Señora de la
Asunción.*

** *Antropóloga,
Investigadora Social
del Centro de Estudios
en Antropología Social
del Paraguay,
Investigadora adjunta
de BASE
Investigaciones Sociales.*

La lucha contra la soja por parte de organizaciones campesinas y sociales en general debe ser analizada en el marco de las contradicciones propias del modelo de desarrollo agro-exportador que históricamente ha caracterizado al Paraguay, así como también en el marco de la estructura agraria. Estos elementos de carácter estructural, en una coyuntura de aplicación de medidas de corte neoliberal –con un presidente de la República caracterizado por su discurso populista–, colocan la reacción y la lucha campesina contra el modelo sojero, es decir, contra la expoliación de las pequeñas propiedades campesinas y contra los severos daños al medio ambiente, en el ojo de la tormenta.

La creciente conflictividad en el campo a consecuencia de la soja

La problemática de la soja adquiere relevancia dentro de la agenda campesina en el año 2003, cuando el 8 de

enero muere el hijo de una dirigente campesina de la Coordinadora Nacional de Mujeres Campesinas Rurales e Indígenas (CONAMURI) como consecuencia de las fumigaciones aéreas con agrotóxicos (*Round Up*), al tiempo que otros integrantes de la familia, entre ellos siete niños, deben ser hospitalizados en el departamento de Itapúa.

A partir de este hecho, la conflictividad en el campo se ha agravado a consecuencia de la expansión masiva del cultivo de soja, conduciendo a crecientes confrontaciones entre campesinos y sojeros en todo el país. Adquiere su punto culminante en febrero del corriente año en la comunidad de Ypekua del departamento de Caagazú, cuando la policía acribilla a balazos un camión en el que se trasladaban campesinos para apoyar a un grupo que se oponía a la fumigación de cultivos de soja, asesinando a dos de ellos, hiriendo a más de una decena y deteniendo a más de cuarenta personas, quienes además denuncian torturas en las dependencias policiales. Amplios sectores sociales expresan su repudio contra la espiral de violencia, la actuación de la policía y la complicidad de la fiscalía.

A partir de ello, la MCNOC y la Plenaria Popular Permanente¹ convocan para el 16 de marzo a movilizaciones en todo el país, bajo el lema "Por la Vida y la Soberanía Nacional", para expresar su repudio a la utilización de los agrotóxicos y al modelo agro-exportador, así como para protestar contra los tarifazos –destinados a pagar la deuda externa– anunciados por el nuevo gobierno de Duarte Frutos y contra el tratado del ALCA. Estas protestas experimentaron una fuerte criminalización de parte del gobierno y de los medios masivos de comunicación, que inclusive denominaron a las organizaciones campesinas como "guerrilleras". Paralelamente, la Federación Nacional Campesina (FNC) llama también en marzo a una manifestación donde, a pesar de condenarse el hecho y de manifestarse en contra del uso de agrotóxicos, estos reclamos no forman parte de sus reivindicaciones en el marco de la marcha.

Estos hechos, que son solamente los de mayor visibilidad, evidencian la gravedad del problema ante las consecuencias y la profundidad que han alcanzado el modelo neoliberal y la reestructuración agraria, y colocan la problemática de la soja no sólo entre las banderas de las diferentes organizaciones campesinas, sino también, paulatinamente, en el debate público.

La reacción y la lucha campesina

Ante el agravamiento de la situación a partir del incremento de las denuncias de personas intoxicadas, cursos de aguas contaminados, cultivos campesinos rociados indirectamente por las fumigaciones aéreas con agrotóxicos, se puede observar de parte de los

“... las organizaciones campesinas más importantes van direccionando sus críticas al modelo agro-exportador en general y específicamente al sojero, trascendiendo los análisis puramente coyunturales para vincularlo con la necesidad de discutir un nuevo modelo de desarrollo alternativo a los planes y recetas del neoliberalismo”

campesinos y sus organizaciones tres tipos de reacciones: la aceptación pasiva del desalojo, la institucional y la acción directa.

En el primer caso, se trata de familias campesinas desalojadas por el poder del dinero. El ofrecimiento es en muchos casos en dólares, y en efectivo. Los precios suelen oscilar entre 500 y 1.700 dólares por hectárea, y se paga ya sea por tierra titulada, con título provisorio, o incluso por “derecheras”². No hay datos oficiales sobre la magnitud del problema. Una estimación puede ser hecha sobre la base de la expansión del cultivo y las áreas sobre las cuales el mismo se extendió. Según la Cámara Paraguaya de Exportadores de Cereales y Oleaginosas (CAPECO), entre el ciclo agrícola 2002-2003 y el 2003-2004 el área sembrada con soja aumentó en 350 mil has (otra estimación habla de 420 mil has) sobre un total de 1,9 millones. De éstas, puede estimarse que un tercio corresponden a tierras ganaderas reconvertidas a soja, ya sea por sus propietarios o dadas por estos en arriendo a sojeros. Otro tercio serían tierras no campesinas de distinto tipo de propietarios, obtenidas ya sea por compraventa o por arriendo. Pero al menos un tercio correspondería a tierras que anteriormente pertenecían a campesinos y que fueron adquiridas por sojeros. Esta estimación no tiene basamento en datos oficiales de ningún tipo, pero aún conservadoramente puede hablarse de que más de 100 mil has actualmente cultivadas con soja han pertenecido, en el ciclo agrícola previo al 2002-2003, a familias campesinas. Se trataría de unas 10 mil familias que habrían abandonado sus lotes y chacras (unas 70 mil personas), que ya no viven en el campo, que ya no producen comida, y cuya diversidad productiva se ha perdido.

Un segundo grupo de afectados ha reaccionado de una manera que podría definirse como “institucional”, a través de sus organizaciones, y en alianza con otras organizaciones sociales de la iglesia y de los gobiernos descentralizados. La MCNOC, con al menos tres obispos (y buena parte del clero de sus respectivas diócesis), no menos de una doce-

na de intendentes y varios representantes de Concejos Departamentales y Municipales, unidos a organizaciones de docentes, estudiantes, radios comunitarias y otras, formaron lo que dio en llamarse las Coordinadoras Departamentales por la Defensa de la Vida y el Medio Ambiente. Cuatro de ellas se encontrarían funcionando de manera activa. En formación se encuentra también una Coordinadora Nacional de Coordinadoras Departamentales. La adhesión de una parte de la iglesia jerárquica y de un número significativo de representantes de municipios da un respaldo especial a las organizaciones campesinas. En conjunto, se piensa realizar acciones de concientización a la población, denuncias documentadas de casos de violación a la normativa vigente por parte de los sojeros, así como un petitorio al gobierno, que sería presentado próximamente.

Otro tipo de reacción campesina es aquella que puede considerarse como "acción directa". Consiste en detener físicamente las tareas propias exigidas por el cultivo de la soja. Desde la disuasión directa a los propietarios de cultivar en determinadas parcelas y el bloqueo del paso al personal o vehículos que van a fumigar en caminos vecinales, hasta la quema de cultivos terminados y listos para la cosecha. Debe señalarse que nadie ha reconocido la autoría de la quema de los cultivos: tanto podría ser realizada por integrantes de algunas bases de organizaciones campesinas exasperadas por la situación, como resultado de la instigación de políticos que buscan ventajas oportunistas, como por los mismos propietarios para cobrar sus pólizas de seguro ante otras adversidades que deben afrontar³. Podrían haber sido realizadas además por mandato del propio gobierno para justificar acciones represivas contra los campesinos y sus organizaciones, ante la incapacidad del mismo por encontrar una salida democrática al problema.

Durante el año 2003, la problemática era asumida como una lucha "por la vida y el medio ambiente". Es a partir de 2004 cuando las organizaciones campesinas más importantes van direccionando sus críticas al modelo agro-exportador en general y específicamente al sojero, trascendiendo los análisis puramente coyunturales para vincularlo con la necesidad de discutir un nuevo modelo de desarrollo alternativo a los planes y recetas del neoliberalismo.

La MCNOC comprende el problema de la soja en el contexto del modelo económico de la agro-exportación y del neoliberalismo, ya que la soja corresponde a los intereses de unas pocas empresas transnacionales y no al pueblo paraguayo⁴. En este contexto se señala que el gobierno concibe al cultivo de la soja –en su gran mayoría perteneciente a extranjeros– como "inversión", mientras que a los campesinos se los percibe como "invasores".

La FNC se ha manifestado públicamente contra la fumigación masiva, contra "la sojización del país" y el uso indiscriminado de agrotóxicos. Sin embargo, sus banderas cen-

trales, tal como fueron planteadas en la marcha del pasado mes de marzo, continúan girando en torno a la industrialización del algodón y la reforma de la banca pública, en el marco de la necesidad de la implementación de una política que beneficie a las mayorías del país.

La CONAMURI ha adquirido mucho protagonismo en la denuncia y el seguimiento de un delito contra los responsables de la intoxicación de una familia y de la muerte del pequeño Silvino Talavera, de 11 años. Ha comprendido este hecho dentro de su lucha contra el modelo agro-exportador y para la defensa de la vida y la justicia, y no como un caso aislado. Consecuentemente, ha llevado adelante una amplia campaña de concientización de la opinión pública, tanto en el área rural y urbana como a través de debates, mesas redondas, charlas, etcétera. Algunos sectores sociales se han adherido. Gracias a esta campaña, CONAMURI ha aportado decisivamente a informar y sensibilizar a la opinión pública sobre los peligros que conlleva el uso masivo de agro-tóxicos, así como sobre las consecuencias sociales para la sociedad paraguaya. Este hecho adquiere aún mayor importancia por ser el primer caso que no solamente llegó a los tribunales, sino que ganó el juicio, aunque con una pena ínfima, constituyéndose en un antecedente importante.

Ahora bien, sin negar el peso diferenciado que las organizaciones campesinas han dado a esta temática, la misma está presente en cada una de ellas y todas la plantean como la consecuencia del modelo agro-exportador fomentado por las políticas neoliberales que, además de afectar directamente el derecho a la vida, agrava la problemática de la tierra dada la expulsión de los pequeños propietarios.

La concentración de tierra y el modelo agro-exportador

El modelo productivo paraguayo ha estado vinculado históricamente al modelo agro-exportador, el cual a través del tiempo ha ido cambiando paulatinamente de rubros, desde el tanino, la yerba mate y la madera, al algodón y la soja en las últimas décadas. Asimismo, es uno de los pocos países de la región donde nunca se ha realizado una reforma agraria, lo que explica una estructura de tenencia de la tierra de alta concentración. Paraguay es uno de los países que cuenta con la mayor desigualdad en cuanto a la distribución de tierras.

Esta concentración en la tenencia de la tierra y su permanente agudización es uno de los problemas centrales del país. En este sentido se puede mencionar, tomando en cuenta los datos del censo agropecuario de 1991⁵, que “nuestro país tiene alrededor de 300.000 explotaciones agrarias, de las cuales 30.000 (10%) pueden ser calificadas de empresaria-

les modernas de superficie mayor, 48.000 (16%) explotaciones campesinas eficientes, 26.000 (9%) explotaciones campesinas en situación de transición, 160.000 (53%) como periféricas y 36.000 (12%) como minifundios de residencias" (Halley Merlo, 2000).

Este autor señala asimismo que "en relación a la participación de las explotaciones 'grandes' o modernas y aquellas que conforman el segmento de la economía campesina tradicional respecto a la superficie total censada en 1991, las primeras representan el 91,3%, en tanto que las explotaciones campesinas en sus diversas formas ocupan a su vez el 8,7%". Esto estaría significando que el 10% de las explotaciones existentes detentan el 91,3% de la superficie censada en 1991.

Si bien la apertura democrática iniciada en febrero de 1989 generó expectativas de vastos sectores sociales hacia la implementación de una reforma agraria y el respeto al derecho a la tierra, en estos más de quince años no se han dado pasos significativos. Por el contrario, la concentración de la tierra aumentó y se constituye hoy en una de las más altas del continente.

Datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), indican que "en 1991 las fincas mayores a 1.000 has alcanzaban únicamente un 1% del total de las unidades agropecuarias, mientras que habrían estado cubriendo alrededor de un 82% de toda la superficie censada, un claro incremento frente al porcentaje que abarcaban en 1981 (78%)"⁶. La estructura de la tierra en el Paraguay es mantenida por poderosos sectores económicos y políticos que se benefician de la misma y basan su poder en ella. Es así que "de cuatro presidentes (de la República) de la era democrática, tres de ellos detentan enormes fracciones superiores a las 10 mil has; también, ministros de Agricultura provinieron del sector ganadero" (Fogel, 2001). Mientras que por otro lado se estima que serían entre 150 mil y 200 mil las familias campesinas sin tierra.

No se puede dejar de señalar que fue a partir de los años sesenta y sobre todo desde los años setenta, que el régimen dictatorial de Stroessner impulsó la modernización agraria de Paraguay, país caracterizado tradicionalmente por una economía de enclave. En el marco de la Revolución Verde⁷ se fortaleció la agricultura empresarial intensificando la concentración de tierras, tendencia que se acentúa con los megaproyectos de desarrollo, como las represas hidroeléctricas de Itaipú y Yacretá.

El interés del neoliberalismo en Paraguay se basa fundamentalmente en la exportación de ganado y de soja. Todos los proyectos de desarrollo están diseñados para facilitar la exportación de estos productos. Así, el actual presidente Nicanor Duarte Frutos ha enfatizado el interés de reimpulsar obras de infraestructura que mejoren las condiciones para la exportación de estos productos.

“... el cultivo masivo de soja ha agravado la situación del sector campesino poniendo en peligro no solamente su integridad física sino también su permanencia como sector social”

Consiguientemente, la disputa por los recursos naturales, sobre todo la tierra, se está agravando y aumenta la conflictividad en el área rural. La incorporación de amplios territorios al cultivo de soja profundiza aún más la concentración de la tierra en manos de empresas transnacionales, así como el despojo del campesino de su tierra. Los departamentos con mayor cantidad de superficie cultivada son Canindejú, Alto Paraná e Itapúa, todos con las tierras tropicales más fértiles de América Latina.

El documento del Banco Mundial (1998) establece los lineamientos básicos de esta política cuando dice, al referirse al desarrollo rural, que “se necesita una transformación radical de la estrategia rural para colocar a la agricultura en un camino de crecimiento sostenible [...]. La intensificación de la producción y del uso de la tierra conforman el corazón de tal estrategia [...]. Una mayor confianza en el mercado de la tierra es la mejor manera de que la tierra vaya a parar en manos de aquellos que le darán uso más productivo”. Más adelante menciona que se debe “proveer un marco adecuado para el crecimiento agrícola” y “promover la intensificación y la sostenibilidad del uso de la tierra”.

Estas transformaciones conducen a un proceso de reestructuración y desterritorialización que afecta a la sociedad paraguaya en su conjunto. En el corto plazo, acarrea una serie de implicancias directas: las mejores tierras del Paraguay, como la margen derecha del río Alto Paraná, se dedican al monocultivo de soja; los pocos montes que quedan⁸ corren el peligro de desaparecer; comunidades enteras están despoblándose y convirtiéndose en sojales; las escuelas cierran por falta de alumnos; pueblos enteros se intoxican y padecen de enfermedades crónicas; arroyos y pozos de agua se convierten en focos de intoxicación; animales domésticos mueren; y las cosechas de los pequeños agricultores se ven fuertemente afectadas, todo a causa del avance de los sojales y de las masivas fumigaciones de los monocultivos. Éstas son algunas de las consecuencias visibles de la plantación masiva de soja.

“Los campesinos se sienten acorralados por los sojales, hay como una psicosis en el campo a causa de la soja”: así expresa una líder campesina la impotencia que siente el campesinado ante el avance de los sojales y la impunidad con que se practican las fumigaciones. Sin dudas, el cultivo masivo de soja ha agravado la situación del sector campesino poniendo en peligro no solamente su integridad física sino también su permanencia como sector social.

La soja ha causado una expulsión masiva de la población rural. Gran cantidad de campesinos no han resistido, sino que han abandonado sus tierras, dejándose seducir por el dinero ofrecido en dólares. Si los campesinos se resisten a la venta de su lote, los empresarios aplican la siguiente política para expulsarlos: en los puntos cardinales de un asentamiento compran lotes, desde donde empiezan a rociar con agrotóxicos los terrenos lindantes. Concientemente y con impunidad se usan las fumigaciones como estrategia para romper la resistencia del campesinado. En muchos casos, aunque los campesinos no quieren vender sus tierras, no ven otra alternativa ante los graves problemas que conllevan las masivas fumigaciones, y venden sus lotes.

Sin duda, uno de los desafíos de las comunidades campesinas consiste en resistir a la inicial venta de lotes. Las comunidades con un bajo nivel organizativo están más expuestas, pero también aquí se puede observar un proceso de organización para crear cohesión interna y buscar mecanismos para impedir el avance de la soja sobre sus tierras; en algunos lugares, es la juventud la que adquiere protagonismo en esta tarea.

En diferentes departamentos se han dado casos aislados donde los pobladores han defendido sus comunidades impidiendo las labores del cultivo de soja y las fumigaciones; así, cierran rutas o se enfrentan a la maquinaria de fumigaciones. En algunos lugares estas acciones tienen un carácter espontáneo de resistencia, mientras que en otros ya adquieren formas más organizadas. Algunos lugares se han declarado como “regiones libres/liberadas de soja”.

Construir estrategias unificadas

La ofensiva de la soja ha llevado a una discusión sobre las estrategias a utilizar, ya sea a nivel de las bases como de los dirigentes. Se ha visto que las bases han reaccionado de forma espontánea para defender sus tierras y comunidades. La cuestión consiste ahora en analizar cómo avanzar en la defensa de la propia tierra y cómo enfrentar la ofensiva de los sojales, con el fin de contrarrestar los objetivos del modelo neoliberal.

Esta situación se desarrolla en el marco del gobierno de Nicanor Duarte Frutos, caracterizado por un fuerte discurso populista y por el cumplimiento de las medidas neoliberales dictadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM). Populismo y neoliberalismo entrarán en contradicción a muy corto plazo. Mientras tanto sigue gozando de una relativa popularidad, a pesar de que desde su asunción en agosto de 2003 tuvo como opositores a una parte del movimiento campesino y a sectores populares aglutinados en la Plenaria Popular Permanente.

Frente a este panorama, las organizaciones campesinas se encuentran ante el desafío de actuar en diferentes niveles/frentes. Así, hay plena conciencia de que se deben fortalecer las organizaciones de base e implementar modelos alternativos a fin de contrarrestar el avance del neoliberalismo sobre las tierras campesinas.

Otra estrategia consiste en la recuperación de territorios perdidos (o invadidos) y la implementación de modelos alternativos de comunidades. Durante el mes de abril se ha iniciado una serie de ocupaciones en el Departamento de San Pedro, lo que anuncia un escenario político en el que las ocupaciones de tierra se extenderán a todo el país. En diferentes departamentos se están llevando adelante discusiones sobre la creación de organizaciones de Sin Tierras, ya que se requiere una mayor organización y coordinación entre las ocupaciones.

Por el otro lado, dado que las organizaciones campesinas asumen el modelo agro-exportador y el cultivo de la soja como un problema nacional, vinculado a la política de desarrollo o a la falta de ésta, plantean –y de hecho ya han comenzado– llevar a la población urbana el debate sobre las implicancias del modelo neoliberal para el conjunto de la sociedad paraguaya. La reestructuración agraria impulsada por el FMI y el BM –y seguida al pie de la letra por Nicanor D. Frutos– ahondará las consecuencias para todos los sectores sociales, motivo por el cual la necesidad de fortalecer las organizaciones urbanas se constituye en otro de los desafíos del momento.

El escenario en el campo de las organizaciones campesinas, sin embargo, no está caracterizado por la unidad. El Congreso Democrático del Pueblo⁹ no ha podido volver a conformarse. Hoy las principales fuerzas campesinas actúan en forma independiente, implicando un proceso de retroceso en la unidad frente al protagonismo y la fuerza que tuvieron durante 2002. Las alianzas que se van tejiendo están protagonizadas por la MCNOC, CONAMURI, organizaciones sociales y gobiernos locales, destacándose la incorporación de sectores de la iglesia católica, pero sin la presencia de la Federación Nacional Campesina.

Las diferencias entre las organizaciones campesinas no se dan en las reivindicaciones sino en el peso que se le asigna a cada una de ellas. Mientras la FNC enfatiza en el

modelo de desarrollo, la banca pública y la industrialización del algodón, la MCNOC –sin negar las anteriores– hace hincapié además en la reforma agraria, la política económica del gobierno, la criminalización de las luchas sociales, y contra las medidas neoliberales. A partir de esta realidad, las estrategias deberían apuntar a consolidar la unidad del movimiento campesino.

Las organizaciones campesinas analizan que el conflicto por la tierra se acentuará en el futuro inmediato y tendrá, probable y previsiblemente, un carácter cada vez más violento, lo que requerirá la superación de las actuales limitaciones, centradas fundamentalmente en la dispersión y la falta de recursos y de espacios de unidad entre las principales fuerzas campesinas.

Bibliografía

Banco Mundial 1998 *Paraguay*, Septiembre. <www.bancomundial.org>

Fogel, Ramón 2001 *Las luchas campesinas: Tierra y condiciones de producción* (Asunción: CERI).

Halley Merlo, Hugo 2000 *Revisión comparativa de los proyectos de nueva legislación agraria en relación al proyecto SENTDER*, Programa de Fortalecimiento de las Instituciones Democráticas II.

Notas

1 La MCNOC es la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas, una de las organizaciones más importantes del país. La Plenaria Popular Permanente –formada en el año 2002– es un espacio de unidad de acción de organizaciones populares (campesinas, de trabajadores, barriales y juveniles) y organizaciones políticas de izquierda. En ese mismo año, conjuntamente con el Frente por la Defensa de los Bienes Públicos (del cual es parte la Federación Nacional Campesina), conforman el Congreso Democrático del Pueblo que logra la victoria contra las privatizaciones.

2 O sea, meras ocupaciones de tierra sin que el Instituto de Bienestar Rural (IBR) haya iniciado trámites para su correspondiente legalización y sin mensura oficial.

3 Inminente aplicación de impuestos a la producción y/o exportación de soja; venta anticipada (a futuro) de la producción a precios muy inferiores a los actuales del mercado internacional; paro de camioneros por reclamos sobre fletes; paro de trabajadores en el puerto de Paranaguá; coimas solicitadas por autoridades políticas; gastos de “custodia” de cultivos (a policías o matones), y otros. Estas adversidades habrían provocado ya el suicidio –según testimonios orales de dirigentes campesinos– de al menos 23 sojeros sólo en el Departamento de Alto Paraná.

4 La MCNOC congrega a los sectores de los pequeños agricultores, los sin-tierra, la mujer, los jóvenes. Está organizada en 14 de los 17 departamentos a nivel nacional. En cada departamento existe una Mesa Coordinadora Departamental.

5 No existen fuentes más recientes dado que no se volvió a realizar el Censo Agrícola después de esta fecha.

6 Para esta estimación se supuso que en cada estrato de tamaño inferior a 1.000 has el tamaño promedio en 1991 era similar al de 1981. La superficie del estrato más grande se obtuvo por diferencia. Dado que en 1981-1991 hubo un proceso de subdivisión de minifundios, es probable que los tamaños promedio hayan disminuido en los estratos pequeños, de modo que la presente estimación probablemente subestima el aumento de la concentración y de la desigualdad.

7 Propuesta estratégica de modernización agraria que contempla la introducción de tecnología: mecanización, semillas mejoradas y uso de agrotóxicos en el marco del fomento del monocultivo de renta.

8 Sólo 900 mil hectáreas, cuando existían 9,5 millones hace cincuenta años.

9 En el año 2002 se constituyó en el espacio de unidad de acción más importante de la transición y permitió detener el proceso de privatizaciones.

[cronología enero-abril 2004]

ENERO

VIERNES 9 El Fondo Monetario Internacional (FMI) confirma la aprobación de la primera revisión del acuerdo para destrabar desembolsos pendientes por unos 600 millones de dólares. Se anexa a la carta de intención original un documento que contiene una adecuación de algunos compromisos a plazos más precisos, como las compensaciones bancarias por la indexación asimétrica y la conformación del sindicato de bancos que debe asesorar en el proceso de reestructuración de la deuda en default.

Piqueteros del Frente Único de Trabajadores Desocupados y Ocupados (FUTRADEyO), del Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD) 26 de Junio, de la Unión de Trabajadores Piqueteros (UTP) y de la Unión de Trabajadores Desocupados y Changarines (UTODCH) marchan en la Ciudad de Buenos Aires (BA) y en Salta en reclamo de la libertad de los piqueteros detenidos 50 días antes tras los incidentes producidos en noviembre por la toma de las plantas petroquímicas de Refinor y Tecpetrol, en General Mosconi.

MARTES 13 Néstor Kirchner se reúne con George W. Bush, en el marco de la Cumbre de las Américas, en Monterrey, México. Argentina garantiza que seguirá cumpliendo el programa pactado con el FMI pero puntualiza que no hará cambios en la propuesta para los acreedores privados, que contempla una quita del 75%. Bush reitera que EE.UU. respalda la negociación con el organismo y advierte que el país tiene que dejar en claro que va a cumplir con los compromisos acordados.

MARTES 20 La Justicia, a pedido del gobierno, abre la investigación sobre la tortura impartida en los cursos de comando de las Fuerzas Armadas, a raíz de unas fotos que evidencian las vejaciones realizadas en un campo del ejército en Córdoba, entre 1986 y 1990. El gobierno de la Provincia de Buenos Aires (PBA) dispone la destrucción de las picanas compradas entre 1993 y 1996.

MIÉRCOLES 21 Los 10 piqueteros detenidos en la localidad de Tartagal (Salta) recuperan su libertad. Siete quedan procesados por los daños ocurridos en la empresa Tecpetrol.

VIERNES 23 Varios funcionarios del ex gobierno de la Alianza son procesados por haber participado de sobornos por millones de pesos para la aprobación de la ley de reforma laboral, en el año 2000.

LUNES 26 Más de 15 mil manifestantes, convocados por agrupaciones piqueteras, partidos de izquierda y organismos de derechos humanos, marchan hasta la Plaza de Mayo para exigir esclarecimiento y el encarcelamiento de los responsables materiales y políticos de la explosión de una bomba en medio de la movilización en que se recordaba el segundo aniversario de las jornadas del 19 y 20 de diciembre.

Más de 1.000 piqueteros del MTD Aníbal Verón cortan el puente Pueyrredón –como todos los meses– al cumplirse 19 meses de los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki.

FEBRERO

VIERNES 6 Al grito de “Justicia e Intervención”, más de 10 mil personas marchan desde La Banda hasta la capital de Santiago del Estero para reclamar el esclarecimiento de los homicidios de Leyla Bashier Nazar y Patricia Villalba, al cumplirse el primer año del doble crimen de La Dársena.

Unas 5 mil personas convocadas por la Corriente Clasista y Combativa (CCC) marchan por las calles de Libertador General San Martín (Jujuy) para rechazar la sobrefacturación de la energía eléctrica. Tres manifestantes son detenidos, golpeados y amenazados de muerte por personal de la Brigada de Investigación de esa ciudad.

Dirigentes del Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD) y del Movimiento Sin Trabajo Teresa Vive (MST TV) toman el hall del Ministerio de Trabajo (BA) y comienzan una huelga de hambre por tiempo indefinido en demanda de la inmediata restitución de 250 mil planes sociales dados de baja.

MARTES 10 El ministro de Economía Roberto Lavagna se reúne en Miami con la cúpula del FMI y acuerdan la conformación del sindicato de bancos que tendrá a su cargo colocar la nueva deuda con quita del 75%.

JUEVES 12 Miles de piqueteros convocados por la Asamblea Nacional de Trabajadores (ANT) marchan hasta el Congreso en contra del proyecto de reforma laboral que impulsa el gobierno nacional. El MIJD y el MST TV levantan la huelga de hambre y el campamento que mantienen en el Ministerio de Trabajo y se unen a la marcha. Entregan en el Congreso un proyecto de ley laboral “a favor de los obreros y no de la patronal”.

VIERNES 13 José “Pepino” Fernández, dirigente piquetero de Tartagal, es detenido en Campo Durán junto a 9 militantes, acusados de “entorpecimiento al transporte terrestre contra Refinor SA”.

JUEVES 19 El Bloque Piquetero Nacional, el MIJD, la Coordinadora de Trabajadores Desocupados (CTD) Aníbal Verón, el MST TV, el Frente de Trabajadores Combativos (FTC) Mesa Nacional y partidos de izquierda, entre otros, realizan una jornada nacional de protesta en rechazo a la nueva ley laboral enviada por el Poder Ejecutivo al Parlamento, y demandan la restitución de 250 mil planes de empleo dados de baja. En el interior se registran unos 40 piquetes en 16 provincias.

JUEVES 26 El FMI da por cumplidas las metas comprometidas en la carta de intención, presiona para que se avance en la renegociación de los 81.200 millones de dólares de default y condiciona la aprobación definitiva de la revisión a esta cuestión.

MARZO

LUNES 1 La Asociación de Maestros y Profesores de La Rioja, los docentes de Santiago del Estero, la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN), el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación Fuegoquina (SUTEF) y los docentes de San Luis no inician el ciclo lectivo y realizan paros en sus respectivas provincias en demanda del pago de deudas salariales y de mejoras edilicias.

MARTES 2 La Cámara de Diputados aprueba, por amplia mayoría, la nueva reforma laboral que reemplaza a la ley sancionada en el año 2000 y que está cuestionada por la Justicia por el pago de sobornos a algunos legisladores. Los cambios en la ley se refieren al período de prueba, despidos sin causa, contribuciones patronales, convenios, servicios esenciales, crisis, mediación y preaviso.

MIÉRCOLES 3 Unos 5 mil piqueteros del Polo Obrero, del MIJD, de Barrios de Pie, del Movimiento Territorial de Liberación (MTL), del MST TV y la CTD Aníbal Verón, entre otros, se movilizan hasta la Casa de Gobierno de la PBA, en La Plata, para reclamar por planes sociales dados de baja.

JUEVES 4 Empleados municipales marchan con motoniveladoras y camiones asfálticos hasta la Legislatura de San Luis para reclamar el pago de sus sueldos. Usan sus vehículos y arrasan a patrulleros, motos y camiones celulares de la policía. Son reprimidos con un saldo de 5 heridos y 8 detenidos.

VIERNES 5 La gobernadora de Santiago del Estero, Mercedes Nina Aragonés, designa a su esposo Carlos Juárez como ministro de Economía de la provincia, entre-

gándole así los mismos fueros por los que ella consiguió liberarse de 2 causas federales. Familiares, amigos y vecinos de las víctimas del doble crimen de La Dársena marchan para reclamar justicia y se concentran frente a la División Investigaciones de la Policía, donde la Justicia encontró días atrás unos 40 mil legajos de espionaje ilegal. Luego, se movilizan hasta la casa de los Juárez para manifestar su rechazo.

LUNES 8 La Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (UNTER), la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECH), varios gremios docentes de Santa Fe y la Asociación Gremial de Magisterios de Entre Ríos (AGMER) no comienzan las clases en demanda del pago de salarios atrasados, entre otros puntos.

MARTES 9 Manifestantes convocados por la Autoconvocatoria No al Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) marchan desde la casa de gobierno hasta la cancillería (BA) para oponerse al ingreso del país a dicho tratado y al pago de más de 3 mil millones de dólares al FMI. También se realizan marchas en Resistencia (Chaco) y en Jujuy.

El presidente Néstor Kirchner y Anne Krueger acuerdan telefónicamente 4 puntos para encarar el proceso de la reestructuración de la deuda con los privados. En cuanto al sindicato de bancos, el gobierno podrá remover a una entidad sólo si existe una causa justificada por incumplimiento de contrato. La función de los bancos no será negociar con los acreedores, como pide el FMI, sino asesorar al gobierno. Se fija julio como fecha límite para llegar a un acuerdo con los acreedores privados. Argentina paga 3.072 millones de dólares que le debía al organismo.

Unas 10 mil personas marchan y realizan un cacerolazo en San Luis para exigir la renuncia del gobernador Alberto Rodríguez Saá. Los empleados municipales siguen sin cobrar y la iglesia continúa rechazando la intervención de los institutos administrados por congregaciones católicas. Padres y docentes ocupan 15 escuelas en contra del nombramiento de directores normalizadores.

MIÉRCOLES 10 El delegado permanente del FMI en BA, John Dodsworth, firma la nueva carta de intención con Roberto Lavagna que incluye, entre otras cosas, compromisos en materia fiscal, como la ley de coparticipación y la eliminación gradual del impuesto al cheque, la renegociación de contratos con las privatizadas y el saneamiento del sistema bancario.

MARTES 16 Néstor Kirchner e Inacio Lula Da Silva firman en Brasil la "Declaración sobre la cooperación para el crecimiento económico con equidad". El punto más importante es aquél en el que acuerdan conducir las negociaciones con los organismos multilaterales de crédito asegurando un superávit primario y otras

medidas de política económica que no comprometan el crecimiento y garanticen la naturaleza sustentable de la deuda.

Unas 6 mil personas convocadas por el Polo Obrero, el MTL, la CTD Aníbal Verón, los MTD Aníbal Verón, el MIJD, el MST TV y la FTC, entre otras 23 organizaciones, bloquean los ingresos a La Plata (PBA) en reclamo por las bajas en el Plan Barrios Bonaerenses. Simultáneamente realizan unos 20 cortes en el interior de la provincia.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) comienza un paro de actividades por 72 hs en hospitales y dependencias públicas de BA en reclamo de una mejora salarial de 250 pesos.

JUEVES 18 Unos 15 mil manifestantes convocados por la Multisectorial marchan hasta la casa de gobierno de San Luis en reclamo de la renuncia del gobernador. Un grupo avanza sobre las vallas que impiden el acercamiento al edificio al enterrarse de la detención, por parte de la policía, de la caravana de 300 autos proveniente de Villa Mercedes para sumarse a la movilización.

VIERNES 19 El juez federal Rodolfo Canicoba Corral declara la inconstitucionalidad de los indultos firmados por el ex presidente Carlos Menem.

SÁBADO 20 El Ministerio de Seguridad de la PBA pone en marcha el Plan Director Provincial de Seguridad que contempla, entre otras cosas, la creación de cuerpos policiales con efectivos retirados llamados "seguridad municipal" que cumplen con tareas de apoyo a los efectivos de la policía regular y realizan tareas de vigilancia en dependencias municipales.

Unos 10 mil manifestantes convocados por el Comité Argentino de Solidaridad con Irak, Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA), la CCC, centros de estudiantes universitarios y secundarios, partidos políticos, el MST TV, el MTL, Barrios de Pie y el MTD Aníbal Verón, entre más de 100 organizaciones, marchan hacia la embajada de EE.UU. para expresar su repudio a la guerra en Irak y exigir el fin de la ocupación.

LUNES 22 El FMI aprueba la segunda revisión del acuerdo con el voto favorable de todos los países del G7.

MIÉRCOLES 24 En el 28° aniversario del golpe cívico-militar de 1976 el presidente Kirchner concurre al Colegio Militar de la Nación, donde encabeza una ceremonia en la que ordena el retiro de los retratos de los dictadores Videla y Bignone, ex directores del Colegio. Luego, formaliza la creación del Museo de la Memoria en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), el principal centro de detención clandestina. En su discurso pide perdón de parte del esta-

do “por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia por tantas atrocidades”. Participan del acto Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (H.I.J.O.S.), Madres de Plaza de Mayo - Línea Fundadora, Abuelas de Plaza de Mayo, los familiares y miembros de otros organismos de derechos humanos y agrupaciones piqueteras como la Federación de Tierra y Vivienda (FTV) Barrios de Pie, el MTD Resistir y Vencer y el MTD Evita y Peronismo Militante, entre otros. Por su parte, unas 60 mil personas convocadas por más de 200 organizaciones, entre partidos de izquierda, organismos de derechos humanos, piqueteros y estudiantes, marchan desde el Congreso hasta la Plaza de Mayo para repudiar el golpe militar de 1976.

VIERNES 26 Comienza el congreso del Partido Justicialista (PJ) en Parque Norte (BA). El gobernador de Jujuy es elegido como nuevo presidente del partido. Néstor Kirchner no asiste al encuentro y pide la renuncia a sus cargos partidarios de los gobernadores de Chubut y Santa Cruz

Unas 40 mujeres piqueteras ocupan la playa de tanques de petróleo crudo de la empresa TERMAP, en Caleta Olivia (Santa Cruz), en demanda de puestos de trabajo. También levantan una carpa que impide el acceso al predio.

DOMINGO 28 En Santiago del Estero unas 10 mil personas convocadas por organizaciones intermedias y los familiares y amigos del doble crimen de La Dársena marchan hasta la plaza Libertad para apoyar el anuncio de intervención federal de la provincia.

LUNES 29 El gobernador de Jujuy renuncia a la presidencia del PJ. También lo hacen los gobernadores de Santa Fe, San Juan, Formosa y La Rioja, el vicegobernador de Corrientes y el senador Miguel Pichetto.

Piqueteros de la CCC realizan decenas de cortes de ruta y movilizaciones en distintos puntos del país en reclamo de que el gobierno nacional inscriba como beneficiarios de los planes Jefes y Jefas de Hogar a unas 900 mil personas que se encuentran en lista de espera y revise aquellos planes dados de baja.

MARTES 30 Los Juárez –la gobernadora Nina Aragonés y su esposo– realizan un acto frente a la Casa de Gobierno en Santiago del Estero, en el que participan alrededor de 10 mil personas, para rechazar la intervención federal de la provincia dispuesta por el Poder Ejecutivo Nacional.

MIÉRCOLES 31 El gobierno dicta la reglamentación del programa de racionalización de exportaciones de gas que permitirá la salida de fluido al exterior en función de la necesidad de abastecimiento del mercado interno.

Viceministros americanos inician una ronda de negociaciones informales del ALCA para intentar alcanzar acuerdos en materia agrícola entre EE.UU. y el Mercado Común del Sur (MERCOSUR). La dificultad gira en torno a los subsidios agrícolas que EE.UU. aplica a su producción y que perjudican sobre todo a Argentina y Brasil, y que se niega a eliminar si no es en el marco de la Organización Mundial de Comercio (OMC). Al no existir acuerdo en el tema de los subsidios, los representantes de los países deciden suspender sin plazos la reunión que iba a desarrollarse el 21 de abril en Puebla, México.

El Senado convierte en ley el proyecto que regula el ingreso al país de tropas extranjeras y la salida de tropas nacionales. Así, el Congreso retoma el control sobre los ejercicios militares que realizan con otros países en el territorio nacional.

Personal no médico nucleado en ATE paraliza cinco hospitales de la PBA en reclamo de un aumento de 250 pesos y el pase a planta permanente de 1.800 profesionales.

ABRIL

JUEVES 1 Se realizan actos en todo el país para reclamar el fin de la impunidad y de la ola de robos y secuestros, respondiendo a una convocatoria hecha por Juan Carlos Blumberg, padre del joven Axel secuestrado y asesinado días atrás. Frente al Congreso se reúnen unas 150 mil personas.

El Senado aprueba la intervención federal de Santiago del Estero, a cargo de Pablo Lanusse, por la violación sistemática de derechos y garantías por parte del poder provincial y el cuestionamiento al poder judicial. La gobernadora y su marido Carlos Juárez quedan detenidos con prisión domiciliaria.

Unas 30 mil personas convocadas por el PJ de San Luis marchan hasta la Casa de Gobierno provincial en apoyo al gobernador Alberto Rodríguez Saá. Por la noche, unas 15 mil personas pertenecientes a la Multisectorial se movilizan para exigir su renuncia.

VIERNES 2 Trabajadores de las 5 líneas de subte y Premetro paralizan sus actividades por tiempo indeterminado en rechazo a la decisión de Metrovías –con el acuerdo de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), gremio de los trabajadores– de incorporar máquinas expendedoras de boletos y para reclamar el cumplimiento de la reducción de la jornada laboral de 6 hs. La empresa envía 50 telegramas de despido y desafuero al personal que adhirió a la medida.

El gobernador Felipe Solá decreta el estado de emergencia para la seguridad de la PBA que prevé un refuerzo de los efectivos, la intensificación del siste-

ma de patrullaje y el envío de camionetas policiales a las zonas con mayor índice de delitos.

SÁBADO 3 El MERCOSUR firma con la Comunidad Andina de Naciones (CAN) –Colombia, Venezuela y Ecuador– un acuerdo que establece una zona de libre comercio de América del Sur.

El gobierno alcanza un acuerdo con las productoras de petróleo y gas del país que establece que las industrias irán sufriendo aumentos paulatinos del precio del gas hasta alcanzar un 50% de alza en julio del año próximo y, a cambio, las petroleras garantizarán todo el suministro que se pueda transportar por la red nacional hasta 2006, asegurando el abastecimiento de los hogares.

LUNES 5 Los delegados de las 5 líneas de subterráneos, Metrovías y los dirigentes de la UTA llegan a un acuerdo que contempla la reincorporación de unos 100 despedidos, el respeto de la jornada laboral de 6 hs y la discusión sobre la colocación de las máquinas expendedoras de boletos.

MARTES 6 Los trabajadores petroleros de Santa Cruz levantan la medida al arribar a un acuerdo salarial con las cámaras empresariales del sector consistente en un aumento de 440 pesos bajo la figura de “ayuda alimentaria”.

MIÉRCOLES 7 El Congreso aprueba el proyecto de ley que establece el aumento de penas para los robos cometidos con armas, convirtiéndolos en no excarcelables.

Argentina y Venezuela firman en Caracas un convenio integral de cooperación y complementación que facilitará la importación de fuel oil y gasoil con destino a las usinas térmicas del país, para paliar el potencial desabastecimiento de gas.

JUEVES 8 Alrededor de 19 mil personas marchan por las calles de Gualeguay (Entre Ríos) en demanda de justicia y mayor seguridad por el asesinato de un joven de 17 años.

MARTES 13 León Carlos Arslanián asume como nuevo ministro de Seguridad de la PBA.

MIÉRCOLES 14 El Senado convierte en ley el agravamiento de las penas a la portación ilegal de armas de guerra, convirtiéndola en un delito no excarcelable.

JUEVES 15 El gobierno argentino se abstiene en la votación contra Cuba en la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

LUNES 19 El gobierno lanza el Plan Estratégico de Justicia y Seguridad 2004-2007 como respuesta a la crisis de inseguridad. Las principales medidas son la creación

de una fuerza federal de seguridad compuesta por agentes de la policía federal, prefectura y gendarmería; la compra de patrulleros y pistolas para los efectivos, y el establecimiento de la imputabilidad penal a partir de los 14 años (antes era a partir de los 16).

El nuevo ministro de Seguridad de la PBA descabeza la cúpula de la Policía Bonaerense.

MIÉRCOLES 21 Argentina y Bolivia suscriben un acuerdo que habilita la importación de 4 millones de metros cúbicos diarios de gas desde Bolivia. El gobierno boliviano reclama como condición que el gas no sea reenviado a Chile.

JUEVES 22 Juan Carlos Blumberg convoca a más de 50 mil personas frente a los Tribunales, en BA, en reclamo de justicia. Entrega un petitorio a la Corte Suprema donde exige que se declare una “emergencia judicial”. Piqueteros del MIJD y del Polo Obrero participan del acto sin portar ningún tipo de identificación partidaria, a pedido de Blumberg, y luego marchan hasta la Plaza de Mayo donde realizan un acto en el que participan 2 mil piqueteros.

El antiguo secretario privado de un ex ministro de Carlos Menem declara en el juicio oral por enriquecimiento ilícito contra la ex funcionaria María Julia Alsogaray, y asegura que varios funcionarios menemistas cobraron sobresueldos en negro de hasta 50 mil dólares.

SÁBADO 24 La ministra de Relaciones Exteriores de Chile se reúne con el canciller Rafael Bielsa y el titular de Planificación y alcanzan un acuerdo en el que ambos países se comprometen a crear una comisión de trabajo bilateral para encontrar una salida urgente al problema energético.

LUNES 26 Los jueces Norberto Oyarbide y el federal Urso ordenan la captura internacional del ex presidente Carlos Menem para que venga al país a declarar en la causa en la que se lo investiga por la omisión maliciosa de cuentas y bienes en su declaración jurada, y por no presentarse por cuarta vez a declarar como imputado en la causa por el supuesto pago de sobrepagos por la construcción de 2 cárceles.

MIÉRCOLES 28 Unos 5 mil maestros de la Asociación Sanluisense de Docentes Estatales (ASDE), apoyados por la Multisectorial, marchan y ocupan la Legislatura de San Luis en rechazo al proyecto oficial que prevé derogar el Estatuto Docente. Los policías de la comisaría primera de la capital colaboran con la ocupación. A pesar de la movilización, los legisladores derogan el estatuto en una sesión que dura tres minutos. Fuera del recinto, los manifestantes realizan asambleas y cortan rutas. Además, dos comisarías se encuentran acuarteladas en repudio al ascenso de personal ajeno a la fuerza.

El gobierno lanza un programa que premia el uso racional de energía en el consumo domiciliario y en el comercio, con dinero acreditado en las facturas del servicio. Se disponen castigos, en forma de recargo, para quienes usen más energía que en el mismo período de 2003.

La Justicia dicta un fallo en el que sostiene que interrumpir el funcionamiento de los medios de transporte es un delito, aun cuando se haga en defensa de derechos constitucionales.

ATE realiza un paro nacional con movilizaciones en todo el país en reclamo de un aumento de 250 pesos –negado por el Ministerio de Economía– y el blanqueo de empleados en negro.

JUEVES 29 Más de 15 mil personas marchan por Santa Fe al cumplirse un año de las inundaciones en la provincia, y reclaman la condena social de los responsables directos de la catástrofe del río Salado.

El gobernador de San Luis ordena reprimir a los maestros que se encuentran ocupan el edificio de la Legislatura. Unas 30 mil personas marchan hasta la Plaza Independencia exigiendo la intervención federal de la provincia. Mientras tanto, el ministro de Educación nacional se reúne con la conducción del gremio docente y acuerdan una propuesta de intervención que contempla retrotraer el conflicto a la situación previa a la derogación del estatuto docente.

VIERNES 30 Unas 2 mil personas de la Multisectorial de San Luis rodean el edificio del Poder Ejecutivo con piquetes en las 4 esquinas en demanda de la renuncia del gobernador. Son reprimidos violentamente por la policía por más de 4 hs y por todo el centro de la ciudad, con un saldo de 15 heridos y 55 detenidos.

GLOSARIO DE SIGLAS

AGMER	Asociación Gremial de Magisterios de Entre Ríos
ALCA	Área de Libre Comercio de las Américas
ANT	Asamblea Nacional de Trabajadores
ASDE	Asociación Sanluisiense de Docentes Estatales
ATE	Asociación de Trabajadores del Estado
ATECH	Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut
ATEN	Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén
BA	Ciudad de Buenos Aires
CAN	Comunidad Andina de Naciones
CCC	Corriente Clasista y Combativa
CTA	Central de los Trabajadores Argentinos
CTD	Coordinadora de Trabajadores Desocupados
ESMA	Escuela de Mecánica de la Armada

FMI	Fondo Monetario Internacional
FTC	Frente de Trabajadores Combativos
FTV	Federación de Tierra y Vivienda
FUTRADEyO	Frente Único de Trabajadores Desocupados y Ocupados
H.I.J.O.S.	Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio
MERCOSUR	Mercado Común del Sur
MIJD	Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados
MST TV	Movimiento Sin Trabajo Teresa Vive
MTD	Movimiento de Trabajadores Desocupados
MTL	Movimiento Territorial de Liberación
OMC	Organización Mundial de Comercio
ONU	Organización de las Naciones Unidas
PBA	Provincia de Buenos Aires
PJ	Partido Justicialista
SUTEF	Sindicato Único de Trabajadores de la Educación Faguina
UNTER	Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro
UTA	Unión Tranviarios Automotor
UTODCH	Unión de Trabajadores Desocupados y Changarines
UTP	Unión de Trabajadores Piqueteros

Realizada por María Celia Cotarelo (PIMSA – Programa de Investigación sobre el Movimiento de la Sociedad Argentina) y el Observatorio Social de América Latina (OSAL).

Relevamiento y sistematización OSAL a cargo de Florencia Ayala.

Fuentes: diarios Página 12, Clarín, La Nación y Crónica.

[cronología janeiro-abril 2004]

JANEIRO

6ª FEIRA 02 Cerca de 80 famílias lidadas ao Movimento dos Agricultores Sem-Terra (MAST) ocuparam uma fazenda em Teodoro Sampaio, no Pontal do Paranapanema, em São Paulo (região sudeste). A propriedade é alvo de processo de desapropriação pelo governo de São Paulo, que há quinze dias promulgou uma lei que regulariza áreas de até 500 hectares consideradas devolutas.

3ª FEIRA 06 Greve dos médicos peritos do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) completou um mês. Segundo o Ministério da Previdência Social, cerca de 100 mil perícias médicas deixaram de ser realizadas em todo o país. Os grevistas reivindicam concurso imediato para contratação de novos profissionais e um plano de carreira próprio, a exemplo dos auditores da previdência. O ministro da previdência social, Ricardo Berzoini, afirmou que a decisão de liberar recursos para encaminhar a pauta de reivindicações terá que ter o aval do Ministério do Planejamento.

Produtores de arroz do estado de Roraima (região Norte) bloquearam pontes e todas as rodovias de acesso à capital do estado, Boa Vista, ocuparam a aldeia de Sumaru, onde existe uma missão religiosa e fizeram três padres reféns. O protesto foi Contra a homologação feita pelo governo federal de uma área indígena (Raposa Serra do Sol). A maioria dos manifestantes tem suas plantações dentro da reserva e terão que se retirar da área. Os fazendeiros reivindicam que a reserva seja homologada em ilhas, excluindo da área indígena, as terras apropriadas por eles para o plantio.

2ª FEIRA 12 Aproximadamente 30 Índios da tribo Pancararu, do sertão de Pernambuco, ocuparam a sede da Funai, em Recife (região Nordeste). Reivindicaram recursos que a Funai não está destinando às aldeias e protestaram contra a exoneração do chefe do posto indígena na região, Gilberto Manoel Freire, acusado de ter agredido e feito refém um funcionário do órgão.

5ª FEIRA 15 Início da greve dos agentes da Polícia Civil do Distrito Federal - Brasília (região Centro-Oeste), que reivindicam um reajuste no vencimento básico. Os inquéritos policiais estão parados e os agentes deixaram de registrar boletins

de ocorrência nas delegacias. A intenção dos grevistas é pressionar o governo do Distrito Federal a negociar com o governo federal o aumento nos salários.

- 2ª FEIRA 19** Um grupo composto por 800 pessoas ligadas à Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (CONTAG) ocupou a sede do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), no Distrito Federal: reivindicam a demissão do superintendente regional do órgão e o cadastramento das famílias acampadas, a realização de vistorias em 16 áreas rurais para fins de desapropriação, a complementação de crédito para obras de infra-estrutura nos assentamentos e a reestruturação do INCRA na capital federal. O governo condicionou o encontro à desocupação do prédio.
- 3ª FEIRA 20** Cerca de 500 pessoas foram retiradas pela polícia de um prédio pertencente à Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU), no centro de São Paulo. O prédio, ocupado pelo Movimento Sem-Teto do Centro (MSTC) há cinco anos, passou por uma reintegração de posse e por isso as pessoas tiveram que deixar o local.
- 6ª FEIRA 30** Auditores fiscais fizeram um ato público em frente à Delegacia Regional do Trabalho de Minas Gerais (região Sudeste). Eles pediam a prisão dos assassinos de três fiscais e um motorista do Ministério do Trabalho, executados no Noroeste do Estado quando estavam fiscalizando as normas trabalhistas de contratação de funcionários nas fazendas dos municípios mineiros de Unai e Paracatu, e já tinham recebido várias ameaças de morte.

FEVEREIRO

- 5ª FEIRA 12** Suspensa a greve dos médicos peritos do INSS após 72 dias, mas o retorno ao trabalho só ocorrerá após a implementação de uma medida provisória que incluía as reivindicações da categoria acertadas com o governo, como a previsão de carga horária semanal de 40 horas, correção salarial variando de 61% a 93% e a contratação de mais profissionais. Os grevistas conseguiram do governo a garantia de que não haverá corte de pagamento para os dias paralisados.
- 6ª FEIRA 13** Confronto entre vendedores ambulantes e guardas municipais no centro da cidade do Rio de Janeiro (região Sudeste), quando estes tentavam apreender as mercadorias. No confronto, oito pessoas ficaram feridas.
- 5ª FEIRA 19** Servidores públicos federais promoveram o ato de lançamento da Campanha Salarial 2003. Mais de mil servidores de 110 entidades de base, federações e confederações dos Servidores Públicos Federais participaram da atividade, que contou com a presença ainda mais de 30 parlamentares do Partido dos Trabalhadores (PT), Partido Comunista do Brasil (PC do B) e Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU). Ao final do ato, representantes da

Coordenação Nacional das Entidades de Servidores Federais (CNESEF) se dirigiram ao Palácio do Planalto, onde fizeram a entrega da pauta de reivindicações ao ministro da Casa Civil, José Dirceu, e promoveram uma manifestação em frente ao Palácio.

5ª FEIRA 26 Sessão solene na Câmara dos Vereadores em Brasília em comemoração dos 20 anos do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST). A CNESEF se reuniu com os ministros da Casa Civil, Planejamento, Trabalho e Previdência, para dar início às negociações sobre as reivindicações dos Servidores Públicos Federais. Os servidores pediram o arquivamento do Projeto de Lei Complementar 9 (PLP 9/99), levantando a possibilidade de realizar uma paralisação caso o projeto entre em tramitação no Congresso. Assembléias nos estados vão decidir se a paralisação pode se transformar em greve. O Projeto de Lei 9, enviado ao Congresso em '99 por Fernando Henrique Cardoso, determina um teto para a aposentadoria de novos servidores públicos igual ao já praticado pelo INSS (hoje, de R\$1.561). Para ter a aposentadoria acima desse valor, o projeto propõe a instalação de Fundos de Previdência Complementar, para os quais os servidores teriam de contribuir.

6ª FEIRA 27 Rebelião em uma unidade da Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor (FEBEM) na cidade de Ribeirão Preto, estado de São Paulo, motivada pela preocupação dos internos com a transferência que irá ocorrer para uma nova unidade.

MARÇO

2ª FEIRA 01 Funcionários de bingos fizeram manifestações em todo o país contra a medida provisória assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em fevereiro deste ano, que teve como objetivo fechar todos os jogos não operados pela Caixa Econômica Federal. Em São Paulo, cerca de 30 mil pessoas foram às ruas protestar contra a decisão. Segundo o ministro da justiça, o governo deve tomar algum tipo de providência, no sentido de ajudar esses trabalhadores, mas afirmou que a manutenção desses empregos não serve como pretexto para o funcionamento de jogos ilegais.

3ª FEIRA 09 Agentes da Polícia Federal (PF) entraram em greve por tempo indeterminado. Eles reivindicam uma equiparação de salários aos dos servidores federais com formação superior, argumentando que desde 1996, com a lei 9.266, teriam direito a salários de nível superior, já que tal escolaridade passou a ser exigida para ingresso na PF. Segundo o Ministério da Justiça, o aumento é ilegal e inconstitucional, pois ao cobrar pagamento de salário básico de nível superior, querem na verdade isonomia salarial com delegados. A greve alterou a rotina dos aeroportos de todo o país, o serviço de emissão de passaporte foi

praticamente suspenso e as investigações promovidas pela PF também estão transcorrendo lentamente.

Professores da rede estadual de ensino do Rio de Janeiro paralisaram suas atividades por 24 horas, cerca de 600 mil alunos ficaram sem aulas. A categoria reivindica piso de cinco salários mínimos, o fim das contratações temporárias, investimentos em infra-estrutura e novas unidades. De acordo com o Sindicato Estadual dos Profissionais de Ensino (SEPE), o ano letivo começou marcado pela falta de 26 mil professores.

4ª FEIRA 10 Servidores da Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) paralisam suas atividades por 24 horas. Eles reivindicam o pagamento imediato das dívidas trabalhistas provenientes das perdas provocadas pelo Plano Bresser. Esta questão já se estende há quinze anos na justiça. Mesmo com a decisão favorável em última instância do Tribunal Superior do Trabalho, os precatórios ainda não foram repassados aos servidores. A quantia foi depositada em juízo em 2001, mas o valor é contestado pela Advocacia Geral da União (AGU).

DOMINGO 14 Cerca de 500 pessoas ligadas ao MST ocuparam uma fazenda em Bonito, a 135 quilômetros de Recife. Segundo o coordenador regional do movimento, Jaime Amorim, a ocupação teve por objetivo forçar os donos da fazenda a permitirem que o INCRA realize uma vistoria na propriedade, o que tinha sido prometido pelos proprietários no ano passado e ainda não ocorreu. Esta fazenda já havia sido ocupada em 2003 pelos sem-terra, mas tiveram que deixá-la por decisão judicial.

2ª FEIRA 15 Fiscais do Ministério da Agricultura entraram em greve por tempo indeterminado. Eles reivindicam, além de reajuste salarial de 30%, a fim de equiparar os ganhos da carreira aos dos fiscais federais, abertura de concurso público, para ampliar o número de funcionários da categoria. A greve afetou as importações e exportações de produtos de origem animal e vegetal, já que os fiscais são os responsáveis pela liberação das cargas e pela emissão de certificados que garantam a qualidade dos produtos. De acordo com a Associação Nacional dos Fiscais Federais Agropecuários, a adesão à greve foi de praticamente 100% e os serviços de inspeção foram prejudicados nos portos, aeroportos, postos de fronteiras, frigoríficos e usinas de leite em todo o país. No porto de Paranaguá, no Paraná, a fila de caminhões que aguardavam o embarque de mercadorias atingiu quarenta quilômetros.

Cerca de 70 Sem-Terra ligados a Federação dos Trabalhadores na Agricultura (FETAGRI) fizeram um protesto na entrada de uma fazenda do Exército em Antônio João (274 km de Campo Grande, Centro-Oeste), próximo à fronteira com o Paraguai. Desde 2001, a área é da União, que entregou a posse para o Exército. Com faixas e cartazes, o grupo exigiu que a área seja usada na

reforma agrária. Soldados em tanques e caminhões do Exército foram à fazenda. O Exército informou que a fazenda Coração de Menino é usada para treinamento militar e que o “deslocamento de tropas” foi apenas um “treinamento de rotina”. Os Sem-Terra pretendem fazer novo protesto na entrada da fazenda. O sindicato rural da cidade afirmou que o INCRA propôs ao Exército que a fazenda seja usada na reforma agrária em troca de outra área. O Exército diz não ter recebido a proposta.

SÁBADO 20 Cerca de 500 famílias ligadas ao MST ocuparam a Fazenda Santa Justina, no município de Mangaratiba, a 70 quilômetros do Rio de Janeiro. De acordo com o MST, a fazenda está improdutivo desde 1986, quando sua utilização passou a ser discutida na justiça. Os Sem-Terra ergueram 200 barracas no local e pretendem ficar lá até a conquista da terra, já que ela foi liberada para desapropriação em 2002, mas até agora a questão não foi resolvida.

DOMINGO 21 Líder do assentamento Herbert de Souza, José Rosendo Alves da Costa, membro da Organização de Luta do Campo (OLC) foi assassinado com três tiros quando trabalhava em sua pequena mercearia localizada a 30 quilômetros do Recife. O crime foi motivado pela extração ilegal de madeira de lei da área de reserva de Mata Atlântica que fica no assentamento. Segundo a OLC José Rosendo já havia denunciado que estava sendo ameaçado de morte às autoridades de Pernambuco.

2ª FEIRA 22 Faculdades particulares do Rio de Janeiro entraram em greve. A Universidade Católica de Petrópolis (UCP) possui cerca de quatro mil alunos e os professores estão há quatro meses sem receber salário. A Universidade Cândido Mendes paralisou suas atividades por três dias e a reitoria negociou um calendário de pagamentos para os professores voltarem às aulas, mas o estado de greve continuará até 15 de abril. Segundo o Sinpro-Rio, uma das situações mais graves seria a da Faculdade Santa Úrsula cujas dívidas trabalhistas podem chegar a 30 milhões de reais.

Policiais civis e carcereiros do Rio Grande do Sul entraram em greve por tempo indeterminado pela reposição das perdas inflacionárias dos últimos nove anos, reajuste imediato de 28%, gratificação pela dedicação exclusiva e redução das diferenças entre os vencimentos da categoria. Segundo o governador Germano Rigotto do Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), só com recursos federais se poderá cumprir os compromissos.

4ª FEIRA 24 Cerca de 35 mil pessoas participaram de uma manifestação nacional organizada pela Força Sindical em nome do Dia Nacional de Luta Contra o Desemprego, que ocorreu nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Alagoas, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Pará e Maranhão.

- 5ª FEIRA 25** Aproximadamente 30 mil pessoas fizeram uma manifestação em Brasília contra a reforma sindical proposta no Fórum Nacional do Trabalho. Organizada pelo Fórum Sindical dos Trabalhadores (FST), que reúne 17 confederações nacionais e seis centrais sindicais, criticaram, dentre outros pontos principais do texto que o governo enviará ao Congresso no mês de abril, o fim do imposto sindical obrigatório e da unicidade sindical, isto é, a existência de um só sindicato por categoria e base sindical.

ABRIL

- 5ª FEIRA 01** Sexto dia de uma série de mobilizações denominada de “Abril Vermelho”, decidida por uma coordenação nacional de movimentos sociais e entidades de trabalhadores, como MST, Movimento Terra, Trabalho e Liberdade (MTL), Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Pernambuco (FETAPE), Central Única dos Trabalhadores (CUT), União Nacional dos Estudantes (UNE) e a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) com o objetivo de cobrar do presidente Lula o cumprimento de geração de empregos, da reforma agrária e de mudança na política econômica.

As ações devem se estender até 17/05, data de um confronto histórico em que 19 trabalhadores rurais foram mortos em 1996 em confronto com a Polícia Militar (PM), em Eldorado dos Carajás, no Belém do Pará. Lula se pronunciou à respeito, afirmando que a meta é assentar 115 mil famílias este ano e aumentar o orçamento do Ministério do Desenvolvimento Agrário de R\$1,4 para 1,7 bilhão.

Segue abaixo um panorama geral do que ocorreu no período:

As sedes do INCRA das cidades de Recife, em Pernambuco (região Nordeste) e Belém, no Pará (região Norte), foram ocupadas. Diversas prefeituras de São Paulo (região Sudeste) e Goiás, próximo à Brasília (Centro-Oeste), também foram ocupadas. Houve 2 bloqueios de estradas, um em Belém, no Pará, outro em São Paulo. Ocorreram também 2 marchas no estado de São Paulo, que percorreram 100 Km e reuniram 1,5 mil pessoas.

Pernambuco foi o estado com maior número de ocupações durante o período: 56, com 25 mil famílias acampadas, seguido por São Paulo (15), Minas Gerais (9), Bahia (6), Sergipe (6) Rio de Janeiro (5), Mato Grosso do Sul (3), Paraíba (3), Alagoas (3), Mato Grosso (2), Ceará (2), Distrito Federal (1), Paraná (1), Rio Grande do Sul (1), Piauí (1) e Espírito Santo (1).

Além disso, na tensa região do Pontal do Paranapanema, ocorreram um ato e duas marchas com destino a Presidente Prudente, também em São Paulo, além da ocupação de 3 propriedades após um ano de “tréguas” nos conflitos agrários da região; 13 sem-terra foram presos acusados de formação de quadrilha.

A medida de maior repercussão nos setores dominantes foi empreendida por 3.500 famílias ligadas ao MST que derrubaram quatro hectares de plantação de eucalipto usado na produção de celulose de uma área pertencente à multinacional Veracel Celulose nas proximidades de Porto Seguro-Bahia (região Nordeste) com o objetivo de plantar milho e feijão.

O INCRA desapropriou 22 fazendas de 17 municípios da Bahia, beneficiando mais de 5 mil pessoas, mas procurou não vincular a ação às pressões dos movimentos no local.

Paralisação de 24 horas em todo o país dos técnicos da Receita Federal pela proposta de reajuste salarial. Os cerca de 7 mil técnicos pedem que o salário inicial da carreira suba de R\$2.400 para R\$4.200, mas o governo só sugeriu uma gratificação de R\$1.000. A categoria decidiu dar um prazo de 10 dias para que o governo apresente uma nova proposta.

- DOMINGO 04** Aproximadamente 700 famílias de militares promoveram um protesto por reajustes salariais na Praça dos Três Poderes, em Brasília (capital federal – região Centro-Oeste). Houve “panelaço e apitaço” para cobrar um reajuste de 30% correspondente às perdas da inflação entre 2001 e 2004. A maioria dos manifestantes era formada pelas mulheres dos militares. Pelas regras das Forças Armadas, militares da ativa não podem fazer greve nem este tipo de manifestação.
- 2ª FEIRA 05** Paralisação de 24 horas dos servidores do INCRA reivindicando um Plano de Cargos e Salários, além da compra de equipamentos e a contratação de novos servidores. O presidente do INCRA se reuniu com uma comissão de servidores e disse estar tentando aprovar a realização de um concurso público para 2005.
- 5ª FEIRA 08** Audiência entre a CUT e o presidente Lula para reivindicação de elevação de 25% do valor do salário-mínimo, que será reajustado em 1º de maio. A CUT apresentou ainda, um projeto destinado a promover a contratação emergencial de trabalhadores e o reajuste do funcionalismo público.
- 5ª FEIRA 15** Cerca de 9 mil professores da rede pública estadual do Rio Grande do Sul realizaram uma grande manifestação em frente à sede do governo para protestar contra a ausência de uma proposta do Executivo diante das reivindicações da categoria, em greve há 22 dias. Após o protesto, o comando de greve dos professores reuniu-se para começar a elaborar uma contra-proposta que será entregue ao governo estadual, que por sua vez, já adiantou que não vai oferecer nenhuma proposta diferente da apresentada.

SIGLAS

AGU	Advocacia Geral da União
CDHU	Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano
CNBB	Conferência Nacional dos Bispos do Brasil
CNESF	Coordenação Nacional das Entidades de Servidores Federais
CONTAG	Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura
CUT	Central Única dos Trabalhadores
FEBEM	Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor
FETAGRI	Federação dos Trabalhadores na Agricultura
FETAPE	Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Pernambuco
FIOCRUZ	Fundação Oswaldo Cruz
FST	Fórum Sindical dos Trabalhadores
INCRA	Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
INSS	Instituto Nacional de Seguridade Social
MAST	Movimento dos Agricultores Sem-Terra
MST	Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra
MSTC	Movimento dos Sem-Teto do Centro
MTL	Movimento Terra, Trabalho e Liberdade
OLC	Organização de Luta no Campo
PC do B	Partido Comunista do Brasil
PF	Polícia Federal
PM	Polícia Militar
PMDB	Partido do Movimento Democrático Brasileiro
PSTU	Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado
PT	Partido dos Trabalhadores
SEPE	Sindicato Estadual dos Profissionais de Ensino
UCP	Universidade Católica de Petrópolis
UNE	União Nacional dos Estudantes

Equipe:

Coordenação: Prof. Dr. Roberto Leher (UFRJ/LPP-UERJ). Assistentes de Pesquisa: Gleide Banus Barbosa (LPP/UERJ); Mariana Oliveira Setúbal (LPP/UERJ).

Colaboração: PROEALC / CCS / UERJ – Coordenado por: Profa. Dra. Silene de Moraes Freire; Bolsistas: Livânia de Oliveira Conceição e Reginaldo Machado da Costa Júnior.

Fontes: Jornal do Brasil, Jornal Folha de São Paulo, Jornal O Globo, Jornal O Estado de São Paulo, Jornal Brasil de Fato, Agência de Notícias Carta Maior.

Outras fontes: Imprensa-CUT, Letra Viva-MST, MST na Imprensa, Resenha Federal.

[cronología enero-abril 2004]

ENERO

JUEVES 1 Entra en vigencia el Tratado de Libre Comercio (TLC) que Chile suscribió con EE.UU. El presidente de la Comisión Política del Partido Comunista (PC) critica el convenio.

VIERNES 2 El ex vocero y dirigente de la Coordinadora Mapuche Arauko Malleko, Víctor Ancalaf, es sentenciado a 10 años de prisión por la Corte de Apelaciones mediante un fallo que lo inculpa por la autoría de tres atentados incendiarios ocurridos entre septiembre de 2001 y marzo de 2002 en predios de construcción de la central hidroeléctrica Ralco. El abogado defensor sostiene que el caso es una muestra de enjuiciamiento político.

El Colegio Médico, la Confederación Nacional de Trabajadores de la Salud (CONFENATS) y la Confederación de Funcionarios de la Salud Municipalizada (CONFUSAM) marchan junto a 2 mil personas en la ciudad de Valparaíso para protestar frente al congreso nacional contra la reforma sanitaria.

JUEVES 8 El presidente comunista de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Arturo Martínez, logra imponer una postura propia ante el congreso extraordinario realizado por el frente sindical mediante la cual se faculta al consejo directivo nacional a reestructurar a voluntad el comité ejecutivo. El segundo vicepresidente de la CUT y líder socialista del opositor colectivo Siglo XXI señala que la iniciativa apunta a expulsar del comité a la disidencia sindical.

LUNES 12 El vicepresidente de la república, José Miguel Insulza, recibe en el Palacio de La Moneda la visita de una delegación de 10 legisladores estadounidenses con quienes dialoga sobre el combate del narcotráfico y el contrabando de personas, la lucha contra el terrorismo y la conformación del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA).

El Tribunal de Garantía de Angol ordena la búsqueda de los lonkos Pascual Pichún y Aniceto Norín –autoridades de las comunidades Temulemu y Didaico, respectivamente– condenados a 5 años de prisión tras la repetición

de un juicio por amenazas terroristas que fue promovido por el ex ministro de Agricultura y latifundista Juan Agustín Figueroa.

MIÉRCOLES 14 Pascual Pichún Paillanao es detenido en su casa en Temulemu por un contingente de medio centenar de policías conducidos por el comisario de Angol.

JUEVES 15 Carabineros capturan a Aniceto Norín en las afueras de su casa en Didaico.

LUNES 19 La Coordinadora Mapuche Arauko Malleko emite un comunicado en el que sostiene que la detención de los lonkos mapuches responde a una actitud persecutoria del gobierno, además de reclamar el esclarecimiento del asesinato de Alex Lemún y acusar al presidente Lagos de ponerse al servicio de los intereses capitalistas del empresariado que horada la región de Los Lagos y La Araucanía.

El senado aprueba el proyecto de ley de Autoridad Sanitaria y Gestión, el primero de los tres que componen la reforma de la salud como parte del Acuerdo Universal de Garantías Explícitas (AUGE). En la sesión, ocurren protestas de un centenar de dirigentes gremiales y usuarios del servicio de salud pública, quienes son reprimidos por carabineros.

MIÉRCOLES 21 Siete indígenas de la Coordinadora Mapuche Arauko Malleko de la comunidad Chequenco son condenados a 541 días de prisión bajo una acusación por robo de sacos de trigo.

El consejo directivo de la CUT resuelve por 24 votos a 1 la reorganización de su comité ejecutivo en una decisión que expulsa a Diego Olivares, de la Democracia Cristiana (DC), de la vicepresidencia de Relaciones Internacionales y a Alfonso Lathrop, del Partido Socialista (PS), de la vicepresidencia de Relaciones Nacionales.

FEBRERO

MARTES 10 Cuatrocientos desocupados de Lota junto a la Coordinadora de los Sindicatos de Cesantes de la Cuenca del Carbón bloquean la ruta 160 de acceso a la ciudad para reclamar por el pago de sueldos atrasados correspondientes a planes de empleo de emergencia y por su perpetuación. Son reprimidos por carabineros que los desalojan con carros hidrantes y detienen a uno de ellos.

JUEVES 12 Por orden de la municipalidad santiaguina de Macul, carabineros desalojan a 24 ocupantes punks de una vivienda tomada hace 5 años y detienen a todos ellos, que los enfrentan para mantener su lugar de morada. Los okupas realizan en el predio actividades culturales como cursos de malabarismo, trapecio y la puesta en marcha de una biblioteca popular.

MARZO

- LUNES 1** El presidente Lagos anuncia que a pedido del secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, ha dispuesto el envío de un contingente militar a Haití luego de la dimisión forzada del presidente Aristide. El equipo de las fuerzas armadas que acompañará a las tropas de EE.UU., Canadá y Francia está compuesto por 120 soldados del Ejército, un centenar de la Infantería y unos 80 de apoyo logístico.
- MARTES 16** Militantes del Sindicato de Trabajadores Eventuales y Transitorios de San Pedro de la Paz ocupan la sede municipal exigiendo que sea completada la entrega de 100 planes de empleo de emergencia, de los cuales fueron otorgados 75.
- SÁBADO 20** Más de 3 mil personas convocadas por la Asociación por una Tasa a las Transacciones Especulativas y la Acción Ciudadana (ATTAC), el PC, la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) y la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) marchan en Santiago desde la Plaza Italia a la Plaza de la Constitución para repudiar la ocupación de Irak, la política exterior de EE.UU. y el envío de tropas chilenas a Haití. El llamamiento obedece a la jornada de movilización convocada desde el IV Foro Social Mundial (FSM) que tuvo lugar en Mumbai, India, en enero pasado.

ABRIL

- JUEVES 1** Entra en vigencia un TLC con Corea del Sur aprobado por el senado el 22 de enero pasado. El acuerdo supone una desgravación parcial de productos elaborados enteramente dentro del territorio de ambos países, que en algunos casos llevará un plazo de 12 años para concretarse.
- VIERNES 9** La jueza de garantía María Isabel Iturbe, responsable del procesamiento de 18 militantes de la Coordinadora Mapuche Arauko Malleko, se declara incompetente en la causa por la que se los acusa por la autoría, complicidad o encubrimiento de atentados incendiarios en 6 casas patronales y 10 bosques, además de portación ilegal de armas, usurpación de predios, daños y hurtos. La persecución judicial incluye a los líderes Héctor Llaitul, José Huenchunao, José Llanquileo y Patricia Troncoso Robles.
- LUNES 12** Más de 50 empleados de la Empresa Portuaria de Arica inician una huelga indefinida, instalan barricadas incendiarias y cierran las oficinas de la administración en la terminal marítima. Exigen que el gobierno les garantice una indemnización equivalente al sueldo de 3,5 meses por año de trabajo, un bono por pérdida de fuente laboral, otro de escolaridad, beneficios de salud,

programas para convertirse en microempresarios y planes de jubilación. La Federación Nacional de Trabajadores Portuarios convoca a la medida y solicita apoyo en otros puertos, que se traduce en manifestaciones simbólicas de trabajadores de Valparaíso y San Antonio.

MARTES 13 El vicepresidente ejecutivo de la Cámara Nacional Marítima se queja al subsecretario de Transportes de la pasividad del gobierno ante la huelga portuaria estallada el lunes y que ha recibido la solidaridad de 300 estibadores, quienes se plegaron a la medida de fuerza. El funcionario sugiere que el conflicto podría desincentivar el interés privado puesto en el proceso de licitación del puerto de Arica.

JUEVES 15 El embajador chileno ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas vota en favor de la condena a Cuba impulsada por EE.UU. y propuesta por la delegación diplomática de Honduras.

MARTES 20 Los presidentes de los 6 sindicatos de estibadores en huelga –entre los que se encuentra la Federación de Trabajadores Portuarios de Arica– aceptan una propuesta del gobierno por la cual se aumentan los cupos para microemprendimientos ofertados antes del conflicto y las pensiones administrativas vitalicias. A diferencia de los empleados portuarios, los estibadores retoman sus faenas tras el compromiso.

MIÉRCOLES 21 La brigada mapuche Mártir Lemún –en alusión a Alex Lemún, comunero asesinado por la policía en noviembre de 2002– bloquea la ruta que comunica la ciudad de Temuco con Nueva Imperial exigiendo el procesamiento de quienes violan los derechos humanos de los indígenas, entre quienes destacan al mayor de carabineros Marco Trauer, autor de los disparos que dieron muerte al comunero mencionado.

MIÉRCOLES 28 La Confederación de Estudiantes de Chile (CONFECH) inicia una jornada de lucha por presupuesto para financiar la educación superior que es implementada en las ciudades de Concepción, Santiago, Arica, Valparaíso, Valdivia e Iquique, donde los estudiantes realizan asambleas y marchas que son reprimidas por carabineros que detienen a más de 100 manifestantes en todo el país. En Concepción marcha un millar de inscriptos a las universidades de la ciudad, la del Bío-Bío y la Católica, luego de lo cual unos 25 ocupan la sede de la Unión Demócrata Independiente (UDI). En Santiago los universitarios protestan frente al Ministerio de Educación contra la Ley de Acreditación. En las ciudades restantes se movilizan estudiantes de las universidades de Tarapacá, Playa Ancha, Valparaíso, Católica de Valparaíso, Santa María, Austral y la Arturo Prat.

GLOSARIO DE SIGLAS

AFDD	Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos
ALCA	Área de Libre Comercio de las Américas
ANEF	Asociación Nacional de Empleados Fiscales
ATTAC	Asociación por una Tasa a las Transacciones Especulativas y la Acción Ciudadana
AUGE	Acuerdo Universal de Garantías Explícitas
CONFECH	Confederación de Estudiantes de Chile
CONFENATS	Confederación Nacional de Trabajadores de la Salud
CONFUSAM	Confederación de Funcionarios de la Salud Municipalizada
CUT	Central Unitaria de Trabajadores
DC	Democracia Cristiana
FSM	Foro Social Mundial
PC	Partido Comunista
PS	Partido Socialista
TLC	Tratado de Libre Comercio
UDI	Unión Demócrata Independiente

Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).

Relevamiento y sistematización a cargo de Juan Chaves.

Fuentes: diarios El Mercurio y La Tercera.

Otras fuentes: Indymedia Chile.

[cronología enero-abril 2004]

ENERO

- MIÉRCOLES 14** Docentes, estudiantes y personal administrativo de las escuelas de Enfermería, Obstetricia y Trabajo Social del Instituto Dr. Andrés Barbero (IAB) toman las instalaciones de la institución, en repudio a la falta de información respecto de la intervención y auditoría hechas en el lugar por parte de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Asunción (UNA). Piden la desconexión de la Facultad de Medicina, de la cual dependen desde hace varios años.
- MARTES 20** Campesinos de Ypecuá, distrito de Repatriación, Caaguazú, se internan en el bosque y comienzan a disparar contra los efectivos de la Agrupación de Policías Ecológica y Rural (APER), intentando impedir la fumigación con agrotóxicos de unas 70 hectáreas de soja. Son reprimidos por la policía, que detiene a una dirigente y hiere a 4 campesinos.
- MIÉRCOLES 21** Unos 50 campesinos de la localidad 3 de noviembre que se trasladan por una carretera del departamento de Caaguazú hacia un asentamiento de sin tierras en la colonia Ypecuá, en solidaridad con la lucha desatada contra los plantadores de soja transgénica, son atacados con fusiles M16 por cuerpos represivos de la APER. Dos personas resultan muertas, 10 heridas y el resto detenidas.
- JUEVES 22** Integrantes de la Federación Nacional Campesina (FNC) se movilizan en la ciudad de Caaguazú hasta la fiscalía local y en la colonia de Ypecuá, en repudio al ataque de la APER contra los campesinos un día atrás y reafirmando su decisión de seguir resistiendo las fumigaciones con agrotóxicos. Los labriegos detenidos son puestos en libertad.
- LUNES 26** Los funcionarios del IAB comienzan una huelga de 30 días, en apoyo a docentes y alumnos de la institución que luchan por la separación de la Facultad de Medicina de la UNA.
- JUEVES 29** Convocadas por la Coordinadora Nacional de Organizaciones Populares (CONOP) y el Movimiento Sin Techo (MST) cerca de 2 mil personas, representantes de distintos asentamientos de varias ciudades del Departamento

Central, se manifiestan sobre la ruta 2 Mariscal Estigarribia, km 10, San Lorenzo, exigiendo soluciones a su problema de viviendas.

FEBRERO

- MIÉRCOLES 4** El gobierno inicia una mesa de diálogo en busca de un pacto social para dar salida a la problemática de los productores agrícolas. A pesar de la presencia del presidente, al encuentro no concurre ninguna de las centrales campesinas más representativas. Mientras tanto, la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (MCNOC) de San Ignacio, Misiones, cumple su tercer día de movilizaciones: cierra por varias horas la ruta internacional N°1, en la rotonda de acceso a Santa María, reclamando, entre otros puntos, el cese de la represión a campesinos y del uso indiscriminado de agrotóxicos.
- JUEVES 12** Unos 80 campesinos de la colonia 3 de febrero, Caaguazú, retienen un tractor para evitar la fumigación de un sojal, argumentando que en San Pedro no se respetan las condiciones para realizar fumigaciones con agrotóxicos. Unos 400 campesinos se trasladan hasta Caaguazú, donde participan de una asamblea general, en la que deciden no seguir permitiendo este tipo de fumigaciones.
- LUNES 16** Comienza el año lectivo 2004 a pesar de que la Federación de Educadores del Paraguay (FEP) se opone a iniciar las clases, dado que diciembre y febrero corresponden al período de vacaciones.
- VIERNES 20** Campesinos sin tierra, pertenecientes a la Organización Nacional Campesina (ONAC), invaden un terreno ubicado en el barrio General Genes, de Pedro Juan Caballero. Son desalojados por la policía, que detiene a 8 ocupantes (puestos en libertad tras declarar ante el Ministerio Público). Luego se instalan en la plaza principal de la ciudad, frente a la Gobernación, hasta que el gobernador les adjudique las tierras que reclaman.
- MARTES 24** Desconocidos provocan un incendio en la zona de Ypekuá, distrito de Repatriación, Caaguazú, en terrenos destinados a cultivos de soja.
- JUEVES 26** La ministra de Educación informa que los maestros que no comenzaron a dictar clases entre el 16 y el 23 de febrero tendrán descuento en sus salarios, bajo el cargo de desacato.

MARZO

- MARTES 2** Los 16 mil docentes de la FEP comienzan a impartir clases, dando curso a su propio cronograma escolar.

Unos 600 camioneros paran por tiempo indefinido en Alto Paraná e Itaipú, reclamando al gobierno que el flete por tonelada/km se pague a 300 guaraníes. Trescientos camioneros del Alto Paraná estacionan sus unidades en el km 30 de la ruta 7 y 150 camioneros de Itaipú instalan un piquete en María Auxiliadora.

MIÉRCOLES 3 Los docentes de la UNA –nucleados en la Federación de Profesores de la UNA (FEPRUNA)– comienzan con un paro de una hora diaria por 10 días, a excepción de los profesores de la Facultad de Ciencias Agronómicas que declaran el paro total de actividades académicas, presionando para que el Congreso modifique la Ley de Reforma de la Caja Fiscal, aprobada en diciembre pasado, por la cual han elevado los años de aportes jubilatorios de los profesores de 20 a 40 años.

El gobierno pone en marcha un operativo conjunto integrado por policías y militares para resguardar los cultivos de soja. La FNC aclara que sus integrantes no se hacen responsables de las quemas de cultivos, ya que no están de acuerdo con actos de esta naturaleza.

JUEVES 4 La huelga de los camioneros de Alto Paraná se agudiza por no tener respuesta oficial a sus reclamos. Los transportistas establecen piquetes en el km 30 de la ruta Gaspar Rodríguez de Francia y en el km 7 de la supercarretera de Itaipú.

MARTES 16 Unas 10 mil personas –integrantes de movimientos sociales, partidos políticos de izquierda y campesinos miembros de la MCNOC– realizan manifestaciones en todo el país, en protesta por la política económica del gobierno. Piden, entre otros puntos, el freno al uso de semillas transgénicas y al uso indiscriminado de agroquímicos, la recuperación de las tierras para los campesinos y el fin de la criminalización de las luchas sociales.

MIÉRCOLES 17 Unos 5 mil campesinos de la MCNOC continúan movilizándose en 8 puntos del país, endureciendo su posición y cerrando rutas en 5 departamentos. En Asunción, ante la escasa participación, se unen a los manifestantes de Coronel Oviedo, donde cortan la ruta II a la altura del cruce a Nueva Londres, distrito de Caaguazú. En San Ignacio, Misiones, unos 500 labriegos cierran la ruta I a la altura del km 230, reclamando al gobierno apoyo para obtener créditos. En el distrito de Guayaybí, departamento de Canindeyú, cierran la ruta III.

JUEVES 18 Los campesinos de todo el país levantan las movilizaciones y establecen una tregua de 3 meses, luego de que dirigentes de la MCNOC, de la Coordinadora de Productores Agrícolas San Pedro Norte (CPA-SPN) y de la Plenaria Popular Permanente (PPP) firman con el ministro de Agricultura un acuerdo en el que el gobierno promete buscar recuperar las tierras, impulsar el proyecto de ley de seguridad fronteriza, reglamentar el uso de agroquímicos y orientar los recursos provenientes del impuesto a la soja hacia programas sociales.

- VIERNES 19** Docentes de 12 facultades de la UNA comienzan un paro total de actividades hasta el martes próximo como forma de presión para que el senado modifique la Ley de Adecuación Fiscal.
- MARTES 23** Integrantes de la FEPRUNA se reúnen con miembros de una comisión del Senado, pero los acuerdos en torno a la modificación de la Ley de Reforma de la Caja Fiscal no avanzan, por lo que los docentes de la UNA se declaran en paro indefinido.
- LUNES 29** El gobierno legaliza las tierras del asentamiento Maquetalia, ubicado en San Lorenzo, donde 1.200 familias ocupan un terreno de 37 hectáreas desde hace más de 5 años. El presidente Duarte Frutos encabeza un acto en el lugar.
- MIÉRCOLES 31** En la 11ª Marcha del Campesinado Pobre, más de 10 mil campesinos de 9 departamentos del país, pertenecientes a la FNC, marchan hasta el Palacio de López, para presentar al presidente Duarte Frutos un anteproyecto de ley de reestructuración de la banca pública y para reclamar la reactivación de la industria textil. Luego de ser recibidos por el primer mandatario, se dirigen al Congreso Nacional.

ABRIL

- LUNES 5** Tras participar el viernes último de una asamblea, los profesores de la UNA vuelven a impartir clases, luego de más de 15 días de huelga. Rechazan el acuerdo entre la Comisión Especial de la Universidad y el senado, por el cual las condiciones para jubilarse serían 25 años de aporte para recibir un retorno de 70% como haber jubilariorio, y 28 años para un retorno del 78%.
- VIERNES 16** Un contingente de alumnos y docentes del IAB intenta tomar el decanato de la Facultad de Medicina, para presionar por la desconexión del Instituto de esta Facultad y por la renuncia de la directora recientemente nombrada. Son reprimidos por agentes antimotines, quienes hieren a 4 alumnos.
- MIÉRCOLES 21** Más de medio centenar de familias sin tierra de la CPA-SPN invaden durante algunas horas una hacienda de más de 1.800 hectáreas, en Santa Rosa, San Pedro. Por otra parte, unas 90 familias campesinas se instalan frente al portón de la estancia Miu Delta, distrito de Choré, a unos 5 km de la ruta 3, para reclamar a las autoridades que expropien o compren ese terreno. Ya suman 10 los casos de amenazas de ocupaciones originados en los últimos días en el departamento de San Pedro.
- LUNES 26** Mientras los campesinos de la MCNOC y la CPA-SPN suspenden temporalmente las ocupaciones de tierra y dan una tregua al gobierno hasta el 3 y 4 de mayo –fechas en que realizarán una plenaria nacional para definir un

nuevo plan de acciones y estrategias de lucha– el Instituto de Bienestar Rural (IBR) concreta la adquisición de 4 mil hectáreas, en el distrito de Nueva Germania, donde reubicarían a las comisiones vecinales que pretenden tierras en la zona.

JUEVES 29 Unos 100 campesinos son desalojados de una propiedad en la colonia Mariscal López, departamento de Caaguazú, por funcionarios del IBR y agentes antimotines. Por otra parte, unas 40 personas son desplazadas del asentamiento indígena de Santa Teresa, en Paso Jovai, Guairá. A su vez, 100 campesinos son expulsados de un predio, en el distrito de Curuguaty, departamento de San Pedro.

GLOSARIO DE SIGLAS

APER	Agrupación de Policías Ecológica y Rural
CONOP	Coordinadora Nacional de Organizaciones Populares
CPA-SPN	Coordinadora de Productores Agrícolas San Pedro Norte
FEP	Federación de Educadores del Paraguay
FEPRUNA	Federación de Profesores de la UNA
FNC	Federación Nacional Campesina
IAB	Instituto Andrés Barbero
IBR	Instituto de Bienestar Rural
MCNOC	Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas
MST	Movimiento Sin Techo
ONAC	Organización Nacional Campesina
PPP	Plenaria Popular Permanente
UNA	Universidad Nacional de Asunción

Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).

Relevamiento y sistematización a cargo de Mariana C. Fassi.

Fuentes: diarios Última Hora y Noticia.

Otras fuentes: CLAJADEP, Rebelión, Agência de Informação Frei Tito para a América Latina y ALAI.

[cronología enero-abril 2004]

ENERO

- VIERNES 2** La Asociación de Funcionarios del Centro Asistencial del Sindicato de Médicos del Uruguay (AFCASMU) realiza cortes de calle en la puerta de 4 centros asistenciales de la mutualista del Centro Asistencial del Sindicato de Médicos del Uruguay (CASMU), en reclamo del pago de atrasos salariales y mejora en las condiciones laborales.
- MIÉRCOLES 7** El presidente Batlle recibe una delegación de congresistas norteamericanos para evaluar la posibilidad de incorporar a Uruguay al Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). Los congresistas, por su parte, agradecen la gestión del presidente uruguayo por la solicitud de la presencia de un delegado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Cuba –con quien Uruguay rompió relaciones diplomáticas en abril de 2001– para analizar la situación de los derechos humanos en dicho país.
- MIÉRCOLES 14** El Sindicato Único de las Telecomunicaciones (SUTEL) realiza una concentración frente a la Torre de Telecomunicaciones en Montevideo, en reclamo de salarios atrasados y por el pago de beneficios sociales a becarios y pasantes del Instituto Nacional de la Juventud que realizan trabajos en la Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL).
- MARTES 20** Unos 500 jubilados y pensionados, convocados por la coordinadora barrial “Despertares”, se concentran frente a la Terminal Goes y cortan la Av. Gral. Flores en reclamo de un aumento de 500 pesos en las jubilaciones, el pago del aguinaldo y una jubilación mínima de 6 mil pesos. La Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas del Uruguay (ONAJPU) y la Coordinadora Nacional de Jubilados y Pensionistas respaldan la convocatoria.
- JUEVES 22** La AFCASMU lleva a cabo un paro de 24 hs y realiza una asamblea general en el centro de Montevideo cortando la intersección de las calles 8 de Octubre y Abreu, en el marco del conflicto que mantiene con la mutualista CASMU.
- LUNES 26** Trabajadores de AFCASMU realizan un paro parcial, cortan el tránsito y ocupan el Sanatorio 1 y la policlínica de Av. Agraciada y Valentín Gómez, en Montevideo.

MIÉRCOLES 28 El Comité Interamericano Contra el Terrorismo (CICTE) comienza a sesionar por 3 días en Montevideo, con delegados de los 34 países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) para tratar la amenaza terrorista en el continente. Cofer Black, coordinador de EE.UU. para la lucha antiterrorista, anuncia que el gobierno de su país no identificó "células de la organización terrorista Al Qaeda en América Latina" como sospechaba. Sin embargo, declara que junto a los demás integrantes del CICTE, se proponen intensificar los controles de espacios fronterizos y cibernético, y mejorar la seguridad de puertos y aeropuertos. Asimismo, anuncia que su país donará 1 millón 600 mil dólares para llevar a cabo estas tareas.

VIERNES 30 Funcionarios de AFCASMU ocupan por tiempo indeterminado todos los edificios de la mutualista CASMU, en el marco del conflicto que sostienen desde comienzo de mes.

FEBRERO

LUNES 2 Unos 100 funcionarios de AFCASMU se concentran y cortan la calle frente al Sanatorio de 8 de Octubre y Abreu en el centro de Montevideo.

Una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) da visto bueno a los planes de negocios y reestructuración del Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU) y acuerda con directivos de la entidad la creación de un fideicomiso.

JUEVES 5 Funcionarios de AFCASMU aceptan la propuesta del CASMU y levantan las medidas de fuerza que sostienen desde comienzos de enero. La mutualista acuerda con el sindicato el pago de los haberes atrasados y un cambio en el modelo asistencial, centrado en la prevención.

LUNES 16 La Unión de Trabajadores del Transporte (UNOTT) inicia un paro en reclamo de un aumento salarial de acuerdo al 100% del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

JUEVES 19 Los funcionarios del Registro Civil suspenden las medidas de fuerza iniciadas 15 días antes, luego de que el Poder Ejecutivo les comunica que recibirán los salarios de este mes sin el descuento del 20% en los bono sociales, tal como había anunciado el Banco de Previsión Social (BPS).

MIÉRCOLES 25 La Asociación de Funcionarios de la Corte Electoral de Uruguay (AFEU) inicia un paro en reclamo de un aumento salarial y de su reconocimiento como un sindicato legítimo.

MARZO

LUNES 1 Funcionarios registrales, en conflicto desde hace más de un mes, inician un paro total de actividades con el apoyo de los trabajadores de la Oficina del Registro Civil de la Intendencia Municipal de Montevideo (IMM) que pertenecen a la Asociación de Obreros y Empleados Municipales (ADEOM). Deciden profundizar las medidas de fuerza luego de la demora producida en el pago de sus salarios.

El Plenario Intersindical de Trabajadores-Convenión Nacional de Trabajadores (PIT-CNT), la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU), la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (FUCVAM), la Comisión de Organizaciones Sociales de Uruguay, la Coordinadora de Jubilados y Pensionados y el Círculo Bolivariano realizan una manifestación frente a la embajada de EE.UU. en Montevideo, en rechazo a la presunta invasión de dicho país a Venezuela y por el respeto a la soberanía del pueblo venezolano.

MARTES 2 La Asociación de Funcionarios del Registro Civil (AFURECI) levanta el paro total de actividades iniciado el día anterior, luego de cobrar los haberes de enero. Sin embargo, mantiene algunas medidas de fuerza en exigencia de que se conforme una mesa de negociaciones para solucionar el conflicto que sostiene desde comienzos de febrero.

MIÉRCOLES 3 La Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP) inicia un paro nacional de 48 hs en reclamo de un aumento diferencial de 100 pesos por funcionario, acordado con la finalización del conflicto llevado adelante el año pasado.

VIERNES 5 Camioneros de la Federación de Transporte de Bebida (FETRABE) inician un paro por tiempo indeterminado en la distribución de bebidas de las compañías Salus, Matutina y Pepsi-Cola, en reclamo de que se retorne al margen del 35% de ganancia que tenían hasta el año 2002.

LUNES 8 La AFEU inicia un paro de 48 hs y realiza un corte en la calle 25 de Mayo, en Montevideo, en exigencia de que el Parlamento intervenga ante la violación de sus derechos laborales.

Como parte de las conmemoraciones del Día Internacional de la Mujer, un numeroso grupo de mujeres se concentran en la IMM para expresar sus necesidades ante la presidenta de la Comisión de la Mujer, quien las recibe y se compromete a profundizar las políticas públicas en el marco del Plan de Igualdad de Oportunidades.

JUEVES 11 La Federación de Obreros y Empleados de Bebida (FOEB) intercede ante la FETRABE, quien mantiene un bloqueo desde hace 6 días ante las plantas de

las empresas Salus en Minas y Pilsen en Montevideo, para posibilitar el ingreso de insumos a la planta, ante la amenaza de la empresa de despedir a 75 trabajadores. FETRABE accede al pedido para resguardar la fuente laboral de los trabajadores del sector.

VIERNES 12 La Confederación de Funcionarios del Estado (COFE) realiza una manifestación en el centro de Montevideo en la que participan alrededor de mil personas por la unificación de los conflictos de los sindicatos estatales de Salud Pública, Registro Civil, Corte Electoral y Ministerio de Transporte y Obras Públicas, entre otros.

El Banco Central del Uruguay (BCU) despide a 135 empleados ante la negativa de la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay (AEBU) de entregar información sobre los activos del liquidado Banco de Crédito (BDC) que van a ser subastados. El sindicato denuncia que existe el riesgo de que se malvenda la cartera y considera la medida de la autoridad monetaria como discriminación antisindical.

SÁBADO 13 Integrantes de la FUCVAM realizan una vigilia frente al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en reclamo de las partidas correspondientes a la cartera de vivienda.

LUNES 15 La FFSP y la Federación Uruguaya de la Salud (FUS) se reúnen en el local del PIT-CNT para unificar los conflictos de ambos sectores. Deciden crear, a fines de mayo, el Sindicato Único de la Salud que incluiría a ambos gremios además del Hospital de Clínicas y el Sanatorio del Banco de Seguros del Estado.

Empleados bancarios nucleados en AEBU inician un paro en reclamo por el despido de 135 empleados del sector.

MARTES 16 La AFURECI acepta la propuesta realizada por el ministro de Educación y Cultura y levanta las medidas de fuerza, aunque continúan sin inscribir parejas para casamientos.

La Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (FENAPES) inicia paros zonales de 24 hs en todo el país ante la falta de respuesta a su solicitud de obtener una entrevista con el Consejo Directivo Central (CODICEN) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), en reclamo de aumentos salariales, partidas presupuestarias y el pago de la cuota mutual.

JUEVES 18 A un año de la invasión a Irak, la Coordinadora por la Paz junto a Redes-Amigos de la Tierra, PIT-CNT, FEUU, FUCVAM, la Iglesia Metodista, el Círculo Bolivariano del Uruguay, la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida (CNDAV) y una veintena de organizaciones sociales, culturales y políti-

cas, realiza una marcha en Montevideo desde La Plaza Cagancha hasta la Universidad Mayor de la República.

Luego de un mes de conflicto en el Correo Nacional, la Asociación de Funcionarios Postales establece un cuarto intermedio hasta el próximo 15 de abril y comienzan a regularizarse los envíos atrasados por la creación de una mesa de negociaciones.

SÁBADO 20 La Intergremial de Transporte Profesional de Carga del Uruguay (ITPC) decide realizar un paro contra la liberalización de la importación de camiones usados decretada por el Poder Ejecutivo.

LUNES 22 En el marco de la celebración del Día Internacional del Agua, más de 1.000 personas convocadas por la CNDAV realizan una marcha desde el edificio de Obras Sanitarias del Estado (OSE) hasta la Plaza Libertad para impulsar una iniciativa popular que convoque a un plebiscito durante las próximas elecciones nacionales para introducir en la Constitución una cláusula que impida la privatización del agua.

MIÉRCOLES 24 Profesores de Liceos públicos y privados realizan un paro de 24 hs en demanda de mejores condiciones laborales. Profesores de distintas facultades de la Universidad de la República como Ingeniería, Ciencias Sociales y Química se suman al paro.

Trabajadores de la AFURECI levantan la medida de fuerza que mantienen desde hace más de 20 días y vuelven a inscribir parejas para casamientos. El Ministerio de Educación y Cultura asumirá los aportes personales y patronales de quienes ganen menos de 3 mil pesos y se compromete a no reducir los salarios.

JUEVES 25 La Asociación de Docentes de Enseñanza Secundaria (ADES) y la FUS se reúnen en el local de ADEOM, unifican conflictos y coordinan movilizaciones conjuntas.

AEBU realiza paros parciales de media hora en bancos públicos y privados y por la noche detiene el funcionamiento de clearing de cheques, ante la ausencia de solución al conflicto desatado en el sector 13 días atrás cuando el BCU despidiera a 135 funcionarios.

El gobierno decide mantener la prohibición a la importación de camiones usados luego del conflicto desatado entre los camioneros del puerto 5 días atrás.

Integrantes de la Unión de Trabajadores Desocupados (UTD), la Coordinadora de Ollas y Merenderos y la Olla popular del Asentamiento Paso Escobar cortan

la ruta en Barros Blanco a la altura del Km 24, en reclamo por la demora en la entrega de alimentos por parte del Instituto Nacional de Alimentación. Un grupo de policías retiran los neumáticos incendiados en el corte, se produce un enfrentamiento y reprimen a los manifestantes. La UTD acusa al gobierno de utilizar helicópteros, fuerzas de choque e, incluso, cámaras de video para reprimirlos. Reclama, además, 520 puestos de trabajo prometidos por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) en noviembre pasado.

- VIERNES 26** Usuarios de la administración nacional de Usinas y Trasmisores Eléctricos (UTE), OSE y ANTEL, que constituyen el primer movimiento de deudores de entes públicos uruguayos organizados, realizan una concentración en la Plaza Constitución –con el apoyo del PIT-CNT, FUCVAM y el Foro Social– en reclamo por los derechos de los desocupados que no pueden pagar los servicios, en la que participa una gran cantidad de ciudadanos.

- SÁBADO 27** Centenares de pescadores, vecinos y algunos funcionarios convocados por la Comisión en Defensa del Puerto de Piriápolis realizan una manifestación contra la privatización de los servicios portuarios.

- LUNES 29** Unos 400 becarios del Ministerio de Educación y Cultura paralizan sus actividades por la falta de pago de los salarios correspondientes a los meses de febrero y marzo.

- MARTES 30** Trabajadores de Salud Privada de todos el país, nucleados en la FUS, arriban a Montevideo y se concentran en el Obelisco para marchar hasta el Ministerio de Salud Pública (MSP) en reclamo por mejoras salariales y un nuevo convenio laboral.

ABRIL

- VIERNES 2** El MSP interviene y clausura la mutualista Cooperativa Integral de Médicos Asociados (CIMA) por la elevada deuda que mantiene con el BPS. Los funcionarios de la institución deciden ocupar el predio y exigen que todos los pacientes sean reubicados y todos los trabajadores obtengan un nuevo puesto de trabajo.

Luego de 17 días de vigilia frente al MEF, la FUCVAM llega a un acuerdo con el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) que permite la escrituración de 3 cooperativas.

- LUNES 5** El Sindicato Médico de Uruguay (SMU), que nuclea a los médicos del sector público y privado de todo el país, realiza un paro nacional de 24 hs en solidaridad con los médicos que quedaron cesantes luego de la clausura de la mutualista CIMA.

MARTES 20 El Senado aprueba por unanimidad el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Uruguay y México. Para entrar en vigencia, la iniciativa debe ser aprobada por la Cámara de Diputados.

MIÉRCOLES 28 Funcionarios de la FUS realizan un paro nacional de 24 hs con altos niveles de adhesión y ocupan diversos centros de salud en todo el país.

La COFE realiza un paro nacional de 24 hs en exigencia de un aumento del 25% para compensar la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores estatales.

GLOSARIO DE SIGLAS

ADEOM	Asociación de Obreros y Empleados Municipales
ADES	Asociación de Docentes de Enseñanza Secundaria
AEBU	Asociación de Empleados Bancarios de Uruguay
AFCASMU	Asociación de Funcionarios del CASMU
AFEU	Asociación de Funcionarios de la Corte Electoral de Uruguay
AFURECI	Asociación de Funcionarios del Registro Civil
ALCA	Área de Libre Comercio de las Américas
ANEP	Administración Nacional de Educación Pública
ANTEL	Administración Nacional de Telecomunicaciones
BDC	Banco de Crédito
BCU	Banco Central del Uruguay
BPS	Banco de Previsión Social
BROU	Banco de la República Oriental del Uruguay
CASMU	Centro Asistencial del Sindicato de Médicos del Uruguay
CICTE	Comité Interamericano Contra el Terrorismo
CIMA	Cooperativa Integral de Médicos Asociados
CNDAV	Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida
CODICEN	Consejo Directivo Central
COFE	Confederación de Funcionarios del Estado
FENAPES	Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria
FETRABE	Federación de Transporte de Bebida
FEUU	Federación de Estudiantes Universitarios de Uruguay
FFSP	Federación de Funcionarios de Salud Pública
FMI	Fondo Monetario Internacional
FOEB	Federación de Obreros y Empleados de Bebida
FUCVAM	Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua
FUS	Federación Uruguaya de la Salud
IMM	Intendencia Municipal de Montevideo
IPC	Índice de Precios al Consumidor
ITPC	Intergremial de Transporte Profesional de Carga del Uruguay
MEF	Ministerio de Economía y Finanzas

MSP	Ministerio de Salud Pública
MTSS	Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
MVOTMA	Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
OEA	Organización de Estados Americanos
ONAJPU	Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas del Uruguay
ONU	Organización de las Naciones Unidas
OSE	Obras Sanitarias del Estado
PIT-CNT	Plenario Intersindical de Trabajadores-Convención Nacional de Trabajadores
SMU	Sindicato Médico del Uruguay
SUTEL	Sindicato Único de las Telecomunicaciones
TLC	Tratado de Libre Comercio
UNOTT	Unión de Trabajadores del Transporte
UTD	Unión de Trabajadores Desocupados
UTE	Usinas y Trasmisores Eléctricos

*Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
 Relevamiento y sistematización a cargo de María José Nacci.
 Fuentes: diarios La República, El país y semanario Brecha.
 Otras fuentes: Indymedia Uruguay.*

Bolivia: de la recuperación democrática de 1982 a la agonía de los partidos y el nuevo protagonismo de las FF.AA.

Miguel Urioste F. de C.*

* *Director
de Fundación TIERRA,
La Paz.*

No es posible entender la profunda reconfiguración de las hegemonías políticas y territoriales en Bolivia sin remontarnos al inicio del proceso democrático en 1982. Desde entonces Bolivia vive el más largo período de su historia en democracia –veintidós años– con la alternación de partidos sistémicos en el gobierno, cada cuatro años. Es la etapa de mayores libertades políticas conocida en la era republicana. En efecto, el ciclo democrático iniciado en octubre de 1982 abrió un abanico de posibilidades para la construcción de ciudadanía durante las dos décadas posteriores. A partir de ese momento la sociedad civil organizada, sindicatos, gremios y corporaciones, pero especialmente los partidos políticos y los medios de comunicación, jugaron un papel determinante.

En los últimos años estos partidos políticos expropiaron la representación ciudadana, se embarraron en la corrupción y la prebenda como forma sistemática de asalto al erario público, y envilecieron a extremos insospechados el ejer-

cicio del servidor público. A su vez, la gran mayoría de los medios de comunicación, especialmente los canales de radio y televisión, hacen ahora abuso extremo de la libertad de información, manipulan y desorientan a la opinión pública, y han perdido el menor sentido de responsabilidad y de ética periodística. Se han convertido en actores sociales y políticos protagónicos sin ningún control ciudadano. Todo vale con tal de ganar en índices de audiencia.

A pesar de este papel monopólico y excluyente de la mayoría de los partidos, este proceso de construcción de ciudadanía tuvo una dinámica ascendente, signada por hitos fundamentales que es necesario destacar.

El primero de ellos fue el gobierno de la Unidad Democrática y Popular (UDP) del presidente Siles Zuazo, que tuvo la lucidez de jamás utilizar la fuerza pública para reprimir a los emergentes movimientos sociales de entonces. Paradójicamente el líder de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Lechín Oquendo, enemigo personal de Hernán Siles Zuazo, condujo a los trabajadores de la entonces poderosa central obrera a un grado extremo de polarización con reivindicaciones laborales imposibles de atender. Las dictaduras anteriores habían dejado al erario nacional en bancarrota y la inflación monetaria fue incubada en gastos dispendiosos, particularmente durante el atrabiliario gobierno del dictador García Meza (1980-1981). Estas acciones de los movimientos sociales radicalizados le hacían coro a los sectores más conservadores de la sociedad boliviana, representados en ese momento por la amplia mayoría parlamentaria de que gozaban el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) de Víctor Paz Estensoro y la Acción Democrática Nacionalista (ADN) de Hugo Bánzer Suárez.

Otro aspecto necesario de recordar al inicio del proceso democrático es el proceso judicial iniciado contra el ex presidente de facto Luis García Meza por un reducido grupo de abogados dirigidos por el diputado Juan Del Granado, actualmente alcalde de la ciudad de La Paz, que concluyó con una sentencia histórica: treinta años de cárcel para el dictador, sin derecho a indulto, convirtiéndose en un caso inédito en toda la historia latinoamericana. García Meza es el único presidente de facto, ex general de la República, que guarda detención en un penal de alta seguridad por el resto de sus días.

La hiperinflación de 8.000% del año 1985 se tragó al régimen de la UDP un año antes de la finalización de su mandato y abrió las puertas para que la ciudadanía en general aceptara el programa de ajuste estructural y estabilización monetaria que implantó el gobierno de Víctor Paz Estensoro en agosto de 1985. En esa oportunidad entró en escena una disposición legal emblemática —el Decreto Supremo 21060— que resume el ocaso de una economía hasta entonces mayoritariamente estatal y basada en las empresas públicas, implantando la ortodoxia neoliberal. El principal efecto de esta dis-

“Hoy prácticamente un tercio de los representantes nacionales en el Congreso Nacional –por primera vez en la historia republicana– son indígenas. Su digna presencia es una afrenta a los tradicionales partidos sistémicos y a las oligarquías mestizas...”

posición en el plano monetario fue inmediato: la inflación se paró en seco y desde entonces la paridad del cambio del peso boliviano con el dólar ha ido subiendo muy lentamente hasta alcanzar, diecinueve años después, una relación de ocho bolivianos por dólar. Paradójicamente el peso boliviano es una de las monedas más sólidas y estables de la región, en uno de los países más pobres y atrasados del mundo.

En 1982, cuando se inicia el gobierno de la UDP, la proporción de ayuda externa a Bolivia era prácticamente nula. Sin embargo, a partir de la estabilización monetaria de 1985 en adelante, se produjo un incremento notable de inyección de recursos financieros que han llegado a más del 10% del Producto Interno Bruto (PIB) de apenas 8.000 millones de dólares. Cada año cerca de 800 millones de dólares son otorgados concesionalmente en préstamos a muy largo plazo o en forma de donaciones para mantener con vida el *milagro boliviano*. Entretanto, se fueron creando múltiples fondos de inversión social, generación de empleo eventual, inversión en infraestructura educativa y de salud, y algunos servicios básicos que definitivamente han cambiado las condiciones materiales de muchos servicios públicos. Sin embargo, los gastos corrientes para el funcionamiento de estos servicios jamás pudieron alcanzar los niveles requeridos para garantizar recursos frescos provenientes del Tesoro General de la Nación. Es muy fácil encontrar bellas escuelas en los más recónditos lugares del país sin maestros o con muy pocos alumnos, a pesar de la fuerza de la interculturalidad de la reforma educativa iniciada en 1994, que va de la mano con la modificación de la Constitución Política del Estado, que define a Bolivia como país multiétnico y pluricultural.

Como resultado del éxito de la *estabilización monetaria* lograda con la aplicación del famoso decreto 21060, Bolivia fue escogida por la comunidad internacional como el modelo exitoso que había que acompañar, fortalecer y consolidar. Los organismos multilaterales como el BM y el FMI, así como la cooperación bilateral, apostaron por

Bolivia; y enjambres de consultores, asesores, expertos y cooperantes prácticamente invadieron el país y en algunos casos suplantaron funciones públicas. Comenzó así un periodo de *africanización* del estilo de las relaciones de cooperación ante un Estado boliviano débil, desmantelado, sin instituciones públicas propias, y cooptado cada cuatro años por los partidos políticos.

La acelerada expulsión migratoria del campo hacia las ciudades, directamente estimulada por la total apertura a las importaciones en general, pero particularmente a las de productos agrícolas y alimentos tradicionalmente producidos por las poblaciones indígenas y campesinas del mundo rural, es la demostración más palpable de que esta apertura comercial liquidó cualquier posibilidad de desarrollo en el ámbito agropecuario-rural.

Por eso es que tanto los informes sobre desarrollo humano elaborados periódicamente por el PNUD así como diferentes estudios y diagnósticos del BM coinciden en señalar que la extrema pobreza se ha concentrado dramáticamente en las áreas rurales, pero especialmente en aquellas más alejadas y distantes de las ciudades intermedias y centros urbanos. Más del 90% de la población rural indígena de Bolivia vive en condiciones de extrema pobreza y ha desarrollado estrategias de supervivencia que combinan múltiples iniciativas para generar empleo temporal y complementar los ingresos familiares, mediante el comercio, la producción artesanal, pero especialmente mediante la venta de su fuerza de trabajo fuera de su lugar de origen. Se calcula oficialmente que sólo en la República Argentina viven más de un millón de ciudadanos bolivianos.

Muchos campesinos-indígenas de tierras altas abandonan sus comunidades de origen para trabajar sin ninguna garantía laboral y con jornales que fluctúan entre dos o tres dólares al día. Por eso es que la precariedad de las economías campesinas del occidente andino está provocando incesantes flujos migratorios hacia las tierras bajas de los llanos y la Amazonía, regiones que confrontan una enorme presión por el acceso y control de los recursos naturales, especialmente la tierra y el bosque. El conflicto por el acceso a la tierra es ahora uno de los principales elementos de confrontación social entre movimientos de indígenas y campesinos sin tierra, y grandes propietarios de tierras no trabajadas en los llanos.

La reforma agraria de 1953 eliminó definitivamente el régimen de servidumbre y devolvió la tierra a sus legítimos dueños, los indígenas y campesinos del altiplano y los valles. No obstante, esa misma reforma agraria construyó una estructura de propiedad y de producción de corte dual: minifundio en el occidente andino y latifundio en los llanos orientales. La gran mayoría de las tierras de los llanos de Bolivia fueron otorgadas en propiedad mediante dotaciones gratuitas a los simpatizantes del régimen de turno o como

pago por sustentar los regímenes de facto, especialmente durante la dictadura del General Hugo Bánzer entre 1971 y 1978, quien distribuyó gratuitamente cerca de 12 millones de hectáreas en los llanos de Bolivia. En las tierras bajas, El Chaco y la Amazonía boliviana, el conflicto por el acceso a la tierra está atravesando fuertes tensiones resultantes de dos procesos contradictorios.

Por un lado, la ciudad y el departamento de Santa Cruz se han convertido en el centro hegemónico del poder económico sustentado básicamente en torno a la expansión de los cultivos de soja y el crecimiento de la ganadería, y en menor medida los cultivos de algodón y caña de azúcar. Ahora, además, Santa Cruz es depositaria de importantes campos de reserva de gas natural. Es sin duda la región más pujante del país que atrae mano de obra y posibilidades de empleo, pero es allí justamente donde los pueblos indígenas originarios de esas tierras, bajo el amparo de la Ley de Tierras aprobada en el año 1996 (Ley INRA), avanzan lenta pero sostenidamente en la conquista de la titulación de vastos territorios indígenas de propiedad colectiva. Por otra parte, y al mismo tiempo, campesinos-indígenas provenientes de las alturas de occidente literalmente se descuelgan de las montañas y se asientan en cualquier pedazo de tierra que encuentren disponible. Pero esas tierras tienen dueños o por lo menos gente que se atribuye la propiedad con documentos otorgados por el Estado de manera poco clara. Esas tierras constituyen la base patrimonial fundamental de la fortalecida y creciente burguesía regional del oriente. En los hechos, de manera sorda y solapada, hay en esta región una guerra subterránea por el acceso a la tierra y a los bosques que enfrenta –casi irreconciliablemente– a los grandes propietarios, muchos de ellos sólo especuladores y traficantes de tierras, con indígenas orientales y amazónicos por un lado, y migraciones de colonizadores collas de la región andina por el otro.

Los emergentes movimientos indígenas de Bolivia encontraron un poderoso instrumento de fortalecimiento de su identidad étnica territorial y de reconstitución de sus formas de poder local a partir de la aprobación de la Ley de Participación Popular (1994). Esa medida, la descentralización municipalista con pleno reconocimiento jurídico de las autoridades originarias y de las circunscripciones territoriales de sus comunidades, ha despertado un poderoso sentimiento de pertenencia, autogobierno y apropiación indígena de la institucionalidad pública local.

En efecto, de los 318 municipios que existen en Bolivia, 280 son estrictamente rurales y están gobernados mayoritariamente por alcaldes y concejales de origen indígena-campesino. El reciente surgimiento de los liderazgos de Evo Morales en torno al Movimiento al Socialismo (MAS) y de Felipe Quispe con el Movimiento Indígena Pachacuti (MIP) es un efecto directo de la conquista del poder estatal local por parte de la sociedad rural organizada a través de la aplicación de la Ley de Participación Popular. Hoy prácticamente

un tercio de los representantes nacionales en el Congreso Nacional –por primera vez en la historia republicana– son indígenas. Su digna presencia es una afrenta a los tradicionales partidos sistémicos y a las oligarquías mestizas que hasta hace poco han venido controlando hegemónicamente el poder político y económico. Personajes quebrados, intolerantes y racistas que acceden al parlamento en las listas de los partidos sistémicos, como tabla de salvación, están obligados ahora a compartir, discutir y convivir con campesinos-indígenas que por primera vez acceden directamente a la función legislativa.

Desde hace casi un lustro, simultáneamente al proceso de Participación Popular Municipal (1994) y la aplicación de la nueva Ley de Tierras (Ley INRA de 1996), ha surgido en el mundo rural boliviano una fuerte demanda de apropiación plena de los recursos naturales. Si en el siglo XIX fue la plata de Potosí y en el siglo XX el estaño, es claro que en el siglo XXI la forma del aprovechamiento de los hidrocarburos, especialmente del gas, reconfigurará todo el escenario político, social y económico boliviano. Los nuevos pozos de exploración están justamente en medio de los territorios indígenas reconocidos por la nueva Ley de Tierras. Ellos apelan al cumplimiento de las disposiciones del convenio 169 de la OIT para ejercer plenamente su derecho a ser consultados en el aprovechamiento de los recursos naturales. No están dispuestos a que ocurra lo que ya pasó con la plata y el estaño.

Tomando en cuenta todos los antecedentes anteriores, el derrocamiento de Gonzalo Sánchez de Lozada en octubre de 2003 fue el resultado de un conjunto de factores entre los cuales se pueden resumir los siguientes:

1. La enorme fragilidad –pero especialmente ilegitimidad– de las alianzas parlamentarias entre el MNR, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) de Jaime Paz y Nueva Fuerza Republicana (NFR) del ex alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, que dieron lugar a la constitución de ese gobierno con una arrolladora mayo-

“Si en el siglo XIX fue la plata de Potosí y en el siglo XX el estaño, es claro que en el siglo XXI la forma del aprovechamiento de los hidrocarburos, especialmente del gas, reconfigurará todo el escenario político, social y económico boliviano”

ría congresal pero únicamente en términos estrictamente aritméticos. Quienes hasta pocas horas antes se habían agredido sistemáticamente, llegando muchas veces al extremo del insulto personalizado durante la campaña electoral previa, aparecieron cogobernando en una obscena repartija de cargos públicos y del cuoteo prebendal de la administración estatal.

2. La persistencia de una profunda recesión económica como resultado de las crisis anteriores de las economías brasileña y argentina. La devaluación del Real en 1988 generó condiciones muy adversas para las exportaciones bolivianas a ese país. La tasa de desempleo abierto en Bolivia bordea ahora el 14% de la población económicamente activa (PEA), seguramente una de las más altas de la historia boliviana. No hay trabajo. No solamente son campesinos-indígenas o ex obreros los que deambulan por las calles en búsqueda de cualquier fuente de ingreso, sino inclusive amplios sectores de las clases medias profesionales sufren como nunca una disminución absoluta en sus niveles de ingreso y bienestar económico.

3. La negativa percepción ciudadana, especialmente de la enorme ciudad indígena-campesina que es El Alto, respecto de los acuerdos no transparentes de las administraciones de Bánzer, Quiroga y Sánchez de Lozada para exportar el recientemente descubierto gas natural en los *mega campos* de la región de El Chaco, a través de puerros chilenos; la consigna anti chilena, inculcada en las escuelas desde la derrota de la Guerra del Pacífico en 1879; los conflictos por el aprovechamiento de un manantial de agua potable que nace en territorio boliviano (el manantial del Silala), que por medios artificiales ha sido desviado y llega sin pago alguno hasta la ciudad de Arica; la persistencia chilena en mantener sus fronteras con Bolivia con más de medio millón de minas antipersona, violentando todos los tratados internacionales; pero sobre todo la consigna de industrializar el gas antes de exportarlo, cohesionaron fuertemente a los movimientos sociales populares. La respuesta gubernamental al alzamiento popular de octubre tuvo como resultado una cruenta masacre de cincuenta y nueve ciudadanos. El uso indiscriminado de la fuerza pública determinó el derrocamiento de Sánchez de Lozada.

Desde entonces han transcurrido seis meses y medio, y el presidente Carlos Mesa –quien ascendió al cargo por mandato constitucional– ha logrado hasta ahora un frágil ambiente de tolerancia y relativa paz social. Su gobierno no tiene un solo representante en el parlamento, la estructura del poder ejecutivo no se sustenta en ningún partido político y no ha podido afectar ninguno de los *cupos de los partidos* del anterior régimen que acaparan la administración pública. El gobierno tiene el muy difícil mandato de llevar adelante un referéndum vinculante sobre las exportaciones de gas, aprobar una nueva ley de hidrocarburos, conducir las elecciones municipales del mes de

diciembre y promover la instalación de una Asamblea Constituyente para el año 2005, así como reducir el déficit fiscal del 9%, generar fuentes de empleo y reactivar la economía nacional.

En medio de todo este complejo escenario juega un papel destacado la persistente exigencia de la embajada de Estados Unidos para continuar con la erradicación forzosa de los cultivos de la hoja de coca. Este es un aspecto altamente sensible, especialmente para la población indígena que vive de este cultivo en las regiones del Chapare en Cochabamba y de los Yungas en La Paz. Si bien la superficie de los cultivos de hoja de coca ha disminuido dramáticamente en los últimos años –se estima que ahora no existen más de 20.000 hectáreas cultivadas con coca, de las cuales 12.000 son legales de acuerdo a disposiciones vigentes–, las presiones norteamericanas para el uso de la fuerza pública y la represión de los cultivadores de la hoja de coca constituyen una de las principales amenazas a la estabilidad del gobierno del presidente Mesa y de la propia democracia boliviana. Para Estados Unidos y las elites tradicionales de Bolivia es simplemente imposible admitir que un indígena, ex dirigente cocalero, ahora líder de amplios sectores nacionales –Evo Morales– logre importantes avances electorales en los comicios municipales de diciembre de este año y se proyecte como posible ganador de las futuras elecciones presidenciales del año 2007.

A su vez, las empresas petroleras que realizaron fuertes inversiones en la exploración de los hidrocarburos a partir de las normas legales de capitalización que impulsó el gobierno de Sánchez de Lozada en su primer período (1993-1997) ejercen ahora enormes presiones para mantener sus expectativas de ganancia a partir de la venta directa de Gas Natural Licuado (GNL) a mercados internacionales. Bolivia tiene ahora más de 46,8 TCF (trillones de pies cúbicos de gas, por sus siglas en inglés) como reservas certificadas, y es probable que esta cifra pueda fácilmente duplicarse si se continúan las exploraciones. En los hechos Bolivia se ha convertido de la noche a la mañana en la principal potencia gasífera del continente y es ahora punto central de atención de los países vecinos, empresas transnacionales y mercados de ultramar, especialmente de California y México, ávidos de energía pura y barata.

La consigna de los sectores populares en octubre de 2003 era *no a la exportación del gas por puertos chilenos*; en seis meses esa consigna ha cambiado y hoy el elemento nucleador de las protestas sociales de mayo de 2004 es la *nacionalización del gas*.

Bolivia ha nacionalizado los hidrocarburos en dos momentos particulares del siglo XX: en 1937 los campos de la Standard Oil y en 1969 los de la Bolivian Gulf Company, con las correspondientes indemnizaciones por expropiación. Pero en esas oportunidades –pese a que los oleoductos ya estaban tendidos y los mercados asegurados– los mon-

tos a indemnizar eran pequeños. Hoy la situación es completamente distinta. Si Bolivia quisiera nacionalizar el gas, utilizarlo y aprovecharlo por sí sólo, necesitaría cuando menos de 5 mil millones de dólares para hacer que esa expropiación rinda frutos económicos dentro de unos cuatro años. Por un lado habría que indemnizar a las empresas extranjeras por inversiones que fluctúan alrededor de los 3 mil millones de dólares –sin contar con sus expectativas de ganancias futuras– y además invertir otros 2 mil millones de dólares para la instalación de ductos, plantas de bombeo y estaciones de licuefacción del gas para su exportación. Y todo esto aún sin tomar en cuenta las cuantiosas inversiones que se requerirían para su aprovechamiento industrial. Esos 5 mil millones de dólares equivalen a más del 60% del PIB. En consecuencia, técnica y financieramente la nacionalización del gas –como se hizo en los períodos anteriores– ahora no es posible.

El gobierno del presidente Mesa acaba de presentar al Congreso un proyecto de Ley de Hidrocarburos que vuelve a crear la empresa estatal del petróleo, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), y sin consulta previa con las empresas petroleras eleva progresivamente los impuestos hasta un 50%. Obviamente las empresas transnacionales rechazan ese incremento y amenazan con paralizar sus operaciones e impugnar ante tribunales internacionales. Sin embargo, los movimientos sociales más radicales exigen la nacionalización inmediata y sin indemnización a las empresas extranjeras, lo que significaría el aislamiento absoluto de Bolivia en el contexto internacional.

Movimientos sociales radicalizados lanzaron, a fines de abril, la consigna de huelga general indefinida y bloqueo de caminos en todo el país. Esa es la consabida consigna para derrocar un gobierno. A la fecha en que se escribe este breve ensayo (10 de mayo de 2004), sólo sectores aislados pero muy bien organizados bajo el control de movimientos de la izquierda más radical como el magisterio, algunas universidades y sectores de mineros, exigen al presidente Mesa la nacionalización del gas o su renuncia. Esta consigna de sectores minoritarios pero muy activos está sustentada por análisis superficiales elaborados por instituciones no especializadas en el tema que desacreditan el proyecto de ley del gobierno al que califican de continuismo del anterior.

El viernes 7 de mayo, el Tribunal Constitucional falló a favor de los familiares de los damnificados en las revueltas del Motín Policial de febrero de 2003 y estableció que los militares involucrados en las muertes de civiles deben ser juzgados en la justicia ordinaria y no en el Tribunal Militar. La respuesta del Alto Mando Militar ha sido el desacato al fallo del Tribunal Constitucional y por primera vez en veintidós años de democracia han hecho público un pronunciamiento de corte eminentemente político. Luego de veintidós años de vida estrictamente institucional, las FF.AA. se han convertido en el actor político central que definirá el futuro del proceso democrático.

De esa manera, al igual que en el año 1985, sectores de la vanguardia social le están haciendo ahora el juego a la embajada norteamericana, a las empresas petroleras y a los sectores más conservadores de terratenientes del oriente. Estos sectores de poder ya han expresado que el gas se debe exportar cuanto antes y por cualquier puerto, rechazan la convocatoria al referéndum vinculante y se enfrentan abiertamente a la realización de la futura Asamblea Constituyente. El gobierno del presidente Carlos Mesa rompió el equilibrio que había logrado mantener durante medio año, hasta el mes de abril pasado, y optó por conformar un nuevo gabinete que incorpora a destacados profesionales comprometidos con una visión humanista, de equidad social y económica, y pro indígena. Convocó al referéndum sobre el gas mediante Decreto Supremo, ante el sistemático boicot de los partidos que dominan el Congreso y que hasta el cierre de este ensayo aún se resisten a aprobar la Ley de Convocatoria al Referéndum. El gobierno del presidente Mesa ha hecho un giro leve hacia la izquierda. El dirigente Evo Morales llama a la cordura y a la preservación del régimen democrático.

Mientras tanto ha comenzado a surgir de forma tímida, dispersa y sin liderazgo visible, una corriente ciudadana que pretende movilizarse en búsqueda de conservar escenarios democráticos de ejercicio pleno de la ciudadanía en términos del respeto a la ley, la democracia, la convivencia ciudadana y la justicia social. No se sabe aún si este movimiento logrará traducir en apoyo político la enorme simpatía ciudadana del 70% que aún concentra el presidente Carlos Mesa.

Las relaciones entre Chile y Bolivia han llegado a un nivel muy grande de deterioro y la campaña electoral presidencial chilena está incluyendo por primera vez en su historia el debate sobre la demanda marítima de Bolivia y sus requerimientos energéticos para atender su creciente actividad productiva e industrial. Aparentemente el presidente Lagos ha tomado ya la decisión de no depender del aprovisionamiento de gas de ninguno de los países vecinos, incluida la Argentina. Chile estaría dispuesto a comprar gas proveniente de países asiáticos pagando tres veces más el precio que podría negociar con Bolivia o Argentina.

Los reclamos sociales son estrictamente sectoriales y puntuales, en un ambiente de generalizado desacato a la autoridad y a las normas vigentes. No solamente están fragmentados los movimientos sociales, sino también el Estado, sus instituciones y sus operadores. Desde hace muchos años, desde esferas gubernamentales, se ha acostumbrado a los movimientos sociales a que la única manera de obtener *conquistas sociales* es a través de la presión.

Sólo existen dos proyectos políticos que podrían ser calificados como portadores de visión de Estado y de sociedad. Por un lado, el autodenominado movimiento *nación*

Camba (o de la media luna porque incluye a todos los departamentos y provincias no andinas) que aglutina a sectores del oriente y Chaco boliviano; y, por el otro, la propuesta de reconstitución aymara del Collasuyo en el altiplano paceño. Ambas propuestas que pueden conceptualizarse como nacionalistas, racistas y conservadoras, se basan en la exclusión y en el rechazo y la negación del *otro*, del distinto. Ninguno de estos dos movimientos quiere ni el referéndum sobre el gas el 18 de julio próximo ni la realización de la Asamblea Constituyente el próximo año. Estas propuestas radicalizan los comportamientos de la sociedad boliviana hacia grados aún mayores de intolerancia.

Mayo de 2004 será un mes de definiciones que marcarán el nuevo rumbo de la historia boliviana. Si el gobierno del presidente Carlos Mesa es derrotado por la acción combinada de fuerzas de la izquierda más radical que finalmente pueden acabar coincidiendo con los intereses de las empresas petroleras, la embajada americana y los grupos tradicionales de poder, seguramente Bolivia ingresará en una fase de mayor inestabilidad política, desajustes sociales y confrontaciones regionales que, sin duda, afectarán al conjunto de los países vecinos.

[cronología enero-abril 2004]

ENERO

LUNES 5 Alrededor de 30 ex trabajadores del Instituto Nacional de Cooperativas (INALCO) marchan por el centro de La Paz en rechazo al cierre de la entidad, ocurrido el pasado 1° de enero, en la cual trabajan más de 100 personas.

LUNES 12 Alrededor de 400 campesinos del Movimiento Sin Tierra de Bolivia (MSTB) ocupan la propiedad La Posada del Inca ubicada en la provincia de Omasuyos del departamento de La Paz. Dirigentes del movimiento expresan que por el momento no dialogarán con el gobierno y continuarán con el plan de ocupación de tierras en diversos puntos del país.

Pobladores de 30 comunidades campesinas de las provincias de Quillacollo, Tapacarí y Capinota, del departamento de Cochabamba, destrozan las instalaciones de 6 concesiones mineras e incendian 2 vehículos para protestar por la sobre explotación de agua, piedra y arena que realizan las empresas mineras en la región. En horas de la tarde un contingente policial interviene en el conflicto y controla la situación.

Un grupo de 300 trabajadores sin jubilación inicia una huelga de hambre en la Catedral Metropolitana y en la Federación de Trabajadores Fabriles de la ciudad de Cochabamba en demanda de la inmediata asignación de una renta y una respuesta al pliego petitorio del sector.

MARTES 13 Cerca de 100 integrantes del MSTB ocupan una hacienda en el departamento de Tarija, propiedad del ex ministro de Educación y actual senador por el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) Hugo Carvajal Donoso.

JUEVES 15 Un grupo de ex trabajadores mineros sin jubilación ocupa, junto al secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), el edificio del Servicio Nacional de Sistema de Reparto (SENASIR) de la ciudad de La Paz para exigir que las autoridades de dicha repartición aprueben su retiro bajo el anterior sistema de reparto. Los trabajadores toman rehenes y amenazan con detonar cartuchos de dinamita. Finalmente, cerca de la medianoche, firman un acuerdo con el viceministro de Presupuesto y un representante de la Asamblea

Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) en el cual las partes se comprometen a iniciar un proceso de diálogo con el objetivo de responder positivamente a la demanda planteada.

LUNES 19 Se inicia en la localidad de Yacuiba, departamento de Tarija, el 1° Congreso Orgánico del MSTB, el cual se extiende hasta el próximo 22 de enero. En el mismo se determina el abandono de las propiedades ocupadas en los últimos días en el altiplano paceño con el objetivo de iniciar un diálogo con el gobierno. El ministro de Desarrollo Sostenible expresa que en los próximos meses se dotará al sector de 500 mil hectáreas de tierra.

Pobladores, instituciones cívicas, profesionales y políticos de la localidad de Camiri, departamento de Santa Cruz, inician un paro cívico por tiempo indefinido con bloqueo de caminos en demanda de la descentralización y reactivación petrolera de la zona.

MARTES 20 Cerca de 18 organizaciones sociales y sindicales entre las que se encuentran la APDHB, la COB, la Federación de Juntas Vecinales (FEJUVE), la Universidad Pública de El Alto (UPEA), la Federación de Trabajadoras Campesinas Bartolina Sisa, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) y la Federación de Mineros de Bolivia, conforman en la ciudad de La Paz un comité impulsor con el objetivo de iniciar un juicio de responsabilidades al ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, a sus ministros y al alto mando militar, a quienes responsabilizan de las muertes ocurridas durante los meses de febrero y octubre de 2003. En este sentido, existen 6 demandas presentadas pero es el Congreso el que debe aprobar, por una mayoría de dos tercios, la apertura del juicio al ex mandatario.

MIÉRCOLES 21 Centenares de padres de familia, aglutinados en la Federación de Padres de Familia (FEDEPAF) de El Alto, marchan hacia el Ministerio de Educación en la ciudad de La Paz para exigir la designación de 1.500 cargos docentes. Al promediar la actividad, vecinos de la ciudad repudian la marcha y arrojan tierra y agua para evitar que la misma siga su curso. Luego de un breve enfrentamiento, los manifestantes logran su objetivo y llegan a la sede del ministerio.

LUNES 26 Un grupo de trabajadores de la empresa Ciudad Limpia Sociedad Anónima (CLISA), ex concesionaria de la recaudación de residuos de la ciudad de Santa Cruz, bloquea el ingreso al basurero municipal para exigir el pago del dinero adeudado por la empresa. Al promediar el bloqueo, un manifestante muere atropellado por una camioneta.

El gobierno y el MSTB firman un acuerdo por el cual este último se compromete a desalojar las propiedades ocupadas en el departamento de La Paz a condición de que el primero inicie de forma inmediata el proceso de saneamiento y titulación de tierras.

MIÉRCOLES 28 Los trabajadores de CLISA, quienes mantienen bloqueado el ingreso al basurero municipal de Santa Cruz, levantan la medida de fuerza tras firmar un acuerdo con autoridades municipales y ejecutivos de la empresa por medio del cual estos se comprometen a depositar los sueldos adeudados a los trabajadores.

JUEVES 29 Un grupo de personas pertenecientes a diversas juntas vecinales y a la Unión de la Juventud Boliviana se concentran en la zona sur de la ciudad de La Paz para reivindicar el pedido de salida al mar con soberanía para Bolivia.

SÁBADO 31 El presidente Carlos Mesa aprueba el Decreto Supremo 27.342 por medio del cual se restituye a manos del estado boliviano el concepto de propiedad de los hidrocarburos. El 4 de agosto de 1997 el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada había aprobado el decreto 24.806 por el cual se entregaba la propiedad de los hidrocarburos en boca de pozo a las transnacionales.

FEBRERO

LUNES 2 Alrededor de 1.000 internos del penal de San Pedro inician una huelga de hambre para exigir al Congreso Nacional la modificación de las leyes de ejecución de penas y del sistema nacional de seguridad ciudadana, y en rechazo a la extensión del plazo de prescripción de los procesos que no tienen sentencia ejecutoria, el cual caduca el próximo 31 de mayo.

LUNES 9 Maestros de La Paz paralizan sus labores por 24 hs para exigir el pago de sus haberes correspondientes al mes de enero y del bono al cumplimiento.

MARTES 10 La Confederación Nacional de Choferes de Bolivia inicia un paro nacional de transporte de 48 hs en protesta por el anuncio presidencial del nuevo plan económico que, entre otras cosas, incluye la desregulación del precio de los combustibles.

MIÉRCOLES 11 Internos de la cárcel de Palmasola, departamento de Santa Cruz, se crucifican, cosen los labios y auto infieren cortes en los brazos para exigir, entre otras demandas, la modificación de la Ley de Ejecución de Penas. Las medidas de presión son transmitidas por televisión a todo el país, lo que genera la reacción de las autoridades y la intervención de la policía en el penal. Los reclusos desisten de la protesta y son internados en hospitales del servicio penitenciario.

LUNES 16 Alrededor de 1.000 padres de familia de unos 10 centros educativos del departamento de Cochabamba se manifiestan por el centro de la ciudad en demanda de la entrega por parte del gobierno de 1.200 asignaciones para educación y 100 para la salud.

MIÉRCOLES 18 La Cámara de Diputados aprueba las modificaciones a la Ley de Ejecución de Penas en las que se rechazan los beneficios de extramuro y redención, demandados por reclusos de todo el país quienes se encuentran desarrollando medidas de presión. Las únicas reivindicaciones aprobadas por los parlamentarios consisten en las salidas prolongadas y la designación de delegados procuradores.

JUEVES 19 Dirigentes del sector empresarial privado de Santa Cruz firman un acuerdo con el gobierno por el cual éste se compromete a no analizar las reformas impositivas en el Congreso hasta que no exista un total acuerdo entre todas las regiones y sectores privados del país.

MIÉRCOLES 25 Alrededor de 20 trabajadores del Grupo Industrial de Bebidas SA instalan un piquete de huelga de hambre en el balcón de la Federación Departamental de Fabriles de Cochabamba para exigir a los ejecutivos de la empresa el pago de sueldos, aportes y beneficios atrasados correspondientes a los últimos 6 meses.

MARZO

LUNES 1 Los 21 trabajadores de la empresa Bebidas SA que se encuentran desarrollando una huelga deciden, en asamblea, rechazar la propuesta de las autoridades y exigen el pago de todos sus beneficios y sueldos adeudados. Representantes de los empresarios expresan que dada la imposibilidad de afrontar los pagos, el conflicto se resolverá en los tribunales.

Dirigentes de la Federación Departamental de Maestros Urbanos de La Paz se declaran en huelga de hambre en el auditorio del Servicio Departamental de Educación (SEDUCA) para exigir al Ministerio de Educación la asignación de cargos docentes para las escuelas del departamento.

JUEVES 4 Cientos de padres de familia, divididos en grupos de 20 personas, bloquean varias calles y avenidas de la ciudad de Cochabamba y provincias del departamento para exigir al Ministerio de Educación la asignación de 1.000 ítems docentes para toda la región.

El poder ejecutivo retira el proyecto de Ley del Impuesto al Patrimonio Neto y decide reemplazarlo por otro denominado Impuesto Complementario a los Inmuebles y a los Vehículos. Más tarde, dada la presión de diversos sectores, el gobierno se ve obligado a suspender el proyecto de este nuevo impuesto y anuncia que presentará uno nuevo en los próximos días.

DOMINGO 7 Alrededor de 8 mil cocaleros pertenecientes a las 6 Federaciones de Productores de Coca del Trópico de Cochabamba se concentran en la localidad de Ivirgarzama para demandar al gobierno una revisión profunda de la

orientación del Programa de Desarrollo Alternativo y una posible pausa en la erradicación de los cultivos de coca.

- LUNES 8** Dirigentes de los productores de coca del Trópico de Cochabamba se reúnen con funcionarios del gobierno y acuerdan suspender las medidas de presión hasta el próximo día 22, momento en el que analizarán las respuestas gubernamentales sobre las demandas de una pausa en la erradicación forzosa de cultivos y de desmilitarización de la región.
- MARTES 9** Ex trabajadores de la Cooperativa de Teléfonos Automáticos de La Paz (COTEL) ocupan el edificio en donde funciona la compañía e instalan un piquete de huelga de hambre para exigir a los directivos de la empresa la recontratación de los trabajadores despedidos. Por la noche son detenidos y llevados a las instalaciones de la Policía Técnica Judicial (PTJ).
- MIÉRCOLES 10** Médicos y trabajadores del Colegio Médico de Bolivia (CMB) inician un paro por 48 hs en demanda de un aumento en el presupuesto destinado a la salud. Dirigentes del sector expresan que tal aumento, que debiera hacerse efectivo también en el área de educación, debe provenir del dinero que el estado destinada para financiar a los partidos políticos.
- DOMINGO 14** Unas 300 familias de Irupana, departamento de La Paz, ocupan los predios del vivero experimental para reclamar su cesión a la comuna local y su posterior adjudicación a los ocupantes. La acción es coordinada por el Movimiento de los Sin Techo.
- LUNES 15** Alrededor de 70 postulantes no admitidos en la Universidad Pedagógica de Sucre inician una marcha a la ciudad de La Paz para exigir que el Ministerio de Educación garantice 300 plazas para el segundo semestre del año.
- MIÉRCOLES 17** Alrededor de 4 mil personas marchan por el centro de La Paz convocadas por la COB en repudio a la política del gobierno y para exigir la derogación de la ley de hidrocarburos, entre otras reivindicaciones. Asimismo, trabajadores del magisterio urbano se movilizan hacia el Ministerio de Educación para exigir un aumento de presupuesto.
- Representantes del Movimiento Sin Techo firman un acuerdo con la Prefectura de La Paz por medio del cual ambas partes se comprometen a resolver el conflicto originado por la toma de tierras en el municipio de Irupana. El documento establece la conformación de una comisión encargada de revisar los títulos de propiedad de los terrenos ocupados por los campesinos.
- SÁBADO 20** Alrededor de 100 estudiantes no admitidos en la Universidad Pedagógica Mariscal Sucre, quienes realizan una marcha hacia La Paz, bloquean el límite

departamental entre Sucre y Potosí para reclamar que se les garantice la posibilidad de cursar en la casa de estudios superiores en el presente año.

JUEVES 25 Cientos de personas, entre mineros, obreros industriales y desocupados, convocadas por la COB, marchan por el centro de La Paz en repudio a la política del gobierno y exigen la renuncia del presidente Mesa y la convocatoria a elecciones en un plazo de 6 meses. Al mismo tiempo, maestros rurales se movilizan por la ciudad en demanda de un aumento presupuestario para el sector. Luego, dirigentes de la central obrera y del Comité de Defensa del Patrimonio Nacional y de la Soberanía y Dignidad (CODEPANAL) presentan en el Congreso Nacional un proyecto de ley que apunta a la recuperación de los hidrocarburos y petroquímicos.

ABRIL

JUEVES 1 El presidente Mesa promulga la Ley del Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) e instruye a su equipo económico la elaboración de los reglamentos respectivos.

Todas las universidades del país inician un paro de 48 hs convocado por el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) en demanda del aumento presupuestario para las casas de altos estudios.

LUNES 5 Miles de comerciantes se movilizan en las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz para exigir al gobierno que mantenga en vigencia el régimen simplificado en el sistema tributario.

Cientos de cocaleros de la región de Los Yungas, departamento de La Paz, bloquean la carretera que conduce a la capital departamental en rechazo a la construcción de un cuartel policial y puesto de control antidrogas en el sector de La Rinconada. En los primeros instantes del corte de la ruta se producen enfrentamientos entre los campesinos y los agentes del orden. Horas más tarde el ministro de Gobierno, Alfonso Ferrufino Valderrama, se hace presente en el lugar y asegura que el gobierno de Carlos Mesa no procederá a la erradicación forzosa de los cultivos de coca en la región de Los Yungas. A pesar de la presencia del funcionario, los cocaleros no levantan la medida.

Alrededor de 100 personas no videntes, afiliadas a la Federación Nacional de Ciegos de Bolivia (FENACIEBO), inician una marcha desde Caracollo, en el departamento de Oruro, hacia la ciudad de La Paz para exigir que el gobierno incremente el monto de sus rentas en un 55%. La propuesta gubernamental consiste en un aumento del 8%.

MIÉRCOLES 7 Los cocaleros de Los Yungas de La Paz, quienes mantienen bloqueada la carretera en la localidad de La Rinconada, levantan la medida tras firmar un acuerdo con el gobierno por el cual éste se compromete a suspender la construcción de un puesto de control policial en la zona. El documento también incluye la promesa gubernamental de no proceder a la erradicación de cultivos en el departamento y de conformar de una comisión mixta para tratar los temas referentes al conflicto.

Alrededor de 50 personas no videntes marchan y bloquean calles en el centro de La Paz para exigir al gobierno el aumento de sus rentas anuales a 3.500 bolivianos. La medida se realiza en respaldo de la marcha que, con la misma reivindicación, protagonizan los integrantes de la FENACIEBO desde la ciudad de Caracollo hacia el centro paceño. En el interior del país diversos grupos de no videntes se declaran en huelga de hambre en demanda del incremento de sus rentas.

SÁBADO 10 La FENACIEBO firma un acuerdo con el gobierno por medio del cual se levantan las medidas de presión desarrolladas en los últimos días. El documento establece el incremento de las pensiones por indigencia de 2.246 a 2.500 bolivianos por año.

LUNES 12 La Confederación de Maestros Rurales de Bolivia inicia un paro nacional de actividades por 48 hs en demanda de la cancelación del incentivo a la permanencia rural adeudado desde el mes de enero, la nivelación de horas para los docentes rurales y la definición del porcentaje del incremento salarial acordado con el poder ejecutivo. El secretario ejecutivo de la organización expresa que de no encontrar respuestas positivas a sus demandas se realizará una huelga por tiempo indefinido.

MARTES 13 El presidente Carlos Mesa firma el decreto supremo 27.449 por medio del cual se establece el marco para la consulta nacional sobre la política energética del país, que se realizará el próximo 18 de julio y se llevará a cabo en distrito único a nivel nacional. Anuncia que en las próximas horas enviará al Congreso un proyecto de ley para modificar la Ley de Hidrocarburos. Asimismo, informa de los cambios realizados en su gabinete con el nombramiento de 3 nuevos ministros, la rotación de otros 2, la eliminación de 3 delegaciones con rango ministerial y la creación de una nueva cartera vinculada a los asuntos indígenas y pueblos originarios.

JUEVES 15 Alrededor de 5 mil personas, entre mineros, fabriles y trabajadores sin jubilación, convocadas por la COB, marchan por el centro de La Paz en demanda de la derogación de las leyes de hidrocarburos y de pensiones, la reversión al estado de los recursos hidrocarbúrriferos, y el cumplimiento del pliego petitorio que la organización presentara al gobierno a principios del presente año. Al finalizar la actividad, el secretario ejecutivo Jaime Solares anuncia el inicio

de una huelga indefinida para el próximo 3 de mayo. Similares movilizaciones se realizan en las ciudades de Cochabamba y Santa Cruz.

Cientos de alumnos, docentes y trabajadores administrativos de las universidades públicas de todo el país inician una marcha desde la localidad de Patacamaya hacia la ciudad de La Paz en demanda de aumento presupuestario para el sector. La medida, acordada en la VII Conferencia Nacional Extraordinaria de Universidades, manifiesta el rechazo a la propuesta gubernamental de incrementar el presupuesto universitario en sólo un 3% en relación al año anterior.

LUNES 19 Alrededor de 3 mil universitarios, entre estudiantes, docentes y autoridades, llegan a La Paz procedentes de la localidad de Patacamaya en lo que constituye el último punto de la marcha iniciada el pasado jueves en demanda de aumento presupuestario para todas las universidades públicas del país.

Representantes de las 6 Federaciones de Productores de Coca de Cochabamba informan al gobierno que las bases del movimiento aceptan el marco de la propuesta oficial de desarrollo integral participativo y sostenible presentada por el poder ejecutivo el pasado 19 de marzo.

MARTES 20 Indígenas y campesinos del Consejo Nacional de Markas y Ayllus del Qollasuyo (CONAMAQ) bloquean las puertas del Ministerio de Asuntos Indígenas y se declaran en huelga de hambre para exigir la renuncia del titular del área a quien no consideran idóneo.

MIÉRCOLES 21 Estudiantes universitarios se movilizan por el centro de La Paz y bloquean calles y avenidas en demanda de un aumento de presupuesto para el sector. La policía reprime la manifestación con gases lacrimógenos y balas de goma, lo que deja un saldo de 5 heridos.

Agentes de la policía reprimen al contingente de indígenas de la CONAMAQ quienes realizan una huelga de hambre para exigir la renuncia del flamante ministro de Asuntos Indígenas y obligan a los mismos a suspender la medida de fuerza.

JUEVES 22 La Confederación de Choferes de Bolivia inicia un paro de 24 hs en todo el país para exigir que el gobierno mantenga estable el precio de los hidrocarburos y que la distribución de los mismos sea realizada por Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia (YPFB) en lugar de los mayoristas privados.

SÁBADO 24 El gobierno y el secretario general de los ex trabajadores sin jubilación firman un acuerdo por el cual el primero se compromete a dar respuesta a las exigencias planteadas por el sector.

JUEVES 29 Unas 15 comunidades originarias de Pando bloquean el acceso a la localidad para exigir al gobierno la agilización de los trámites para la titulación y saneamiento de tierras, y la dotación de 500 hectáreas por comunidad.

GLOSARIO DE SIGLAS

APDHB	Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia
CEUB	Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana
CLISA	Ciudad Limpia Sociedad Anónima
CMB	Colegio Médico de Bolivia
COB	Central Obrera Boliviana
CODEPANAL	Comité de Defensa del Patrimonio Nacional y de la Soberanía y Dignidad
CONAMAQ	Consejo Nacional de Markas y Ayllus del Qollasuyo
COTEL	Cooperativa de Teléfonos Automáticos de La Paz
CSUTCB	Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia
FEDEPAF	Federación de Padres de Familia
FEJUVE	Federación de Juntas Vecinales
FENACIEBO	Federación Nacional de Ciegos de Bolivia
INALCO	Instituto Nacional de Cooperativas
ITF	Impuesto a las Transacciones Financieras
MIR	Movimiento de Izquierda Revolucionaria
MSTB	Movimiento Sin Tierra de Bolivia
PTJ	Policía Técnica Judicial
SEDUCA	Servicio Departamental de Educación
SENASIR	Servicio Nacional de Sistema de Reparto
UPEA	Universidad Pública de El Alto
YPFB	Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia

Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).

Relevamiento y sistematización a cargo de Marcelo Perera.

Fuentes: diarios Los Tiempos, La Razón, El Diario, Correo del Sur y La Prensa.

Otras fuentes: Indymedia Bolivia y Bolpress.

[cronología enero-abril 2004]

ENERO

- VIERNES 2** Las autoridades de Ecuador capturan en Quito a Simón Trinidad, miembro del Secretariado del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). El ministro colombiano de Defensa revela que dicha captura contó con el apoyo de Estados Unidos.
- MIÉRCOLES 7** En Barranquilla, más de 200 trabajadores de la Empresa Distrital de Telecomunicaciones (EDT), apoyados por el Sindicato de Trabajadores de la Empresa Distrital de Telecomunicaciones (SINTRADISTEL), realizan un bloqueo para exigir a la empresa que entregue las pruebas que muestran a los empleados haciendo un sabotaje a las líneas, y contra la liquidación de la empresa.
- SÁBADO 10** El gobierno de EE.UU. anuncia que destinará 500 millones de dólares durante el año 2004 para financiar la lucha colombiana contra las drogas.
- DOMINGO 11** Las FARC y el ejército se enfrentan en los municipios de Argelia, Puerto Valdivia y Sonsón, en el oriente de Antioquia. Además, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) combate con las fuerzas armadas en el municipio de El Tambo, a 400 kilómetros de Bogotá.
- LUNES 12** El Fondo Monetario Internacional (FMI) desembolsa 145 millones de dólares en el marco de un crédito de 2 años otorgado en enero de 2003.
- MARTES 13** Las FARC realizan un atentado contra el oleoducto Caño Limón Coveñas en la zona rural del municipio de Arauquita, Arauca.
- El FMI avala el programa de ajuste del gobierno colombiano pero critica las medidas para reducir el déficit fiscal, incluidos algunos puntos de la reforma tributaria.
- MARTES 20** Presos realizan una protesta en la cárcel de máxima seguridad de Colombia, en Bogotá, contra la suspensión de la venta de tarjetas de teléfono. La policía reprime la protesta con gases lacrimógenos y se enfrenta con los reclusos hiriendo a 49 de ellos.

El gobierno nacional y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) reanudan el diálogo como parte del proceso de paz que pretende la desmovilización de unos 20 mil combatientes antes del 31 de diciembre de 2005.

JUEVES 22 Las FARC y las AUC se enfrentan en las veredas La Múcura, La Laguna y Monte Oscuro, jurisdicción de San Juan del César, La Guajira.

VIERNES 23 El secretario general de la Juventud Comunista (JUCO) y dirigente del Frente Social y Político es detenido por el ejército en el centro de Bogotá.

DOMINGO 25 Luego de que las FARC divulgaran un video en el que 12 diputados cautivos exigen un intercambio humanitario, crece la presión para que se realice un canje de secuestrados por guerrilleros presos. La Organización de Estados Americanos (OEA) crea una comisión para verificar el cumplimiento de los acuerdos de paz.

MIÉRCOLES 28 Trabajadores del Hospital Universitario de Barranquilla (HUB), apoyados por la Asociación Nacional de Trabajadores Hospitalarios de Colombia (ANTHOC) sede Atlántico, realizan una protesta por tiempo indeterminado para exigir el pago de salarios y la prima de navidad.

JUEVES 29 El grupo paramilitar Autodefensas Campesinas del Casanare (ACC) acuerda con el gobierno concentrar sus hombres para una eventual desmovilización.

En Bucamaranga, más de 800 trabajadores del Hospital Universitario realizan una huelga durante 3 días para exigir el pago de 7.500 millones de pesos y la destitución del gerente del hospital.

SÁBADO 31 Las FARC combaten con el ejército en Bucarasica, Norte de Santander.

FEBRERO

LUNES 2 Más de 3 mil docentes de Santa Marta, apoyados por el Sindicato de Educadores del Magdalena, inician un paro y marchan hasta la alcaldía junto con padres de familia y estudiantes, para exigir el pago de 16.300 millones de pesos que se les adeuda.

MARTES 3 El presidente Uribe se reúne con los embajadores de la Unión Europea (UE) en Bogotá y sostiene que “no habrá ni olvido ni perdón” para las autodefensas, en respuesta a los temores expresados por varios sectores –entre ellos la iglesia– de que haya impunidad para los paramilitares.

MARTES 10 Los trabajadores agremiados a ANTHOC levantan el paro luego de acordar con el equipo económico del distrito la entrega de un giro de 1.547 millones de pesos colombianos para pagarles el mes de enero y parte del de febrero.

En el marco de la gira del presidente Uribe por Europa, líderes de los grupos liberales, verdes y de la izquierda se ausentan del parlamento europeo en repudio a la presencia del presidente colombiano.

MIÉRCOLES 11 Más de 2 mil mototaxistas realizan un bloqueo en la avenida Pedro de Heredia, Cartagena, en protesta por un decreto de la alcaldía que les prohíbe transitar por esa vía en horas pico.

El primer ministro italiano Silvio Berlusconi se retira de la cita programada con el presidente Uribe en ese país por tener que cumplir con “otras obligaciones”.

VIERNES 13 Las FARC y el ejército combaten en Ituango, Norte de Antioquia, y en el río Bebará, municipio de Medio Atrato, Chocó.

MARTES 17 El presidente Uribe y los principales partidos políticos firman un acuerdo para sacar adelante en el Congreso reformas que buscan “modernizar el estado, agilizar la justicia y dinamizar la economía”. Los opositores de izquierda agrupados en el Polo Democrático Independiente (PDI) y la Coalición Democrática se abstienen de firmar dicho acuerdo político.

VIERNES 20 El gobierno denuncia el incumplimiento del cese del fuego anunciado por los paramilitares y les exige que se ubiquen de inmediato en zonas de concentración.

SÁBADO 21 El ejército combate con paramilitares en Villanueva, oriente de Bogotá, y en el municipio de Apía, Risaralda. Además, combate con las FARC en Llano Grande, al noroccidente de la capital, y en los municipios de Vista Hermosa y Mesetas, Meta. Al mismo tiempo, se enfrenta con el ELN en Antioquia, Santander y Casanare.

LUNES 23 La Asociación de Camioneros de Colombia (ACC), seccional Antioquia, y la Asociación de Transportadores de Carga (ATC) inician un paro, del que participan más de 4 mil transportistas, contra el incumplimiento en el pago de la tabla de fletes de varias empresas antioqueñas.

MIÉRCOLES 25 Miles de docentes de todo el país, nucleados en la Federación Colombiana de Educadores (FECODE), inician un paro de 48 hs y movilizaciones en diversas ciudades contra la política de ajuste del gobierno, los despidos y las privatizaciones en el sector público. Rechazan también la medida impuesta por el ejecutivo que afecta la estabilidad laboral de los maestros.

JUEVES 26 En el marco del paro de 48 horas iniciado el día anterior, miles de trabajadores del sector público, docentes, empleados del Instituto de Seguro Social (ISS) y del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), entre otros, convocados por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y la FECODE, entre otras orga-

nizaciones, marchan por las calles de Bogotá, Cali, Medellín, Santa Marta, Barrancabermeja y Cucutá, contra las privatizaciones, despidos y ajustes presupuestarios, y en defensa de la educación pública.

La ACC levanta el paro luego de acordar con los empresarios y el ministro de Transporte una tarifa para los fletes de carga de 1.050.000 pesos, entre otras cuestiones.

VIERNES 27 En La Guajira, más de 1.500 indígenas wayúu bloquean la vía que une al municipio de Maicao con el estado de Zulia en Venezuela, en protesta por los decomisos de sus mercaderías, la inmovilización de vehículos por parte de la policía aduanera y en defensa de su derecho al trabajo.

MARZO

JUEVES 4 Personas no identificadas asesinan a un sindicalista de ANTHOC, trabajador del Hospital de Barranquilla.

DOMINGO 7 Unos 1.500 paramilitares del Bloque Central Bolívar (BCB) que operan en los cascos urbanos de algunas ciudades y municipios del centro norte del país anuncian su pronta desmovilización.

MARTES 9 Las administraciones de las plantas de embotellamiento de Coca Cola en Cucutá y Cartagena impiden salir a los trabajadores de las mismas como forma de presión para exigirles que renuncien a sus puestos, a cambio de un modesto pago económico. Algunos días antes un juez y la corte constitucional confirman que la compañía ha cometido el crimen de constreñimiento ilegal de trabajadores, y la empresa está ahora obligada a pagar los sueldos y reemplazar a los obreros chantajeados para dejar sus trabajos en la planta de embotellamiento en Medellín.

Pobladores de San Pablo, sur de Bolívar, realizan saqueos, apedrean la alcaldía local y queman un vehículo para exigir la renuncia del alcalde y de la policía en protesta por el asesinato de un comerciante por parte de las autodefensas. El alcalde abandona el pueblo escoltado por el ejército.

El gobierno destaca la labor de la iglesia en el tema del acuerdo humanitario pero sostiene que los avances al respecto son mínimos.

LUNES 15 Las FARC y las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) se enfrentan desde el sábado anterior en el corregimiento San José de Urama, en el municipio de Dadeiba, provocando el desplazamiento de más de 130 personas.

Trabajadores de Coca Cola, organizados en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de Alimentos (SINALTRAINAL), que se encuentran en huelga de hambre desde el domingo anterior, se mantienen concentrados frente a las embotelladoras de la multinacional en las ciudades de Bucaramanga, Medellín, Barrancabermeja, Cartagena y Bogotá, entre otras. Rechazan el cierre ilegal de las plantas de producción de Montería, Cartagena, Valledupar, Pereira, Villavicencio, Pasto, Cucutá, Barrancabermeja, Neiva, Popayán e Ibagué y el cierre de las embotelladoras en Buenaventura, Mariquita, Bogotá y Girardot ocurrido meses atrás; y denuncian persecuciones a trabajadores y sindicalistas.

MARTES 16 Trabajadores del poder judicial del centro cívico de Barranquilla, agremiados a la Asociación Nacional de Empleados del Poder Judicial (ASONAL), realizan un paro en protesta por la muerte de un trabajador de ese sector que, según denuncian sus compañeros, no recibió la atención médica adecuada.

MIÉRCOLES 17 El gobierno de EE.UU. reitera que mantiene firme su posición de juzgar a los máximos jefes paramilitares de Colombia, luego de que estos advierten que continuarán con el proceso de paz si se les garantiza que no serán extraditados.

Pobladores de Barrancabermeja marchan por las calles de la ciudad para exigir la salida de las AUC del Bloque Central Bolívar del Magdalena Medio, que anunciaron desmovilizarse el pasado 6 de marzo.

Más de 300 obreros de la Empresa Colombiana de Petróleos (ECOPETROL), que trabajan en los campos de producción de El Centro, Casabe y Cantagallo, en la región Oriente, inician un paro de 24 hs contra la política petrolera de Uribe y en protesta por lo que consideran la inminente entrega de los campos a empresas multinacionales.

Estudiantes de la Universidad del Cauca realizan una marcha contra la privatización de la educación pública, el recorte presupuestario y en repudio a la ocupación de Irak, entre otras cuestiones. La policía los reprime con gases lacrimógenos y golpes obligándolos a ingresar en la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, donde arremete contra estos violando la autonomía universitaria. Varios universitarios son detenidos. Más tarde se realiza una reunión de concertación donde se les dan garantías a los estudiantes, que se encuentran cercados por la policía, para salir del establecimiento.

VIERNES 19 Paramilitares del departamento del Valle del Cauca oficializan las amenazas de muerte que vienen presentando contra los miembros del SINALTRAINAL.

SÁBADO 20 En la zona rural de Guaitarilla, Nariño, el ejército ataca a una patrulla antisequestro que se desplaza en un vehículo de la policía en compañía de civiles

–al parecer sin autorización previa para trasladarse– creyendo que se trataba de paramilitares. El enfrentamiento deja un saldo de 7 policías y 5 civiles muertos.

LUNES 22 El gobierno de EE.UU. pide al Congreso de esa nación incrementar de 400 a 800 el número de militares apostados en Colombia.

Un dirigente nacional de la JUCO y miembro del Comité Central del Partido Comunista Colombiano (PCC) es detenido por el ejército, en Neiva.

MARTES 23 Más de 1.800 obreros de la ECOPETROL de la refinería de Barrancabermeja, convocados por la Unión Sindical Obrera (USO), inician un paro de 24 hs en rechazo a las políticas neoliberales del gobierno y en defensa de la petrolera estatal.

MIÉRCOLES 24 Paramilitares y el ejército se enfrentan en la zona rural del municipio El Arenal, norte de Bogotá.

Miles de niños marchan por las calles del municipio de La Plata, Huila, para exigir la liberación de un menor de 11 años secuestrado, presuntamente por las FARC, hace 54 días.

Más de 3 mil trabajadores de la refinería de ECOPETROL en Barrancabermeja realizan un paro de 24 hs y marchan hasta el casino principal en donde realizan una asamblea. Policía antidisturbios y tropas del ejército militarizan la zona. Más tarde se movilizan hacia las instalaciones de la USO. Ante la huelga, la empresa pone en marcha el plan de emergencia que consiste en delegar en 500 trabajadores directivos el control y manejo de las plantas del complejo industrial para garantizar la producción.

JUEVES 25 El presidente colombiano culmina una visita oficial de 3 días a EE.UU. que califica de exitosa, en contraste con la realizada por Europa un mes antes.

VIERNES 26 Luego de 12 días de huelga de hambre, los trabajadores de Coca Cola inician un proceso de diálogo nacional con la empresa para llegar a un acuerdo que permita la reubicación de los obreros despedidos por el cierre de 11 embotelladoras en todo el país. En la reunión se establece que el 2 de abril la empresa presentará una propuesta de reordenamiento del proceso de producción, no tomará represalias contra los huelguistas y revocará las sanciones impuestas, concederá licencia remunerada por 2 semanas para que los participantes en la huelga de hambre se puedan reponer y pagará la publicación en un diario de circulación nacional, de un documento que exija el respeto a la protesta y la vida de los trabajadores. El sindicato decide levantar la medida de fuerza.

DOMINGO 28 Por falta de pruebas absuelven al ex presidente del sindicato de ECOPETROL, directivo de la USO, acusado de tener vínculos con el ELN.

ABRIL

DOMINGO 4 Colombia, Venezuela y Ecuador finalizan las negociaciones de libre comercio con los países del Mercado Común del Sur (MERCOSUR) con un acuerdo por el cual se eliminarán los aranceles entre las dos regiones en los próximos años.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) devuelve al tribunal de arbitramento –convocado por el gobierno para dirimir el conflicto laboral entre ECOPETROL y la USO– el laudo arbitral proferido el pasado 9 de diciembre. La corte determina que el tribunal no analizó todos los puntos del pliego de peticiones y le concede 10 días para que haga un nuevo pronunciamiento.

LUNES 5 Las FARC y paramilitares se enfrentan en el municipio de Samaná, en Caldas. Además, tropas de la armada nacional y las AUC combaten en el sitio Cerro Badillo, entre Puerto Wilches y Gamarra.

JUEVES 8 Miembros de las ACC y militares se enfrentan en el municipio de Campo Hermoso, al noroeste de Bogotá. Además, el ejército combate con el ELN en Villa Hermosa, Tolima.

DOMINGO 11 Ante los hechos ocurridos el sábado 20 de marzo por la noche, en los que murieron 5 civiles a manos del ejército, el presidente de la República sostiene que las fuerzas militares se equivocaron de “buena fe”.

El sindicato de maestros de Boyacá denuncia un incremento en las amenazas contra los miembros del sector.

LUNES 12 Defensores de derechos humanos y líderes políticos de izquierda denuncian pasividad por parte de las autoridades para brindarles seguridad, a una semana del asesinato del líder del Frente Social y Político de Santander, quien fuera acibillado por dos pistoleros en el céntrico barrio de Prados Norte, Cucutá.

MARTES 13 El FMI acepta el uso de los 500 millones de dólares de reserva del Banco de la República por parte del gobierno nacional para el pago de la deuda.

El presidente Uribe propone a la USO buscar una salida al conflicto laboral en ECOPETROL, donde después de 17 meses no se ha podido firmar aún la convención colectiva.

Las FARC se enfrentan con paramilitares en el corregimiento San José de Urama, Dadeiba, Antioquia, y secuestran a 7 trabajadores de la Empresa Antioqueña de Energía (EADE).

MIÉRCOLES 14 Las FARC asumen la responsabilidad del atentado registrado el 19 de marzo en Guaitarilla, Nariño, en el que resultaron muertos 7 policías y 4 civiles.

El texto del estatuto antiterrorista es aprobado por las comisiones primeras del Senado y la Cámara, con 3 modificaciones al proyecto original que refuerzan el empadronamiento y las labores de la policía judicial, y reglamentan la reserva de fuente para los periodistas.

Suman 780 los desplazados en Maní, Casanare, por los combates que tienen lugar en esa región entre las ACCU y las ACC.

Personas no identificadas asesinan a un docente de Medellín afiliado a la Asociación de Institutores de Antioquia (ADIDA), sumando 4 los educadores asesinados en el mes. En la ciudad de Yumbo, Valle del Cauca, se perpetra un atentado contra el vicepresidente del Sindicato de Trabajadores del Metal (SINTRAMETAL), en el que resulta muerto su hermano. Además, el sindicato denuncia amenazas de muerte recibidas por el director del departamento de derechos humanos de la CUT contra él y su familia.

JUEVES 15 Las FARC liberan a los 7 empleados de la EADE secuestrados el pasado martes en Dadeiba.

La Mesa Única Nacional para los diálogos entre las AUC y la comisión de Paz del Gobierno empieza a funcionar con la OEA como observadora.

Se realiza la Jornada Andina contra el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y el Tratado de Libre Comercio (TLC) en Colombia, convocada por la Red de Acción frente al ALCA y el Libre Comercio (RECALCA), la CUT y la Asociación Nacional por la Salvación Agropecuaria, en coordinación con importantes organizaciones de Ecuador, Perú y Bolivia. Participan miles de maestros, estudiantes, trabajadores, campesinos, pescadores y productores de banano en Cali, Ciénaga, Villavicencio, Tolima, Caldas, Popayán, Pasto, Antioquia, Neiva y Pereira, entre otras ciudades del país.

VIERNES 16 Presuntos miembros de una fracción paramilitar realizan un atentado contra Carlos Castaño, jefe de las AUC, en su finca a 500 km al noroeste de Bogotá. Más tarde, paramilitares asesinan a un hermano del escolta de Castaño en Pueblo Pascual, un barrio periférico de Montería.

DOMINGO 18 La esposa del jefe de las AUC Carlos Castaño, cuyo paradero se desconoce tras un tiroteo ocurrido el fin de semana anterior, pide "protección" al gobierno, a la iglesia católica y a la defensoría del pueblo.

Las FARC realizan una emboscada contra patrullas militares en las veredas de La Esmeralda, Puerto Rico; La Soledad, Dadeiba; La Mina, Sonsón; y Guacanal, San Carlos; y en el corregimiento El Palmar, San Francisco.

MARTES 20 Los trabajadores de la EDT bloquean la entrada de Camcomercio en Barranquilla contra la liquidación de la empresa.

Ante el anuncio de huelga por parte de los trabajadores, la ECOPETROL impide el ingreso de los mismos a las instalaciones de la empresa en Cartagena y al puerto petrolero, y pone a sus directivos a trabajar en los puestos de los obreros para evitar que se paralice la producción.

MIÉRCOLES 21 La ECOPETROL denuncia que trabajadores de la refinera de Barrancabermeja, la principal del país, realizan acciones de sabotaje en vísperas de la declaración de un paro general. Las instalaciones de Barrancabermeja y Cartagena son militarizadas.

JUEVES 22 Después de 17 meses de infructuosas negociaciones de un pliego y un contrapliego laboral con el gobierno, más de 10.500 trabajadores de la ECOPETROL, afiliados a la USO, decretan un paro por tiempo indeterminado –el primero en 27 años– y sus directivos se declaran en huelga de hambre, contra la privatización de la empresa y en defensa de sus derechos.

VIERNES 23 Se realiza un canje de deuda por 10 millones de dólares entre EE.UU. y Colombia.

SÁBADO 24 El gobierno pone en marcha el Plan Patriota por medio del cual se despliega una fuerza de 15 mil hombres en el sur del país, donde la guerrilla mantiene su retaguardia. El presidente Uribe destaca la participación de EE.UU. en esta campaña.

DOMINGO 25 Según una versión difundida por distintos medios periodísticos, el líder paramilitar Carlos Castaño habría sido asesinado por otros líderes de las AUC que temían ser delatados por éste en unas negociaciones con la Dirección Estadounidense Antidrogas (DEA).

El jefe del Bloque Metro, Rodrigo Franco o “Doblezero”, disidente de las AUC, sostiene que tomó la decisión de desactivar la estructura militar de su frente, pero que éste conservará su base política.

Las fuerzas armadas y el ELN se enfrentan en Amalfi, nordeste antioqueño.

LUNES 26 Ante la continuidad del paro de los obreros de ECOPETROL, el gobierno sostiene que está dispuesto a dialogar con los huelguistas.

MARTES 27 Luego de que las FARC afirmaran que mientras Uribe continúe en el poder será imposible alcanzar un canje humanitario, el mandatario denuncia un aumento de amenazas en su contra y da por cerrado el tema del acuerdo humanitario, declarando “cero negociaciones” sobre la extradición y lanzando

un ultimátum a los grupos armados para que acepten los procesos de acercamiento con las condiciones que pone el estado.

El ministro de Defensa denuncia que Uribe fue amenazado de muerte por paramilitares y narcotraficantes.

Más de 3 mil motociclistas protestan en las calles de Barrancabermeja en rechazo a la decisión de la alcaldía de extender hasta el próximo 3 de mayo la prohibición del parrillero.

MIÉRCOLES 28 La iglesia católica reitera su voluntad de continuar los buenos oficios para un acuerdo humanitario con las FARC.

Las ACC entregan a una comisión humanitaria a 21 miembros del Bloque Centauros de las AUC, capturados 2 semanas atrás.

JUEVES 29 La Comisión I del senado aprueba la reforma constitucional que permite al presidente y al vicepresidente de la República ser candidatos en las próximas elecciones presidenciales.

Las directivas de ECOPETROL despiden a 4 trabajadores de la empresa por haber participado en el cese de actividades del 24 de marzo pasado en la ferriera de Barrancabermeja.

Las FARC y el ejército combaten en la vereda Alto Santuario, municipio de Algeciras.

VIERNES 30 Los paramilitares piden al gobierno un área de 800 km² en el norte del país, que llaman “zonas de referencia histórica”, para concentrarse y movilizarse con libertad.

Más de 800 delegados de 220 organizaciones sindicales, sociales y políticas de todo el país, realizan el Encuentro de la Gran Coalición Democrática (GCD), conformada por las centrales obreras, los partidos políticos de izquierda, el Partido Liberal y ONGs, así como por un importante número de congresistas, y se decide impulsar las tareas necesarias para derrotar el paquete legislativo de Uribe, el TLC, el ALCA y la reelección, y defender las libertades ciudadanas y los derechos democráticos. Establecen un plan de lucha que contempla realizar una Jornada de Solidaridad con los sectores en conflicto, un Encuentro Andino de Organizaciones Sociales, un paro nacional contra el TLC, encuentros regionales de la GCD y una Asamblea Nacional de la Coalición. Durante la marcha de clausura realizan un mitin de solidaridad con los trabajadores de la USO, en la plazoleta de La Libertad, sede de los huelguistas de ECOPETROL.

GLOSARIO DE SIGLAS

ACC	Asociación de Camioneros de Colombia
ACC	Autodefensas Campesinas del Casanare
ACCU	Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá
ADIDA	Asociación de Institutores de Antioquia
ALCA	Área de Libre Comercio de las Américas
ANTHOC	Asociación Nacional de Trabajadores Hospitalarios de Colombia
ASONAL	Asociación Nacional de Empleados del Poder Judicial
ATC	Asociación de Transportadores de Carga
AUC	Autodefensas Unidas de Colombia
BCB	Bloque Central Bolívar
CSJ	Corte Suprema de Justicia
CUT	Central Unitaria de Trabajadores
DEA	Dirección Estadounidense Antidrogas
EADE	Empresa Antioqueña de Energía
ECOPETROL	Empresa Colombiana de Petróleos
EDT	Empresa Distrital de Telecomunicaciones
ELN	Ejército de Liberación Nacional
FARC	Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
FECODE	Federación Colombiana de Educadores
FMI	Fondo Monetario Internacional
GCD	Gran Coalición Democrática
HUB	Hospital Universitario de Barranquilla
ISS	Instituto de Seguro Social
JUCO	Juventud Comunista
MERCOSUR	Mercado Común del Sur
OEA	Organización de Estados Americanos
PCC	Partido Comunista Colombiano
PDI	Polo Democrático Independiente
RECALCA	Red de Acción frente al ALCA y el Libre Comercio
SENA	Servicio Nacional de Aprendizaje
SINALTRAINAL	Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de Alimentos
SINTRADISTEL	Sindicato de Trabajadores de la Empresa Distrital de Telecomunicaciones
SINTRAMETAL	Sindicato de Trabajadores del Metal
TLC	Tratado de Libre Comercio
UE	Unión Europea
USO	Unión Sindical Obrera

Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).

Relevamiento y sistematización a cargo de María Chaves.

Fuentes: diarios El Tiempo, El Colombiano y El Heraldo.

Otras fuentes: Indymedia Colombia y Rebelión.

[cronología enero-abril 2004]

ENERO

VIERNES 2 Es detenido en Quito Juvenal Ovidio Ricardo Palmera Pineda, integrante del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - FARC.

MARTES 6 Unas 1.500 personas pertenecientes a varios sindicatos, convocadas por el Frente Popular, se concentran en el centro de Quito en protesta contra la política económica del gobierno y en demanda de la salida de Gutiérrez del poder.

DOMINGO 11 Los internos de la Cárcel de Varones 2 de Quito se amotinan y toman como rehenes a unas 300 visitantes. Por la tarde, las internas de la Penitenciaría del Litoral en Guayaquil realizan la misma medida. Los rehenes son liberados al día siguiente.

MARTES 13 Más de 1.000 trabajadores, sindicalistas, indígenas, jubilados y servidores públicos que conforman el Frente de Oposición marchan en Quito "contra las políticas neoliberales y el sometimiento al Partido Social Cristiano (PSC), al Banco Mundial (BM) y al Fondo Monetario Internacional (FMI)".

El ejército y la policía envían más efectivos a la frontera con Colombia.

MIÉRCOLES 14 Se realiza la Asamblea de los Trabajadores y Pueblos del Ecuador en Quito, donde más de 15 agrupaciones ratifican el pedido de salida del presidente Gutiérrez. También se declaran en contra del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y del Tratado de Libre Comercio (TLC).

MIÉRCOLES 21 Al cumplirse 4 años de la caída de Jamil Mahuad, el Movimiento Popular Democrático (MPD), maestros, servidores municipales y estudiantes marchan hacia la Plaza Grande, en Quito, en protesta contra el gobierno de Gutiérrez. La policía lanza gases lacrimógenos. El Frente Unitario de Trabajadores (FUT), la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (FENOCIN) y la Coordinadora de Movimientos Sociales (CMS) realizan un acto cerca de la Caja del Seguro Social con 4 féretros negros que representan al Jefe de Estado, al Parlamento, a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y al

Tribunal Constitucional (TC). La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) no participa.

La Unión de Transporte Interprovincial del Carchi paraliza sus actividades en demanda de que se les permita a los transportistas recoger pasajeros a su paso por la ciudad de Ibarra. Bloquean el puente internacional Rumichaca.

LUNES 26 Más de 7 mil personas y un sector del transporte pesado que se suma al paro protestan en Carchi en apoyo a los transportistas interprovinciales en demanda de que las unidades circulen libremente por Ibarra y que se prohíba el ingreso al país de camiones colombianos. Otras 500 personas toman la gobernación. Se producen choques con la policía.

MARTES 27 Los transportistas de Carchi levantan el paro y despejan las vías luego de que sus dirigentes anuncian que se llegó a un acuerdo con el Consejo Nacional de Tránsito que les permite 2 paradas en su paso por Ibarra. El paro mantuvo cerrado por 7 días el puente Rumichaca y ocasionó la falta de gasolina y gas doméstico, desabastecimiento de productos en el mercado y centenares de turistas atrapados en Tulcán.

FEBRERO

DOMINGO 1 El dirigente de la CONAIE, Leónidas Iza, sufre un atentado en el local del movimiento cuando dos hombres efectúan disparos contra él al grito de “te vamos a matar, Iza”. Iza resulta ileso, son heridos su hijo y otros dos familiares miembros del movimiento. La CONAIE se declara en movilización permanente y anuncia que está en total oposición al gobierno del presidente Gutiérrez, a quien califica de traidor.

DOMINGO 8 A pedido del presidente Gutiérrez, renuncia a su cargo el ministro de Agricultura, Sergio Seminario, ya que se niega a entregar cargos a miembros de Sociedad Patriótica (SP) en el ministerio.

LUNES 9 El jefe del Comando Sur del Ejército de Estados Unidos visita el país para observar la situación en la frontera con Colombia.

MARTES 10 Salomón Larrea Rodríguez asume como nuevo ministro de Agricultura.

Más de 1.500 personas marchan en Latacunga, Cotopaxi, en apoyo al líder indígena Leónidas Iza.

VIERNES 13 Luego de varios intentos de conformación de un frente común en oposición al gobierno, la FENOCIN acepta acordar un bloque con la CONAIE. Se reúnen en Quito sindicalistas, campesinos, jubilados, negros e indígenas y resuelven participar conjuntamente en las movilizaciones del próximo lunes.

LUNES 16 Se realizan manifestaciones en todo el país por la soberanía y la dignidad del pueblo, contra las negociaciones del TLC y el ALCA, y contra las privatizaciones de los campos petroleros, las empresas eléctricas y las telecomunicadoras. La CONAIE y organizaciones indígenas, políticas, sindicales, de universitarios y trabajadores eléctricos, entre otros, interrumpen el tránsito en la Panamericana que une al país con Colombia y Perú. En Latacunga marchan bajo vigilancia policial y militar y ocupan las dependencias del Consejo Provincial de Cotopaxi demandando que el gobierno realice mejoras en la zona. Se suspenden las clases. Distintas agrupaciones de indígenas y de sectores de izquierda de 7 de las 23 provincias se suman a las manifestaciones. Se mantienen bloqueadas las vías de varias provincias. También protestan en Pichincha, Imbabura, Bolívar, Cañar, Loja, Zamora, El Oro, Guayas y Los Ríos. En Azuay cierran la vía Cuenca-Loja a la altura del cantón Nabón. Se producen enfrentamientos con la policía que dejan como saldo un muerto, 3 heridos y 2 militares retenidos por los campesinos luego de que estos últimos intentaran despejar el tramo de la Panamericana Sur.

MARTES 17 El líder de la CONAIE anuncia que la jornada de protesta ha finalizado y que la medida de fuerza queda suspendida, aunque la lucha contra el presidente Gutiérrez continuará después del carnaval. La jornada de movilización nacional deja un saldo de 12 personas heridas de bala. En Cotopaxi, el paro indefinido continúa. Los manifestantes deciden pedir la renuncia del gobernador Edgar Orbea y demandan una visita del presidente Gutiérrez para lograr un acuerdo. Las clases continúan suspendidas y el comercio funciona mínimamente. Estudiantes, indígenas y trabajadores del Consejo Provincial cortan el tramo de la Panamericana Sur y el puente Cinco de Junio y son reprimidos con carros lanza agua y gases lacrimógenos. Los manifestantes aceptan el diálogo con el ejecutivo.

JUEVES 19 Los huelguistas de Cotopaxi levantan la medida luego de firmar un acuerdo que prevé que Quito inicie estudios técnicos para que se realicen carreteras en la provincia y se finalicen obras menores inconclusas.

SÁBADO 28 Filmar Gutiérrez resulta electo como presidente de SP. El dirigente declara que el partido mantendrá la línea de apoyo al gobierno.

MARZO

MIÉRCOLES 3 El ministro de Ambiente renuncia a su cargo bajo el argumento de que siempre hubo presiones para que dejara el puesto.

Finaliza el encuentro militar en Bogotá con el compromiso de Colombia de aumentar los efectivos militares en la frontera común. Participan mandos militares y policiales de Ecuador, Colombia y Panamá.

VIERNES 5 El gobierno español condona el 25% de la deuda que Ecuador mantiene con dicho país.

MARTES 9 Los pobladores del cantón de Guayas paralizan las actividades de forma indefinida y obstaculizan el tránsito vehicular entre Guayaquil, Babahoyo, Quevedo, Santo Domingo y Quito en demanda del pago de los haberes atrasados de los trabajadores municipales del Consejo Provincial de Guayas, en paro desde el martes anterior. A los reclamos se suman 50 municipios de las provincias Guayas, Manabí y Los Ríos que piden sus fondos al Ministerio de Economía.

MIÉRCOLES 10 El FMI, luego de 2 semanas en el país, anuncia que está dispuesto a negociar un nuevo programa *Stand By* de abril de 2004 a abril de 2005.

Se lleva a cabo un encuentro andino de coordinación de la lucha contra el TLC y el ALCA. Durante las jornadas preparatorias del Foro de las Américas a realizarse en Quito a fines de julio, con la asistencia de organizaciones de Colombia, Bolivia y Perú, resuelven promover la difusión de una jornada el 15 de abril y fomentar la coordinación andina, entre otras cosas.

MIÉRCOLES 17 Concluye la visita del presidente Gutiérrez a Colombia. Uribe acepta que los colombianos deben presentar sus antecedentes judiciales antes de entrar al Ecuador y que desde el 31 de diciembre de 2005 se movilicen con pasaporte andino.

VIERNES 19 Unas 150 personas convocadas por organismos de defensa de los derechos humanos queman una bandera de EE.UU. frente a la embajada de dicho país en Quito, y exigen el retiro de las tropas estadounidenses del territorio de Irak. El lugar se encuentra custodiado por policías con bombas lacrimógenas y escudos.

LUNES 22 La Federación de Trabajadores Penitenciarios del país inicia un paro de actividades en demanda de más recursos económicos para mejorar la calidad de vida de los internos. No permiten las visitas íntimas, no reciben nuevos presos y se impiden las salidas de los detenidos a las audiencias.

La Organización Sindical Única Nacional de Trabajadores de la Salud (OSUNTRAMSA) inicia un paro indefinido en todo el país en demanda de que el gobierno cancele los 45 millones de dólares correspondientes al pago de personal y a los presupuestos.

MARTES 23 Unos 800 maestros de la Unión Nacional de Educadores (UNE) y de la Asociación de Profesores y Empleados del Colegio Mejía marchan hasta el Palacio de Carondelet para exigir el pago del sueldo de febrero. Delegaciones provinciales se concentran en el Ministerio de Educación en demanda de un aumento en el bono que reciben mensualmente.

VIERNES 26 El presidente Gutiérrez le solicita al ministro de Economía que atienda de forma inmediata los atrasos de asignaciones requeridas en varias entidades estatales.

Los trabajadores de la Federación Nacional de Servidores del Registro Civil inician un paro nacional en demanda de que el gobierno les devuelva los recursos de la institución generados mediante la autogestión.

LUNES 29 La OSUNTRAMSA acuerda con el ministro de Salud que será reconocida la deuda salarial del año anterior y se cancelará el bono de 40 dólares de enero, febrero y marzo de 2004 a partir del 5 de abril próximo.

Los 10.500 internos se suman a la huelga de los empleados penitenciarios.

MARTES 30 La OSUNTRAMSA no levanta la huelga como estaba previsto luego del acuerdo, debido a que el gobierno sólo asigna 3 de los 40 millones que debía depositar.

MIÉRCOLES 31 El directorio de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) decide la remoción de la gerenta Wilma Salgado, acusándola de peculado. Dirigentes de la Federación Ecuatoriana de Indígenas Evangélicos (FEINE) y la FENOCIN apoyan a la funcionaria cuando ingresa al Palacio de Gobierno para realizar su defensa.

Los internos del ex penal García Moreno se enfrentan con los guías penitenciarios y con la policía para exigir el ingreso de visitas. Los reos anuncian que ya no apoyan la medida.

ABRIL

JUEVES 1 Entran en vigencia nuevas tarifas eléctricas con aumentos.

Unas 100 personas, entre salubristas, maestros y trabajadores petroleros, penitenciarios y del Registro Civil se concentran en las afueras del Congreso en rechazo a la política económica del gobierno y para pedir el juicio político al ministro de Economía, Mauricio Pozo.

VIERNES 2 Los trabajadores del Registro Civil firman un acta de entendimiento con el ministro de Gobierno que pone fin al paro de actividades. Los trabajadores se comprometen a reanudar las labores a partir del próximo lunes, luego de que el gobierno reintegrara el millón de dólares correspondientes al débito efectuado a la cuenta del Registro Civil.

Varias organizaciones realizan un plantón contra el TLC, en las afueras del lugar donde se lleva a cabo la primera reunión oficial del equipo negociador

en relación al ingreso del gobierno ecuatoriano en las negociaciones con EE.UU. Participan de la misma el presidente Gutiérrez, el presidente del Banco Central y los ministros de Comercio Exterior y de Economía, entre otros funcionarios.

Una misión del FMI comienza las gestiones para lograr un nuevo acuerdo *Stand By*.

SÁBADO 3 La Comunidad Andina de Naciones (CAN) y el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) acuerdan una zona de libre comercio, con la idea de lograr una total apertura en un plazo de 15 años.

LUNES 5 Fausto Manjarrez asume como nuevo gerente de la AGD.

MARTES 6 El pleno del Tribunal Supremo Electoral (TSE) aprueba la reapertura de las cuentas electorales de la SP para comprobar si ha recibido aportes de México y del narcotráfico, prohibidos por la Ley Orgánica de Control del Gasto Electoral.

Los hospitales de Guayaquil levantan el paro luego de que el gobierno cancela parte del dinero que demandan. Cada hospital analiza si levanta o no la medida. Nueve trabajadores están en huelga de hambre indefinida en la Dirección Provincial de Salud: exigen el pago total de la deuda.

JUEVES 8 La atención en los hospitales públicos de Pichincha empieza a normalizarse. La consulta externa se regulariza luego de que los trabajadores de la salud levantan la huelga de hambre que mantienen en demanda de que el gobierno les pague sus sueldos. La medida finaliza un día después de que la dirigencia de la Federación de Trabajadores de la Salud de Pichincha y las autoridades del ramo llegan a un acuerdo en el que el ministro de Salud ofrece, entre otras cosas, cancelar 10 millones de dólares pendientes de 2003.

LUNES 12 El ministro de Energía Carlos Arboleda renuncia a su cargo.

MARTES 13 El Congreso reconsidera dos artículos del proyecto de reformas al Código de Ejecución de Penas aprobados la semana anterior. Así, queda en suspenso la resolución según la cual el sistema de rehabilitación social pasará a la función judicial.

MIÉRCOLES 14 Los presos de la Cárcel 3 y las de El Inca, en Quito, liberan a los rehenes, con lo que comienza a recuperarse la calma en los centros penitenciarios. Los presos del país están a la espera de que se aprueben las reformas al Código de Penas. Sin embargo, la Policía Nacional realiza un operativo en el que toma las instalaciones del Penal García Moreno, la Cárcel 3 y el Centro de Detención Provisional, todos en Quito.

JUEVES 15 Unas 150 personas entre campesinos, estudiantes de la Universidad Católica y ecologistas, encabezados por la Confederación Única Nacional de Afiliados al Seguro Social Campesino (CONFEUNASSC), parten desde el parque El Arbolito en una marcha pacífica hasta el Ministerio de Agricultura y Ganadería, en rechazo al TLC y al ALCA.

Según investigaciones de la Comisión Anticorrupción, el presidente Gutiérrez está involucrado en indicios de delito aduanero en la importación de material de propaganda electoral desde México en el año 2001.

DOMINGO 18 Los equipos técnicos de Ecuador, Perú y Colombia que negociarán el TLC con EE.UU. mantienen reuniones en Lima para buscar una posición en temas tales como acceso a mercados, compras gubernamentales y medio ambiente.

LUNES 19 Los trabajadores penitenciarios levantan la huelga tras 28 días. Así lo decide el Comité de Paro reunido para que la crisis penitenciaria no quede en punto muerto y haya un diálogo entre las partes. Además, los empleados aceptan el incremento de 300 mil dólares a su presupuesto.

MIÉRCOLES 21 Unas 12 mil personas, entre estudiantes, profesores, empleados y trabajadores de 4 universidades, ocupan el parque Abdón Calderón, en Cuenca, luego de una marcha convocada por la Asamblea Universitaria Ecuatoriana en rechazo al gobierno y para exigir el pago de la deuda con las universidades y escuelas politécnicas. Se realizan movilizaciones en varias provincias del país.

JUEVES 22 Se realiza la asamblea anual de la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (ECUARUNARI) en Quisapincha. El titular de la organización ratifica el pedido de renuncia al presidente Gutiérrez. Las resoluciones son desconocer el gobierno de Gutiérrez y rechazar el TLC y el ALCA, entre otras cuestiones.

DOMINGO 25 El vicepresidente Alfredo Palacio declara que se mantendrá alejado del gobierno hasta que éste realice rectificaciones serias para beneficiar al país.

GLOSARIO DE SIGLAS

AGD	Agencia de Garantía de Depósitos
ALCA	Área de Libre Comercio de las Américas
BM	Banco Mundial
CAN	Comunidad Andina de Naciones
CMS	Coordinadora de Movimientos Sociales
CONAIE	Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador
CONFEUNASSC	Confederación Única Nacional de Afiliados al Seguro Social Campesino
CSJ	Corte Suprema de Justicia

ECUARUNARI	Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador
FEINE	Federación Ecuatoriana de Indígenas Evangélicos
FENOCIN	Federación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras
FMI	Fondo Monetario Internacional
FUT	Frente Unitario de Trabajadores
MERCOSUR	Mercado Común del Sur
MPD	Movimiento Popular Democrático
OSUNTRAMSA	Organización Sindical Única Nacional de Trabajadores de la Salud
PSC	Partido Social Cristiano
SP	Sociedad Patriótica
TC	Tribunal Constitucional
TLC	Tratado de Libre Comercio
TSE	Tribunal Supremo Electoral
UNE	Unión Nacional de Educadores

*Realizado por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
 Relevamiento y sistematización a cargo de Magdalena Rauch.
 Fuentes: diarios Hoy, La Hora y El Comercio.*

[cronología enero-abril 2004]

E N E R O

JUEVES 8 La población de Moquegua comienza un paro de 48 hs para oponerse a la instalación de la Autoridad Autónoma de las cuencas hidrográficas de Tambo y Moquegua, creada unilateralmente por el gobierno central. Más de un millar de vecinos bloquean el puente de Montalvo, exigiendo la derogación de la norma que, afirman, atenta contra el proyecto hídrico de Pasto Grande.

El Ministerio de Defensa autoriza el ingreso de personal militar de EE.UU., a fin de participar con la Escuela de Operaciones Ribereñas en la primera fase del Ejercicio Militar de Apoyo para el Entrenamiento de la Lucha Antinarcótica a realizarse en la región amazónica. Permanecerán en el país hasta el 31 de marzo.

JUEVES 22 El Comité Centralizador de las Organizaciones Populares de Puno –que agrupa al Frente de Defensa de los Intereses de Puno, la Central de Mujeres y el Sindicato de Trabajadores Municipales (SITRAMUN), entre otras entidades– encabeza un paro regional de 24 hs, exigiendo la inmediata renuncia de su presidente regional y del alcalde provincial, a quienes califican de incapaces para llevar adelante una política de descentralización eficaz. Los manifestantes realizan una marcha por las principales calles de la ciudad y bloquean las vías de ingreso a la zona.

MIÉRCOLES 28 Los habitantes de Cusco acatan un paro regional de 24 hs, bloquean las principales vías de acceso a la ciudad y se movilizan hasta la Plaza de Armas en oposición al alza del costo de vida y en reclamo de la generación de empleo y un cambio del modelo económico neoliberal.

JUEVES 29 Los choferes de alrededor de 40 mil unidades de transporte público de Lima y Callao paran durante la jornada en protesta por la imposición indiscriminada de papeletas dispuesta por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), el Ministerio del Interior (MININTER) y la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML). Más de 170 personas son detenidas, acusadas de impedir el tránsito de vehículos que se niegan al paro.

Organizaciones agrarias y populares de Ayacucho encabezan un paro regional de 24 hs, exigiendo la revocatoria del presidente regional, del alcalde de la ciudad de Huamanga y del rector de la Universidad de Huamanga. Rechazan la erradicación de la coca y piden el retiro inmediato de militares norteamericanos apostados en las cuencas cocaleras, entre otras demandas. Piquetes de manifestantes impiden el ingreso a la ciudad y los vecinos se vuelcan a las calles.

VIERNES 30 Raúl Díez Canseco, primer vicepresidente de la República, presenta su renuncia, luego de meses de escándalo político por haber acomodado en puestos públicos y haber exonerado de impuestos a empresas de familiares de su actual joven pareja. Declara que deja el cargo para que su alejamiento sirva para fortalecer al gobierno de Toledo.

FEBRERO

LUNES 2 Unos 400 trabajadores huelguistas de la empresa agroindustrial Pucalá de Chiclayo, junto con jubilados y despedidos del lugar a quienes se les adeudan pensiones y beneficios sociales, intentan ingresar al ingenio azucarero, pero son recibidos con disparos de policías y vigilantes que matan a una persona y hieren a otras 2.

JUEVES 5 Más de 12 mil productores de arroz de la región de Arequipa comienzan una huelga indefinida, reclamando al gobierno que reduzca el Impuesto General a las Ventas (IGV) y adquiera el cereal para el Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (PRONAA). Levantan la medida al conseguir que los ministros de Economía y Finanzas y de Agricultura acepten, entre otros puntos, rebajar del 19 al 4% el IGV aplicado al arroz y se muestren dispuestos a que el PRONAA adquiera en forma directa el arroz de los agricultores.

VIERNES 20 Luego de 3 días de debates, unos 2 mil productores cocaleros culminan el II Congreso Nacional de la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios de las Cuencas Cocaleras del Perú (CONPACCP), dando al gobierno 60 días para que cumpla con sus demandas y propuestas, entre ellas, la inmediata libertad del líder Nelson Palomino Laserna, la suspensión de la erradicación de la hoja de coca y la desactivación de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA), así como la expulsión de las ONGs relacionadas con el problema de la hoja de coca.

MARTES 24 Los transportistas de carga pesada y de autobuses interprovinciales –integrantes de la Confederación de Transportadores del Perú, la Asociación de Propietarios de Ómnibus Interprovinciales, la Unión Nacional de Transportistas Dueños de Camiones del Perú (UNT) y otras asociaciones– comienzan un paro indefinido nacional, en reclamo de la eliminación del

Impuesto Selectivo al Combustible Diesel 2 y la creación de un Organismo Regulador de Transporte que fiscalice el cumplimiento de toda normativa existente, entre otros puntos.

JUEVES 26 Los transportistas de autobuses interprovinciales levantan la huelga indefinida que mantienen desde el pasado martes, luego de conseguir la promesa del gobierno de gestionarles la devolución del 20% del Impuesto Selectivo al Consumo de Diesel y de no aplicarles el IGV. Los camioneros, por su parte, continúan con la medida de fuerza, en tanto no se les asegure la fijación de un precio justo por el servicio que brindan.

Unos 200 mototaxistas de la ciudad de Lima paran durante la jornada y marchan hasta el Congreso, cuestionando el incremento del precio del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) y exigiendo se nombre una comisión especial que supervise a las compañías aseguradoras. Los mototaxistas de Iquitos, por su parte, realizan un paro y bloquean las principales calles de la ciudad, en rechazo de la suba del SOAT y en protesta por los constantes abusos cometidos por las autoridades municipales y policiales. Consiguen que el gobierno les dé una prórroga de 90 días para el pago del seguro y que se releve a más de la mitad de los policías de tránsito que no están desempeñando bien su labor.

MARZO

LUNES 1 Entra en vigencia hasta el 31 de diciembre de 2006 el Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF), que gravará con una tasa de 0,15% cada depósito y cada retiro efectuado desde una cuenta bancaria –independientemente del monto– salvo que la misma se encuentre exonerada.

VIERNES 5 Cientos de habitantes de Cajamarca se congregan en la Plaza de Armas local para protestar contra la minera Yanacocha por atentar contra la ecología del lugar.

MIÉRCOLES 10 Más de 3 mil pobladores de los asentamientos de Carabayllo marchan hasta la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros, en Miraflores, reclamando la prestación del servicio de agua potable, y que el gobierno central califique a la zona como de extrema pobreza, para que pueda así acceder así a la ayuda de la comunidad internacional.

Los trabajadores de la Universidad Nacional de Piura (UNP), convocados por la Federación Nacional de Trabajadores de las Universidades Nacionales, comienzan una huelga nacional indefinida y realizan movilizaciones junto a la UNT en reclamo de un aumento en sus remuneraciones.

JUEVES 11 Cerca de 10 mil afiliados a los gremios que pertenecen a la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) participan de una movilización hasta el Congreso, para exigir el cambio de la política económica, la renegociación de la deuda externa y una profunda reforma tributaria que posibilite atender las demandas sociales de los más necesitados. Critican, además, a las bancadas parlamentarias que se oponen al ITF sin presentar propuestas alternativas para financiar el gasto público. También realizan movilizaciones en Trujillo, Chiclayo, Arequipa, Cusco, Piura y en el puerto de Ilo, en Moquegua.

MIÉRCOLES 17 Los campesinos cocaleros de Aguaytía, Ucayali, comienzan un paro indefinido, exigiendo el retiro inmediato de los programas de desarrollo alternativo, en particular de sus operadores: la ONG de carácter internacional Chemonic International y de DEVIDA.

SÁBADO 20 Centenares de personas, agrupadas en la Coordinadora Otro Mundo es Posible y en el Foro Social Perú, se reúnen en la Plaza San Martín de la capital y marchan hasta la casa del embajador de EE.UU. para protestar contra la ocupación militar de Irak, al cumplirse un año del inicio de la guerra.

MIÉRCOLES 24 Los pobladores de Puno comienzan un paro de usuarios de electricidad y unas 3 mil personas realizan un piquete a la altura de la comunidad de Ichu. Exigen la destitución del gerente general de Electro Puno, por malos manejos, y la reducción en un 50% de las tarifas del servicio de electricidad.

LUNES 29 La oficina comercial de EE.UU. habilita al Perú para el inicio de las negociaciones de un Tratado de Libre Comercio (TLC) bilateral y para que se mantenga la elegibilidad del Perú como beneficiario de la Ley de Promoción Comercial Andina y Erradicación de la Droga (ATPDEA, por sus siglas en inglés).

MIÉRCOLES 31 Luego de 3 días, culmina en Lima la 45ª Asamblea Anual del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en la que participan 6.500 personas; 12 mil policías refuerzan la seguridad del lugar. Entre las conclusiones, se reconoce que la pobreza y el desempleo se han agravado en América Latina, a pesar de las reformas y el crecimiento de las economías; en consecuencia ambos problemas serán en adelante el foco de atención de las políticas del BID.

A B R I L

JUEVES 1 Cerca de 1.000 estibadores del Puerto de Callao, pertenecientes a la Federación de Trabajadores Marítimos y Portuarios del Perú (FEMAPOR), comienzan un paro indefinido en protesta por el incumplimiento de la Ley de Trabajo Portuario, que establece que debe existir un solo lugar donde los esti-

badores puedan conseguir el trabajo del día en cada puerto del litoral peruano. Actualmente el problema es la ausencia de un espacio físico donde los estibadores puedan prepararse para ser elegidos por los empleadores.

VIERNES 2 Miles de pobladores de Cusco marchan desde la plaza Tupac Amaru del distrito de Huanchaq hasta las plazas de Armas, Regocijo y San Francisco, reclamando la devolución a la región de entidades como el Instituto Nacional de Cultura (INC), el Plan Turístico y Cultural Perú-UNESCO (COPESCO), la Empresa de Generación Eléctrica Machupichu SA (EGEMSA), Electro Sur Este, la Empresa Nacional de la Coca (ENACO) y otros proyectos regionales.

SÁBADO 3 Los pobladores de Ilave, provincia de El Callao, región Puno, en su mayoría de comunidades aymaras, encabezan un paro provincial indefinido, reclamando que el alcalde local, acusado de corrupción, se aparte del cargo. Bloquean la carretera Puno-Desaguadero que comunica el sur del país con Bolivia y ocupan la plaza y la comuna del distrito, donde se quedarán hasta que el gobierno nacional intervenga en el conflicto.

LUNES 5 Los pescadores artesanales comienzan un paro de 48 hs a nivel nacional, para exigir al gobierno central la derogación de la resolución que autoriza que las embarcaciones industriales pesquen dentro de las 5 millas marítimas.

JUEVES 8 Tras una semana de paro, los estibadores del puerto del Callao reanudan sus labores, luego de una reunión con el ministro de Trabajo, la Asociación Peruana de Operadores Marítimos (APAM) y la Asociación de Operadores Portuarios (ASPOR), en la que acuerdan que el próximo miércoles será presentada ante el Consejo de Ministros una iniciativa legislativa sobre las modificaciones a la Ley del Trabajo Portuario, referida al lugar de elección de los trabajadores.

LUNES 12 Unos 12 mil médicos de todo el país, afiliados a la Federación Médica Peruana (FMP), comienzan un paro indefinido, demandando mejoras salariales, nombramiento de personal contratado y aumento de presupuesto para el sector, entre otros puntos.

JUEVES 15 Más de 1.000 pobladores de asentamientos humanos se movilizan desde los 4 conos de Lima hasta el parque Kennedy y la Av. Reducto, en Miraflores, en protesta por las precarias condiciones en que viven: sin agua, desagüe ni títulos de propiedad.

Unos 15 mil pobladores de Ilave, provincia del Callao, en huelga durante casi 2 semanas y con bloqueos de carreteras, llegan en marcha de sacrificio hasta la Plaza de Armas de Puno, pidiendo la renuncia de su alcalde.

MARTES 20 La CONPACCP, que agrupa a unos 30 mil cocaleros, inicia una huelga general indefinida exigiendo al gobierno que suspenda el programa de erradicación de hojas de coca y libere a su líder Nelson Palomino, entre otros puntos.

SÁBADO 24 Los cocaleros de la CONPACCP, que desde el martes acatan un paro indefinido, inician desde la ciudad de Tingo María una marcha de sacrificio a Lima, reclamando el fin inmediato de las políticas de erradicación de coca.

DOMINGO 25 Dirigentes de las cuencas cocaleras de Ayacucho, Cusco y Huánuco, en desacuerdo con el paro convocado por los productores del Huallaga, ya que los dirigentes de la CONPACCP no consultaron su decisión con todas las cuencas, se reúnen en Lima, donde acuerdan separarse de la CONPACCP y conformar la Junta de Productores Agropecuarios de los Valles Cocaleros del Perú.

LUNES 26 Los pobladores de la localidad de llave, Puno –en huelga indefinida desde principio de mes– capturan a 4 regidores y asesinan al alcalde, Cirilo Robles Callomamani, al descubrir que tras más de 2 semanas en la clandestinidad éste retorna para convocar una reunión de concejo municipal. Pasean a los rehenes por las calles de la ciudad y luego los agreden en la Plaza de Armas. El cadáver del burgomaestre es arrojado debajo del Puente Viejo; uno de los regidores muere en el Hospital de llave debido a los severos golpes recibidos, otro se encuentra hospitalizado y un tercero está desaparecido. Doce aymaras son detenidos, señalados como los responsables de las muertes de los funcionarios, pero son liberados por una turba que ataca la comisaría local con cócteles molotov y piedras.

MARTES 27 Los trabajadores de EsSalud comienzan una huelga indefinida en reclamo de que se uniformice la jornada laboral de todos los trabajadores de la actividad privada en 150 hs y del pago de guardias para los médicos y enfermeras.

MIÉRCOLES 28 Después de varias horas de negociaciones entre la comisión de alto nivel enviada por el gobierno y los dirigentes de llave en Puno, y tras la negativa rotunda de la población local reunida en la plaza de armas a esperar a elecciones para designar nuevas autoridades, el presidente de esta comisión aprueba que continúen en sus cargos los 9 regidores y designa en el cargo de burgomaestre al teniente alcalde de la comuna, Alberto Sandoval Loza, señalado como el principal instigador del crimen del alcalde.

Unos 200 comuneros aymaras del poblado de Tilali toman como rehenes a 5 regidores y amenazan con utilizar la violencia si una comisión del gobierno no llega al lugar para atender sus demandas. Los pobladores del lugar mantienen tomada la alcaldía desde hace 12 días, reclamando la renuncia del alcalde, a quien acusan de corrupto.

GLOSARIO DE SIGLAS

APAM	Asociación Peruana de Operadores Marítimos
ASPOR	Asociación de Operadores Portuarios
ATPDEA	Ley de Promoción Comercial Andina y Erradicación de la Droga
BID	Banco Interamericano de Desarrollo
CGTP	Confederación General de Trabajadores del Perú
CNDDHH	Coordinadora Nacional de Derechos Humanos
CONPACCP	Confederación de Productores Agropecuarios de las Cuencas Cocaleras del Perú
COPESCO	Plan Turístico y Cultural Perú-UNESCO
DEVIDA	Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas
EGEMSA	Empresa de Generación Eléctrica Machupichu SA
ENACO	Empresa Nacional de la Coca
FEMAPOR	Federación de Trabajadores Marítimos y Portuarios del Perú
FMP	Federación Médica Peruana
IGV	Impuesto General a las Ventas
INC	Instituto Nacional de Cultura
ITF	Impuesto a las Transacciones Financieras
MININTER	Ministerio del Interior
MML	Municipalidad Metropolitana de Lima
MTC	Ministerio de Transportes y Comunicaciones
PRONAA	Programa Nacional de Asistencia Alimentaria
SITRAMUN	Sindicato de Trabajadores Municipales
SOAT	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito
TLC	Tratado de Libre Comercio
UNP	Universidad Nacional de Piura
UNT	Unión Nacional de Transportistas Dueños de Camiones del Perú

Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).

Relevamiento y sistematización a cargo de Mariana C. Fassi.

Fuentes: diarios La República, RPP Noticias, Correo, El Comercio Perú y La Industria de Chiclayo.

Otras fuentes: Indymedia Perú, CLAJADEP, Rebelión, Comunidad Web de Movimientos Sociales; Agencia de Informação Frei Tito para a América Latina, Aymara UTA, Contrainformación en Red, Frente Regional Puno y ALAI.

[cronología enero-abril 2004]

ENERO

MIÉRCOLES 7 Un centenar de trabajadores ferroviarios adscritos a la Unión Regional de Trabajadores de Aragua (URIA) cierran el paso en el km 101 de la Autopista Regional del Centro (ARC), a la altura del Puente La Julia, estado Aragua, en protesta porque la contratista del gobierno nacional no ha iniciado la construcción del ferrocarril.

Setenta efectivos de la policía del estado Monagas paralizan sus labores solicitando al gobierno regional que intervenga la institución y modifique toda su directiva que obliga a los policías a cumplir órdenes irregulares en contra de la comunidad.

SÁBADO 10 Cerca de 3 mil campesinos agremiados a la oficialista Confederación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Venezuela (CONFAGAN), junto con diputados, los gobernadores de los estados de Cojedes, Guárico, Falcón, Lara y Portuguesa, y el ministro de Agricultura y Tierras, realizan una marcha hasta la sede del Banco Central de Venezuela (BCV) para exigir que les sea entregado el préstamo prometido por el presidente Chávez.

LUNES 12 Grupos de estudiantes de la Universidad Central de Venezuela (UCV) núcleo Maracay, el Tecnológico de La Victoria, la Universidad Simón Rodríguez y la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL), secuestran 24 camionetas de pasajeros que cubren rutas en los distintos municipios del estado Aragua, para protestar contra la implementación del Boleto Directo Personalizado (BDP).

MARTES 13 El presidente Hugo Chávez firma con reservas en lo referido al Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) la declaración de la Cumbre Extraordinaria de las Américas en la ciudad de Monterrey, México.

MARTES 20 Obreros, empleados y docentes del Instituto Nacional del Menor protestan en la sede del Ministerio de Salud y Desarrollo Social (MSDS) para exigir el pago de sueldos y salarios del mes en curso, los cestatickets de diciembre, el seguro de Hospitalización, Cirugía y Maternidad (HCM) y el funerario vencido el 15

de diciembre de 2003. Además, 42 obreros pertenecientes a la Federación Nacional de Trabajadores del Sector Público (FENTRASEP) ocupan el quinto piso del Ministerio del Trabajo para exigir la firma de la convención colectiva que registra un atraso de dos meses.

LUNES 26 Alrededor de 100 vecinos del sector Punta de Leiva, municipio Miranda, estado Zulia, cierran durante 7 hs la vía principal, que conduce hacia Los Puertos de Altagracia, exigiendo la clausura del vertedero de desperdicios que se ubica en esa zona.

MIÉRCOLES 28 Un grupo de obreros y empleados de los centros de salud adscritos a la Secretaría de Salud de la Alcaldía Metropolitana toman el edificio y cierran las vías aledañas en protesta porque la Alcaldía Mayor adeuda a más de 4 mil empleados las 2 quincenas del mes de enero y los cestatickets de diciembre de 2003.

VIERNES 30 Cerca de 1.200 trabajadores pertenecientes a la empresa Cotécnica cierran la Av. Urdaneta de Caracas en protesta por haber perdido sus empleos al finalizar la concesión que tenía la empresa para recoger la basura en el municipio Libertador de la capital.

Por segundo día consecutivo continúan los enfrentamientos en las cercanías de la Federación de Centros Universitarios (FCU) y las facultades de Medicina e Ingeniería de Mérida, motivados por las citaciones enviadas por la Fiscalía a un grupo de 25 personas a quienes imputan el presunto delito de rebelión civil por los hechos ocurridos en abril de 2002, cuando una manifestación exigió la renuncia del gobernador Florencio Porras.

FEBRERO

LUNES 2 Una multitud de simpatizantes del gobierno celebra en horas de la noche y frente al Palacio de Miraflores el quinto año de gestión gubernamental del presidente Hugo Chávez.

MIÉRCOLES 4 Miles de simpatizantes del gobierno se concentran en la Av. Victoria de Caracas desde donde marchan hasta la pista del Hipódromo La Rinconada para celebrar el día de la dignidad, en conmemoración de los 12 años del intento de golpe por parte del actual presidente Hugo Chávez contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Por su parte, sectores de la oposición al primer mandatario realizan marchas en Caracas, Maracaibo y Valencia para conmemorar los 12 años del intento de golpe de estado contra aquel gobierno y exigir al Consejo Nacional Electoral (CNE) rapidez en el proceso de verificación de las firmas recabadas para solicitar el referendo revocatorio presidencial.

DOMINGO 8 Según fuentes oficiales, cerca de 100 familiares de los reclusos del Internado Judicial Carabobo (IJC) conocido como Tocuyito, estado Carabobo, se auto-sequestran tras realizar la visita dominical alegando que las autoridades penitenciarias habrían planificado el traslado de 155 internos hacia otras cárceles del país, como consecuencia de los violentos sucesos ocurridos durante el día anterior a causa del enfrentamiento entre bandas por el control del penal, y en los cuales resultan 6 internos muertos y por lo menos 25 heridos.

Al finalizar el III Foro Social Panamazónico en Ciudad Guayana, las organizaciones y movimientos sociales, étnicos y culturales de la región Pan-Amazónica expresan a través de un documento su total apoyo al proceso de transformación y revolución bolivariana que tiene lugar en el país. Reafirman los compromisos históricos que llevaron a la conformación de este Foro Social y la defensa de los derechos de los habitantes de la Amazonia, y denuncian la amenaza de las transnacionales del capital por apoderarse de los 7 mil km² de la región que abarca porciones de los territorios de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Venezuela y Perú.

LUNES 9 Los 96 familiares de los reclusos del IJC autosequestrados el día anterior salen voluntariamente en horas de la tarde mientras se realiza el traslado de 139 presos del Penal de Tocuyito hacia otras penitenciarias del país.

MIÉRCOLES 11 El Comando Intersindical Magisterial del Zulia realiza un paro de 24 hs con un acatamiento del 80% en las escuelas y liceos dependientes del Ministerio de Educación, en protesta por la dilación en la discusión y firma de un nuevo contrato colectivo.

JUEVES 12 De acuerdo con las estimaciones del Comando Intersindical del Magisterio del estado Carabobo, se cumple en un 80% el primer paro escalonado de los educadores en dicha región para exigir que se apresure la firma de la cuarta contratación colectiva.

VIERNES 13 Se realiza en la ciudad de Valencia, estado Carabobo, un paro de transporte con un acatamiento del 90% para protestar contra los disturbios ocurridos el día anterior, en los cuales los estudiantes del Instituto Tecnológico de Valencia quemaron unas 10 unidades de transporte. El paro finaliza 6 hs después de iniciado, tras una reunión de emergencia solicitada por el gobernador del estado, quien garantiza que el Fondo Nacional de Transporte Urbano (FONTUR) reemplazará las unidades incendiadas.

SÁBADO 14 La Coordinadora Democrática (CD) realiza una marcha que parte desde 6 puntos distintos de la capital y finaliza en el Jardín Botánico para exigirle al CNE que dé una pronta respuesta en relación a la solicitud de referendo revocatorio en contra del presidente Hugo Chávez Frías.

MARTES 24 Cerca de 3 mil trabajadores del sector salud exigen al gobierno del estado Zulia la cancelación de sus compromisos laborales. Demandan la bonificación de fin de año, las vacaciones, la cancelación de los bonos nocturnos, aumentos de un 20% dentro del salario mínimo decretado por el gobierno nacional en 2003 y los cestatickets; denuncian la violación de 39 cláusulas de la contratación colectiva, entre otras cosas, y reclaman el inicio de la discusión de un nuevo contrato colectivo, ya que el anterior está vencido desde el pasado 31 de diciembre.

Trasciende extraoficialmente que luego de varias horas de conversaciones y con una votación 3 a 2, el CNE decide enviar a la fase de reparos las 148 mil planillas que tienen observaciones correspondientes al referendo presidencial ya que encajan en la categoría de planas o asistidas, es decir que presentan caligrafía similar.

MIÉRCOLES 25 Grupos de simpatizantes de la oposición se manifiestan frente a las sedes de las embajadas de los países que integran el Grupo de los Quince para pedir solidaridad con la crisis política venezolana y apoyo para que se produzca una solución electoral. Por su parte, grupos de oficialistas protestan frente a la embajada de EE.UU. por la injerencia de ese país en asuntos internos, que ha denunciado el gobierno en las últimas 2 semanas.

JUEVES 26 Más de mil trabajadores de Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) provenientes del oriente y occidente del país se presentan en las afueras de la Embajada de EE.UU. para protestar contra la intromisión del gobierno norteamericano en los asuntos internos del país.

VIERNES 27 En Maracaibo, estado Zulia, un grupo de opositores al gobierno toma la sede del CNE para exigir que sus firmas sean consideradas válidas y en rechazo a las últimas decisiones tomadas por el directorio de ese ente. En Caracas, grupos de opositores al gobierno se congregan en diferentes lugares del este de la ciudad para participar en la movilización convocada por la CD en protesta por la decisión del ente electoral de llevar a reparo más de 148 mil planillas con las firmas para solicitar el revocatorio presidencial. En horas del mediodía, efectivos de la Guardia Nacional (GN) lanzan bombas lacrimógenas contra la primera avanzada de la marcha en la Av. Libertador, dando inicio a una serie de enfrentamientos que continúan durante horas, resultando 2 personas muertas y más de 20 heridas. Las manifestaciones y los enfrentamientos se repiten en varias ciudades del interior del país.

SÁBADO 28 Por segundo día consecutivo grupos de opositores al gobierno del presidente Hugo Chávez salen a la calle a protestar contra la decisión del CNE de pasar a revisión más de 148 mil planillas con firmas que solicitan el referendo revocatorio del mandato del presidente. Durante la noche, en algunos sectores de la capital se intensifican las protestas y con éstas también los enfrentamientos, dejando un saldo de 2 muertos.

DOMINGO 29 Más de 1 millón de simpatizantes del gobierno del presidente Hugo Chávez realizan una marcha por las calles de Caracas hasta el Jardín Botánico bajo la consigna "Venezuela se Respeta", para repudiar la injerencia del gobierno de EE.UU. en asuntos internos del país. Respaldan también la labor y decisiones del directorio del CNE. Con un discurso del presidente Chávez en el que arremete contra la política internacional y económica que lleva adelante el gobierno de Washington, culmina la convocatoria.

MARZO

LUNES 1 Por cuarto día consecutivo, sectores de la oposición al gobierno de Hugo Chávez cortan las principales calles de la ciudad de Valencia, estado Carabobo, en protesta contra la decisión del CNE de pedir la revisión de más de 800 mil firmas para solicitar el referendo revocatorio presidencial. Las protestas se repiten en todo el país, registrándose también hechos de violencia en Puerto Cabello, Naguanagua, Miranda, Maracaibo, Mérida, Aragua y Barquisimeto, entre otras ciudades. Como consecuencia de los enfrentamientos entre manifestantes opositores, la GN y grupos oficialistas, 17 personas resultan heridas en el estado Carabobo, mientras que otras 9 resultan detenidas, entre ellas el alcalde de San Joaquín, César Hernández. En Caracas se registran 25 manifestantes heridos y 19 personas detenidas.

MARTES 2 El presidente del CNE, Francisco Carrasquero, anuncia que el ente comicial decide por el voto de la mayoría de su directorio que son válidas 1.832.493 solicitudes y se pasan a reparo 876.017 firmas. Además se encuentran 377.503 solicitudes pertenecientes a menores de edad, no inscriptos, fallecidos e inhabilitados electoralmente.

Durante el quinto día de protestas, vuelven a registrarse fuertes enfrentamientos entre grupos opositores, oficialistas y la GN en Caracas, Los Salías, Valencia, Maracaibo y Cabimas, con numerosos heridos y detenidos. Al finalizar la jornada una persona muere en Carabobo, otra en Mérida y 4 más durante los enfrentamientos en Caracas, con lo que el número total de fallecidos durante los 5 días de protestas asciende a 10.

MIÉRCOLES 3 Por tercer día consecutivo estudiantes del Instituto Universitario de Tecnología de Maracaibo, estado Zulia, toman las instalaciones de la institución para protestar por la detención de 19 estudiantes y un profesor de esa casa de estudios durante la tarde del pasado martes en una protesta por las decisiones del CNE.

JUEVES 4 Gremios y dirigentes de la CD junto con el alcalde de Machiques marchan hasta el sector Barrio Alto, en la entrada de la ciudad, en defensa de las firmas pasadas a revisión por el CNE. Durante la manifestación, los opositores lanzan objetos contundentes contra los efectivos de la GN, quienes responden

lanzando gases lacrimógenos. Como saldo del enfrentamiento una mujer resulta muerta y 10 personas heridas.

VIERNES 5 En Caracas, más de 2 mil personas marchan desde la Plaza de la Meritocracia en Chuao hasta la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) para respaldar su actuación, solicitar la presencia urgente en el país del secretario general César Gaviria y pedirle que presione la apertura de una investigación de las detenciones y torturas cometidas contra opositores por presuntos militares y policías, durante las manifestaciones ocurridas desde el viernes anterior.

SÁBADO 6 Centenares de miles de opositores al gobierno marchan desde 6 puntos de la ciudad de Caracas hasta la Av. Libertador donde se unen para pedir, entre otras cosas, la libertad de los presos políticos y la realización del referendo revocatorio del mandato presidencial.

LUNES 15 Los 3 magistrados de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaran válidas las 876.017 firmas recogidas por la oposición para solicitar el referendo revocatorio presidencial y pasadas a reparo por el CNE. En consecuencia, el Consejo anuncia que apelará la decisión de la Sala Electoral del TSJ.

MIÉRCOLES 17 En horas de la noche, más de 300 presos del Centro Penitenciario Yare II comienzan una huelga de hambre por el traslado el pasado 13 de marzo de algunos compañeros a los que quieren de vuelta en ese penal. Además, se quejan del retraso en el circuito judicial específico de Ocumare y del constante maltrato de la GN.

VIERNES 19 Más de 19 mil trabajadores, entre obreros y empleados de los 14 hospitales y 84 ambulatorios adscritos a la Secretaría de Salud de la Alcaldía Mayor, paralizan sus actividades para exigirle al Ministerio de Finanzas la cancelación de los salarios correspondientes a la primera quincena del mes en curso.

SÁBADO 20 Activistas políticos, diversas ONGs, representantes de los pueblos árabes, dirigentes agrarios, luchadores sociales y organizaciones estudiantiles, culturales y sociales realizan una concentración en las adyacencias de la Plaza Morelos de Caracas por la paz y contra la violencia y la injerencia extranjera, al conmemorarse el primer aniversario de la invasión a Irak por parte de EE.UU.

MARTES 23 La Sala Constitucional del TSJ anula el fallo emitido el 15 de marzo último por la Sala Electoral del mismo tribunal que validó las 876.017 firmas con igual caligrafía recogidas por la oposición para tramitar la solicitud de referendo revocatorio contra el presidente Hugo Chávez. El fallo establece que el CNE está facultado para desarrollar la normativa en materia electoral así como para dilucidar dudas y vacíos que las leyes electorales susciten.

Los 19 mil empleados del sector salud adscritos a la Alcaldía Mayor finalizan el paro de actividades iniciado el viernes anterior, luego de recibir el pago de la primera quincena de marzo.

ABRIL

JUEVES 1 Los gremios de Educación, Salud, Cultura y empleados y obreros que dependen del ejecutivo del estado Zulia protestan frente a la sede de la gobernación en Maracaibo, reclamando la cancelación de las cláusulas contractuales vencidas que incluyen cestatickets de febrero y marzo, 10% de incremento salarial, bono de compensación por no aumentar el salario y los compromisos con los jubilados.

DOMINGO 11 Centenares de familiares y amigos de las personas fallecidas durante el golpe de estado de abril de 2002, junto con una multitud de simpatizantes del gobierno, marchan hasta el puente Llaguno de Caracas por la verdad y contra la impunidad. En el camino pasan por la sede de la Cancillería donde entregan un documento en el que rechazan la supuesta injerencia de Washington en la preparación y ejecución de los hechos. Por su parte, la CD realiza en Caracas una caravana por la dignidad y en contra de la traición al pueblo venezolano.

LUNES 12 El presidente de la Sala Electoral del TSJ lee un dictamen definitivo donde se repite, con pequeñas modificaciones en el texto, la sentencia de la misma cámara del pasado 15 de marzo en la que se dan por válidas las 876.017 firmas recogidas por la oposición para solicitar el referendo revocatorio contra el mandato del presidente Chávez y que el CNE había pasado a reparo. De este modo, se le vuelve a ordenar al CNE que se tomen como válidas dichas firmas.

MARTES 13 Con un acto frente al palacio de Miraflores en Caracas, una multitud de simpatizantes del proceso revolucionario, el presidente Chávez y otros representantes del gobierno celebran el segundo aniversario del regreso al poder del primer mandatario tras el golpe de estado del 11 de abril de 2002.

MARTES 20 El presidente del CNE, Francisco Carrasquero, anuncia la aprobación del reglamento que regirá los procesos de reparos y las cifras definitivas del referendo revocatorio presidencial. Las firmas que irán a reparos serán 1.192.914, las rechazadas suman 375.241 y las válidas son 1.910.965. La fecha para los reparos de las firmas solicitando el referendo presidencial será los días 27, 28, 29 y 30 de mayo, mientras que los de diputados tendrán lugar desde el 20 hasta el 24 del mismo mes. De ser convocado el referendo revocatorio presidencial, el mismo ocurrirá el 8 de agosto de este año y se ratifica que la fecha para las elecciones regionales pasa para el 26 de septiembre.

Una semana después de iniciar el paro indefinido en reclamo de sus beneficios contractuales, los representantes de los gremios docentes dependientes del ejecutivo regional del estado Zulia realizan una concentración en la plazoleta de La Basílica en Maracaibo en la que anuncian que se niegan a aceptar la propuesta de hacer efectivo el nuevo tabulador salarial acordado con el gobierno a partir de septiembre. Ratifican la continuidad de la paralización de actividades en los planteles hasta que se aplique dicho tabulador antes de que culmine el año escolar para que tenga incidencia en el bono vacacional y el salario.

JUEVES 22 El Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Siderúrgica y sus Similares (SUTISS), en asamblea general de trabajadores, acuerda paralizar en su totalidad las operaciones de la Siderúrgica del Orinoco (SIDOR) por 48 hs en protesta por la negativa de la empresa de cancelar a sus trabajadores las utilidades líquidas obtenidas en el ejercicio fiscal 2003. Al mismo tiempo, exige que se retiren las 200 calificaciones de despido que recaen sobre el personal y que se mejore el servicio médico, de transporte y la seguridad industrial.

LUNES 26 Los trabajadores de SIDOR deciden en asamblea extraordinaria convertir en huelga indefinida el paro iniciado el último jueves.

Seis de los 7 sindicatos que conforman el comando intergremial del estado Zulia convocan a los maestros a reincorporarse a las aulas a partir del martes próximo luego de que en una consulta realizada por la Federación Venezolana de Maestros (FVM) a sus agremiados, estos votan por aceptar la propuesta del gobierno regional de aplicar el nuevo tabulador en agosto y volver así a las aulas.

MIÉRCOLES 28 Los 8 gremios de maestros que se agrupan en la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) realizan una marcha hasta el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes para demandar, entre otras cosas, un incremento en los salarios del 50%, iniciar los concursos y ascensos y aumentar varios bonos. Al llegar al lugar, un grupo de simpatizantes del oficialismo disuelve la concentración a fuerza de disparos y objetos contundentes resultando herido de bala un oficial de la Policía Metropolitana (PM).

JUEVES 29 La directiva de SIDOR introduce ante la Fiscalía una demanda en contra de SUTISS por atentar contra la propiedad privada y violentar el derecho al trabajo aduciendo que el sindicato intentó desalojar, en algunos casos en forma violenta, a los empleados de confianza y del área administrativa que no querían sumarse al paro. Además, la empresa advierte que no cancelará sueldos al personal inactivo. Por su parte, el sindicato acuerda radicalizar la protesta impidiendo el paso a cualquier empleado a las plantas de SIDOR.

VIERNES 30 La dirección de SIDOR anuncia que la empresa decide suspender totalmente sus operaciones administrativas en su sede de Puerto Ordaz ante la violencia

generada por representantes del sindicato que en la tarde del jueves radicalizan sus protestas bloqueando el paso a algunos trabajadores y desalojando a otros.

GLOSARIO DE SIGLAS

ALCA	Área de Libre Comercio de las Américas
ARC	Autopista Regional del Centro
BCV	Banco Central de Venezuela
BDP	Boleto Directo Personalizado
CD	Coordinadora Democrática
CNE	Consejo Nacional Electoral
CONFAGAN	Confederación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Venezuela
CTV	Confederación de Trabajadores de Venezuela
FCU	Federación de Centros Universitarios
FENTRASEP	Federación Nacional de Trabajadores del Sector Público
FONTUR	Fondo Nacional de Transporte Urbano
FVM	Federación Venezolana de Maestros
GN	Guardia Nacional
HCM	Hospitalización, Cirugía y Maternidad
IJC	Internado Judicial Carabobo
MSDS	Ministerio de Salud y Desarrollo Social
OEA	Organización de Estados Americanos
PDVSA	Petróleos de Venezuela SA
PM	Policía Metropolitana
SIDOR	Siderúrgica del Orinoco
SUTISS	Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Siderúrgica y sus Similares
TSJ	Tribunal Supremo de Justicia
UCV	Universidad Central de Venezuela
UPEL	Universidad Pedagógica Experimental Libertador
URIA	Unión Regional de Trabajadores de Aragua

Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).

Relevamiento y sistematización a cargo de Martín Fernández.

Fuentes: diarios Últimas Noticias, El Universal, Panorama Digital y Notitarde.

Otras fuentes: Venpres, Aporrea y Rebelión.

Crisis del Estado e intervención internacional en Haití

Gérard Pierre-Charles*

* *Licenciado en Ciencias Sociales y Administrativas por la Unviersidad de Haití. Investigador del Centre de Formation et de Recherche Économique et Sociale pour le Développement (CRESFED).*

*Traducción: Miguel Angel Djanikian
Revisión: Emilio Taddei*

El 29 de febrero de 2004, el Consejo de Seguridad de la ONU, respondiendo a una solicitud formulada por el presidente provisional Boniface Alexandre recientemente instalado en lugar del renunciante Sr. Aristide, autorizaba, por la Resolución 1559, el envío a Haití de una fuerza interina multilateral.

Con fecha del 1º de junio, y por medio de esta misma resolución, el Consejo disponía también el reemplazo de esta fuerza multinacional por una posterior "Misión Internacional de Estabilización" cuyo mandato y duración deberían ser definidos posteriormente. Esta resolución recibía el acuerdo unánime de los miembros del Consejo reunidos bajo la presidencia de la República Popular China que, de manera inusitada, daba su apoyo a una intervención directa de tropas en un Estado miembro.

De esta manera la resolución adoptaba un carácter especial, dado que no se correspondía con ninguna situación clásica susceptible de justificar o provocar una acción de

este tipo. Su adopción había sido precedida por una campaña publicitaria donde las imágenes de violencia política, de represión y de acciones armadas difundidas por las televisoras y la prensa del mundo hacían temer una guerra civil en Haití.

Estas imágenes alumbraban un cuadro de crisis política de larga duración, y en particular una situación donde por segunda vez en diez años las Naciones Unidas debían intervenir no para restablecer la paz —dado que no se trata de una situación de guerra— sino para garantizar la seguridad y las condiciones de funcionamiento democrático de un Estado miembro.

Tratándose de la más antigua república independiente de América Latina, esta decisión no podía dejar de llamar la atención de los analistas respecto de las causas profundas que la motivaban. Sobre todo cuando esta cuestión era, en realidad, de incumbencia de la OEA, que desde la Cumbre de las Américas en Québec en el año 2001 había recibido el mandato de hacerse cargo de los litigios entre la oposición política y el gobierno de Haití.

La crisis del Estado

La decisión adoptada por el organismo internacional parecía corresponder al reconocimiento del “derecho de ingerencia” promovido desde hace algunos años por ciertos estados para hacer frente a situaciones excepcionales de crisis y para asumir el poder o responder a una coyuntura que pudiera desembocar en el caos o la guerra civil.

En el plano diplomático, la ONU se había visto suficientemente afectada por los antecedentes de este verdadero colapso como para no sentirse comprometida. En efecto, en 1994 ésta había intervenido en Haití durante casi dos años para suplir las fuerzas de Estados Unidos, de aproximadamente unos 20 mil hombres, en el marco de la misión de “restauración de la democracia” apadrinada directamente por el presidente Clinton.

El simple hecho de plantear la cuestión de otra intervención en ese mismo país y por motivos sustancialmente similares ponía de manifiesto el completo fracaso de la misión anterior, no solamente en términos de la gestión realizada por parte de las autoridades haitianas, sino también desde el punto de vista de los operadores internacionales que la habían apadrinado y llevado a la práctica.

Por otra parte, desde la crisis electoral del año 2000, consecutiva a las elecciones fraudulentas que instalaron a Aristide en el poder, la OEA y más recientemente el CARICOM (Comunidad del Caribe) fueron actores de las negociaciones y acuerdos que tenían por

“La sociedad haitiana, frente a las amenazas e intimidaciones creadas por las condiciones mismas de la caída de este régimen bárbaro, el cual anunciaba un plan de represalias, asistió, entre humillaciones e indignaciones, a la llegada de tropas extranjeras para restablecer el orden”

objetivo la normalización del panorama político. Sus gestiones tampoco habían sido fructíferas, lo que reflejaba sin duda no sólo la profundidad de la crisis y un déficit en la capacidad de asegurar compromisos efectivos para resolverla, sino sobre todo una visión limitada respecto de la misma, así como la estrecha capacidad de acción que habían tenido estas instituciones estatales internacionales, poco sensibles a las realidades políticas tal como éstas se expresaron en el desastroso gobierno de las autoridades haitianas.

De todas maneras, a partir de estos antecedentes el secretario general de la OEA estaba suficientemente informado de las violaciones de los derechos humanos perpetradas por el régimen de Puerto Príncipe, de las dificultades en la búsqueda de un compromiso entre el poder y la oposición, y del deterioro de la situación en términos de la gobernabilidad y la agravación de las condiciones económicas y sociales.

Hacia fines del año 2003, la degradación acelerada del clima político, que se expresaba en las manifestaciones populares masivas y la irrupción en escena de ciertos grupos armados, había vuelto atendible la búsqueda, por parte de ciertos estados miembros y en particular de Francia, de una eventual participación de la ONU en una misión humanitaria o en el mantenimiento de la paz en Haití. Por otra parte, la aparición en la escena nacional de bandas armadas parecía poner a la orden del día la cuestión del “derecho de ingerencia”. Finalmente, las exacciones de todo tipo perpetradas contra la población, en el cuadro de una alarmante situación, volvían a resucitar el planteo del concepto de “población en peligro”.

En el marco del colapso de las instituciones, cuya expresión más significativa era el total descrédito de la policía, totalmente avasallada y desmoralizada, el Estado aparecía como incapaz de asumir las responsabilidades y exigencias de la paz.

En este contexto, el Consejo de Seguridad podía invocar las amenazas que tal situación implicaba respecto de las vidas y los bienes, y los peligros que representaba Haití para la “seguridad de la región”. Sobre todo porque se instalaba un clima de fin de régimen, resultado de la combinación de algunos acontecimientos importantes: la creciente y significativa movilización de la población (partidos políticos, sociedad civil, estudiantes, etc.) reclamando la salida de Arisitide, la presencia inesperada de grupos armados, las feroces críticas de la prensa, y finalmente el principio de cuestionamiento a la legitimidad misma del gobierno por parte de ciertas instancias internacionales. La sociedad haitiana, inmersa en un clima excepcionalmente álgido y frente a las amenazas e intimidaciones creadas por las condiciones mismas de la caída de este régimen bárbaro, el cual anunciaba un plan de represalias, asistió, entre humillaciones e indignaciones, a la llegada de tropas extranjeras para restablecer el orden.

Este tipo de escenario no era en realidad desconocido. En efecto, en 1915, en un contexto local de violencia y caos, la Infantería de Marina de Estados Unidos de América había desembarcado en Puerto Príncipe, intervención que resultó en diecinueve prolongados años de ocupación del país. También en ese entonces, en un contexto regional de creciente expansionismo e ingerencia, se trataba de “restablecer el orden democrático en Haití”. En dicha fecha, y en un cuadro local marcado por un régimen de fuerza instaurado por las tropas de Estados Unidos de América, bajo el patrocinio de las Naciones Unidas, aquellas habían intervenido también con el objetivo de “restaurar la democracia”.

Una década después de la intervención de la ONU de 1994, el intervencionismo adopta la forma de una operación internacional contra un Estado mafioso generador de terrorismo y caos que amenaza con un baño de sangre a la población pacífica.

En esta línea de continuidad se proyecta como factor permanente la vigilancia de la gran potencia del Norte, siempre atenta y pronta a corregir todo desorden que tenga lugar en su vecindario. Esta vez, sin embargo, una preocupación de tal género era compartida por Francia, que lejos de toda actitud competitiva manifestaba una curiosa coincidencia de intereses.

Por otra parte, esta continuidad también refiere a la crisis del Estado haitiano, que durante este último siglo no alcanzó a lograr la adecuación de su estructura, su funcionamiento, sus métodos y sus resultados a las exigencias del mundo moderno. En el terreno político, económico, social y cultural, este Estado parece prolongar el siglo XIX latinoamericano, marcado por el sello de la autocracia desmedida que desoye las exigencias de las mayorías en términos de democracia, justicia, progreso y desarrollo. Un Estado que era expresión de una oligarquía esclerosada (de militares, hombres de negocios o políticos) no alcanza —a pesar de las influencias de modernismo importadas del extran-

jero bajo la forma de capital o de modelo— a gestionar una sociedad ni a estimular las fuerzas motrices susceptibles de garantizar su desarrollo. Sin legitimidad, sin representación real de los productores o de los trabajadores, sin credibilidad entre los ciudadanos, el Estado resultaba débil en su función de organización social, y fuerte en tanto que instrumento de poder que funciona sobre la base de la extorsión.

De forma reiterada, este déficit del Estado provocó pulsiones positivas entre los sectores sociales más esclarecidos, pero sin llegar a revertir el rumbo ni generar una dirección política eficaz. Esta situación provocó un bloqueo continuo, en una suerte de “suma cero”, una transición enredada e interminable. Una crisis de dirección —o mejor dicho de hegemonía— de tales características, que no podía ser resuelta ni en términos de relaciones de fuerzas ni de compromisos, parecía conducir a unos y a otros a la tentación de buscar en el extranjero la modificación de esta situación que la dinámica de las fuerzas locales se mostraba incapaz de resolver.

El creciente cuestionamiento al poder

Jean-Bertrand Aristide surgió en la escena política en 1990 con una popularidad anclada fundamentalmente en los sectores pobres. La revancha de los sectores conservadores adoptó entonces la forma de un golpe de Estado. Elegido democráticamente, fue separado del Palacio por tres años, durante los cuales vivió en Washington preparando su retorno, que realizó bajo la égida de Estados Unidos y de la ONU.

Diez años después, en 2004, su popularidad y los cambios democráticos que anunciaba se habían evaporado. Por el contrario, su gobierno sustituyó todos los atributos de la democracia para instaurar un poder antidemocrático. Dicha realidad se impuso cada vez más al pueblo, sobretodo a partir de las elecciones del año 2000. Montadas de manera ilegal, éstas suscitaron una crisis post-electoral que, al cabo de más de tres años de cuestionamientos y resistencias, llevó en última instancia al derrocamiento del Sr. Aristide.

A su regreso del exilio, que contó con el apoyo ilimitado de la comunidad internacional, el ex-cura de St. Jean Bosco puso en evidencia su impotencia para gestionar los inmensos recursos de que disponía. Una suma de 2 mil millones de dólares (préstamos y donaciones) fue puesta a disposición del gobierno para ser utilizada en proyectos sociales apropiados. Sin embargo, la mala gestión de estos comprometió la posibilidad de relanzar la economía y de asegurar el triunfo de un proyecto que había suscitado tantas esperanzas. Al mismo tiempo, en el plano político, el régimen, en lugar de abrirse a otros sectores sociales, retomó su línea de conducta demagógica y populista.

La continuidad de esta política fue asumida por su sucesor, René Préval, que jugó plenamente el rol de marioneta prestándose a un juego maquiavélico cuyo objetivo era garantizar el retorno de su tutor al poder.

El rechazo de la ciudadanía a este régimen anarco-populista comenzó a manifestarse en el curso de este período (1995-2000). Estos cuestionamientos provenían de la *Organisation du Peuple en Lutte* –Organización del Pueblo en Lucha (OPL)–, que representaba al sector mejor organizado del movimiento popular. Su representación parlamentaria, con una mayoría relativa en la Cámara de Diputados (35) y en el Senado (9), impuso al dúo presidencial Aristide-Préval un primer ministro de la oposición, Rocín Smarth. Éste enfrentó enormes dificultades para desarrollar sus funciones en el marco previsto por la Constitución, viéndose constantemente limitado por los enredos del Ejecutivo presidencial y sus “organizaciones populares”.

Llevado a esta situación, el Parlamento se propuso frenar las violaciones del orden republicano y otras derivas propias del presidencialismo que avalaba la impunidad y la arbitrariedad. Los reclamos y exigencias a favor de la institucionalidad, la modernidad y el respeto de la ley y la Constitución configuraban todo un polo de acción para el conjunto de la población. La capacidad de convocatoria y de movilización, y la credibilidad misma del poder, se disolvían. La propaganda gubernamental intentó entonces desacreditar al Parlamento y atribuir las acciones de la oposición a influencias provenientes del viejo régimen duvalierista o de sectores extranjeros.

En abril de 1997 fracasó una tentativa del presidente Préval de imponer su voluntad en el curso de las elecciones parciales en el Senado, donde la oposición tenía todas las chances de ampliar su mayoría. Las denuncias contra este comportamiento anti-democrático e irrespetuoso de las reglas de juego alimentaron un movimiento reivindicativo de los sectores populares cada vez más

“Montadas de manera ilegal, las elecciones del año 2000 suscitaron una crisis post-electoral que, al cabo de más de tres años de cuestionamientos y resistencias, llevó en última instancia al derrocamiento del Sr. Aristide”

críticos en relación a las promesas incumplidas del gobierno. Sin embargo, estos sectores –frenados, intimidados y confundidos por los métodos populistas del gobierno– tardaron en expresarse en acciones autónomas o de apoyo a una oposición ya perseguida y calumniada.

A pesar de ello, la tenacidad de la resistencia, la dimisión del primer ministro, la imposibilidad técnica y política de remplazarlo, y la acogida que tuvieron en todo el país las acciones de los representantes y otros sectores de la prensa y de las instituciones cívicas a favor del respeto del Estado de derecho, llevaron al presidente Préval a disolver el Parlamento en diciembre de 1998. Se demostraba así la incapacidad del poder de coexistir con un parlamento independiente y de aplicar en los hechos los preceptos de una Constitución que preveía el funcionamiento de un Ejecutivo bicéfalo capaz de reflejar la realidad del pluralismo político existente.

La laboriosa emergencia de una alternativa

La imposibilidad del régimen de asegurar la gestión del país y de coexistir con una oposición se puso de manifiesto en ocasión de las elecciones legislativas y presidenciales (2000). En efecto, el conflicto post-electoral que le siguió, expresión de una crisis política y social muy profunda, traducía el arcaísmo de las estructuras y de las instituciones, así como la naturaleza de las dificultades inherentes al no-desarrollo. Este conflicto se profundizó a medida que se intensificaba el empecinamiento del Ejecutivo por querer imponer intendentes, un parlamento y un presidente, con el fin de monopolizar el Estado al servicio de un solo hombre.

Los partidos de la oposición que tenían todas las posibilidades de ganar las elecciones legislativas se vieron despojados de todos sus representantes, confiscación que se extendió al poder judicial y a las diversas instituciones del Estado, incluida la Policía.

Desde entonces, lo arbitrario favoreció la determinación y la acción de los partidos políticos de diversas tendencias (social-demócrata, democrática-popular cristiana comprometida, conservadora moderada), llevándolos a reunirse en el seno de la *Convergence Démocratique* (Convergencia Democrática). Esta coalición, rechazando el reconocimiento de la legitimidad del gobierno, minó la credibilidad de éste, promovió la contestación social, estimuló la resistencia ciudadana y emprendió un diálogo con los *partenaires* internacionales.

De esta manera, la Comunidad Internacional, en particular la OEA, tuvo que emprender negociaciones entre las dos partes. Misión laboriosa en el curso de la cual el secre-

tario general y el secretario general adjunto organizaron más de veinte visitas a Haití. Sin embargo, las resoluciones adoptadas por el Consejo de la OEA y la Asamblea General suscriptas por el gobierno haitiano resultaron en letra muerta. Las razones de este bloqueo se encontraban tanto en la voluntad del poder de imponer sus intereses y distanciarse de todo compromiso como también en la complacencia de ciertos sectores internacionales, aliados del poder haitiano. En primer lugar cabe mencionar a ciertos parlamentarios demócratas del Congreso de Estados Unidos entre los cuales se contaban aquellos del *black caucus* que tomaron partido por el Sr. Aristide por motivos de carácter ideológico o de interés. Junto a ellos también se encontraban todos los lobbys especializados, por demás bien pagos desde los años en que el presidente Aristide residía oficialmente en Washington disponiendo generosamente de los fondos del Estado haitiano.

Por otra parte, el comportamiento de la OEA y del CARICOM en el curso de estas negociaciones reflejó, a la vez y con matices, la influencia de estos sectores. Y también una suerte de complacencia institucional en relación a este gobierno “democráticamente elegido” cuyas derivas, excesos y crímenes no correspondían incluso a las sanciones previstas para casos de violación de la “Carta Democrática” y parecían situarse en el dominio de una impunidad que volvía intocable al misterioso personaje Aristide.

La actitud de estos sectores abría una sola perspectiva: la rebelión. Y en efecto, la dinámica de contestación social y de negociación “imposible” impulsada por la Convergencia condujo, frente al profesionalismo de los periodistas que debían pagar el precio de ello, a la acción militante de los sectores estudiantiles, de las organizaciones de derechos humanos, de las iglesias, de las asociaciones de mujeres y del sector empresarial, que reclamaban el respeto de los derechos humanos y de los compromisos asumidos por el Estado haitiano.

Así, la oposición se consolidó a pesar de la voluntad de las autoridades de ahogar todas las críticas, amordazar a la prensa y manipular a la opinión. La ciudadanía comenzó a sentirse implicada, amenazada por la naturaleza de este poder que, además de utilizar mecanismos y recursos públicos, hacía uso de los peores instrumentos de la dictadura así como de las poderosas redes internacionales ligadas a la participación en el tráfico de la droga.

El Estado mafioso, presentándose en nombre del pueblo y de la causa popular, se había transformado, a partir del no derecho, de la impunidad y del disimulo de sus objetivos bajo un velo populista y constitucionalista, en un instrumento eficaz de pillaje y de enriquecimiento ilícito. Se trataba de un Estado dotado de una potencia criminal enorme, cada vez más distante de la sociedad y opuesto al progreso y a la liber-

tad. De allí la dicotomía cada vez más peligrosa entre este Estado y la nación. De esta manera el aparato estatal al servicio del Sr. Aristide, de los barones de la droga, de los beneficiarios del régimen y de sus aliados haitianos y extranjeros, demostraba que tenía por único objetivo el de asegurar la impunidad, mantener su dominación y eternizarse en el poder. Por otra parte, la nación, en un proceso difícil de refundación, y fortalecimiento de las organizaciones sociales, podía comenzar a definir su proyecto de construcción de las bases participativas correspondientes a su necesidad de justicia, desarrollo y democracia.

El año 2003 fue de impulso sostenido para los sectores progresistas. La *Convergence Démocratique* imprimió una orientación unitaria a todos aquellos que obraban a favor del cambio. Su acción y las negociaciones con la comunidad internacional con el objetivo de salir de la crisis fueron reforzadas, renovadas y ampliadas por los periodistas que ejercían la libertad de información, los estudiantes que reclamaban la autonomía de la universidad y el derecho de manifestar, las iglesias que se asociaban a las reivindicaciones, las fuerzas de respeto de los derechos y libertades, y los sectores profesionales que reclamaban el buen gobierno y el fin de la corrupción. La sociedad civil organizada, bajo el nombre de *Groupe des 184* (Grupo de los 184), emprendió una campaña de participación cívica donde se reencontraron representantes de las instituciones sindicales, patronales, asociaciones de mujeres y organizaciones de defensa de los derechos humanos, etcétera. Estos sectores llevaron a la población a manifestarse contra el régimen, lo que trajo aparejada la exasperación de la barbarie de los órganos represivos contra estos activistas, y en particular contra los estudiantes.

El movimiento cívico, reagrupando sociedad civil y corrientes políticas, alcanzó su apogeo, dando lugar a manifestaciones callejeras que reunieron a más de 100 mil personas. Las bases del consenso social habían sido alcanzadas. Así se afirmaba el esquema y el contenido de la transición a un régimen democrático y de garantía de los derechos humanos. Y, con este vasto movimiento, aparecían las líneas de un proyecto alternativo de carácter republicano.

A inicios de 2004, año de celebración de los doscientos años de nuestra independencia, dicha movilización y el estado de espíritu combativo de la población expresaban un cambio en curso. Estos provocaron la caída del mito de la popularidad absoluta de Aristide y significaron la ruptura de toda la lógica de funcionamiento del sistema basado en la represión, la intimidación, la manipulación y el inmovilismo de los ciudadanos, quienes desafiaban al miedo y la brutalidad. Las instituciones del Estado no podían funcionar. El pueblo reclamaba la partida de Aristide, y esta reivindicación pacífica generalizada exasperaba a la máquina represiva, que operaba con toda barbarie.

Este escenario de desmoronamiento y de implosión de un poder que parecía total y todopoderoso favoreció la entrada en escena en la ciudad de Gonaïves de grupos paramilitares disidentes que habían estado al servicio de Aristide, así como de los elementos del viejo ejército de Haití refugiados en República Dominicana que penetraban por la frontera.

La lucha unitaria de la oposición pacífica y de participación civil, en particular del *Groupe des 184*, provocó también la ruptura del sistema de alianza subordinada del Sr. Aristide con la comunidad internacional. Hasta ese momento, la mayor parte de los amigos de Haití, como la OEA y el CARICOM, continuaban apoyando al gobierno, cosa que daba cuenta de la complacencia y la complicidad de los mismos con éste. Mientras se referían a su "legitimidad" reclamaban solamente la corrección de ciertas prácticas políticas ilegales y la cesación de las violaciones de los derechos humanos. Con la explosión inesperada del descontento popular y la concentración de vastos sectores sociales reclamando la partida de Aristide, la comunidad internacional tuvo que cambiar el fusil de hombro. Por primera vez, durante la segunda quincena de febrero de 2004, personajes importantes de esta comunidad tuvieron que hacer mención a la incapacidad del jefe de Estado para garantizar la seguridad de las vidas y los bienes en Haití y también de asegurar la estabilidad en la región del Caribe.

Una compañía privada de seguridad de Estados Unidos, la *Steel Foundation* de California, que resguardaba la seguridad de Aristide desde hacía aproximadamente dos años, decidió poner fin a la delicada misión de sus agentes ubicados en el Palacio Nacional, no contando más con las garantías apropiadas para ello brindadas por las autoridades de Washington. Es en este contexto que el amo de las vidas y los bienes de Haití, ante el temor de ser barrido por el movimiento pacífico y la rebelión creciente, y en su obsesión de permanecer en el poder bajo cualquier circunstancia, reclamó para su seguridad la intervención extranjera.

La intervención extranjera

Las jornadas del 1 y 2 de enero de 2004 adquirieron una significación simbólica en el proceso de constitución del consenso histórico de la nación en la búsqueda de la libertad y de una auto-definición conforme a sus aspiraciones, la dignidad humana y el desarrollo económico y social. En esta circunstancia, el pueblo haitiano, arraigado a los valores de la nacionalidad y la independencia adquirida en condiciones heroicas, en lugar de celebrar este aniversario ganó las calles de la capital y de la provincia para decir no a la dictadura y reclamar la partida del dictador, cuya conducta deshonraba a la nación. La policía y los grupos paramilitares cargaron contra los manifestantes con una violencia sin parangón, causando varias muertes y heridos.

“Las jornadas del 1 y 2 de enero de 2004 adquirieron una significación simbólica en el proceso de constitución del consenso histórico de la nación en la búsqueda de la libertad y de una auto-definición conforme a sus aspiraciones, la dignidad humana y el desarrollo económico y social”

En esa ocasión, la *Plateforme Démocratique* (Plataforma Democrática), coalición política que agrupaba los sectores sociales y políticos más diversos (estudiantes, sindicatos, asociaciones patronales, organizaciones campesinas, etc.) reuniendo a la oposición política y la sociedad civil, entregó al único invitado oficial de alto rango presente en las celebraciones —el presidente de Sudáfrica, Tabo Mbeki— un documento que demandaba la partida de Aristide.

El 19 de febrero siguiente, este documento servía de base a la *Plateforme Démocratique* para reiterar las posiciones de la nación frente a las proposiciones que le eran transmitidas por una delegación internacional de alto rango, compuesta entre otros por el subsecretario de Estado Norteamericano Roger Noriega, el ministro canadiense de la Francofonía, Denis Coder, el ministro de Relaciones Exteriores de Bahamas, y altos funcionarios de la OEA, del CARICOM y de la Unión Europea. Por intermedio de esta delegación, la comunidad internacional renovaba su apoyo al Sr. Aristide, jefe del Estado mafioso, para que éste permaneciera en el poder hasta terminar su “mandato”, que concluía el 7 de febrero de 2006, invitando a la oposición a suscribir dicho compromiso, que incluía, entre otras cuestiones, la elección de un primer ministro consensuado. La oposición rechazó el convite.

Finalmente, frente a la intransigencia de la oposición y la caída del sistema, los *partenaires* internacionales tuvieron que reaccionar en el sentido del reclamo general de la sociedad. Aristide se vio así conminado por la fuerza de los hechos a dejar el poder.

El documento de la *Plateforme Démocratique*, despojado de ciertos elementos de su contenido, reapareció como referencia de la nueva institucionalidad precaria y formal adoptada por la OEA y la Embajada de Estados Unidos de América luego de la partida de Aristide. Se facilitaba así la asunción como presidente provisorio, según el precepto constitucional, del presidente de la Corte de Casación, Boniface Alexandre, y la formación de un *Conseil de*

Sages (Consejo de Sabios) de siete miembros para que contribuyeran a la elección de un primer ministro y la formación de los consensos necesarios para su gobierno.

Haití parecía entrar en otra etapa de su historia, la de la búsqueda transición a la democracia, portadora de nuevas exigencias y esperanzas. Pero el impulso de la renovación democrática que promovía el histórico consenso del 1 y 2 de enero de 2004 forjado en la difícil lucha del pueblo para liberarse del despotismo había sido nuevamente desviado, si no truncado.

En efecto, entre tanto había desembarcado en el país una fuerza militar multinacional formada por contingentes de Estados Unidos de América, Francia, Canadá, y poco después de Chile, que el Sr. Aristide había ya solicitado a las Naciones Unidas en declaraciones públicas, y que también había sido demandada por el presidente recién designado. Se buscaba de esta manera *cortocircuitar* y bloquear el inusitado proceso de construcción del consenso y la determinación histórica por el cual la sociedad haitiana había emprendido la unidad de los diversos sectores progresistas para salir de la ignominia y encaminarse hacia una verdadera liberación.

Los requisitos de ese proceso de transición, tal como habían sido definidos desde su fase inicial, reclamaban la necesidad de seguridad pública, el saneamiento financiero, la lucha contra la pobreza, la puesta en marcha de la economía y, en suma, la creación de las condiciones para la realización de elecciones transparentes. Tal objetivo debía resultar en la formación de un gobierno legítimo, representante de los sectores políticos y socioeconómicos más progresistas y susceptibles de colaborar, con espíritu de consenso, en la resolución de los grandes problemas que afronta la nación haitiana. Un gobierno que, solidariamente con su pueblo, participara en la conquista de los espacios de soberanía, de mejoramiento de la calidad de vida y de dignidad haitiana en concordancia con los objetivos que se habían planteado y animaron a los fundadores de la nación.

[cronología enero-abril 2004]

ENERO

- LUNES 5** Costa Rica y Estados Unidos retoman en Washington las negociaciones del Tratado de Libre Comercio (TLC). Los demás países de la región firmaron el TLC en diciembre de 2003 pero Costa Rica solicitó más tiempo al no alcanzar acuerdo alguno con relación a los plazos de desgravación de los productos agrícolas más sensibles, la ausencia de una resolución en el tema de telecomunicaciones, la agresiva propuesta norteamericana en el tema de seguros y los tópicos sobre propiedad intelectual pendientes.
- LUNES 19** La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) aprueba un aumento de 6,30 colones por litro en el precio de la gasolina súper, 5,90 en la regular y 4,80 en el diesel.
- SÁBADO 24** EE.UU. y Costa Rica alcanzan un acuerdo para la inclusión de San José en el TLC con Centroamérica. El proceso de apertura de las telecomunicaciones será selectivo, gradual y regulado. La modernización y fortalecimiento del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) se deberá promulgar a más tardar el 31 de diciembre de 2004; las redes privadas de datos y los servicios de internet se abrirán a la competencia a más tardar el 1º de enero de 2006 y los servicios de telefonía celular se abrirán a la competencia a más tardar el 1º de enero de 2007. Se acuerda la apertura total en el tema de seguros, ya sean voluntarios u obligatorios, y el establecimiento de una superintendencia para regular el sector. La papa y la cebolla fresca quedan excluidas del tratado.

FEBRERO

- MIÉRCOLES 11** El gobierno anuncia un recorte de 72 mil millones de colones en varias partidas del presupuesto. Los principales afectados son proyectos para obras de infraestructura y del campo social en áreas rurales.
- LUNES 16** El Congreso aprueba un préstamo de 8 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el sector salud.

JUEVES 19 Los principales sindicatos del país culminan su evaluación del TLC suscrito con EE.UU. a finales de enero, el cual consideran nocivo para el desarrollo social de Costa Rica. Rechazan la intromisión de un grupo de negociadores en las decisiones de la Asamblea Legislativa al obligar a crear o modificar la legislación costarricense para vender las instituciones del Estado, la explotación de la mano de obra nacional, la quiebra de instituciones clave como el ICE, el Instituto Nacional de Seguros (INS) y la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), además de las condiciones asimétricas de competencia para el agro nacional en relación con los subsidios que reciben los productores norteamericanos.

MARZO

LUNES 1 Alrededor de 200 taxistas informales, autodenominados porteadores, se concentran frente al Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) y en el centro de San José para rechazar la reciente aplicación de una norma que permite a la Policía de Tránsito detenerlos, retener sus vehículos y sancionarlos con una multa que oscila entre 600 mil y 1,2 millones de colones. Se producen enfrentamientos entre los manifestantes y la fuerza pública.

MIÉRCOLES 3 Representantes de los porteadores y funcionarios del gobierno se reúnen en las instalaciones del MOPT y acuerdan la legalidad de la figura del porteo basada en un pronunciamiento de la Procuraduría General de la República. Sin embargo, el gobierno les prohíbe recoger pasaje en la vía pública, y advierte que todo pirata será sancionado con una multa de 600 mil colones y el retiro de las placas.

LUNES 15 La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) y el Sindicato Independiente de Trabajadores Estatales Costarricenses (SITECO) marchan hasta el edificio de Hacienda (San José) para rechazar el recorte de 2 millones de colones anunciado por el gobierno.

MIÉRCOLES 24 El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) dona 1.250.000 pesos a los gobiernos de la región con el fin de apoyar los esfuerzos para lograr la ratificación del TLC con EE.UU.

ABRIL

JUEVES 1 Unos 150 funcionarios de la Municipalidad de Limón, nucleados en la Federación de Trabajadores Limonenses (FETRAL), inician una huelga por tiempo indefinido en demanda del reconocimiento de los aumentos salariales de los dos semestres de 2003 y del primero de este año.

DOMINGO 4 La Sala IV de la Sala Constitucional aprueba la reelección presidencial.

LUNES 5 Los empleados de la FETRAL levantan la medida luego de que la Contraloría General de la República autoriza un presupuesto extraordinario de 44 millones de colones para la Municipalidad de Limón, con lo que se podrán pagar los sueldos atrasados.

LUNES 19 Alrededor de 100 trailers bloquean la frontera con Panamá impidiendo el paso de vehículos pesados en ambos sentidos en rechazo al cobro de 26 colones del lado panameño –\$1 por permiso vehicular en Canoas y \$25 de impuestos municipales– que va en contra de los convenios comerciales vigentes entre los dos países, así como de los firmados en forma regional.

MARTES 20 Un grupo de diputados envía una misiva al presidente de la República Abel Pacheco para que retire su apoyo a la invasión de Irak, asegurando que es un genocidio y que va en contra de los principios de paz que caracterizan a Costa Rica.

MIÉRCOLES 21 Germán Serrano Pinto, presidente ejecutivo del INS, renuncia a su cargo tras asegurar que el gobierno no acepta sus críticas a la forma en que se promueve la apertura del monopolio de los seguros dentro del TLC.

La gobernadora de Puerto Rico, Sila María Calderón, llega al país en una visita oficial con el fin de reforzar las relaciones comerciales entre ambos países.

VIERNES 23 El gobierno de EE.UU., mediante su embajada en Costa Rica, construye un puesto fronterizo en Peñas Blancas con el objetivo de combatir el narcotráfico internacional, el tráfico de armas y el contrabando.

La fuerza pública desaloja y detiene a 70 campesinos que ocupan la finca Bambuzal, en Horquetas de Sarapiquí, propiedad de la Standart Fruit Company.

Empresarios puertorriqueños que se encuentran en el país en misión comercial presentan ante el ministro de Exteriores, Alberto Trejos, la solicitud para que apoye a Puerto Rico para convertirse en sede permanente del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA).

DOMINGO 25 Los campesinos desalojados de la finca de Standart Fruit Company ocupan la Catedral Metropolitana (San José) en señal de protesta. Piden a la Iglesia Católica que actúe como mediadora para lograr una audiencia con el presidente de la Corte y el fiscal general.

GLOSARIO DE SIGLAS

ALCA	Área de Libre Comercio de las Américas
ANEP	Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados
ARESEP	Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos
BCIE	Banco Centroamericano de Integración Económica
BID	Banco Interamericano de Desarrollo
CCSS	Caja Costarricense del Seguro Social
FETRAL	Federación de Trabajadores Limonenses
ICE	Instituto Costarricense de Electricidad
INS	Instituto Nacional de Seguros
MOPT	Ministerio de Obras Públicas y Transporte
SITECO	Sindicato Independiente de Trabajadores Estatales Costarricenses
TLC	Tratado de Libre Comercio

[cronología enero-abril 2004]

ENERO

- LUNES 5** Los trabajadores de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) inician un paro de labores en las sedes de San Salvador, Santa Ana y San Miguel en repudio al despido de 10 empleados de la institución.
- LUNES 26** Empleados de la Alcaldía de Soyapango, respaldados por la Asociación Sindical de Trabajadores Municipales (ASTRAM), inician un paro de actividades por tiempo indefinido para exigir la recontractación de 9 trabajadores despedidos.
- JUEVES 29** Los empleados de la Alcaldía de Soyapango llegan a un acuerdo por medio del cual suspenden la huelga por tiempo indefinido iniciada el lunes pasado, a partir de que las autoridades municipales se comprometen a recontractar a 4 trabajadores e indemnizar a otros 3. Los casos restantes serán revisados por una comisión constituida a tal efecto.

FEBRERO

- JUEVES 5** Diversas organizaciones sociales, entre ellas el Bloque Popular Social (BPS), se concentran en el centro de San Salvador para exigir al gobierno un aumento en el presupuesto de las Alcaldías y en repudio a la posible privatización del agua.
- MARTES 10** Pobladores de Apopa se concentran frente a la sucursal municipal de ANDA para reclamar por el alto precio del agua y el mal servicio brindado por la empresa.
- MIÉRCOLES 11** Decenas de trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) se manifiestan en el centro de San Salvador contra los despidos que se vienen sucediendo en la institución. El secretario general del Sindicato de Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (STISSS) expresa que en los próximos días se realizarán una serie de protestas para denunciar

el hecho y para que se vuelva a reactivar la negociación entre la administración y los trabajadores del Instituto.

- LUNES 23** Trabajadores de la Alcaldía de Sonsonate inician un paro de labores por 48 hs y bloquean la salida de los camiones recolectores de basura para exigir la recontractación de varios empleados despedidos por las autoridades municipales. El secretario de conflictos de la ASTRAM expresa que la huelga incluirá movilizaciones y otras medidas de fuerza.

MARZO

- LUNES 1** Miembros del STISSS y de la Asociación Nacional de Trabajadores del Ministerio de Salud Pública y Acción Social (ANTMSPAS) bloquean la entrada a varios hospitales en diversos puntos del país para protestar contra el despido de trabajadores. La Brigada Revolucionaria de Estudiantes Salvadoreños (BRES) de la Universidad de El Salvador (UES) apoya las acciones y se moviliza en defensa de la salud pública.

- DOMINGO 21** Se realizan las elecciones presidenciales en todo el territorio nacional. El partido Acción Republicana Nacionalista (ARENA) obtiene el 57% de los votos por lo que la fórmula integrada por Elías Antonio Saca y Ana Vilma Escobar es electa para ejercer los cargos de presidente y vicepresidente de la república, respectivamente, desde el 1° de junio de 2004 hasta la misma fecha de 2009. El segundo lugar es ocupado por Shafik Hándal, candidato del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) con el 36% de los sufragios. La dirigencia del Frente expresa que ofrecerá una feroz resistencia desde su mayoría parlamentaria para evitar los procesos de privatización y la firma del los Tratados de Libre Comercio (TLC) anunciados por el binomio triunfante. La elección registra una de las más altas tasas de participación ciudadana superando el 60% del padrón electoral.

- JUEVES 25** Alrededor de 300 habitantes de la localidad de Montelimar bloquean en horas de la mañana la ruta que conduce desde San Salvador al aeropuerto internacional en protesta por la falta de agua que sufren desde hace 15 días y exigen la presencia de representantes de ANDA para que solucionen el problema.

- MARTES 30** Un grupo de aspirantes a la carrera de Ingeniería de la UES inicia una huelga de hambre para exigir que las autoridades académicas garanticen el ingreso de los 68 estudiantes no admitidos.

ABRIL

JUEVES 1 Los aspirantes a la Facultad de Ingeniería de la UES levantan la medida tras lograr un acuerdo con las autoridades de la institución mediante el cual se garantiza el ingreso de 48 estudiantes.

MIÉRCOLES 21 Cientos de personas convocadas por el BPS se movilizan por el centro de San Salvador hacia la embajada de EE.UU. en repudio a la política que ese país lleva adelante en Irak y para exigir el regreso de las tropas salvadoreñas enviadas a la zona de conflicto.

JUEVES 22 Efectivos del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM) reprimen a vendedores callejeros apostados en las inmediaciones del mercado de Santa Tecla. El enfrentamiento, que deja un saldo de 4 personas heridas, forma parte del plan municipal para liberar las calles de comerciantes.

MIÉRCOLES 28 En horas de la mañana unas 50 personas, entre miembros del STISSS y estudiantes, toman la catedral metropolitana en el centro de San Salvador y bloquean las calles aledañas en repudio a los permanentes despidos ocurridos en el ISSS y para exigir la reincorporación de 94 trabajadores cesanteados. Cerca del mediodía, efectivos de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) reprimen a los manifestantes dejando un saldo de 30 heridos, y detienen a dirigentes sociales, entre ellos al secretario general del sindicato. La reacción de los sindicalistas genera un enfrentamiento con las fuerzas del orden y la quema de vehículos incluidos los de la cadena televisiva Telecorporación Salvadoreña (TCS). Por la noche los acontecimientos se centran en la disputa por la ocupación de las calles en donde los manifestantes incendian unidades de transporte público, forman barricadas y arrojan piedras y bombas caseras contra los policías. Hacia el final de la jornada la UMO avanza y detiene a unos 30 manifestantes.

JUEVES 29 Decenas de campesinos aglutinados en la Confederación de Asociaciones Cooperativas de El Salvador marchan hacia la Asamblea Legislativa para exigir a los diputados que no los excluyan de los beneficios que otorga el sistema de salud. Representantes del Comité de Incidencia para el Desarrollo Agrario y Rural (CIDAR), conformado por diversas organizaciones campesinas que reúnen a más de 75 mil personas en todo el país, hacen público su apoyo a los sindicalistas del STISSS y a la lucha contra la privatización de la salud.

Estudiantes de la UES, aglutinados en la Coordinadora Revolucionaria Estudiantil, bloquean calles y queman llantas frente a la Facultad de Medicina en San Salvador en apoyo a los sindicalistas del STISSS.

GLOSARIO DE SIGLAS

ANDA	Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados
ANTMSPAS	Asociación Nacional de Trabajadores del Ministerio de Salud Pública y Acción Social
ARENA	Acción Republicana Nacionalista
ASTRAM	Asociación Sindical de Trabajadores Municipales
BPS	Bloque Popular Social
BRES	Brigada Revolucionaria de Estudiantes Salvadoreños
CAM	Cuerpo de Agentes Metropolitanos
CIDAR	Comité de Incidencia para el Desarrollo Agrario y Rural
FMLN	Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional
ISSS	Instituto Salvadoreño del Seguro Social
STISSS	Sindicato de Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social
TCS	Telecorporación Salvadoreña
TLC	Tratado de Libre Comercio
UES	Universidad de El Salvador
UMO	Unidad de Mantenimiento del Orden

*Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Marcelo Perera.
Fuentes: diarios La Prensa, Colatino y El Diario de Hoy.*

[cronología enero-abril 2004]

ENERO

- MARTES 13** Maestros que trabajan por contrato ocupan las instalaciones de la Dirección Departamental de Educación (DDE) de Mazatenango, en Suchitepéquez, y de Jalapa, reclamando por las 13 mil plazas de empleo propuestas por el Ejecutivo, que habrían sido adjudicadas sin concursos y habrían favorecido a integrantes del Frente Republicano Guatemalteco (FRG).
- MIÉRCOLES 14** Oscar Berger –de la Gran Alianza Nacional (GANAN)– asume como presidente de Guatemala, convirtiéndose en el quinto civil al frente del Ejecutivo de la era democrática. Eduardo Stein asume como vicepresidente y toman posesión los nuevos 158 diputados nacionales.
- JUEVES 15** Asumen los 331 alcaldes municipales electos el 9 de noviembre pasado, incluso en municipios en donde se preveía que podía haber disturbios, debido al rechazo de la población a muchos de estos funcionarios. En el municipio de Sacapulas, Quiché, no obstante, los vecinos toman el edificio municipal como medida de protesta por la reelección del alcalde.
- VIERNES 16** Alrededor de 2 mil campesinos, maestros, sindicalistas y pobladores en general, pertenecientes a la Asociación de Maestros de Educación Rural de Guatemala (AMERG), la Coordinadora Nacional de Pobladores y Áreas Marginales de Guatemala (CONAPAMG) y varias organizaciones sindicales, marchan hasta la embajada de EE.UU., el Congreso, el Ministerio de Educación (MINEDUC), el Palacio Arzobispal y el Palacio Nacional de la Cultura, para rechazar el Tratado de Libre Comercio (TLC) con EE.UU. y exigir solución a los problemas de vivienda, educación, seguridad y empleo.
- JUEVES 22** Decenas de familias campesinas que el 24 de noviembre de 2003 habían ocupado las fincas La Merced y María de Lourdes, en el municipio Génova Costa Cuca, Quetzaltenango, son desalojadas por la Policía Nacional Civil (PNC).
- MIÉRCOLES 28** El cadáver de una persona aparece dentro de un tonel, en la zona 6 de la capital, con una nota firmada por la Mara Salvatrucha que dice: “Sr. Presidente, si siguen persiguiendo a los pandilleros, seguiremos matando gente”.

FEBRERO

- LUNES 2** Los gobiernos de México y Guatemala instalan una base militar en el municipio fronterizo de Candelaria, que se extiende a los dos países, para controlar la actividad de narcotraficantes y el paso de inmigrantes indocumentados.
- VIERNES 6** Alrededor de 5 mil maestros de la Asamblea Nacional Magisterial (ANM), sindicalistas y estudiantes de la Universidad de San Carlos (USAC) marchan hasta el Congreso y la Casa Presidencial para pedir al gobierno que detenga el incremento de los precios de los productos de la canasta básica y otros servicios vitales, y exigir mejoras en el sector educativo.
- JUEVES 12** El Congreso aprueba el Plan Maya Jaguar, que permitirá el ingreso de soldados de EE.UU. para efectuar patrullajes conjuntos durante dos años en lucha contra el narcotráfico.
- LUNES 16** Maestros de todos los departamentos se concentran frente a la Casa Presidencial, reclamando que el Presidente adjudique 13 mil plazas presu-puestadas por el gobierno anterior.
- MIÉRCOLES 18** El ex presidente Portillo huye a México durante la madrugada, luego de que la Corte de Constitucionalidad (CC) le retira la inmunidad y lo suspende como diputado del Parlamento Centroamericano (PARLACEN). Existen 11 procesos contra el ex mandatario por supuestos actos de corrupción.

Unos 4 mil ex Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) se manifiestan frente a la Plaza de la Constitución, exigiendo que se les paguen las 2 cuotas restantes de la indemnización gubernamental prometida por los servicios prestados durante el conflicto armado interno.

- MIÉRCOLES 25** Como parte de las celebraciones del Día de la Dignidad de las Víctimas, cientos de sobrevivientes de masacres, viudas y familiares de víctimas del conflicto armado interno protagonizan una multitudinaria marcha hasta la Casa Presidencial y la Plaza de la Constitución, exigiendo al gobierno el cumplimiento de los compromisos establecidos en los Acuerdos de Paz. Por su parte, cientos de campesinos, organizados en la Plataforma Agraria (PA), realizan una marcha que termina con la ocupación de la gobernación departamental de Retalhuleu. También, unos mil indígenas se manifiestan frente a la municipalidad de Cobán, Alta Verapaz. A su vez, las autoridades nacionales conmemoran en el Palacio Nacional de la Cultura el quinto aniversario de la entrega del informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) y se comprometen al respeto y cumplimiento de los Acuerdos de Paz.

Alrededor de 3 mil indígenas integrantes del Comité de Unidad Campesina (CUC), entre otras organizaciones, se manifiestan en Cobán, Alta Verapaz,

para pedir al gobierno que suspenda los desalojos de fincas ocupadas en las Verapaces.

MARZO

DOMINGO 7 Centenares de trabajadoras de maquilas marchan por las calles de la capital, denunciando las extensas jornadas laborales y exigiendo mejores condiciones de trabajo.

LUNES 8 Cientos de mujeres marchan conmemorando el Día Internacional de la Mujer y manifestándose contra la discriminación, el acoso sexual, la violencia social y las malas condiciones de trabajo. Parten de las oficinas centrales del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), pasan por el Ministerio de Trabajo, el Congreso y la Empresa de Energía Eléctrica de Guatemala SA (EEGSA), y culminan en el parque de la Constitución. También realizan marchas en Carchá, Alta Verapaz, Quetzaltenango, Chiquimula y Petén.

La Justicia determina que el general Efraín Ríos Montt comience a cumplir arresto domiciliario por ser el presunto responsable de los disturbios ocasionados por sus seguidores durante los días 24 y 25 de julio de 2003.

SÁBADO 13 Cientos de maestros de varios departamentos que trabajan por contrato realizan un plantón frente a la Casa Presidencial, para exigir al Presidente soluciones definitivas ante la inestabilidad laboral. Decenas de maestros comienzan una huelga de hambre en el lugar, reclamando que el Ejecutivo agilice los nombramientos de plazas presupuestadas.

MARTES 16 Campesinos e indígenas de la región del Petén, nucleados en el Frente Petenero Contra las Represas, realizan bloqueos en diferentes puntos de la principal ruta que conduce hasta la capital del país, en contra de la edificación del sistema de represas que pretende ser financiado por el gobierno de México.

MARTES 23 Arriba al país por 24 hs el presidente de México Vicente Fox. Trabajadores, sindicalistas, mujeres, campesinos e indígenas marchan hasta el Palacio Nacional de la Cultura, el edificio de la EEGSA y el Congreso, y toman las principales salidas de la capital y varios pasos fronterizos en oposición al TLC con México, al Plan Puebla Panamá (PPP) y a las políticas neoliberales que afectan la economía y atentan contra la soberanía y la libertad de la nación. El presidente Berger recibe al primer mandatario mexicano con quien firma un acuerdo minero, un memorando de entendimiento sobre asuntos migratorios y el compromiso de revisar las barreras no arancelarias que contravienen lo establecido en el TLC entre ambas naciones, entre otros puntos.

MIÉRCOLES 24 Cientos de maestros por contrato cumplen su tercer día de ocupación de la Dirección Departamental de Educación de Sololá. Advierten que continuarán con la medida de fuerza hasta que el MINEDUC confirme el nombramiento de 13 mil docentes. La ministra de Educación anuncia que los maestros deberán ser contratados bajo el renglón 0-21, en el que no perciben prestaciones y sus pagos se realizan cada 4 meses.

MARTES 30 Cerca de 25 mil campesinos e indígenas llegan a la capital desde el interior del país, para marchar junto a organizaciones sindicales, estudiantiles y de derechos humanos hasta el Congreso y el Palacio Nacional, en reclamo de una reforma a la Ley Agraria, la consulta de los indígenas en problemas que les conciernen y en rechazo a la firma del TLC y el PPP, entre otros puntos. Son recibidos por el Ejecutivo y el Congreso, quienes firman un documento donde se comprometen a apoyar la legislación pendiente en relación a los Acuerdos de Paz. También se manifiestan en Cobán, Alta Verapaz, Cuilapa, Santa Rosa, y Petén. En La Cumbre Santa Elena, Baja Verapaz, bloquean la carretera durante casi todo el día.

A B R I L

JUEVES 1 El presidente Berger presenta su plan de modernización del ejército, que prevé para antes del 30 de junio la cancelación de 12.109 plazas, de un total de 27.214, la reducción de su presupuesto y del número de bases militares.

MIÉRCOLES 28 Encabezados por la PA, miles de campesinos e indígenas de todo el país marchan por las principales calles de la capital hasta la zona 10, donde se está realizando la 28ª Cumbre Regional sobre Seguridad Alimentaria del Fondo de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) –en la que se reúnen el presidente Berger, ministros de Agricultura de América Latina y el Caribe y funcionarios de la entidad– reclamando que este organismo los apoye en su lucha contra el hambre, la pobreza y el desempleo. Luego se dirigen al Congreso y a la Casa Presidencial, donde realizan una concentración en la que piden que se derogue el decreto que no permite la distribución de genéricos y que el Presidente cumpla con sus promesas electorales, entre otros puntos.

GLOSARIO DE SIGLAS

AMERG	Asociación de Maestros de Educación Rural de Guatemala
ANM	Asamblea Nacional Magisterial
CC	Corte de Constitucionalidad
CEH	Comisión para el Esclarecimiento Histórico
CONAPAMG	Coordinadora Nacional de Pobladores y Áreas Marginales de Guatemala

CUC	Comité de Unidad Campesina
DDE	Dirección Departamental de Educación
EEGSA	Empresa Eléctrica de Guatemala S.A.
FAO	Fondo de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
FRG	Frente Republicano Guatemalteco
GAN	Gran Alianza Nacional
IGSS	Instituto Guatemalteco de Seguridad Social
MINEDUC	Ministerio de Educación
PA	Plataforma Agraria
PAC	Patrullas de Autodefensa Civil
PARLACEN	Parlamento Centroamericano
PNC	Policía Nacional Civil
PPP	Plan Puebla Panamá
TLC	Tratado de Libre Comercio
USAC	Universidad de San Carlos

*Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
 Relevamiento y sistematización a cargo de Mariana C. Fassi.
 Fuentes: Servicio Informativo del Centro de Estudios Guatemala (CEG)
 y diario La Hora.
 Otras fuentes: Indymedia Chiapas, CLAJADEP, Rebelión y ALAI.*

[cronología enero-abril 2004]

ENERO

JUEVES 15 Finaliza en Tegucigalpa una reunión de los directores de policía y secretarios de seguridad centroamericanos y del Caribe con un acuerdo de lucha contra las pandillas en el cual se unifican criterios sobre la política criminal en cada país.

MIÉRCOLES 21 Un grupo de campesinos protestan frente a las instalaciones del Instituto Nacional Agrario (INA) para exigir a las autoridades de la Secretaría de Finanzas la asignación de 240 millones de lempiras que se encuentran pendientes para los diversos proyectos de agricultura de las empresas campesinas afiliadas al Consejo Coordinador de Organizaciones Campesinas de Honduras (COCOCH).

MARTES 27 Productores de maíz de distintas regiones del país se manifiestan en los bajos del Congreso Nacional arrojando 3 quintales de maíz en protesta por los precarios precios del producto y contra los tratados comerciales que posibilitarán que el maíz entre al país sin aranceles.

FEBRERO

LUNES 2 Tras 2 años de negociaciones, el gobierno de Honduras firma una carta de intención con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El acuerdo, que cubre los próximos 2 años, representaría para el país un alivio de su deuda externa por unos 960 millones de dólares.

JUEVES 5 Trabajadores, campesinos, amas de casa, obreros, maestros y desempleados, junto con el Bloque Popular y la Coordinadora Nacional de Resistencia Popular (CNRP), realizan multitudinarias manifestaciones en las ciudades de Tegucigalpa, Danlí, Choluteca, San Pedro Sula, Colón, Santa Rosa de Copán y Yoro, en las que cuestionan duramente la administración del presidente Ricardo Maduro y rechazan los aumentos a los carburantes y los altos precios de los productos de la canasta básica familiar.

MIÉRCOLES 11 Unos 6 mil estudiantes de diferentes carreras de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) protestan en la Ciudad Universitaria de

Tegucigalpa con pancartas y consignas por el desorden evidenciado en el nuevo sistema de matrículas.

MARZO

- MIÉRCOLES 3** En horas de la tarde comienza un paro por tiempo indefinido de los afiliados al Sindicato Nacional de Motoristas de Equipo Pesado de Honduras (SINAMEQUIPH) en protesta por el aumento del precio de los combustibles y los malos salarios que reciben. La paralización de labores es acompañada por un corte de la autopista que une San Pedro Sula con Puerto Cortés.
- JUEVES 4** Tras la firma de un documento que prevé una reunión para el próximo lunes con el presidente del Congreso Nacional para discutir la reducción en el precio de los combustibles y la revisión de tarifas y salarios, entre otras cosas, los transportistas afiliados al SINAMEQUIPH levantan el paro y el corte de la autopista iniciados el día anterior.
- MIÉRCOLES 10** Unas 3 mil personas de los departamentos de Santa Bárbara y Copán toman durante 12 hs la carretera internacional a occidente. Demandan, entre otras cosas, la instalación de teléfonos comunitarios, electrificación y proyectos de agua potable en varias comunidades, la construcción de centros de salud y médicos, la legalización de tierras y el cese de la explotación irracional de los bosques. La medida es levantada luego de una reunión con el viceministro del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), un representante de la compañía de telecomunicaciones Hondutel y otro del Ministerio de Seguridad, en la que se acuerda la realización de una reunión el 31 de marzo próximo para buscar los mecanismos de implementación de los proyectos.
- JUEVES 18** Más de 40 mil docentes a nivel nacional se movilizan hasta las diferentes direcciones departamentales de educación para exigir respeto a los salarios y la derogación de las leyes del Sistema Retributivo, la General del Presupuesto y la de Reordenamiento de las Finanzas del Estado que, aseguran, atentan contra el Estatuto del Docente. Además, un grupo de maestros del Instituto Técnico Comalhuacam del departamento de Comayagua encierra, durante la inauguración de dicho centro, al ministro de Educación y a diputados y autoridades departamentales, en protesta por las reformas de la ley del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (INPREMA) que sube la edad jubilatoria en 15 años y disminuye del 90% al 70% del salario el monto de la jubilación.
- SÁBADO 20** Más de mil personas del Bloque Popular protestan frente a la Embajada de EE.UU. en Tegucigalpa exigiendo el retiro de las tropas hondureñas de Irak.
- MIÉRCOLES 31** Las 400 enfermeras profesionales de San Pedro Sula adscritas al Colegio Profesional de Enfermeras de Honduras (CPEH) paralizan por tiempo indefi-

nido sus labores en los centros de salud de esa ciudad, salvo en las áreas críticas, para exigir al menos 250 nuevas contrataciones, respeto a su estatuto y un ajuste salarial de entre 4 mil y 7 mil lempiras, entre otras cuestiones.

ABRIL

JUEVES 1 Concluye en Tegucigalpa la 39ª reunión del Foro de Vicepresidentes Centroamericanos donde los representantes de Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Panamá y Honduras resuelven, entre otras cosas, continuar el combate al narcotráfico, el crimen organizado, el terrorismo y la delincuencia. También autorizan la firma de un convenio entre ese organismo regional y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para la ejecución del Proyecto Hidroeléctrico en Cuencas Compartidas Centroamericanas, plan de desarrollo económico y social en 56 municipios de las zonas fronterizas de América Central.

MARTES 13 Más de 5 mil pobladores de varias comunidades de los departamentos de Ocotepeque y Copán, apoyados por la diócesis de Copán, comienzan un corte de la carretera de occidente que comunica al país con Guatemala y El Salvador, a la altura de Santa Lucía, en protesta contra la concesión otorgada por el gobierno nacional a la empresa canadiense Maverick para explorar y explotar oro dentro de la reserva biológica de El Güisayote.

MIÉRCOLES 14 Los pobladores del municipio La Labor, departamento de Ocotepeque, levantan la toma de la carretera de occidente tras varias horas de intensas negociaciones con las autoridades municipales, la iglesia católica y la comisión gubernamental. Firman un acuerdo que establece la formación de una comisión que revisará la validez de la concesión para la explotación de oro.

Tras una extensa reunión con la comisión negociadora del gobierno en la que no consiguen más que una propuesta de aumento de 600 lempiras en lugar de las 4 mil solicitadas, cerca de 400 enfermeras profesionales deciden romper las negociaciones con el gobierno, reiniciar el paro suspendido el lunes anterior y abandonar en forma progresiva las áreas críticas de los hospitales.

SÁBADO 17 El ministro de Trabajo, Germán Leitzelar, anuncia que la próxima semana se aplicarán audiencias de descargo a las enfermeras que han abandonado sus puestos de trabajo durante el paro que llevan adelante.

DOMINGO 18 Las enfermeras profesionales acuerdan en asamblea general deponer el paro de labores que mantienen en los hospitales, adoptar variantes de protesta y renegociar con el gobierno.

LUNES 19 El presidente Ricardo Maduro anuncia en cadena nacional que ordenó el retiro en el menor tiempo posible de los 370 soldados hondureños que se encuentran en la base Tegucigalpa de Nayaf, Irak.

MIÉRCOLES 21 Unos 40 mil maestros de los 4 colegios magisteriales del país agrupados en la CNRP paralizan sus labores denunciando la politización de las plazas y pidiendo la destitución del ministro de Educación y del jefe de Recursos Humanos del Ministerio. Se pronuncian contra el Banco Mundial (BM) que impulsa la privatización de la educación pública, y piden al gobierno la creación de una comisión negociadora para buscar una salida al problema del magisterio y el retiro de la ley que equipara los salarios de la administración pública. En Tegucigalpa, los maestros manifiestan frente a la Casa Presidencial; en San Lorenzo toman la carretera Panamericana y la que une los puertos de La Ceiba y Tela. En San Pedro Sula, más de mil maestros realizan una marcha y cortan la primera calle de la ciudad y los puentes. En Choluteca, toman las instalaciones de la Empresa Nacional Portuaria, destacándose además la movilización en las ciudades de Yoro, Santa Rosa de Copán, Olanchito, El Paraíso, Yuscarán y Oropolí.

JUEVES 29 Más de 2 mil taxis cortan la calle frente a la Casa Presidencial en Tegucigalpa en protesta por un tercer aumento de los combustibles que pretende implementar el gobierno. Tras no obtener respuesta, los taxistas parten hacia el centro de la capital, donde cortan la calle a un costado del Congreso Nacional, exigiendo también que se habilite al quinto pasajero y se regule la asignación de números. El conflicto finaliza en horas de la tarde cuando una comisión de los taxistas es recibida por el presidente del Congreso Nacional, Porfirio Lobo Sosa, con quien firman un acta con el compromiso de buscar la aprobación de una ley para el uso del carburante alternativo y analizar el comportamiento de los precios internacionales del petróleo para buscar medidas orientadas a estabilizar los precios a nivel interno.

GLOSARIO DE SIGLAS

BCIE	Banco Centroamericano de Integración Económica
BM	Banco Mundial
CNRP	Coordinadora Nacional de Resistencia Popular
COCOCH	Consejo Coordinador de Organizaciones Campesinas de Honduras
CPEH	Colegio Profesional de Enfermeras de Honduras
FHIS	Fondo Hondureño de Inversión Social
FMI	Fondo Monetario Internacional
INA	Instituto Nacional Agrario
INPREMA	Instituto Nacional de Previsión del Magisterio
SINAMEQUIPH	Sindicato Nacional de Motoristas de Equipo Pesado de Honduras
UNAH	Universidad Nacional Autónoma de Honduras

*Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Martín Fernández.
Fuentes: diarios La Prensa, La Tribuna y Tiempo.*

[cronología enero-abril 2004]

E N E R O

JUEVES 1 Las autoridades de los pueblos tzotziles de los Altos de Chiapas se reúnen en el caracol Resistencia y Rebeldía por la Humanidad, ubicado en Oventik, y celebran encuentros en La Garrucha, La Realidad, Roberto Barrios y Morelia desde el 30 de diciembre para conmemorar junto a miembros de la sociedad civil los 10 años del levantamiento armado y los 20 de la creación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Los rebeldes sostienen la necesidad de decir siempre la verdad y respetar al débil, lo vivo y lo ajeno.

JUEVES 8 Cientos de agremiados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOC) inician una huelga y ocupaciones de dependencias del despacho en las urbes de Mérida, Zacatecas, Chetumal, Puebla y Ciudad Victoria exigiendo que no sea aplicado un plan de despidos que afecta a cerca de 1.500 empleados.

VIERNES 9 La huelga de los empleados de la SEDESOC es depuesta luego de acordar las autoridades secretariales y la dirigencia sindical que quienes rechacen el plan de retiro voluntario mantendrán sus puestos.

DOMINGO 11 Cerca de 2 mil integrantes del Partido del Trabajo (PT) y de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), junto a la Banda del Ritual del Caos, la Caravana Carlo Giuliani, el grupo Nuevo Mundo y otros colectivos anarquistas y de jóvenes, marchan en la ciudad de Monterrey y levantan consignas contra la incorporación del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) a la declaración de la Cumbre Extraordinaria de las Américas.

Colonos de Tlalnepantla, Morelos, que pertenecen a la Comisión de Pueblos y Barrios declaran a la entidad como municipio y territorio autónomo. Los ocupantes de la alcaldía designan a un consejo popular.

LUNES 12 Los presidentes de los países miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) acuden a la ciudad neoleonesa de Monterrey para dar lugar a la Cumbre Extraordinaria de las Américas. Distintas organizaciones sociales convocadas por El Barzón participan del contraforo Otro Mundo es

Posible, desde el cual emiten una declaración en la que piden al gobierno estadounidense la reducción de los subsidios a la producción agropecuaria y se pronuncian contra el ALCA, entre otros temas. Los partícipes del encuentro altermundista –entre quienes se encuentran militantes del Partido Comunista, activistas de ONGs, jóvenes anarquistas, punks, darketos, simpatizantes del zapatismo y otros de distintos grupos de izquierda– marchan en la ciudad e ingresan por momentos al predio de sesiones, de donde son expulsados.

MARTES 13 Los mandatarios presentes en la Cumbre Extraordinaria de las Américas concluyen sus sesiones con la firma de la Declaración de Nuevo León, que cuenta con el aval de la totalidad de los partícipes y con una disgresión del gobierno venezolano respecto de la exhortación a que se conforme el ALCA. Un grupo de 200 anarquistas y jóvenes vestidos de negro, con pasamontañas y disfraces realiza una performance fuera del perímetro de acceso cerrado en el que critican los ataques en Irak del gobierno de Bush y la complicidad del presidente mexicano.

MIÉRCOLES 14 Un millar de efectivos de las policías municipal, estatal y ministerial irrumpen en el municipio morelense de Tlalnepantla donde tras enfrentarse con los partícipes del movimiento autonomista ocupa su municipalidad y destituye a las autoridades recientes. El operativo finaliza con un muerto, 12 detenidos y un número indefinido de heridos. Luego de la intervención, unas 80 personas del lugar y de regiones vecinas ingresan al municipio donde realizan una protesta exigiendo el retiro de la policía, la desaparición de los poderes locales, el reestablecimiento del concejo popular autónomo y el enjuiciamiento político del gobernador.

JUEVES 15 Cientos de pobladores de Tlalnepantla realizan una caravana en el municipio en la que inhuman el cuerpo del manifestante asesinado durante el operativo policial.

VIERNES 16 El cabildo de Tlalnepantla electo mediante sufragio inicia sus operaciones en el municipio que permanece bajo vigilancia policial, mientras que centenares de partícipes del movimiento autonomista realizan una marcha hacia el zócalo estatal en Cuernavaca. Centenares de residentes del municipio intervenido huyen hacia poblaciones colindantes o se refugian en sus alrededores, donde son perseguidos mediante operativos policiales.

LUNES 19 Cuatro integrantes de la Comisión de Barrios y Pueblos del Consejo Autónomo otorgan una conferencia de prensa en el Distrito Federal (DF) en la que se declaran en el exilio, denuncian que desde el operativo huyeron dos tercios de la población de la localidad y que la policía amenaza con arrestarlos a su regreso. Demandan también la restitución del estado de derecho, la liberación de una veintena de detenidos y el retiro de las fuerzas represivas del municipio.

- JUEVES 22** Dos mil personas junto a la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), el Frente Popular Francisco Villa (FPFV), el Consejo General de Huelga (CGH) y campesinos de San Salvador Atenco marchan hacia la sede central de la Secretaría de Gobernación (SG) en solidaridad con los desplazados de Tlalnepantla.
- VIERNES 23** El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas emite un comunicado de prensa en el que afirma que el jueves pasado fueron incendiadas 23 viviendas de la comunidad chiapaneca Nuevo San Rafael, ubicada en la reserva ecológica de Montes Azules, luego de que decenas de integrantes de la Secretaría de Marina, policías, empleados de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y reporteros de TV Azteca ingresaran al lugar.
- SÁBADO 24** Diecinueve de los 20 detenidos de Tlalnepantla son puestos en libertad para instalarse junto con medio millar que se ha mudado a la localidad de Tlayacapan.
- JUEVES 29** Medio millar de militantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), provenientes en su mayor parte de Oaxaca y Michoacán, llevan a cabo una caravana de protesta en el DF que atraviesa la sede de la SG, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el penthouse que aloja a Elba Esther Gordillo, el Senado de la República y las oficinas en la capital del gobierno del estado de Guerrero, donde cuestionan la represión que se ejerce sobre los docentes de la jurisdicción y el congreso que pretende realizar el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).
- SÁBADO 31** Alrededor de 400 militantes de la CNTE se movilizan hacia el edificio nacional del PRI donde realizan un acto en el cual recuerdan a cerca de 150 disidentes asesinados.

FEBRERO

- MARTES 3** El consejo nacional del SNTE da a conocer la decisión de aplazar el Congreso de Reforma Estatutaria, con la promesa de llevarlo a cabo antes de marzo. La comisión permanente de la CNTE presente en el DF resuelve declararse en estado de alerta máxima y acudir al lugar en que el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del sindicato inicie el congreso.
- MIÉRCOLES 4** La comisión de legisladores destinada al conflicto de Tlalnepantla presenta un informe ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión en el cual sostiene que el motivo principal del enfrentamiento político es el control y la venta de nopal cultivado en 600 hectáreas, que el gobierno de Morelos desestimó al grupo autonomista, que reprimió con desmesura y que es necesario que se invite a las autoridades estatales a favorecer el diálogo entre las partes, fomentar la gobernabilidad y asegurar el bienestar de los perseguidos y los sospechados de ser sujetos a órdenes de aprehensión.

JUEVES 5 Alrededor de 4 mil militantes de 60 organizaciones sociales marchan en la ciudad de Puebla hacia la sede del Comité de Negociaciones Comerciales en el que se realizan tratativas para aprobar el ALCA, levantando consignas contra la liberalización comercial por suponer que responde a los intereses de EE.UU. y de las empresas transnacionales. La Alianza Social Continental, la *American Federation of Labour and Congress of Industrial Organizations* (AFL-CIO), la UNT, el Sindicato Nacional de Telefonistas de la República Mexicana (SNTRM), el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y la Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio, entre otras, participan de la demostración.

SÁBADO 14 El Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia General (CCRI-CG) del EZLN emite un comunicado en memoria de sus compañeros caídos en lucha, el cual relata que el 2 de enero del año en curso insurgentes, oficiales, comandantes y comandantas se presentaron frente a algunas de sus tumbas y pueblos de origen y que el 14 de febrero es el día elegido para recordar el dolor y las pérdidas, además de incluir un listado de los 46 indígenas muertos y desaparecidos en los combates de Ocosingo, Las Margaritas, Altamirano, Rancho Nuevo y Morelia. El documento saluda además la memoria de los indígenas zapatistas caídos por la causa de los pueblos indios, la democracia, la libertad y la justicia.

El concejo popular autónomo y la Comisión de Barrios y Pueblos de Tlalnepantla realizan el Encuentro de Pueblos Indígenas en Defensa de la Autonomía y Libre Determinación en el cerro morelense del Calvario de San Lorenzo Tlacoyucan, al que acuden miembros de comunidades indígenas de Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Hidalgo, Querétaro, el estado de México y el DF.

LUNES 16 Un contingente multitudinario de cerca de 10 mil personas marcha hacia el zócalo capitalino para realizar un acto en el que dirigentes del SME y de la CNTE ofrecen discursos contrarios a los proyectos oficialistas de privatización de la seguridad social, las industrias eléctrica y petrolera y el sector educativo, además de anhelar la democratización del SNTE. La concentración es nutrida por la compañía del CGH, el PPFV, la Alianza de Tranviarios de México y la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG).

MIÉRCOLES 25 Campesinos de la Unión Nacional de Organizaciones Campesinas Autónomas (UNORCA) se movilizan en Guerrero, Michoacán, Querétaro, Quintana Roo, Veracruz, Sonora, Guanajuato, Tlaxcala y el estado de México frente a oficinas seccionales de la SEDESOL exigiendo su inclusión en los programas de vivienda rural y atención a adultos mayores de los que fueron obviados por no haber firmado el Acuerdo Nacional para el Campo.

MARZO

LUNES 8 En el Día Internacional de la Mujer, el Comité Independiente de Chihuahua, la Federación de Familiares de Desaparecidos, el Colectivo de la Casa de la Cultura y el Grupo 656 realizan protestas y plantones en Ciudad Juárez exigiendo justicia para las más de 370 asesinadas y las más de 200 desaparecidas en la región.

MIÉRCOLES 10 Alrededor de 2 mil desplazados de Tlalnepantla regresan al municipio desde Tlayacapan y la delegación Milpa Alta del DF luego de viajar en caravana junto a organizaciones de derechos humanos. Los retornantes, el concejo popular autónomo y la comisión de barrios y pueblos hacen un llamado a la comunidad para que acontezca una integración pacífica y otro al gobernador para que acceda a la instalación de una mesa de diálogo. El alcalde priista califica al encuentro como un show, mientras que el mandatario estatal niega el pedido.

La Secretaría de Economía (SE) da a conocer la firma con el gobierno japonés de un Acuerdo de Asociación Económica (AAE) que incluye disposiciones en materia agrícola e industrial.

Miles de médicos, enfermeras, trabajadores administrativos, camilleros y personal de ambulancias de clínicas y hospitales de la zona metropolitana de la ciudad de México y algunos estados del país marchan en el DF desde la sede del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) hacia el Paseo de la Reforma, donde ingresan a las oficinas centrales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), para protestar contra el Comité Ejecutivo Nacional del sindicato por avalar el Régimen de Jubilaciones y Pensiones (RJP). El Frente Único y la Coordinadora de Jubilados y Pensionados del IMSS convocan a la medida y amenazan con un paro nacional.

En respuesta a la convocatoria a la Segunda Jornada Nacional por la Soberanía, el Crecimiento Económico, el Empleo y la Distribución Equitativa del Ingreso realizada por el Frente Sindical, Campesino, Social y Popular, cerca de 80 mil trabajadores de la UNT, campesinos de El Campo No Aguanta Más, El Barzón, el Consejo Agrario Permanente (CAP) e integrantes de la Promotora de Unidad Nacional contra el Neoliberalismo se manifiestan en el zócalo capitalino para protestar contra los proyectos de reforma del régimen de jubilaciones y pensiones, del sector salud y eléctrico y de la ley de regulación laboral.

DOMINGO 14 Alrededor de 100 mil personas acuden al zócalo capitalino bajo una convocatoria realizada por el jefe de Gobierno del DF, Andrés Manuel López Obrador, quien es acusado por el líder panista Diego Fernández de Cevallos de haber recibido aportes del empresario Carlos Ahumada Kurtz para la campaña en que fue electo. Miembros del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del DF (SUTGDF), del sindicato de bomberos, El Barzón, la Asamblea

de Barrios, el Movimiento Autónomo Zapatista, trabajadores del Instituto Nacional de la Vivienda y militantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD), entre otros, acuden a la cita.

MARTES 16 Los 3 mil delegados presentes en el V Congreso Nacional de Reforma Estatutaria del SNTE resuelven en Tonicaco, estado de México, la creación de la figura de presidente de su comité ejecutivo nacional –que será ocupada por Elba Esther Gordillo– y la del secretario general ejecutivo, lo que permite la continuación de Rafael Ochoa al mando del sindicato por los próximos 4 años. Cientos de militantes de la disidente CNTE marchan en el vecino poblado de Ixtapan de la Sal para repudiar las resoluciones.

VIERNES 19 Alrededor de 600 representantes de 156 organizaciones sociales y ONGs acuden al municipio chiapaneco de Huitiupan –provenientes de 21 municipios del estado, de otros 10 de la república y de 8 países, entre los que se destacan EE.UU. y Guatemala– para participar del III Encuentro Chiapaneco contra el Neoliberalismo. Debaten en torno a biodiversidad, militarización y paramilitarización, división comunitaria, derechos de la mujer, comercio justo y soberanía alimentaria, resistencia a las represas, situación legal de la tierra, educación, comunicación y servicios públicos.

SÁBADO 20 A un año de la intervención militar, un contingente de cerca de 2 mil personas marcha hasta la embajada estadounidense en el DF y realizan un acto en el que reclaman la desocupación de Irak. De la protesta participan miembros de la Iniciativa No en Nuestro Nombre, la Promotora de Unidad Nacional contra el Neoliberalismo, intelectuales y organizaciones de lesbianas y de jóvenes anarcopunks, entre otros. La medida responde a la iniciativa convocada desde el IV Foro Social Mundial realizado en Mumbai en enero último.

DOMINGO 21 Alrededor de 3 mil indígenas, campesinos y miembros de la sociedad civil participan en la marcha de cierre del III Encuentro Chiapaneco contra el Neoliberalismo realizada en la localidad de Simojovel de Allende, en la cual corean consignas contra el Plan Puebla-Panamá (PPP) y la Organización Mundial de Comercio (OMC) y hacen pública la declaración final del encuentro en la que exigen el fin de la agresión sexual y las violaciones que conlleva la guerra contrainsurgente, y el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés. El documento establece también que los gobiernos federal y estatal se encuentran sordos ante los reclamos populares, ciegos ante sus necesidades y mudos ante los intereses de los ricos y las empresas neoliberales.

A B R I L

SÁBADO 10 Alrededor de 4 mil tzotziles y tzeltales zapatistas de los Altos y el centro de Chiapas acuden a Jech'vo para recordar la muerte de Emiliano Zapata y traer

agua a sus compañeros de dicha comunidad y de Elambó Alto y Elambó Bajo, quienes sufren desde diciembre la falta de provisión debida a una decisión del alcalde perredista de Zinacantán. La caravana zapatista que regresa a sus poblados es interrumpida por un retén instalado por militantes del PRD de la comunidad de Pasté, encabezados por su agente municipal y acompañados por efectivos de la policía local, quienes agreden a los zapatistas desencadenando un enfrentamiento que concluye con varios heridos de bala, piedrazos y cortes con machete. Tras el ataque, militantes perredistas de Jech'vo y Pasté inician una persecución en la primera localidad durante la cual destruyen viviendas y sitian a varias familias en una casa.

DOMINGO 11 El gobierno de Chiapas anuncia que desplegó un operativo de prevención que incluye a medio millar de efectivos policiales en las comunidades de Nachig, Pasté y Jech'vo.

MIÉRCOLES 14 Bajo una convocatoria del SNTSS cerca de 120 mil trabajadores se movilizan junto a la UNT y el Frente Sindical Mexicano (FSM) desde el Ángel de la Independencia hacia el zócalo capitalino donde realizan un mitin para repudiar la iniciativa foxista en materia de jubilaciones y pensiones –que contempla un incremento en los aportes laborales del 3% al 15%–, convocar a la creación de frentes de resistencia en los estados, exigir una auditoría del IMSS y pedir por la destitución de su director. El Barzón y la Central Campesina Cardenista (CCC) acompañan la protesta. La medidas de lucha se repiten en las ciudades de Colima, Monterrey, Jalapa, Querétaro, Pachuca y el puerto de Veracruz.

JUEVES 15 El delegado mexicano ante la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se expide en favor de la aprobada propuesta hondureña que en respuesta a los intereses de EE.UU. contempla una condena al gobierno de Cuba concerniente a la situación de los derechos humanos en la isla tal como la conciben los países dominantes.

La Junta de Buen Gobierno (JBG) Corazón Céntrico de los Zapatistas delante del Mundo emite un comunicado que sostiene que la guerra planeada por los malos gobiernos junto a sus caciques locales continúa creciendo. Afirma que contiene un listado de 35 indígenas atacados durante la marcha y expone que 109 familias de las 3 comunidades y de otras vecinas hubieron de desplazarse antes de que grupos perredistas saquearan y destruyeran varias casas en Jech'vo, además de derramar 45 mil litros de agua almacenados. Las autoridades rebeldes acusan por los ataques al presidente municipal de Zinacantán, al primer regidor constitucional, al comandante de la policía municipal y al dirigente local del PRD. El comunicado concluye con la amenaza de elevar la investigación sobre los hechos al EZLN en caso de no haber justicia. Las autoridades oficiales de Zinacantán reconectan el servicio de agua potable a las comunidades zapatistas de Elambó Alto, Bajo y Jech'vo.

SÁBADO 24 Cientos de representantes de grupos regionales de pescadores del Pacífico, productores de maíz, hortalizas, café, cacao, aguacate, citricultores, ganaderos, porcicultores y apicultores –algunos de los cuales componen el ahora fusionado El Barzón– se reúnen en el DF para dar fundación a la Alianza Nacional de Productores Agropecuarios y Pesqueros (ANPAP), que será presidida por Adolfo Ramírez Cuellar, diputado federal del PRD. El planteamiento central de la alianza realza la necesidad de avanzar en la construcción de un sistema de comercio justo y en la renegociación del capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), reducir los precios de los costos de producción agropecuaria y señalar que ha sido incumplido el Acuerdo Nacional para el Campo signado junto al gobierno.

DOMINGO 25 Las familias zapatistas desplazadas el 10 de abril retornan a sus comunidades en Elambó Alto, Elambó Bajo, Jech'vo y Apaz siendo acompañadas por dos centenares de bases de apoyo de otros municipios autónomos y por un centenar de miembros de la sociedad civil. La caravana de retorno es custodiada por un dispositivo de seguridad compuesto de medio millar de policías locales, estatales y federales que filman y toman fotografías.

MARTES 27 El CAP convoca en el DF a un foro destinado a discutir el Acuerdo Nacional para el Campo, que cumple un año de su firma, en el cual sus 800 asistentes critican el rechazo oficial a modificar el capítulo agropecuario del TLCAN, los atrasos en la entrega de fondos y las políticas de ajuste estructural, modernización y apertura comercial indiscriminada.

MIÉRCOLES 28 La Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), la Unión Campesina Democrática (UCD) y la Coalición de Organizaciones Democráticas, Urbanas y Campesinas (CODUC) se manifiestan por separado frente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y la sede del poder ejecutivo, la SG y la SEDESOL, la Secretaría de Reforma Agraria (SRA) y la Central de Abastos. Las tres organizaciones acuden al DF para participar del finalizado foro del CAP.

El Campo No Aguanta Más emite una declaración en la que lamenta el incumplimiento del Acuerdo Nacional para el Campo además de convocar a la conformación de una coalición amplia de carácter regional e internacional. Algunos campesinos del frente, provenientes de la sierra y el valle del Mezquital, ocupan dependencias capitalinas de la SAGARPA.

GLOSARIO DE SIGLAS

AAE Acuerdo de Asociación Económica
ALCA Área de Libre Comercio de las Américas

ANPAP	Alianza Nacional de Productores Agropecuarios y Pesqueros
CAP	Consejo Agrario Permanente
CCC	Central Campesina Cardenista
CCRI-CG	Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia General
CGH	Consejo General de Huelga
CEN	Comité Ejecutivo Nacional
CETEG	Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero
CIOAC	Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos
CNTE	Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación
CODUC	Coalición de Organizaciones Democráticas, Urbanas y Campesinas
CUT	Central Unitaria de Trabajadores
DF	Distrito Federal
EZLN	Ejército Zapatista de Liberación Nacional
FPFV	Frente Popular Francisco Villa
FSM	Frente Sindical Mexicano
IMSS	Instituto Mexicano del Seguro Social
JBG	Junta de Buen Gobierno
OEA	Organización de los Estados Americanos
OMC	Organización Mundial de Comercio
ONU	Organización de las Naciones Unidas
PPP	Plan Puebla-Panamá
PRD	Partido de la Revolución Democrática
PRI	Partido Revolucionario Institucional
PROFEPA	Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
PT	Partido del Trabajo
RJP	Régimen de Jubilaciones y Pensiones
SAGARPA	Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
SE	Secretaría de Economía
SEDESO	Secretaría de Desarrollo Social
SG	Secretaría de Gobernación
SME	Sindicato Mexicano de Electricistas
SNTE	Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación
SNTRM	Sindicato Nacional de Telefonistas de la República Mexicana
SNTSS	Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social
SRA	Secretaría de Reforma Agraria
SUTGDF	Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del DF
TLCAN	Tratado de Libre Comercio de América del Norte
UCD	Unión Campesina Democrática
UNORCA	Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas
UNT	Unión Nacional de Trabajadores

Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).

Relevamiento y sistematización a cargo de Juan Chaves.

Fuentes: diarios La Jornada y El Universal.

Otras fuentes: Organización de los Estados Americanos e Indymedia Chiapas.

[cronología enero-abril 2004]

ENERO

- LUNES 5** Los trabajadores del Consejo Supremo Electoral (CSE), agremiados a la Federación de Trabajadores del CSE (FETRACSE), inician un paro contra los despidos en la institución y para exigir a las autoridades el cumplimiento de los acuerdos suscritos a fines del año anterior que establecen el pago de horas extra, subsidios alimenticios y médicos y la liquidación a los despedidos de septiembre, entre otras cuestiones.
- VIERNES 9** Se realiza la elección de la nueva junta directiva de la Asamblea Nacional (AN) de la que el arnoldismo asume el control con los votos de los diputados liberales y de sus aliados. El Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) denuncia que la nueva junta directiva es impuesta por la embajada de Estados Unidos.
- LUNES 12** El presidente del CSE ratifica los acuerdos suscritos entre los sindicatos y el Ministerio de Trabajo (MITRAB) comprometiéndose a no despedir a ningún trabajador y a cancelar las prestaciones sociales de los empleados a cambio de que estos levanten la huelga.
- MARTES 20** Maestros agremiados a la Asociación Nacional de Educadores de Nicaragua (ANDEN) toman el estadio municipal de Ciudad Sandino, en Managua, para exigir al gobierno aumento salarial y contra la privatización de la educación.
- VIERNES 23** El Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) conceden a Nicaragua la condonación del 80% de su deuda externa por considerar que se cumplieron con las medidas necesarias para alcanzar esa meta en el marco de la Iniciativa para Países Pobres Altamente Endeudados (HIPC, por sus siglas en inglés). Al mismo tiempo, le demandan a Bolaños que continúe con las modificaciones estructurales para conseguir estabilidad.

FEBRERO

- DOMINGO 8** Tras 9 días de marcha desde Chinandega, más de 5 mil ex trabajadores de bananeras afectados por el Nemaqón llegan al municipio de Mateare, en

Managua, para exigir al gobierno que los respalde en el juicio que llevan adelante contra compañías norteamericanas a las que acusan de haberles afectado su salud por la utilización de ese agroquímico.

LUNES 9 El ejército de Nicaragua decide suspender el viaje de 115 soldados a Irak.

MARTES 10 En Managua, más de 5 mil ex trabajadores de plantaciones bananeras afectados por el Nemaqón marchan y se concentran frente a la embajada de EE.UU., para exigir al gobierno que los apoye en sus demandas. Los manifestantes se instalan frente a la AN.

Estudiantes de la Universidad Nacional Agraria (UNA) en Juigalpa inician un paro por tiempo indeterminado en rechazo a la destitución de la directora por parte del Consejo Nacional Universitario (CNU).

MARTES 24 Más de 500 personas de Chinandega, autodenominadas “los verdaderos afectados por el Nemaqón”, realizan una protesta frente a la AN para denunciar que los campesinos que se encuentran protestando allí desde hace algunos días son impostores. Más tarde, se reúnen con diputados sandinistas que les prometen gestionar presupuesto para atención social y los llaman a unirse con el resto de los campesinos para impulsar en común los juicios contra las compañías transnacionales.

VIERNES 27 Estudiantes, artistas y personas de otros sectores de la población se acercan a los alrededores de la AN para solidarizarse con los afectados por el Nemaqón.

MARZO

MARTES 2 La jueza Tercero Civil del distrito de Managua ordena a las compañías transnacionales, demandadas por el uso del pesticida Nemaqón en las bananeras de occidente del país, pagar 82,9 millones de dólares a favor de los productores.

JUEVES 4 Estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN) de León y la Asociación de Consumidores de León (ADECONLE) marchan frente a las oficinas de Unión Fenosa y la Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones (ENTEL), y toman las instalaciones de la alcaldía impidiendo la salida de varios concejales. Rechazan el incremento del pasaje del transporte público aprobado por el concejo semanas atrás y el alza en las tarifas de luz y teléfono.

VIERNES 5 Luego de intensas negociaciones entre autoridades municipales y transportistas, en las que están presentes estudiantes de la UNAN-León y miembros de la ADECONLE, el concejo municipal aprueba una resolución que contempla una baja de 25 centavos en el precio del transporte.

MIÉRCOLES 10 En Matagalpa, decenas de estudiantes realizan una protesta durante una reunión de los alcaldes de ese departamento con el presidente Bolaños, para exigir el 6% de presupuesto para las universidades. La policía les impide avanzar cuando estos intentan entregarle un petitorio al primer mandatario.

JUEVES 11 El gobierno de Italia condona 91 millones de dólares de la deuda externa que Nicaragua tiene con ese país, en el marco de la HIPC.

Trabajadores de Correos de Nicaragua, con el apoyo del Sindicato Manuel Véldez, realizan un plantón frente a la sede de esa institución, en Managua, para denunciar un plan de persecución policial en su contra y en repudio a los despidos.

LUNES 15 Se emite la orden para que el ex presidente Arnoldo Alemán sea trasladado hacia la cárcel "La Modelo". El Partido Liberal Constitucionalista (PLC) realiza una reunión de urgencia en la hacienda "El Chile", propiedad del ex mandatario, para discutir las posibilidades de negociar con el FSLN y la Junta Directiva de la AN para evitar el traslado de Alemán.

Los docentes de Jinotega inician la jornada nacional de protesta "O se paga o se paga", convocada por la ANDEN, con la realización de un paro para exigir al gobierno que cumpla con el acordado aumento salarial de 240 córdobas.

MARTES 16 Estudiantes realizan una marcha para presionar a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que se pronuncie sobre el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Presupuesto de la República, con el objetivo de que se les entregue el 6% de presupuesto para las universidades.

La junta directiva de la AN reinicia sus actividades luego de no sesionar por más de 20 días, a causa de que el presidente y el vicepresidente de ese poder del estado decidieran introducir el decreto de amnistía para Alemán.

MIÉRCOLES 17 Unos 200 estudiantes de la UNAN de León bloquean las calles frente a la alcaldía municipal para exigir el cumplimiento de los acuerdos firmados recientemente con los transportistas, que contemplan una baja en la tarifa del transporte.

SÁBADO 20 Dirigentes de los campesinos afectados por el Nematógón levantan la medida de fuerza que estaban realizando luego de reunirse con el presidente Enrique Bolaños y acordar que no habrá más de 2 grupos demandantes, que el gobierno les dará asistencia legal en EE.UU., el nombramiento del Procurador de los Derechos Humanos como delegado ante la Convención Internacional de Derechos y la no promoción por parte del gobierno de modificaciones a la ley que protege a los afectados por el Nematógón, entre otras cuestiones.

LUNES 22 Maestros convocados por la ANDEN inician paros escalonados en varios colegios de Matagalpa, Jinotega, Carazo, Estelí y Chinandega, entre otros departamentos, para exigir al Ministerio de Educación que cumpla con el aumento salarial prometido de 255 córdobas.

MARTES 23 Los trabajadores del poder judicial, convocados por la Asociación de Jueces y Magistrados de Nicaragua y el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial, adelantan paros de labores y realizan una marcha hasta la AN en rechazo al dictamen de mayoría de la Ley de Carrera Judicial que contiene un artículo que obliga a realizar despidos en esa institución.

La AN ratifica un préstamo de 70 millones de dólares otorgados por la Asociación Internacional de Fomento (AIF), el FMI y el BM.

MIÉRCOLES 24 La Sala Constitucional de la CSJ admite un recurso de amparo introducido en diciembre pasado por jueces de todo el país, en contra de la Ley de Carrera Judicial (propuesta por los liberales), por lo que los jueces y trabajadores de ese poder levantan el paro y las protestas iniciadas en la semana.

JUEVES 25 Los jefes de estado de Guatemala, Honduras, México y Nicaragua, el vicepresidente de Panamá, representantes de los presidentes de Costa Rica y El Salvador y el primer ministro de Belice, reunidos en la capital nicaragüense, suscriben la "Declaración Managua" en la VI Cumbre de Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla, México, donde acuerdan instalar un consulado conjunto centroamericano en Veracruz, México.

Cientos de maestros de unos 50 centros educativos de Matagalpa, convocados por la ANDEN, se suman a la huelga del magisterio a nivel nacional para exigir un aumento salarial.

Más de 300 simpatizantes de Arnoldo Alemán ingresan a la AN cuando ésta pretendía sesionar y agreden a las juezas y a diputados sandinistas produciéndose fuertes disturbios. Al conocerse por la radio que las fuerzas de choque arnoldistas estaban golpeando a las juezas, decenas de universitarios se concentran en las afueras de la Cámara y la policía antidisturbios acordona el legislativo. La bancada sandinista denuncia que los sucesos violentos en la AN fueron producto de una confabulación entre Bolaños y el PLC, con el apoyo de la embajada de EEUU. Los magistrados de la CSJ, por su parte, ordenan no someter a plenario la discusión del dictamen de mayoría de la Ley de Carrera Judicial.

VIERNES 26 Los trabajadores del CSE, agremiados a la FETRACSE, inician una huelga y protestan frente a las instalaciones del poder electoral en Metrocentro y el Centro Cívico, para exigir la reincorporación de 63 empleados despedidos y el cumplimiento de los acuerdos suscritos en el convenio colectivo que contempla que no habrá despidos y se promoverá la estabilidad laboral de los empleados.

La Junta Directiva de la AN dispone no acatar la orden de la CSJ de no abrir la discusión de la Ley de Carrera Judicial.

Los maestros de todo el país, convocados por la ANDEN, refuerzan el paro que vienen llevando adelante para exigir un aumento salarial de 255 córdobas. En León, cientos de docentes realizan plantones en el empalme de la carretera a Managua y en los de Telica, Malpaisillo y El Jicaral. En Masaya, 300 maestros se concentran frente a la delegación del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD). En Rivas, Jinotega, Chontales, Carazo y el resto de los departamentos también se realizan protestas. En Matagalpa y San Ramón, profesores realizan plantones y se concentran frente a la delegación departamental del MECD, mientras que los docentes de Managua, El Crucero, Tipitapa y Ciudad Sandino se reúnen frente a la sede central de esa institución y en las afueras del Ministerio de Hacienda y la AN.

Los ministros de Economía de Centroamérica concluyen la primera ronda de negociaciones en Washington para discutir el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y EE.UU. (CAFTA). Definen una estrategia que prevé lograr que los presidentes firmen el acuerdo a más tardar en el mes de junio próximo.

MARTES 30 Pobladores de la capital y otros departamentos del país como Chinandega y Jinotepe, entre otros, junto a estudiantes de la UNAN, convocados por la Red Nacional en Defensa de los Consumidores (RNDC), se concentran frente a las oficinas centrales de la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (ENACAL) para denunciar la posible privatización del agua.

MIÉRCOLES 31 Luego de infructuosas negociaciones con el MITRAB, los trabajadores del CSE agudizan la huelga general que iniciaran el pasado viernes.

ABRIL

JUEVES 1 El MITRAB resuelve reintegrar a los trabajadores despedidos del CSE. El secretario general del CSE sostiene que declarará ilegal la huelga.

El presidente Bolaños comienza a pagar a los maestros de Esteli el incremento salarial correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo y abril.

SÁBADO 3 Pese a los reiterados intentos por parte del arnoldismo de trasladar a Alemán a su hacienda El Chile, la jueza Primero del Distrito del Crimen de Managua ordena que éste continúe en la cárcel Modelo de Tipitapa y en caso de que su estado de salud se complique que sea trasladado con custodia al Hospital Militar Alejandro Dávila Bolaños.

- MARTES 13** La directiva del legislativo anuncia que la AN sesionará 2 semanas continuas a partir del martes próximo, y dejará a un lado el proyecto de Ley de Carrera Judicial, ya que no hay consenso entre las bancadas.
- MIÉRCOLES 14** Cientos de obreros agrícolas instalan cerca de 13 plantones sobre la carretera San Ramón-Rancho Grande para exigir al gobierno el cumplimiento de los acuerdos de Las Tunas suscritos el 13 de septiembre de 2002 y ratificados en agosto del año pasado, que contemplan la titulación de tierras a su favor y la creación de más de 2.500 parcelas familiares.
- LUNES 19** Más de 7 mil trabajadores agrícolas y sus familias de los municipios de Matagalpa, San Ramón, La Dalia y Rancho Grande inician una marcha hacia Managua para exigir al gobierno que cumpla con los acuerdos de Las Tunas.
- Un tribunal de justicia de Los Ángeles, California, EE.UU., da lugar por primera vez a la solicitud de entablar en este país la primera demanda de los trabajadores de las fincas bananeras contra 3 empresas transnacionales causantes de las múltiples enfermedades que padecen.
- MARTES 20** El gobierno de Nicaragua suscribe un acuerdo con el BM con el objetivo de “consolidar el proceso de modernización del sector público del país” que contempla un préstamo de 23 millones de dólares.
- MIÉRCOLES 21** Dirigentes de los campesinos que exigen el cumplimiento de los acuerdos de Las Tunas convienen con el gobierno la entrega de 3 manzanas de tierras a 2.500 trabajadores del campo, el comienzo de las inspecciones de las primeras 4 propiedades en las que se ubicará a los campesinos con mayor necesidad, y la conformación de una comisión con representantes de los obreros agrícolas y las instituciones encargadas de la tierra, entre otras cuestiones.
- JUEVES 22** La AN aprueba una resolución que faculta al jefe de estado a dar el primer paso para la reducción gradual de los misiles SAM-7 en poder del ejército de Nicaragua. El sandinismo respalda dicha resolución con la condición de que sea “en el marco de un balance razonable de fuerzas y equilibrio militar en Centroamérica”.
- El canciller de Nicaragua sostiene que no enviará tropas a Irak ya que mandar militares pondría a Nicaragua como “blanco de Osama bin Laden”.
- VIERNES 23** La CSJ decreta la inconstitucionalidad de la Ley de Presupuesto General de la República 2004, por lo que la AN deberá entregar a las universidades subsidiadas por el estado el 6% de dicho presupuesto.
- MIÉRCOLES 28** Los jefes del ejército y de las fuerzas armadas de Centroamérica se reúnen en Managua, en el marco de la apertura de la XIII reunión ordinaria del Consejo

Superior de la Conferencia de las Fuerzas Armadas de Centroamérica (CFAC), para analizar el combate contra el narcotráfico, el terrorismo y el tráfico de armas, entre otros temas, y expresan su respaldo a la propuesta de Enrique Bolaños de alcanzar un balance razonable de fuerzas.

GLOSARIO DE SIGLAS

ADECONLE	Asociación de Consumidores de León
AIF	Asociación Internacional de Fomento
AN	Asamblea Nacional
ANDEN	Asociación Nacional de Educadores de Nicaragua
BM	Banco Mundial
CAFTA	Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos
CFAC	Conferencia de las Fuerzas Armadas de Centroamérica
CNU	Consejo Nacional Universitario
CSE	Consejo Supremo Electoral
CSJ	Corte Suprema de Justicia
ENACAL	Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados
ENTEL	Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones
FETRACSE	Federación de Trabajadores del CSE
FMI	Fondo Monetario Internacional
FSLN	Frente Sandinista de Liberación Nacional
HIPC	Iniciativa para Países Pobres Altamente Endeudados
MECD	Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
MITRAB	Ministerio de Trabajo
PLC	Partido Liberal Constitucionalista
RNDC	Red Nacional en Defensa de los Consumidores
UNA	Universidad Nacional Agraria
UNAN	Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua

*Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de María Chaves.
Fuentes: diarios La Prensa y El Nuevo Diario.*

[cronología enero-abril 2004]

ENERO

- JUEVES 1** Entra en vigencia el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Panamá y Taiwán. Es el primero que se firma entre países de América y Asia.
- VIERNES 9** El Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares (SUNTRACS) inicia un paro en la construcción del ensanche de la Vía Interamericana, en Bugaba-Paso Canoas, en reclamo de aumento salarial.
- VIERNES 16** Los obreros del SUNTRACS, en paro desde hace 7 días en el ensanche de la carretera Interamericana, levantan la medida de fuerza luego de llegar a un acuerdo con los directivos de la empresa contratista.
- SÁBADO 17** Unos 50 ambientalistas de la Provincia de Chiriquí realizan una protesta con un féretro que simula la muerte del quetzal, pájaro típico del Parque Nacional Volcán Barú, ante la posible construcción de la carretera Boquete-Cerro Punta.

Unos 600 transportistas panameños y centroamericanos realizan un paro y cierran las dos vías de la frontera Costa Rica-Panamá, en rechazo al decreto emitido por el Presidente de Costa Rica, Abel Pacheco, que les impide el uso de la vía Costanera.

- LUNES 19** Los 600 transportistas centroamericanos en paro desde hace 2 días levantan la medida de fuerza luego de que el mandatario costarricense modificara el decreto, por lo que pueden volver a utilizar la vía Costanera.

FEBRERO

- JUEVES 5** Un barco de bandera británica con desechos nucleares cruza el canal de Panamá rumbo a Japón pese al reclamo de grupos de ecologistas y de algunos legisladores que plantean la necesidad de abrir un debate en la Asamblea Legislativa sobre los barcos con cargas radioactivas.

MARTES 10 La Policía Nacional de Panamá recibe del Consejo Económico Nacional (CENA) más de 1 millón de dólares para la adquisición de nuevos equipos antimotines, entre lo que se cuenta la adquisición de material químico.

JUEVES 12 Comienza en Panamá la Tercera Reunión Extraordinaria del Consejo de Ministros de la Asociación de Estados del Caribe (AEC) donde participan ministros de más de 30 naciones

SÁBADO 14 La presidenta Mireya Moscoso anuncia su decisión de continuar con la carretera Boquete-Cerro Punta, que atravesaría el Parque Nacional Volcán Barú, pese a que la consultora encargada del estudio de impacto ambiental la califica como de alto riesgo ecológico.

MARTES 17 Un grupo de obreros y estudiantes de Alternativa Patriótica Popular (APP), apoyados por el SUNTRACS y por Defensa a la Caja Social, entre otros sectores, inician una jornada para promover el voto nulo o en blanco para las elecciones presidenciales del 2 de mayo próximo.

Panamá y Singapur inician negociaciones oficiales para la firma de un TLC entre ambos países.

MARZO

MARTES 2 Residentes de la Comarca Kuna de Madugandí reclaman mediante una carta del Cacique General Kuna y de los Dirigentes Comarcales por su exclusión de las elecciones presidenciales de mayo próximo, que denuncian como un acto discriminatorio.

MIÉRCOLES 3 La cancillería panameña presenta oficialmente ante el cuerpo diplomático a la Ciudad de Panamá como sede para el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA).

LUNES 8 Un grupo de mujeres del corregimiento de Guadalupe, en La Chorrera, celebra el Día Internacional de la Mujer realizando una marcha hasta la agencia regional del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IAAN) de Panamá Oeste, en protesta por la falta de agua corriente en su localidad desde hace más de 30 días.

MARTES 9 Más de 3 mil trabajadores bananeros de Puerto Amuerlles inician un paro de actividades en 12 fincas de la Provincia de Chiriquí, en protesta ya que el depuesto secretario general del Sindicato Industrial de Trabajadores de Chiriquí Land Company (SITRACHILCO), José Morris Quintero, no entregó los activos del gremio. Exigen la destitución de la junta directiva del Sindicato.

- MIÉRCOLES 10** En la Caja de Seguro Social (CSS) se reanudan los conflictos tras el despido de 79 empleados, luego de las extensas negociaciones realizadas el año anterior que concluyeron con el acuerdo de fines de septiembre. La Asociación Nacional de Funcionarios Administrativos de la Caja de Seguro Social (ANFACSS) denuncia al director general por violar los acuerdos estipulados el pasado año.
- JUEVES 11** La presidenta Mireya Moscoso declara ilegal la huelga que unos 3 mil trabajadores del sector bananero sostienen desde hace 2 días en Puerto Armuelles, en la Provincia de Chiriquí.
- SÁBADO 13** El gobierno interviene la Cooperativa de Servicios Múltiples de Puerto Armuelles (COOSEMUPAR), luego de la firma de una declaración conjunta, producto de las negociaciones sostenidas entre la junta gubernamental y los trabajadores bananeros en el día anterior. El paro se ha extendido al comercio y al transporte en el sector occidental de Chiriquí.
- LUNES 15** Más de 3 mil trabajadores en huelga desde hace casi una semana reanudan las labores en las 12 fincas bananeras de Puerto Armuelles, en Chiriquí, luego del acuerdo firmado el pasado sábado.
- VIERNES 19** Luego de los atentados ocurridos 11 días antes en Madrid, el embajador panameño en Washington reafirma personalmente ante el presidente norteamericano George W. Bush el compromiso del gobierno panameño “en la guerra contra el terrorismo”.
- SÁBADO 20** Panamá firma una “cláusula antiterrorista” con la Unión Europea (UE) ya convalidada por más de 10 países de la región Andina y Centroamericana.
- El Tribunal Centroamericano del Agua (TCA) declara culpable moralmente al gobierno y a empresas de la región por permitir el paso de un barco británico con materiales radiactivos por el Canal de Panamá el pasado 5 de febrero.
- DOMINGO 21** Se realizan las elecciones extraordinarias en SITRACHILCO, con el aval del Ministerio de Trabajo. Cornelio Quintero es elegido como nuevo secretario general por el 96% de los votos.
- LUNES 22** El comando “Sur” compuesto por 300 efectivos de las Fuerzas Aliadas 2004, con representantes de ejércitos y organismos de defensa de más de 20 países de América, realiza ejercicios “de rescate y protección” en la antigua base de Howard, donde ocurrieron numerosos desastres ecológicos.
- En La Chorrera un grupo de estudiantes, padres y docentes cortan la Avenida Libertador en reclamo por la falta de docentes en las escuelas y denuncian las carencias edilicias que presentan los colegios de la zona. Asimismo, unas 100

personas se manifiestan frente a las oficinas del Ministerio de Educación de Panamá Oeste por el mismo motivo.

VIERNES 26 En su examen periódico de la economía de Panamá, el Consejo Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) alerta a las autoridades nacionales sobre la necesidad de reformar la administración pública, el sistema tributario y la CSS.

A B R I L

JUEVES 1 Unos 500 trabajadores inician un paro de actividades en las bananeras independientes del sector de Divalá, provincia de Chiriquí, en exigencia de que el gobierno desembolse el 25% del pago de los haberes ya acordados.

SÁBADO 3 Los trabajadores bananeros que cumplen el tercer día de paro en Divalá cortan los accesos a las fincas y se enfrentan con policías antimotines que intentan despejar el área para lograr la salida de contenedores con frutas. Son reprimidos con gases lacrimógenos, con un saldo de 4 heridos y varios detenidos.

VIERNES 9 Representantes de unas 10 organizaciones de productores de diferentes rubros agropecuarios, entre los que se encuentran los Criadores de Cebú de Panamá (CRICEPA), la Asociación de Productores de Arroz de Chiriquí (APACH), la Cooperativa y Unión de Ganaderos (COPUGAN), entre otros, emiten un comunicado conjunto para solicitar al gobierno que excluya del futuro TLC que se está negociando con EE.UU. a la carne, la leche y el arroz.

JUEVES 15 Vence el plazo de 48 hs que los trabajadores bananeros de las fincas independientes de Chiriquí habían otorgado al gobierno para la resolución del conflicto en el sector, por lo cual continúa el paro que ya lleva 16 días.

MIÉRCOLES 21 Unos 300 camioneros de Panamá y Costa Rica realizan un paro en la zona fronteriza de Paso Canoas en Chiriquí, en reclamo por la privatización del servicio aduanero panameño.

JUEVES 22 En el marco de la celebración del Día Internacional de la Tierra, el presidente de la Asociación Verde de Panamá (AVESPA) señala que el principal problema ambiental del país es el acceso al agua potable y la contaminación de las fuentes hídricas, entre las que se encuentran afectadas las bahías de Panamá y Las Minas, y los ríos Caimito, Changuinola y Pacora, entre otros. En defensa de este último río, habitantes de la comunidad de Pacora realizan una marcha en la barriada 24 de Diciembre.

VIERNES 23 Los camioneros panameños y costarricenses en paro desde hace 3 días levantan la medida de fuerza luego de llegar a un acuerdo con la Dirección Nacional de Aduanas.

LUNES 26 Panamá y EE.UU. inician la primera ronda de negociaciones para establecer un TLC entre ambos países.

Más de 100 personas convocadas por la Alianza Nacional por la Vida (ANAVI) –conformada por la Central General de Trabajadores de Panamá (CGTP), la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas de Panamá (CONAMUIP), la Confederación de Trabajadores de la República de Panamá (CTRP), la Central Nacional de Trabajadores de Panamá (CNTP), ANFACSS y la Pastoral Social-Cáritas Panamá, entre otras organizaciones– realizan una manifestación frente al Ministerio de Comercio e Industrias y entregan una carta al titular de esa cartera donde exponen los motivos por los que rechazan el TLC con EE.UU.

GLOSARIO DE SIGLAS

AEC	Asociación de Estados del Caribe
ALCA	Área de Libre Comercio de las Américas
ANAVI	Alianza Nacional por la Vida
ANFACSS	Asociación Nacional de Funcionarios Administrativos de la CSS
APACH	Asociación de Productores de Arroz de Chiriquí
APP	Alternativa Patriótica Popular
AVESPA	Asociación Verde de Panamá
CENA	Consejo Económico Nacional
CGTP	Central General de Trabajadores de Panamá
CNTP	Central Nacional de Trabajadores de Panamá
CONAMUIP	Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas de Panamá
COOSEMUPAR	Cooperativa de Servicios Múltiples de Puerto Armuelles
COPUGAN	Cooperativa y Unión de Ganaderos
CRICEPA	Criadores de Cebú de Panamá
CSS	Caja de Seguro Social
CTRP	Confederación de Trabajadores de la República de Panamá
FMI	Fondo Monetario Internacional
IAAN	Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales
SITRACHILCO	Sindicato Industrial de Trabajadores de Chiriquí Land Company
SUNTRACS	Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares
TCA	Tribunal Centroamericano del Agua
TLC	Tratado de Libre Comercio
UE	Unión Europea

Realizado por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).

Relevamiento y sistematización a cargo de María José Nacci.

Fuentes: diarios Crítica y La Prensa.

Otras fuentes: Cáritas Panamá.

[cronología enero-abril 2004]

ENERO

JUEVES 1 La Unidad Laboral de Enfermeros y Empleados de la Salud (ULEES) comienza un paro por 72 hs en 3 hospitales de la Iglesia Episcopal de Puerto Rico, en Ponce, ante la negativa de las autoridades de negociar un convenio colectivo para los trabajadores.

MARTES 13 La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y la Compañía Ondeo de Puerto Rico firman el acuerdo que cancela el multimillonario contrato para su administración privada y que dará paso a su devolución al gobierno, en un proceso de transición de 6 meses que terminará con la salida total de Ondeo el 30 de junio.

MARTES 27 La Hermandad Independiente de Empleados Telefónicos (HIETEL) realiza una manifestación exigiendo a Telefónica de Puerto Rico (TPR) que mejore su oferta para el nuevo convenio colectivo, en materia de salarios y del plan médico.

FEBRERO

MIÉRCOLES 4 La Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER) realiza un paro en la Central Monacillos, y más de 3 mil empleados agrupados en la Alianza de Empleados Energéticos de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) se concentran frente a las oficinas de la agencia en Santurce para protestar por los planes de privatización de la AEE, que comenzaron con la producción del 33% de la energía que consume el país en manos privadas y la instalación de fibra óptica a cargo de contratistas.

MARTES 17 Varias organizaciones estudiantiles cierran el paso a las instalaciones del programa militar Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales de la Reserva (ROCT), en el Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR), en solidaridad con los estudiantes que se oponen a la presencia de ese programa en el Recinto Universitario Mayagüez (RUM), que desde hace meses mantienen un campamento de protesta. Además rechazan la utilización de fondos universitarios para entrenamientos militares.

VIERNES 20 Un grupo de soldados parte hacia Irak. Un segundo grupo de la misma compañía se dispone a partir un día después.

Unos 100 activistas antimilitaristas protestan en el área turística del Condado en contra de la política de guerra de EE.UU. ante la llegada del vicepresidente norteamericano Dick Cheney al país para participar en un acto de recaudación de fondos del Partido Republicano destinados a la reelección del actual presidente George W. Bush.

MIÉRCOLES 25 La Coordinadora Sindical, compuesta por la UTIER, la Hermandad de Empleados del Departamento del Trabajo (HEDET), la Hermandad de Trabajadores de Servicios Sociales (HTSS), la Unión de Trabajadores de Servicios Legales (UASL) y la Unión Independiente de Abogados de la Sociedad para Asistencia Legal (UIASAL), protestan en San Juan en demanda del cumplimiento de las promesas de aumento salarial a los empleados públicos y de aportes que permitan mantener y mejorar los servicios legales.

VIERNES 27 La Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR) realiza una vigilia en el lado norte del Capitolio en repudio a los asesinatos de 2 maestros en sus escuelas. Exigen el cumplimiento del Convenio Colectivo y que el Departamento de Educación constituya los comités de Salud y Seguridad en los planteles.

MARZO

JUEVES 4 Empleados de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE) realizan un piquete frente a las oficinas centrales para rechazar la contratación de firmas privadas para realizar tareas que cumplen 40 empleados del Centro de Cómputos.

MIÉRCOLES 10 Los trabajadores de la UTIER realizan una sentada sobre un cable que sería instalado por miembros de la Unión Insular de Trabajadores Industriales y Construcción Eléctrica (UITICE), en Toa Alta, para detener esos trabajos ante la imposición de las labores por parte de la AEE. La policía detiene a más de 40 empleados de la UTIER. Por la tarde, se movilizan hasta la comandancia de la policía en Bayamón para reclamar la inmediata liberación de los detenidos.

JUEVES 11 La UTIER paraliza todas las dependencias de la AEE en protesta por el intento de la gerencia de privatizar las labores que le corresponden a los sindicatos y en rechazo a la represión durante la protesta realizada el día anterior.

MARTES 16 Estudiantes de la escuela superior Ramón Power y Giralt, de Santurce, paralizan de forma indefinida las labores en el plantel hasta tanto se resuelva el problema de falta de agua, de instalaciones recreativas y de guardia de seguridad. Protestas similares se realizan en distintos establecimientos educativos.

JUEVES 18 Estudiantes universitarios en contra de la militarización toman la Torre de la UPR en Río Piedras para expresar su repudio a la invasión, ocupación y masacre del pueblo iraquí por parte de EE.UU. y sus aliados.

MIÉRCOLES 24 Decenas de soldados apostado en Irak regresan al país.

MARTES 30 La Cámara de Representantes de EE.UU. aprueba un proyecto de ley que endurece las penalidades económicas a las que se enfrentan las instituciones universitarias que no colaboran con los programas militares del ROTC.

MIÉRCOLES 31 La Organización Nacional de Directores de Escuela de Puerto Rico (ONDEPR) realizan una manifestación frente al Departamento de Educación (DE) en contra de las presiones del secretario Cesar Rey Hernández para desarticular la organización, por el clima de trabajo al que están siendo sometidos los directores y por los problemas que confronta el sistema público de enseñanza.

A B R I L

MARTES 20 Los padres de los estudiantes de la escuela Virgilio Dávila, en Bayamón, impiden el desarrollo de las clases para denunciar la crisis que han causado en el plantel las frecuentes emanaciones de gases. Alrededor de 30 maestros presentan problemas respiratorios.

MIÉRCOLES 21 Miembros del sindicato de trabajadores de la Junta de Calidad Ambiental (JCA) realizan una protesta en reclamo de un aumento salarial de 150 pesos recibido por el resto de los funcionarios públicos.

La gobernadora Sila Calderón viaja a Costa Rica con el fin de reforzar las relaciones comerciales entre ambos países.

VIERNES 30 La gobernadora Sila María Calderón veta el proyecto de ley que permitiría la sindicación de los empleados de la rama judicial, aprobado por unanimidad en el Senado y con un solo voto en contra en la Cámara el pasado 7 de abril

GLOSARIO DE SIGLAS

AAA	Autoridad de Acueductos y Alcantarillados
AEE	Autoridad de Energía Eléctrica
CFSE	Corporación del Fondo del Seguro del Estado
DE	Departamento de Educación
FMPR	Federación de Maestros de Puerto Rico
HEDET	Hermanidad de Empleados del Departamento del Trabajo

HIETEL	Hermandad Independiente de Empleados Telefónicos
HTSS	Hermandad de Trabajadores de Servicios Sociales
JCA	Junta de Calidad Ambiental
ONDEPR	Organización Nacional de Directores de Escuela de Puerto Rico
ROTC	Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales de la Reserva
RUM	Recinto Universitario Mayagüez
TPR	Telefónica de Puerto Rico
UASL	Unión de Trabajadores de Servicios Legales
UIASAL	Unión Independiente de Abogados de la Sociedad para la Asistencia Social
UITICE	Unión Insular de Trabajadores Industriales y Construcción Eléctrica
ULEES	Unión Laboral de Enfermeros y Empleados de la Salud
UPR	Universidad de Puerto Rico
UTIER	Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego

*Realizado por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
 Relevamiento y sistematización a cargo de Florencia Ayala.
 Fuentes: diarios el Nuevo Día Interactivo y El Vocero.*

[cronología enero-abril 2004]

ENERO

JUEVES 1 El gobierno refuerza la vigilancia en la frontera con Haití ante las jornadas de protesta que se vienen realizando contra el presidente del vecino país.

VIERNES 2 La Superintendencia de Electricidad dispone un aumento en la tarifa eléctrica en cumplimiento a lo acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La Cámara de Diputados aprueba los impuestos del 2% a las importaciones, el 5% a las exportaciones y el aumento a 20 dólares de la salida a través de puertos y aeropuertos.

MARTES 6 La Cámara de Diputados convierte en ley el Proyecto de Presupuesto de Ingresos y la Ley de Gastos Públicos del presente año.

JUEVES 8 La Secretaría de Industria y Comercio aumenta el precio de los combustibles generando los mayores incrementos registrados en el costo de esos carburantes. También se registran aumentos de hasta un 100% en muchos artículos de la canasta familiar.

LUNES 12 Jóvenes protestan en las calles de Navarrete en demanda de la rebaja de los precios de los combustibles y la terminación de varias obras. La policía los reprime y responden a pedradas.

Se inicia en el hotel Jaragua la primera ronda de negociaciones con Estados Unidos para lograr el Tratado de Libre Comercio (TLC). Los temas abordados son la propiedad intelectual y el comercio. La cuestión agrícola, que no figuraba en la agenda, surge tras una publicación de la Comisión Nacional Avícola del Consejo Nacional de Producción Agropecuaria advirtiendo las consecuencias negativas de una mala negociación.

Los precios de los pasajes urbanos e interurbanos aumentan como consecuencia del aumento en los combustibles.

MIÉRCOLES 14 El Sindicato Nacional de Trabajadores de Enfermería (SINATRAE), la Asociación Dominicana de Enfermeras Graduadas (ADEG), la Asociación de

Odontología Dominicana, la Agrupación Farmacéutica del Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS) y la Asociación Nacional de Bioanalistas conforman una coordinadora de gremios de salud para realizar demandas conjuntas.

JUEVES 15 La Secretaría de Industria y Comercio aumenta nuevamente los combustibles.

Los porcicultores y avicultores marchan hasta el hotel Jaragua donde se desarrollan las negociaciones por el TLC con EE.UU. demandando que la fecha para el inicio del tratado sea el año 2007 y que para llevarlo a cabo se realice un Plan Nacional de Desarrollo para la recuperación de los productores que les permita estar en condiciones de competir. Una vez frente al hotel se unen a los arroceros, habichueleros, caficultores, cacaoctores y otros productores agrícolas que protestan contra el TLC.

SÁBADO 17 La Central Nacional de Transporte (CONATRA) aumenta el precio del pasaje del transporte interurbano debido al aumento en los combustibles. Amas de casa, estudiantes y empleados públicos y privados protestan contra el alza, aunque reconocen que los transportistas no pueden soportar las subas en los combustibles.

LUNES 19 Un grupo de militares parte hacia Irak.

El gobierno concluye las negociaciones con el FMI y se espera que el Congreso apruebe la Ley sobre Riesgo Sistémico Bancario para anunciar el acuerdo.

MIÉRCOLES 21 El FMI elogia las recientes políticas monetarias del gobierno.

JUEVES 22 El Colegio Médico Dominicano (CMD) paraliza todos los hospitales de la región este del país en demanda de un aumento salarial del 100% y de la entrega de medicamentos en los centros de salud.

VIERNES 23 La Fuerza de la Revolución (FR) pide la renuncia del presidente Hipólito Mejía.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) concede un préstamo por 200 millones de dólares al gobierno dominicano.

Estudiantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) marchan por los alrededores de la casa de estudios en respaldo al paro convocado por la Coordinadora por la Unidad y la Lucha para los días 28 y 29 del presente mes, contra la política económica del gobierno. Son reprimidos por la policía y varios resultan heridos. Se suspende el dictado de clases.

MARTES 27 La policía allana las viviendas de organizadores del paro pero ninguno de ellos se encuentra en su casa. En Capotillo es detenido el dirigente del Consejo de

Unidad Popular. Los organizadores de la medida aseguran que se han producido más de 40 detenciones en distintos lugares del país.

MIÉRCOLES 28 La Coordinadora por la Unidad y la Lucha, con el respaldo de la población, realiza un paro nacional por 48 hs demandando la rebaja y congelación de los precios de los artículos de primera necesidad, de los combustibles, de la tarifa eléctrica y del transporte; que el gobierno declare una moratoria en el pago de la deuda externa, que se aumente el 100% del salario de los civiles y militares, que se termine con los apagones, que no se acuerde con el FMI ni se firme el TLC con EE.UU. Son paralizadas las actividades comerciales, de transporte y educativas. Los sindicatos de los hospitales públicos de la Secretaría de Salud Pública y del IDSS de todo el país paralizan sus actividades. Unas 150 personas, entre las que se encuentran varios dirigentes, son detenidas y unas 9 personas resultan heridas. Unos 6 mil miembros del ejército nacional, Marina de Guerra y Fuerza Aérea Dominicana son dispuestos en todo el país. En varios lugares se producen enfrentamientos entre los manifestantes y contingentes militares. Los manifestantes detonan bombas de fabricación casera, lanzan piedras y queman llantas. EE.UU. prohíbe a sus diplomáticos que abandonen la ciudad de Santo Domingo ante el comienzo de la huelga.

JUEVES 29 En el segundo día de huelga miles de transportistas salen a trabajar y varios negocios comienzan a abrir sus puertas. En distintos barrios se producen enfrentamientos entre los manifestantes y la policía. Desde el inicio del paro suman 6 las personas muertas. Son detenidas y golpeadas unas 450 personas.

FEBRERO

DOMINGO 1 Regresan de Irak 152 soldados.

MIÉRCOLES 4 La vigilancia militar dominicana es reforzada en la frontera con Dajabón.

VIERNES 6 Habitantes de Santo Domingo realizan cortes de calle y quema de neumáticos en rechazo a los apagones. También protestan en Herrera, Galuey—donde manifestantes y policías se enfrentan por más de 4 hs—, Cristo Rey, Capotillo y El Caliche, entre otros lugares.

DOMINGO 8 Los habitantes de distintos barrios de Santiago se manifiestan con velas encendidas en protesta por los apagones.

LUNES 9 La comisión negociadora del TLC participa de la segunda ronda de negociaciones en San Juan de Puerto Rico.

MARTES 10 El Senado aprueba en segunda lectura el proyecto de Ley de Lemas.

MIÉRCOLES 11 El FMI aprueba el restablecimiento del acuerdo *Stand By* y autoriza el desembolso de 66 millones de dólares, luego de concluir la primera revisión del desempeño del país bajo el acuerdo firmado en agosto pasado.

JUEVES 12 El gobierno paga 32,5 millones de dólares a 4 generadoras de electricidad que mantienen sus unidades apagadas.

Estalla una bomba de fabricación casera en las oficinas de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (EDENORTE) de Nagua. En Azua, 7 personas resultan heridas con perdigones al enfrentarse con la policía. Se suspenden las clases y el comercio cierra sus puertas.

MARTES 17 Una delegación dominicana viaja a Washington en un intento de discutir ante el FMI las negociaciones de reestructuración de la deuda externa del país con el Club de París.

Los habitantes de San Francisco de Macorís (SFM) protestan contra los apagones con quema de neumáticos y basura. Se producen choques con la policía resultando varias personas detenidas.

Las Fuerzas Armadas Dominicanas operan en “alerta de guerra” en toda la frontera con Haití.

MARZO

LUNES 1 Médicos, enfermeras, bioanalistas y radiólogos pertenecientes al CMD vuelven a paralizar por 48 hs, por tercera semana consecutiva, las actividades de los hospitales públicos y del IDSS en demanda de un aumento salarial del 100%, provisión de equipamiento y dotación de medicamentos.

Se inicia en Washington la III ronda de conversaciones para el TLC con EE.UU.

LUNES 15 República Dominicana y EE.UU. logran en Washington un acuerdo sobre el TLC luego de 3 rondas de negociación con el fin de promover, supuestamente, el comercio regional mediante la apertura de los mercados, la supresión progresiva de los aranceles y la eliminación de otras barreras. Según la secretaria de Industria y Comercio, Sonia Guzmán, los productos dominicanos ingresarán en un 99,5% libres de impuestos al mercado norteamericano, mientras que a la inversa el mercado se abrirá en un 76%.

Habitantes de Navarrete, en Santiago, convocados por el partido FR se manifiestan en demanda de un pliego de reivindicaciones sociales y económicas. Los manifestantes cortan calles con llantas incendiadas y la policía patrulla la zona con armas cortas y largas. Se producen enfrentamientos entre los mani-

festantes y la policía resultando 3 personas heridas de bala. Organizaciones populares también protestan en Licey al Medio obstruyendo el paso vehicular.

MARTES 16 El Sindicato Autónomo de Choferes Transportadores de Petróleo y Afines (SACTPA) reduce en la Capital y otras ciudades del país el número de camiones que transportan carburante en demanda de un aumento salarial.

JUEVES 18 Diversas organizaciones populares realizan un paro de 24 hs en Salcedo en demanda de la normalización del servicio de agua potable y contra los apagones. Se producen enfrentamientos con la policía donde resultan 2 personas heridas.

SÁBADO 20 Residentes de Salcedo, Navarrete, SFM y Licey al Medio, en el Cibao, protestan en rechazo a los apagones por el incumplimiento del gobierno con las generadoras de electricidad y también por el aumento de la tarifa eléctrica en un 300% amén de no recibir el servicio. Se producen enfrentamientos con la policía. Cuatro manifestantes resultan heridos y varios detenidos.

Cientos de organizaciones políticas, sindicales, populares y estudiantiles, entre otras FR, Juventud Rebelde, la Liga Socialista de los Trabajadores y el Consejo de Unidad Popular, conmemoran el primer año de la intervención de EE.UU. en Irak y demandan al gobierno la salida inmediata de los soldados dominicanos en dicha nación.

LUNES 22 La Coordinadora Nacional de la Salud inicia un paro de una semana de duración en todo el país en demanda de un aumento salarial de un 100% y el equipamiento de los hospitales.

El SACTPA paraliza el transporte de combustibles durante 6 hs en reclamo de un aumento salarial, entre otras cosas. El paro es levantado luego de que la Secretaría de Trabajo comienza a mediar con las empresas distribuidoras Rally Gas y Credigas.

MIÉRCOLES 24 En el marco del paro de salud, un equipo de médicos militares, parte del staff de profesionales del hospital Francisco Moscoso Puello que no se ha sumado en su totalidad al paro, ofrece consultas en dicho centro asistencial. Los médicos, enfermeras y bioanalistas, que cortan las calles en demanda de abastecimiento de medicamentos y un aumento salarial, rechazan la presencia del personal militar en recepción, áreas de emergencia y parqueos. El CMD responsabiliza a las autoridades del hospital ante cualquier situación que se presente en el mismo, producto de la presencia militar. El gobierno insiste en que no hay dinero para aumentar los sueldos.

VIERNES 26 El CMD levanta la huelga luego de 5 días, cumpliendo el plazo anunciado. Demandan un aumento salarial del 100% y que doten a los centros de salud

con medicamentos y equipos esenciales. Los pacientes, aún en contra de la medida, apoyan el accionar de los médicos.

LUNES 29 Dirigentes del CMD se reúnen con el presidente Mejía. El mandatario les informa que va a gestionar que el proyecto de ley de aumento salarial sea aprobado.

MIÉRCOLES 31 La Asociación Dominicana de Controladores Aéreos (ADCA) inicia una huelga de labores en demanda de un aumento del 100% en sus salarios. El área de control de vuelos del Aeropuerto de Las Américas es fuertemente vigilada por policías y militares. La Dirección General de Aeronáutica Civil espera la llegada de un grupo de controladores extranjeros para realizar dichas labores. El presidente Mejía emite un decreto que otorga todos los poderes necesarios al director de la Aeronáutica Civil para que tome las medidas necesarias para preservar la marcha de la aeronavegabilidad.

ABRIL

JUEVES 1 La Asociación Nacional de Pilotos realiza un paro de 24 hs en solidaridad con los controladores aéreos que demandan un aumento salarial del 100%. El trabajo de los controladores lo llevan adelante civiles que no realizan dicha actividad desde hace más de 6 meses.

VIERNES 2 El presidente Mejía anuncia que el país mantiene negociaciones avanzadas con Canadá para establecer un TLC y completar así el que acaba de discutir con EE.UU.

La ADCA levanta la huelga luego de llegar a un acuerdo con las autoridades de Aeronáutica Civil para buscar alternativas que permitan cumplir con un aumento salarial de un 100%, entre otras demandas.

Las Fuerzas Armadas Dominicanas y el Comando Sur de EE.UU. informan que desarrollarán un programa conjunto de ejercicios militares denominado Trade Winds en el que participarán Holanda, el Reino Unido y otros países del Caribe.

DOMINGO 11 Militantes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) realizan actos en la autopista Duarte en la entrada a Los Alcarrizos. Durante los mismos se produce un tiroteo entre los militantes, con un saldo de 2 muertos, 5 heridos y varios autos incendiados. Interviene la policía antimotines.

MARTES 13 Tras los enfrentamientos en Los Alcarrizos, los 3 partidos mayoritarios, el PLD, el PRD y el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), suscriben un acuerdo en el que se prohíbe portar armas de fuego a los participantes en las actividades de campaña.

VIERNES 16 República Dominicana reprograma 193 millones de dólares en préstamos con el Club de París de países acreedores. Este acuerdo consolida unos 155 millones de dólares de vencimientos entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2004, y 38 millones de dólares en pagos atrasados que se deben a los acreedores del Club de París. De esta manera el país se compromete a renegociar la deuda soberana con los acreedores privados.

El PRD realiza una caravana en el sector San Carlos. Se produce un tiroteo entre simpatizantes de dicho partido y los del opositor PLD, resultando 3 personas heridas de bala.

MARTES 20 El presidente Mejía ordena el retiro de las tropas dominicanas en Irak por considerar que no pueden seguir corriendo riesgos innecesarios.

JUEVES 29 Grupos de personas se movilizan en los barrios de la parte alta de la ciudad de Barahona con quemas de neumáticos y basura en las vías, al conmemorarse el 39º aniversario de la intervención de EE.UU. en el conflicto bélico de 1965. Incendian un vehículo. Luego, organizaciones marchan y queman una bandera estadounidense.

GLOSARIO DE SIGLAS

ADCA	Asociación Dominicana de Controladores Aéreos
ADEG	Asociación Dominicana de Enfermeras Graduadas
BID	Banco Interamericano de Desarrollo
CMD	Colegio Médico Dominicano
CONATRA	Central Nacional de Transporte
EDENORTE	Empresa Distribuidora de Energía del Norte
FMI	Fondo Monetario Internacional
FR	Fuerza de la Revolución
IDSS	Instituto Dominicano de Seguros Sociales
PLD	Partido de la Liberación Dominicana
PRD	Partido Revolucionario Dominicano
PRSC	Partido Reformista Social Cristiano
SACTPA	Sindicato Autónomo de Choferes Transportadores de Petróleo y Afines
SFM	San Francisco de Macorís
SINATRAE	Sindicato Nacional de Trabajadores de Enfermería
TLC	Tratado de Libre Comercio
UASD	Universidad Autónoma de Santo Domingo

*Realizado por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Magdalena Rauch.
Fuentes: diarios Hoy, Listín y El Nacional.*

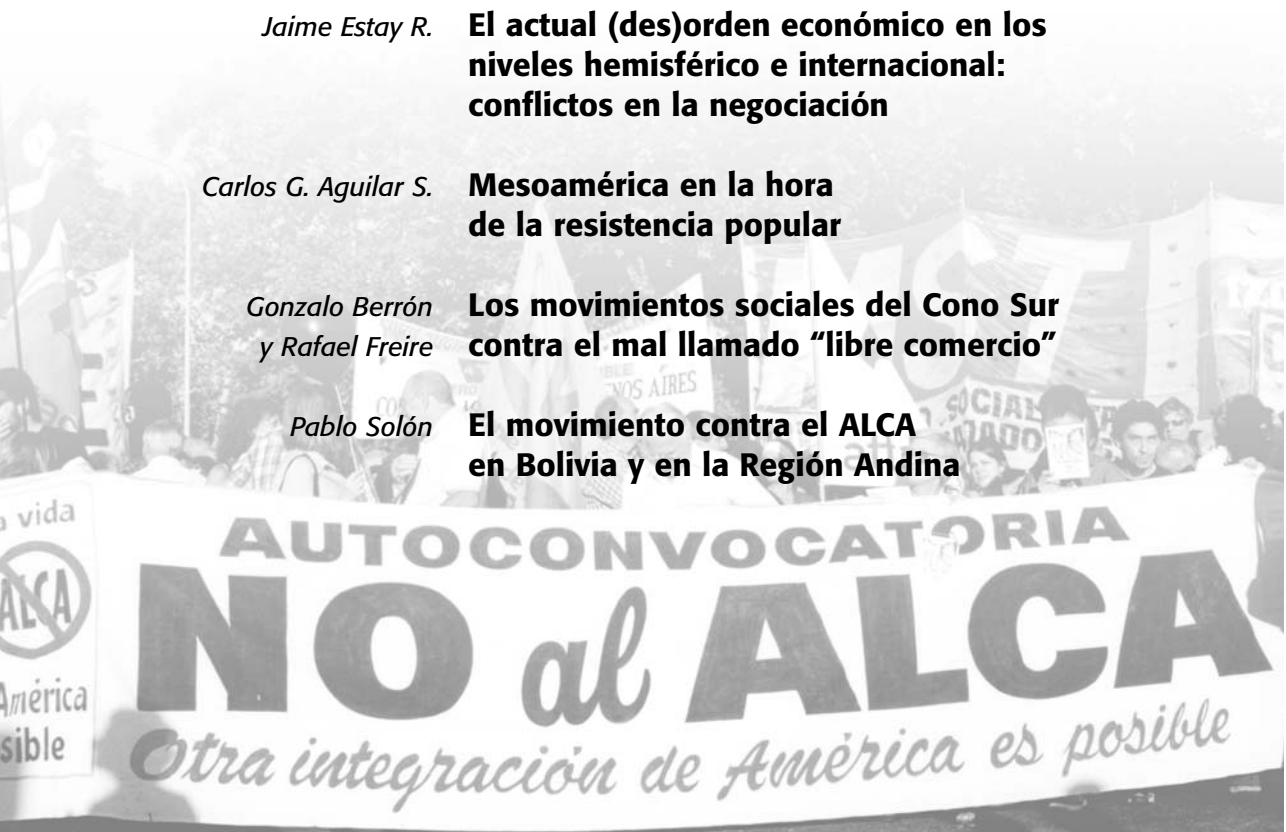
Resistencias continentales frente al “libre comercio”

Jaime Estay R. **El actual (des)orden económico en los niveles hemisférico e internacional: conflictos en la negociación**

Carlos G. Aguilar S. **Mesoamérica en la hora de la resistencia popular**

Gonzalo Berrón y Rafael Freire **Los movimientos sociales del Cono Sur contra el mal llamado “libre comercio”**

Pablo Solón **El movimiento contra el ALCA en Bolivia y en la Región Andina**



El actual (des)orden económico en los niveles hemisférico e internacional: conflictos en la negociación

Jaime Estay R.*

* *Chileno, residente en México. Profesor-investigador en la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Puebla y coordinador de la Red de Estudios de la Economía Mundial.*

En la segunda mitad del año 2003 y lo que va de 2004 se han producido hechos de importancia en dos de los ámbitos de negociación económica intergubernamental. Al momento de escribir el presente material, las negociaciones tanto en la Organización Mundial de Comercio (OMC) como en el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) se encuentran notoriamente estancadas, y el estancamiento en ambos casos se debe a diferencias entre países desarrollados y atrasados, habiéndose concentrado en un conjunto de temas que son muy semejantes en esos dos niveles. En el presente artículo revisaremos esa situación, comparándola con el escenario previo e identificando los principales puntos de conflicto.

Todo iba viento en popa...

La ola de triunfalismo que acompañó a la caída del "socialismo real" –y que en el plano ideológico tuvo su

expresión más clara en los anuncios de “el fin de la historia”– en el ámbito de las políticas gubernamentales se tradujo en una reafirmación del proyecto neoliberal que ya estaba en marcha, sobre todo en los países atrasados, en los cuales se acentuaron las prácticas estatales privatizadoras y desreguladoras, así como los discursos oficiales llamando a sumarse sin cortapisas a la globalización, ensalzando las virtudes del libre mercado y reiterando la pronta llegada de los beneficios sociales que traería consigo el camino elegido.

En el terreno de las relaciones económicas internacionales ocurrió algo semejante, y a la voz de “no hay opciones” se reafirmaron las consignas y las prácticas que ya venían imponiéndose: en las consignas, la reivindicación plena del librecambismo y de la libre circulación internacional del capital; en la práctica, la aplicación de políticas de apertura total y rápida en los países atrasados, acompañadas por cierto de distintas formas de proteccionismo –en particular, a través de medidas no arancelarias– en los países desarrollados. El sentido general de esos discursos y políticas apuntaba a consolidar en el ámbito internacional las mejores condiciones posibles para la plena actuación de las grandes empresas transnacionales, procedentes en su casi totalidad de los países del capitalismo avanzado, y para ese fin se impulsaban los procesos de apertura en el mundo atrasado.

Bajo esa perspectiva, es claro que el final de los años ochenta y una buena parte de la siguiente década constituyeron un período de importantes avances en la estructuración de un marco normativo supranacional puesto al servicio de los países desarrollados y sus mayores empresas, y ello ocurrió a través de negociaciones intergubernamentales tanto en el nivel global como en el hemisferio americano.

En el nivel global, el principal avance consistió en la creación de la OMC el 1º de enero de 1995, luego de varios años de negociación. Dicha organización absorbió y readecuó el anterior Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés), pero iniciando además sus actividades con la puesta en marcha de un total cercano a los treinta acuerdos –contenidos en alrededor de treinta mil páginas– referidos a un conjunto de objetivos y de temas que el GATT no contemplaba, o contemplaba de manera parcial.

Entre los primeros se encuentran temas como el comercio de servicios (Acuerdo GATS), los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (Acuerdo TRIPs), los mecanismos para el examen de políticas comerciales, las medidas en materia de inversiones relacionadas con el comercio (Acuerdo TRIMs) y el Acuerdo sobre Contratación Pública, que tiene un carácter “plurilateral”, lo que implica que no es forzoso que sea suscrita por todos los miembros de la OMC.

“... los acuerdos de la OMC se constituyeron en un ‘piso’ a partir del cual los contenidos del ALCA pretendían ir más allá, abarcaba temas no tratados todavía en la OMC y profundizaba los “avances” de la OMC respecto de la apertura, la desregulación y la retirada estatal”

Entre los segundos, está lo referido a mecanismos precisos respecto a la solución de diferencias, así como el Acuerdo sobre Agricultura y el Acuerdo sobre Textiles y Vestido (ATV). Estos dos últimos se vinculaban a problemas particularmente importantes para los países atrasados: el primero de ellos estaba referido a la disminución progresiva de una parte de los cuantiosos subsidios que los países desarrollados otorgan a su producción agrícola; el segundo contemplaba el compromiso de esos mismos países para ir reduciendo las barreras al ingreso de textiles y vestidos, reemplazándose con ello el Acuerdo Multifibras que había estado vigente desde 1974 y al amparo del cual los países desarrollados habían establecido esas barreras.

En el nivel hemisférico el avance consistió en el lanzamiento de la propuesta estadounidense para crear un Área de Libre Comercio, tema que fue propuesto primero por George Bush padre en junio de 1990 y retomado por la administración Clinton, durante la cual se realizaron las Reuniones Cumbre de Miami en 1994, en la que comenzó la fase preparatoria de las negociaciones, y de Santiago en 1998, en la que se declaró el inicio de las negociaciones.

Como parte del proceso de negociación del ALCA se fue creando toda una estructura que va desde el nivel ministerial, pasando por el Comité de Negociaciones Comerciales (CNC) integrado por los viceministros de comercio, hasta los Grupos de Negociación, girando dicho proceso en torno a los temas de Acceso a Mercados, Inversión, Servicios, Compras del Sector Público, Solución de Controversias, Agricultura, Derechos de Propiedad Intelectual, Subsidios, Antidumping y Derechos Compensatorios, Política de Competencia, Asuntos Institucionales y Economías Más Pequeñas.

Una comparación entre los acuerdos tomados en la OMC y los contenidos que en la negociación se fueron asignando al ALCA deja claramente al descubierto un conjun-

to de semejanzas y, más que eso, una suerte de secuencia entre ambos niveles, de tal manera que los acuerdos de la OMC se constituyeron en un "piso" a partir del cual los contenidos del ALCA pretendían ir más allá en dos sentidos: por una parte, el ALCA abarcaba temas no tratados todavía en la OMC (por ejemplo en los capítulos de Inversiones y de Políticas de Competencia); y por otra parte, en los temas comunes el ALCA profundizaba los "avances" de la OMC respecto de la apertura, la desregulación y la retirada estatal (por ejemplo en Servicios, Compras del Sector Público y Derechos de Propiedad Intelectual).

Dicho de otra manera, las múltiples ventajas obtenidas por los países desarrollados respecto de los atrasados en el interior de la OMC se acentuaban todavía más en la relación de EE.UU. con los países de América Latina y El Caribe en el proceso ALCA, y en ambos niveles esas ventajas parecían ir consolidándose sin generar mayores conflictos, a lo cual habría que agregar la imposición de ventajas del mismo corte que EE.UU. logró, sobre todo respecto de México, con la puesta en marcha el 1º de enero de 1994 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

... hasta que empezó el temporal

Para la segunda mitad de los años noventa, la acumulación de evidencias sobre la creciente polarización social que la globalización arrojaba a su paso comenzó a surtir efectos en distintos niveles, empujando al menos en los discursos a una retirada parcial de la euforia neoliberal de los años previos y, más importante que eso, generando respuestas de oposición activa y organizada de parte de los más diversos movimientos sociales, los cuales apuntaron una buena parte de su actividad hacia el cuestionamiento de las normas y principios que estaban siendo impuestos en el plano de la economía internacional.

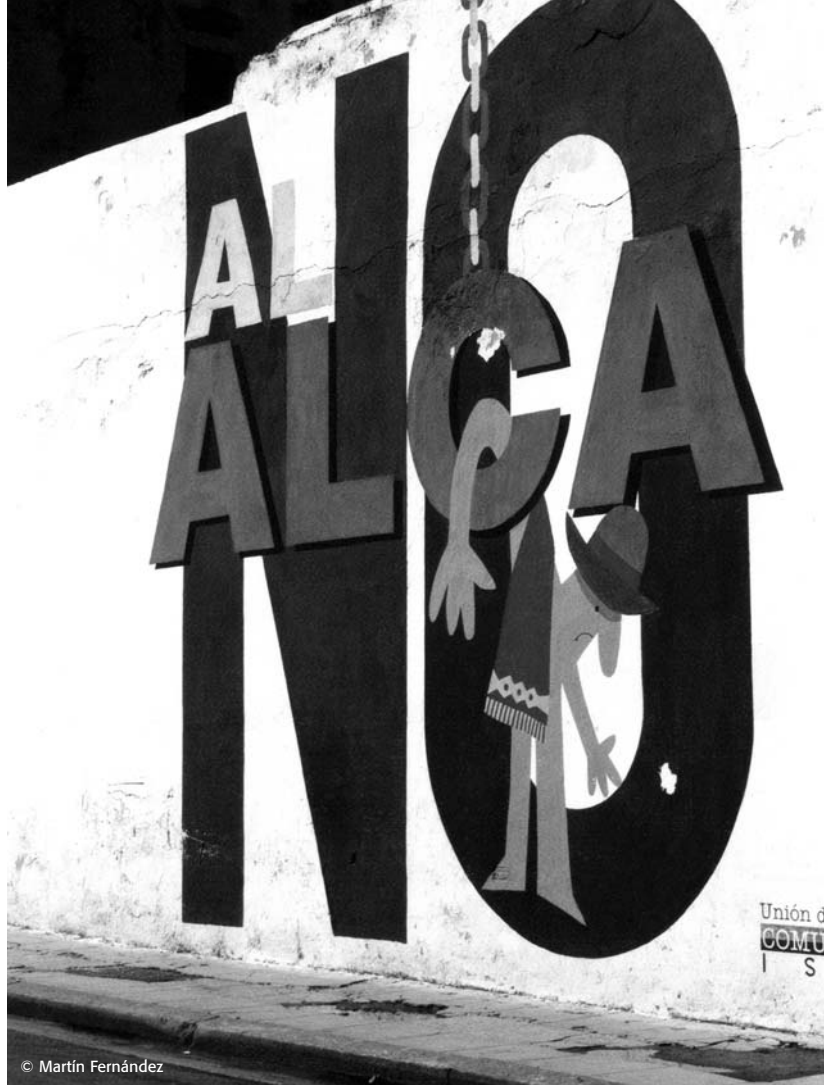
La primera señal importante de obstáculos en la estructuración del marco normativo supranacional puesto al servicio del gran capital y de los principales países, al que hemos hecho referencia, no se dio en relación a la OMC ni a las negociaciones del ALCA, sino respecto a los intentos por crear un instrumento multilateral que favoreciera al máximo el despliegue transnacional de los flujos de capitales. Desde 1995, en el interior de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) se empezó a negociar el llamado Acuerdo Multilateral de Inversiones (AMI), en el que se plasmaban las mayores facilidades y garantías imaginables hacia el capital extranjero, así como los correspondientes compromisos, restricciones y obligaciones para los estados receptores.

Mientras la negociación se mantuvo en secreto logró ir avanzando, pero cuando los borradores del AMI se dieron a conocer se generaron crecientes niveles de rechazo,

sobre todo en los países desarrollados, en los cuales una diversidad de grupos y organizaciones presionaron de distintas formas a sus gobiernos, incluyendo las campañas "No al AMI" y "Zonas libres del AMI", hasta que finalmente en octubre de 1998 se anunció la suspensión de las negociaciones del acuerdo.

En orden cronológico, los siguientes problemas provinieron de la OMC, y su generación se correspondió con los resultados que para los países atrasados fue arrojando el funcionamiento de dicho organismo. En términos generales, para esos países los resultados obtenidos se pueden resumir en dos.

Por una parte, un altísimo costo económico y social, reducción de la capacidad de acción estatal y pérdida de soberanía, consecuencias de la puesta en marcha de los principales acuerdos de la OMC. Probablemente el mejor ejemplo de costos económicos, aunque no el único, lo constituye la cuantiosa transferencia de recursos del Sur hacia el Norte que ha significado la aplicación del acuerdo TRIPs, lo que desde luego era esperable dado el muy alto grado en que los principales países concentran la generación y apropiación global del conocimiento científico-técnico, y con ello las rentas tecnológicas. En esa misma lógica, el intento de Brasil y Sudáfrica para hacer efectiva la posibilidad establecida en el mismo acuerdo TRIPs de producir internamente y/o importar, por motivos de salud pública, medicamentos genéricos sin el pago de las correspondientes patentes fue inmediatamente respondido con acciones de boicot por parte de las grandes farmacéuticas y con amenazas de demanda por parte del gobierno estadounidense.



Por otra parte, la permanencia e incluso la acentuación de las distintas barreras con que los países desarrollados limitan el ingreso de mercancías procedentes del capitalismo atrasado: “picos arancelarios” para el ingreso de distintos productos; niveles arancelarios que son mayores conforme crece el grado de elaboración de los productos, lo que se conoce como “aranceles escalonados”; trabas no arancelarias de todo tipo; investigaciones “anti-dumping” muchas veces injustificadas; etcétera.

En particular, lo ocurrido con los acuerdos sobre agricultura y sobre textiles y vestido constituye una buena síntesis de las verdaderas prácticas que marcan el funcionamiento de la OMC. En el caso del Acuerdo sobre Agricultura, lejos de que los países desarrollados redujeran los subsidios a sus productores, lo que hicieron fue incrementarlos –en parte, moviendo dichos subsidios hacia modalidades permitidas en la OMC–, a tal punto que las ayudas a sus productores han alcanzado un monto anual superior a 300 mil millones de dólares¹. En cuanto al ATV, los compromisos de reducción de barreras por parte de los países desarrollados han sido notoriamente incumplidos, a tal punto que al llegar en 2002 a la última etapa de aplicación del Acuerdo, momento en el cual deberían haber estado eliminados la mitad de los cupos sobre importaciones que estaban vigentes al firmarse el ATV, EE.UU. sólo había eliminado el 10%, Canadá el 20% y la Unión Europea el 27%.

Es a la luz de esos resultados que la Tercera Reunión Ministerial de la OMC celebrada en Seattle en diciembre de 1999, y en la cual se esperaba el arranque de una nueva Ronda de Negociaciones (que incluso ya tenía nombre, Ronda del Milenio), fracasó rotundamente, al extremo de que la reunión tuvo que suspenderse sin acuerdo alguno sobre la nueva Ronda. Ese fracaso, hacia el cual confluyeron los conflictos en el interior de la reunión y las masivas manifestaciones realizadas por fuera de ella, marcó un importante hito no sólo en el ámbito de negociaciones de la OMC, sino también en el desarrollo

***“El fracaso
[de la reunión
de la OMC en Seattle]
marcó un importante
hito no sólo
en el ámbito
de negociaciones
de la OMC,
sino también
en el desarrollo
del movimiento
alternundista,
constituyéndose [...] en punto
de arranque
de un nuevo nivel
de cuestionamiento
a la OMC
y al proyecto global
del que ella
es instrumento”***

del movimiento altermundista, constituyéndose dentro y fuera de la organización –si bien con importantes diferencias de contenido entre uno y otro de esos ámbitos– en punto de arranque de un nuevo nivel de cuestionamiento a la OMC y al proyecto global del que ella es instrumento.

La siguiente Reunión Ministerial de la OMC se realizó en noviembre de 2001, y en ella lo sucedido en Seattle se reflejó en dos sentidos. Por una parte, esa cuarta reunión tuvo lugar en Doha, capital de Qatar, un emirato situado en el Golfo Pérsico cuyo reducido tamaño (11.400 km² y 817 mil habitantes), sumado al carácter autoritario de la monarquía que allí gobierna, permitió impedir manifestaciones de repudio hacia la OMC como las que se habían dado dos años atrás. Por otra parte, a lo largo de toda la reunión –y de hecho, desde bastante antes– se multiplicaron los discursos de dirigentes de la OMC y de gobernantes de los países desarrollados referidos a la atención de las necesidades de los países atrasados, al otorgamiento de un trato preferencial hacia esos países en el interior de las negociaciones comerciales, a la vinculación entre el comercio y el desarrollo económico, a la lucha contra la pobreza, etcétera.

Lo anterior, sumado al escenario de histeria antiterrorista en el que se desarrollaron las negociaciones, en el que cualquier cuestionamiento al libre comercio era señal de complicidad con el terrorismo, permitió que la reunión no terminara en un nuevo fracaso y que se cerrara con un conjunto de promesas hacia los países atrasados, a tal punto que la nueva Ronda de Negociaciones que se acordó poner en marcha fue llamada Ronda del Desarrollo. Sin embargo, a la postre quedó claro que la reunión de Doha constituyó más bien un breve intermedio en el estallido de los conflictos Norte-Sur que afloró en Seattle y que reaparecería con fuerza en Cancún.

Como es sabido, la más reciente Reunión Ministerial de la OMC fue la de Cancún, celebrada en septiembre de 2003, que terminó con un estruendoso fracaso de las negociaciones, nuevamente acompañado por masivas movilizaciones de protesta. Ese nuevo fracaso de la OMC era prácticamente inevitable si se consideran las condiciones en que se dio la reunión, caracterizadas por la permanencia de todos los puntos de controversia que ya desde hace tiempo vienen desarrollándose entre los países desarrollados y atrasados.

En efecto, a pesar del supuesto Espíritu de Doha y de las correspondientes declaraciones y promesas formuladas en Qatar, es evidente que se llegó a Cancún sin que en los dos años intermedios se hubiera avanzado en los temas que interesan a los países atrasados.

De esta manera, el mandato de carácter general asumido en Doha para que se avanzara en una propuesta para “reforzar y hacer más precisas” las disposiciones sobre el Trato



© Martín Fernández

Especial y Diferenciado que se supone que los países desarrollados otorgan a los países atrasados no se cumplió, y a lo largo de los años 2002 y 2003 se fueron venciendo los sucesivos plazos acordados para la presentación de esa propuesta.

El Acuerdo adoptado en Doha, consistente en definir un nuevo y más ambicioso calendario para la disminución de los subsidios agrícolas, fue incumplido respecto de las fechas para su presentación. Finalmente, unas semanas antes de la reunión de Cancún, EE.UU. y la Unión Europea entregaron una propuesta conjunta referida a la reducción de las medidas de apoyo interno a la agricultura que afectan el comercio, pero sin establecer ni en qué proporción, ni en qué lapso de tiempo, ni los mecanismos a emplear. La absoluta falta de precisión de esa propuesta, que no contenía calendario alguno, tuvo como precedente la aprobación en EE.UU. de la Ley de Seguridad Agrícola y de Inversión Rural, conocida como *Farm Bill*, que entró en vigor en septiembre de 2002 e incrementó los subsidios en un 80% respecto de los montos que estaban establecidos en la anterior ley hasta ese entonces vigente –la *Fair Act* de 1996.

El Acuerdo de Doha sobre el acceso de los países atrasados a medicamentos genéricos ante problemas de salud pública –acceso que según mencionamos antes estaba contemplado ya desde el arranque del Acuerdo TRIPs– tampoco se tradujo en propuestas concretas presentadas en las fechas que se habían definido, y también en este tema los países desarrollados aparecieron con un texto un par de semanas antes de Cancún. El contenido de ese texto reducía prácticamente a la nada cualquier posibilidad real de acceso: restringía los motivos de “salud pública” a casos de “extrema urgencia”; limitaba a sólo tres enfermedades la posibilidad de producción de genéricos (malaria, tuberculosis y SIDA); establecía que el acceso a genéricos sólo estaría permi-

tido a los países menos adelantados (que son alrededor de la tercera parte del total de los países atrasados); y, por si todo lo anterior fuera poco, al prohibir en general la exportación de genéricos establecía que esos países tendrían que producir sus propios medicamentos genéricos, lo que obviamente en el caso de muchos de ellos no ocurrirá en un futuro razonablemente cercano tratándose de economías que no poseen industria farmacéutica nacional.

Además de la total falta de avance en esos distintos puntos, otra fuente potencial de conflicto en Cancún se derivó de la intención de los países desarrollados de incorporar nuevos temas a la actual Ronda de Negociaciones, y con ello nuevas exigencias de apertura y nuevos ámbitos de regulación supranacional hacia las economías del sur. Los intentos por agregar a la negociación los temas de inversiones, competencia, transparencia en la contratación pública y facilitación del comercio, llamados Temas de Singapur por haberse dado los pasos iniciales para su incorporación en la Primera Reunión Ministerial de la OMC que se realizó en diciembre de 1996 en esa ciudad, provocaron un fuerte rechazo por parte de los países atrasados, muchos de los cuales consideran que en todo caso lo prioritario es resolver los problemas pendientes antes de avanzar hacia otros ámbitos de negociación.

Sin embargo, tanto los Temas de Singapur como la mayoría de los otros puntos de conflicto que hemos señalado ni siquiera llegaron a ser tratados en Cancún, ya que la reunión ministerial no logró rebasar el primer tema de la agenda programada. Ese primer tema, el de los subsidios agrícolas, resultó suficiente para dar al traste con la reunión, enfrentándose en torno a él dos posturas claramente opuestas: por una parte EE.UU. y la Unión Europea, y por la otra el llamado Grupo de los 20, en el cual confluyen países con muy diversos intereses y cuyos principales integrantes son Brasil, India, China y Sudáfrica².

En lo que respecta al ALCA, el estallido de problemas es más reciente que en la OMC, remontándose no más atrás del año 2003. Hasta ese entonces, el proceso de negociación parecía avanzar sin grandes dificultades, aunque a un ritmo lento y con una progresiva acumulación de diferencias no resueltas, pero en el período reciente distintos países de América Latina y El Caribe comenzaron a endurecer sus posiciones, en lo cual influyeron tanto el propio desenvolvimiento de las negociaciones y las divergencias que de él iban resultando como otros factores, de los cuales interesa mencionar dos.

Por un lado, los cambios de gobierno ocurridos primero en Venezuela y luego en Brasil y Argentina han traído consigo una modificación en las posiciones oficiales de esos países —y en parte también de Bolivia— respecto del ALCA, llevando a mayores niveles de

cuestionamiento de los principios generales en que se sustenta la creación del Área, de los grados en que dicha creación responde unilateralmente a los intereses y necesidades estadounidenses, y de los impactos que su puesta en marcha traería no sólo sobre distintos sectores sociales, industrias y regiones, sino también sobre las capacidades estatales de regulación del funcionamiento económico interno. Como consecuencia de lo anterior, han sido esos países los que se han constituido en uno de los polos de la negociación, en tanto que en el otro polo se encuentran EE.UU. y los países con los que éste tiene firmados tratados de libre comercio.

Por otro lado, algunos gobiernos se han visto presionados por el rechazo que el ALCA ha venido generando en las sociedades de la región, el cual abarca un abanico que va desde sectores empresariales preocupados por las consecuencias que les acarreará la competencia con las transnacionales estadounidenses hasta distintos grupos sociales que califican negativamente el tipo de relaciones que a través del ALCA intentan imponerse en el ámbito hemisférico y la notoria pasividad con que el proyecto estadounidense fue asumido por los gobiernos. Todo ello se ha expresado en crecientes muestras de inconformidad hacia la eventual puesta en marcha del Área por parte de los más diversos sectores, dando lugar además a análisis críticos sobre el proceso de negociación, acompañados en algunos casos por propuestas alternativas acerca del tipo de relación hemisférica que debería impulsarse, desde la perspectiva de los intereses ya no de los grandes capitales del hemisferio sino de la inmensa mayoría de los habitantes de los países involucrados.

No por casualidad los conflictos afloraron con fuerza en la última etapa de las negociaciones, iniciada en noviembre de 2002, cuando correspondía arribar a un texto único que debería estar listo a fines de 2004, incluyendo la definición precisa de los compromisos de apertura asumidos por cada país, así como de los ritmos y modalidades bajo los cuales dicha apertura se iría concretando una vez que el ALCA entrara en vigor.

Lejos de acercarse a ese texto único, lo que implicaba la desaparición de los casi 5.300 pares de corchetes colocados en las palabras, párrafos o artículos en los que no había acuerdo en el borrador más reciente del ALCA, ocurrió prácticamente lo contrario, y conforme avanzó esa etapa final los desacuerdos se fueron reiterando, haciéndose evidente que no se lograría concretar el ALCA en las fechas y con los contenidos que pretendía el gobierno de EE.UU.

Ante esa evidencia, desde mediados de 2003 –en que se realizó la XIV reunión del CNC en San Salvador, del 8 al 11 de julio– se empezaron a buscar fórmulas alternativas para destrabar las negociaciones, acordándose en la Reunión Ministerial celebrada

***“... la red
de tratados
[bi o plurilaterales]
que EE.UU.
pretendería construir
es incluso
más peligrosa
que el propio ALCA,
porque con ella
se pulveriza
la posibilidad
de los países
de la región
para negociar
en bloque
y con posturas
comunes”***

en Miami en noviembre de ese año la modalidad del ALCA de dos niveles: en el primer nivel, para sacar de la negociación propiamente hemisférica algunos de los puntos conflictivos, se reducirían los compromisos para el conjunto del Área a una suerte de “mínimo común” que abarque aquellos contenidos que los treinta y cuatro países participantes están dispuestos a aceptar; y en el segundo nivel, los países interesados podrían acordar “beneficios y obligaciones adicionales” a través de negociaciones bilaterales o “plurilaterales”.

Sin embargo, el fracaso tanto de la siguiente reunión del CNC, iniciada en Puebla tres meses después y suspendida hasta este momento sin fecha de reanudación, como de las reuniones “informales” posteriores realizadas en Buenos Aires en marzo y abril de 2004, demostró que la modalidad de “dos niveles” no ha logrado resolver las diferencias previamente existentes, las cuales han continuado concentradas básicamente en dos ámbitos.

Por una parte, y al igual que en la OMC, el principal punto de desacuerdo es el de agricultura, por los elevados subsidios que reciben de su gobierno los productores estadounidenses, que en la práctica no sólo imposibilitan a los agricultores del resto del hemisferio competir en ese mercado, sino que además amenazan llevarlos a la ruina al no poder competir en su propio mercado interno con los productos subsidiados provenientes de aquel país. Hasta la Ministerial de Miami, en el proceso de negociación existían dos posiciones irreconciliables sobre esos subsidios: de un lado, EE.UU. proponiendo no avanzar en el tema dentro del ALCA hasta tanto no se resuelva lo referido al punto en el ámbito de la OMC; del otro lado, distintos países, y sobre todo el MERCOSUR, exigiendo compromisos claros de reducción de los subsidios estadounidenses. Si bien desde Miami ya no se mantiene dicha exigencia por parte del MERCOSUR, el conflicto persiste por la negativa estadounidense a negociar medidas que neutralicen los efectos de los subsidios en sus exportaciones dirigidas hacia el resto del hemisferio.

En un segundo nivel, y también a semejanza de lo que ocurre en la OMC, otros temas conflictivos han sido sobre todo los de inversión, compras gubernamentales y derechos de propiedad intelectual, así como el de servicios, y respecto de ellos ocurre lo contrario que con los subsidios agrícolas: en este caso EE.UU. ha exigido su inclusión y el establecimiento de compromisos ambiciosos, en tanto que los países ubicados en el otro polo han planteado no asumir niveles importantes de compromiso a nivel hemisférico, ya sea de manera definitiva o al menos en espera de que el marco de negociación de dichos temas se resuelva en el ámbito multilateral.

En suma, y en lo que respecta al ALCA, ese componente de la estrategia económica de EE.UU. hacia el hemisferio atraviesa hoy por problemas que no sólo están retrasando la puesta en marcha del Área y están obligando a redefinir algunas de sus modalidades y contenidos, sino que incluso cuestionan seriamente su viabilidad, más aún si se tienen presentes los límites a que se enfrenta el gobierno de ese país por las próximas elecciones presidenciales.

Sin embargo, incluso una eventual derrota del proyecto ALCA dejará intacto, o incluso reforzará, el otro componente de esa estrategia hemisférica, los tratados bilaterales o con grupos de países de la región. Ese componente, que con la existencia del TLCAN acompañó el nacimiento del proceso ALCA, mantuvo su vigencia en los años siguientes mediante la puesta en vigor del Tratado de Libre Comercio con Chile el 1º de enero de 2004 y con la negociación del Tratado con Centroamérica, concluida a inicios de 2004 y actualmente en proceso de ratificación.

Si a ello se agrega que precisamente durante la reciente Reunión Ministerial de Miami el gobierno estadounidense anunció su intención de iniciar negociaciones con República Dominicana, Panamá, Ecuador, Perú y Colombia (con varios de los cuales comenzaron posteriormente "conversaciones informales"), resulta claro que para ese gobierno la opción de los tratados bi o plurilaterales no sólo ha acompañado al proceso del ALCA sino que ha adquirido más fuerza a medida que dicho proceso fue complicándose, y que ante un eventual fracaso del ALCA esa opción adquirirá una máxima prioridad.

Si bien para EE.UU. la mencionada opción es menos abarcadora que el ALCA, con la posibilidad de que varias de las principales economías de la región queden fuera de su red de tratados, por otra parte tiene la ventaja de que con ella el gobierno estadounidense tendría las mejores condiciones para ir imponiendo sin cortapisas la totalidad de sus principios e intereses en cada uno de los tratados, tal como hasta ahora ha ocurrido con México, Chile y Centroamérica.

En ese sentido, la red de tratados que EE.UU. pretendería construir es incluso más peligrosa que el propio ALCA, porque con ella se pulveriza la posibilidad de los países de la región para negociar en bloque y con posturas comunes, a lo que habría que agregar las muestras de aprobación e incluso de agradecimiento con que los gobiernos hasta ahora “elegidos” han recibido los avisos de su inclusión en la red. Bajo esas condiciones, Estados Unidos tendría todas las cartas a su favor, suponiendo, claro está, que los gobiernos llamados a integrarse a la red de tratados puedan seguir actuando con los ojos y el corazón puestos en el Norte y sin rendir cuentas ni responder a los reclamos e intereses de las poblaciones que representan.

Notas

1 Según estimaciones de la OCDE, para 2002 el monto total de ayuda otorgada por esos países a sus productores fue de 318 mil millones de dólares, de los cuales el 35% correspondió a la Unión Europea, el 28% a EE.UU. y el 17% a Japón.

2 El G-20 ha sufrido varios cambios en el número de miembros, lo que ha llevado a que su nombre haya variado a Grupo de los 22, Grupo de los 21 y Grupo de los 20 *plus*. Los países que han participado en ese grupo (no todos de manera simultánea) son Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Egipto, El Salvador, Filipinas, Guatemala, India, Indonesia, México, Nigeria, Pakistán, Paraguay, Perú, Sudáfrica, Tailandia y Venezuela. Con posterioridad a la reunión ministerial de Cancún, y como resultado de las presiones ejercidas por el gobierno estadounidense, abandonaron el grupo Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Colombia y Perú.

Mesoamérica en la hora de la resistencia popular

Carlos G. Aguilar S.*

** Investigador del Departamento Ecuménico de Investigaciones, Costa Rica. Miembro de la Alianza Social Continental, del Bloque Popular Centroamericano y del secretariado ejecutivo del Encuentro Popular en su país.*

Esta región que tiene no sólo componentes geográficos sino culturales e históricos comunes viene sufriendo en los últimos veinticinco años el avance de propuestas neoliberales y militares, que hacen una sola causa a favor de las oligarquías locales y el capital transnacional. Asimismo, desde el Sur-Sureste de México (Chiapas), con el levantamiento indígena zapatista y la lucha contra el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), se ha venido avanzando en la organización de las fuerzas populares que enfrentan las estrategias básicas del imperialismo en su fase actual: militarización y control de mercados mediante la ideología del libre comercio. El saqueo de recursos, la destrucción del medio ambiente, el irrespeto a la identidad y autonomía de la comunidades autóctonas, y la apropiación de riquezas por medios militares han incluido matanzas colectivas y asesinatos selectivos en los principales focos de resistencia y dignidad que crecen en la región.

En este artículo nos interesa destacar al menos cuatro amenazas que se plantean en el nivel más inmediato, y mostrar cómo se han estructurado alrededor de estos retos la resistencia y el camino de las alternativas populares. Todos estos problemas deben comprenderse en el marco de una serie de desigualdades, condiciones de explotación y miseria, así como de intervenciones militares y políticas de los diferentes gobiernos de Estados Unidos, que ya presentan rasgos históricos y estructurales en la región. Por lo tanto, toda lucha que se desarrolla frente al carácter más inmediato de estas amenazas es a la vez una posibilidad abierta de que las fuerzas populares avancen en la transformación de las condiciones estructurales que generan la pobreza y el subdesarrollo.

a) Las negociaciones en la OMC

El primero de estos retos son las negociaciones que se desarrollan en la Organización Mundial de Comercio (OMC) y que tienen serias consecuencias para la región en materia de propiedad intelectual, negociación de servicios e inversiones, así como en agricultura. Luego de las negociaciones iniciadas en el marco de la Ronda de Doha, con la declaración sobre Derechos de Propiedad Intelectual del Acuerdo conocido como ADPIC y sobre la salud pública, una nueva ola de privatizaciones se ha levantado en Centroamérica, como presenciamos en el caso salvadoreño. Por otra parte, en los últimos años sectores como la banca, la electricidad y el turismo han sido espacios desde donde se ha promovido la apertura, privatización e intervención de las corporaciones.

Un claro ejemplo de los problemas que significan estas negociaciones, sobre todo en materia agrícola, lo tenemos en los acontecimientos recientemente ocurridos durante y después de la Ronda de Cancún (septiembre 2003), en donde las posiciones del Grupo Cairns, la constitución del Grupo de los 21 (G-21) y el tema de los subsidios y ayu-

“... las distintas organizaciones en Mesoamérica continúan vigilantes y alertas por las consecuencias que estos acuerdos tienen para sus comunidades, sobre todo si se considera que los mismos vienen sirviendo de piso para las negociaciones del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA)...”

das internas a la agricultura en relación con EE.UU. y la Unión Europea (UE) dieron al traste con buena parte de los posibles avances respecto de los acuerdos de Doha y suscitaron la intervención de personeros del gobierno de EE.UU. –Robert Zoellick– para exigir la salida de los países centroamericanos, sobre todo El Salvador y Costa Rica, de la alianza del G-21. Estas negociaciones, que avanzan en la liberalización de servicios y en materia agrícola, además presentan serios problemas derivados del intento por hacer prevalecer los conocidos temas de Singapur, que incluyen cuestiones como inversiones, compras gubernamentales y políticas de competencia, entre otros.

Aunque gracias a la rápida acción de diversas organizaciones en todo el mundo y a la falta de acuerdos en el plano internacional, principalmente entre EE.UU. y la UE, las negociaciones de la OMC se encuentran en estos momentos en una fase de estancamiento; las distintas organizaciones en Mesoamérica continúan vigilantes y alertas por las consecuencias que estos acuerdos tienen para sus comunidades, sobre todo si se considera que los mismos vienen sirviendo de piso para las negociaciones del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y de los acuerdos bilaterales.

b) El Plan Puebla-Panamá

La segunda amenaza apareció formalmente en el año 2001 y fue presentada por el gobierno de Vicente Fox, aunque auspiciada por los organismos financieros internacionales. En el marco de los acuerdos del Mecanismo de Tuxtla, el Plan Puebla-Panamá (PPP), iniciativa en la que convergen las estrategias de desarrollo para la Transformación y Modernización de Centroamérica en el siglo XXI y para el Sur-Sureste de México, se presenta desde entonces hasta el día de hoy como una serie de iniciativas (ocho en total) para lograr sobre todo en áreas como telecomunicaciones, sector eléctrico e infraestructura de puertos, carreteras y aeropuertos, dotar a la región de la base mínima para impulsar el “desarrollo y el crecimiento económico”, es decir, favorecer las operaciones e inversiones de las grandes corporaciones transnacionales y los grupos empresariales locales. Este plan reúne una serie de iniciativas para el control de recursos y bienes en la región, entre ellas el Mega Proyecto del Istmo, aparecido en realidad en 1997, que intenta aprovechar las condiciones geográficas propicias para la construcción de un canal interoceánico seco en el istmo de Tehuantepec; el Plan Marcha Hacia el Sur, que procura la explotación masiva de la fuerza laboral –mano de obra barata– constituyendo *clusters* maquiladores en toda la región; el Corredor Biológico Mesoamericano, que significa la privatización de la biodiversidad; el Plan Energético para Las Américas, que busca la privatización de los hidrocarburos regionales, sobre todo petróleo y gas; y el Sistema de Integración Eléctrica para América Central, que amenaza nuevamente con la privatización total de la industria eléctrica.

Por otra parte, esta propuesta se desarrolla encubriendo el papel fundamental de ingerencia política que realizan los Organismos Financieros Internacionales (OFI), principalmente el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y los planes de intervención militar que se implementan de manera paralela para garantizar la protección y control de las obras que incluyen bancos de bioprospección (robo de material bio-genético por parte de las corporaciones), oleoductos, gasoductos y corredores viales por los que transitan las mercancías de las compañías transnacionales.

Un ejemplo muy palpable de estas políticas de control militar puede verse en el desarrollo del Plan Maya-Jaguar (Guatemala) y en el intento por instalar en Costa Rica la Escuela para el Cumplimiento de Ley (ILEA, por sus siglas en inglés), que fuera derrotada por las organizaciones sociales y algunas fuerzas partidarias en el país centroamericano, dando un duro revés a la administración Bush. Quizá el ejemplo más concreto se encuentre en la conocida Operación Nuevos Horizontes en marcha en varios de los países centroamericanos (Guatemala, El Salvador y Honduras), que bajo el pretexto de la lucha contra el narcotráfico favorece la intervención militar de EE.UU. También, y más recientemente, como parte de la política de agresión desarrollada por el gobierno de EE.UU., se reclutaron fuerzas militares de estos países centroamericanos para ser enviadas al ejército de ocupación en Medio Oriente (fundamentalmente Irak).

Un aspecto esencial que no debe perderse de vista del PPP es su íntima relación con el desarrollo del ALCA y del Tratado de Libre Comercio con EE.UU. En este sentido, en el año 2001, cuando los presidentes de la región firmaron el acuerdo, dejaron manifiesto el compromiso: "... para avanzar en la materialización de un mayor intercambio comercial no discriminatorio de bienes y servicios entre los países mesoamericanos mediante la ampliación e implementación de los acuerdos de libre comercio suscritos y por suscribir a futuro, y nuestro apoyo al proceso de apertura comercial hemisférica que debe culminar en el Área de Libre Comercio de las Américas (...)”¹.

Como se puede observar, las amenazas de este Plan a la región mesoamericana son ampliamente inclusivas de sectores estratégicos, y las ocho iniciativas de que se compone cubren tal espectro de intereses que no es casual que buena parte de la resistencia empezara organizándose en el Foro Mesoamericano teniendo como motivación central el desarrollo de las mismas. Este espacio de convergencia de organizaciones de base de toda Centroamérica, incluyendo Panamá y recientemente Belice así como grupos representativos del Sur-Sureste de México, que naciera en las experiencias de encuentro en Tapachula (México, 2001) y Xelajú (México, 2001), ha permitido empezar a articular los grupos y sectores que se oponen al libre comercio y a las estrategias de militarización, avanzando en el plano de la definición de medidas para enfrentar a las corporaciones transnacionales así como para impulsar proyectos productivos alternativos

surgidos desde la práctica y reflexión de las comunidades campesinas e indígenas. Este Foro, constituido como espacio de convergencia y articulación para la construcción de un movimiento mesoamericano de resistencia, ha venido trabajando en iniciativas de movilización, pero también de organización de paneles, mesas de trabajo, investigación conjunta y estrategias frente a temas como los mencionados megaproyectos (por ejemplo el Corredor Biológico Mesoamericano) y la defensa de los recursos naturales (lo que incluye el tema de soberanía alimentaria y todo lo relacionado con agua, tierra y territorio), las propuestas de los pueblos indígenas y los derechos económicos, sociales y culturales frente a la globalización neoliberal. Además se ha avanzado en las discusiones sobre formas alternativas de comercio y de economía campesina, así como sobre el tema de poder local y gobiernos municipales. En la última versión los ejes incluyeron sectores específicos como mujeres, afrodescendientes y jóvenes, así como estrategias frente a la militarización, las privatizaciones y los derechos laborales y ambientales frente al tema de las inversiones.



Hasta el momento, entre los logros más importantes debemos destacar la coordinación que se ha logrado en la región para desarrollar acciones conjuntas y cómo la misma está potenciando el proceso de una integración popular creciente que contrarresta la propuesta neoliberal de integración basada en acuerdos de libre comercio.

La quinta reunión a desarrollarse en San Salvador en el mes de julio del presente año espera la concurrencia de más de mil representantes de unas ochocientas organizacio-

nes y estará precedida por la realización de una serie de foros temáticos y sectoriales entre los que destacan: el campesino, el sindical, el de mujeres, el de jóvenes y el de biodiversidad, y contra las represas hidroeléctricas. Sin lugar a dudas se trata de la experiencia de resistencia más importante en la región en los últimos quince años y el mayor esfuerzo por la construcción de alternativas populares que experimentamos desde la imposición del modelo neoliberal.

c) El Área de Libre Comercio de las Américas

El otro gran reto que afrontan los pueblos de Mesoamérica son las negociaciones del ALCA, proceso en que los países centroamericanos se encuentran inmersos desde los inicios de las mismas en 2001.

Si bien es cierto que las negociaciones sobre el ALCA, a partir de la Reunión Ministerial de Miami el año pasado, se modifican y estancan relativamente por las diferencias que existen entre los países del Bloque MERCOSUR y por el importante papel desempeñado por los negociadores venezolanos, también es cierto que el nuevo esquema (ALCA a la carta) de dos pisos o niveles (uno que incluye temas para todas las partes y otro de elección entre países y/o bloques con EE.UU.) dejó en una situación de mayor vulnerabilidad a los pequeños países o a aquellos en los cuales existe una correlación de fuerzas menos favorable para los movimientos sociales. Es el caso de los países centroamericanos, del Caribe y Colombia, por ejemplo.

No obstante, el trabajo derivado de las movilizaciones, foros, investigaciones y cooperación en toda la región, desarrollado para comprender los impactos de las políticas de libre comercio, favoreció que en 2002, en Ecuador, en el marco de la Jornada Continental contra el ALCA, se sentaran las bases de una organización (Bloque Popular Centroamericano) que agrupa las principales tendencias en contra de los planes de Libre Comercio para el istmo centroamericano. Hasta el día de hoy, y dentro de las acciones concertadas en espacios de debate de la importancia de los sucesivos Encuentros Hemisféricos contra el ALCA (La Habana, 2002-2004) organizados entre otros por la Alianza Social Continental (ASC) y la Campaña contra el ALCA, el Bloque Popular Centroamericano ha venido cumpliendo la representación de estas organizaciones que se cuentan entre las más combativas e importantes de la región. Este bloque, surgido de la confluencia de varias redes nacionales (Sinti Techan en El Salvador, Coordinadora Nacional Indígena Campesina de Guatemala, Encuentro Popular de Costa Rica, Bloque Popular Hondureño y Centro de Investigaciones Internacionales de Nicaragua), fue el resultado de un trabajo que se venía articulando desde la coordinación del Foro Mesoamericano y que cristalizó en las acciones de Quito (Ecuador),

“... el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos [...] lejos de traer desarrollo, competitividad y empleo para los países, como destacan sus promotores, se centra en el golpe de gracia a la agricultura de la región, así como amenaza con volver irreversibles los efectos provocados por los programas de ajuste estructural...”

en donde se logró tener presencia de las partes para lanzar una declaración conjunta e iniciar el camino de una organización que tuviera como principales objetivos la lucha contra el libre comercio y contra el sistema capitalista. Este esfuerzo cuenta en la actualidad con una coordinación regional y con presencia organizativa en espacios como el Consejo Ejecutivo de la Alianza Social Continental, además de que sobre buena parte de sus organizaciones descansa, junto con la Convergencia de Movimientos de los Pueblos de las Américas (COMPACTA), una red hemisférica articulada con grupos y redes en toda la región), la organización y desarrollo de los Foros Mesoamericanos que señalamos anteriormente.

Por otro lado, teniendo como referente la propuesta presentada en la II Cumbre de los Pueblos de las Américas en 2001 por el Comité Coordinador de la Alianza Social Continental, conocida como *Alternativas para las Américas*, se ha avanzado en la discusión de propuestas frente al libre comercio, particularmente al ALCA, desde una óptica de los pueblos. Las más recientes incluyen la realización del primer encuentro por las alternativas populares en donde participaron representantes de Honduras, Costa Rica y El Salvador, y la reunión internacional del Foro Mundial de las Alternativas (FMA) celebrada en Costa Rica.

Todos estos hechos dan constancia de una intensa actividad en la región y del trabajo permanente que las organizaciones realizan para evitar que algunas de las cuestiones con que se amenaza desde la OMC sigan siendo negociadas y ampliadas en el marco del ALCA, y que ahora adquieren particular relevancia al haberse finalizado las negociaciones oficiales del Tratado de Libre Comercio Centroamérica-Estados Unidos.

d) Los tratados de libre comercio

Frente a la crisis experimentada por el fracaso de las negociaciones en la OMC y el ALCA, el gobierno de EE.UU. ha



© Patricio Realpe - ANPE

incrementado su presión por la firma de acuerdos bilaterales. Para el caso de la región centroamericana, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (CAFTA, en sus siglas en inglés), cuya negociación se inició formalmente en enero de 2003 y finalizó en tiempo récord en los primeros meses de 2004, se ha constituido en el principal foco de resistencia. Según análisis realizados por el Bloque Popular Centroamericano y coaliciones de EE.UU. que se oponen al tratado, éste, lejos de traer desarrollo, competitividad y empleo para los paí-

ses, como destacan sus promotores, se centra en el golpe de gracia a la agricultura de la región, así como amenaza con volver irreversibles los efectos provocados por los programas de ajuste estructural, sobre todo en materia de privatizaciones, de liberalización comercial y de inversiones. Este acuerdo incluso va mucho más allá que las negociaciones mantenidas en la OMC en materia de propiedad intelectual, sobre todo en el caso de la producción de medicamentos genéricos y patentes (por ejemplo, obliga a la ratificación del Convenio Internacional para la Protección de Variedades Vegetales, UPOV-91), y en el caso de la agricultura es de destacar que el mismo fue negociado sin presionar a EE.UU. para que modificara su sistema de ayudas internas a la producción agrícola (ayuda que captan mayoritariamente las grandes compañías transnacionales). Como bien señala un estudio del especialista Dennis Olson (2004), este tratado: "... amplía el mecanismo de expropiaciones contenido en el capítulo 11 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) a los países centroamericanos. Esta ampliación permite a los inversores privados demandarle a un gobierno compensaciones y la exención de las regulaciones, al alegar que ciertas leyes o medidas regulatorias tienen el efecto de "expropiar" las ganancias que ellos estiman recibirían con su inversión".

En aspectos como compras gubernamentales reproduce las limitaciones impuestas por el Acuerdo de Adquisiciones Gubernamentales de la OMC y lo negociado en el TLCAN.

Por otra parte, este acuerdo favorece las políticas vinculadas al tema conocidas como *trato nacional*, que obligan a cualquier Estado contrayente a ofrecer iguales condiciones de oportunidad y funcionamiento sea esto entre las empresas nacionales o las grandes corporaciones. Además el marco de aplicación no sólo corre para el gobierno central, sino que implica al ámbito municipal o a gobiernos locales más relacionados en el caso centroamericano con posibilidades de gobiernos progresistas e independientes de las fuerzas partidarias tradicionales.

En el tema de inversiones conserva tanto los aspectos de trato nacional como el mecanismo de *nación más favorecida* y la *cláusula inversionista-Estado*, que en el tema de expropiaciones indirectas llega al punto de que "... faculta a los inversionistas extranjeros a demandar ante tribunales internacionales corporativos a cualquier Estado cuando éste aplique políticas públicas que a juicio del inversionista extranjero puedan afectar ganancias inexistentes, pero que proyectan recibir en el futuro" (Moreno, 2004).

Todos estos aspectos, conjuntamente con la apertura que se promueve en el sector de servicios –destacan los casos de telecomunicaciones y seguros en Costa Rica– y el impulso a las leyes y medidas de flexibilización laboral para el beneficio de las corporaciones transnacionales, han provocado un cuadro de acciones que recientemente la Alianza por un Comercio Responsable de Estados Unidos resumiera destacando un conjunto de actividades desde marzo de 2002 hasta la actualidad que incluye foros, declaraciones e intensas movilizaciones en toda la región (Hansen-Kuhn, 2004). La mayor parte de las mismas han congregado a organizaciones de trabajadores, campesinas y redes multisectoriales, destacándose el intenso trabajo frente al tema de las privatizaciones y las medidas de destrucción del agro y de las conquistas de los trabajadores. Los grupos de mujeres también han venido jugando un papel fundamental en esta lucha, así como las comunidades indígenas de toda la zona.

Algunas campañas, como "Centroamérica NO está en venta", han logrado articular también a los sectores ecologistas, así como las luchas contra la industria de minería, de exploración petrolera, la construcción de represas hidroeléctricas y embalses y la defensa de recursos como el agua y los bosques.

Actualmente la lucha contra el libre comercio continúa y crece. Es en este sentido que se articulan las distintas experiencias de resistencia a los planes de privatización, flexibilización laboral y destrucción de la soberanía alimentaria (que incluye la lucha contra las plantaciones de transgénicos). La situación de la región es alarmante en muchos aspectos (sociales y económicos), pero quizá lo más significativo es que el incremento de la organización y de la resistencia está deparando espacios de esperanza y ha ayudado al crecimiento de las alternativas en Mesoamérica.

Bibliografía

AA.VV. 2003 "El 'descarrilamiento' de la OMC y perspectivas frente al ALCA", en *OSAL* (Buenos Aires: CLACSO) Año IV, Nº 11, Mayo-agosto.

Aguilar, Carlos G. 2003 *Los (mal) Tratados de Libre Comercio* (Costa Rica: DEI).

Barreda, Andrés 2002 *Economía Política del Plan Puebla-Panamá* (México: ITACA).

Bartra Armando (coord) 2001 *Mesoamérica: Los ríos profundos. Alternativas plebeyas al Plan Puebla-Panamá* (México: Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio-RMALC et al.).

Hansen-Kuhn, Karen (comp) 2004 *Central Americans Demonstrate against CAFTA* (Alliance for Responsible Trade) <www.developmentgap.org>

Khor, Martin 2003 *¿Qué hacemos con la OMC? Un programa de cambios para el comercio global* (Madrid: Icaria/Intermón Oxfam).

Marchetti, Peter 2002 "Centroamérica: ¿Conejillo de Indias del ALCA?", en *Revista Envío* (Nicaragua) Año 21, Nº 243.

Memoria del Foro Panamá Movimientos Sociales y Compromiso 2003 (Cáritas-Panamá) Febrero.

Memoria del III Foro Mesoamericano Frente al Plan Puebla Panamá: El Movimiento Mesoamericano por la Integración Popular 2002 (Managua).

Memoria del IV Foro Mesoamericano por la Autodeterminación y Resistencia de los Pueblos 2003 (Tegucigalpa, Honduras) <<http://www.encuentropopular.org/areas/foro/>>

Moreno, Raúl 2004 "Análisis de las implicaciones del TLC en Inversiones", en *Por qué decimos NO al TLC. Análisis crítico del texto oficial* (Bloque Popular Centroamericano/Alliance for Responsible Trade/Alianza Social Continental) <www.encuentropopular.org>

Olson, Dennis 2004 "Análisis de las implicaciones del TLC en el Sector Agropecuario", en *Por qué decimos NO al TLC. Análisis crítico del texto oficial* (Bloque Popular Centroamericano/Alliance for Responsible Trade/Alianza Social Continental) <www.encuentropopular.org>

Nota

1 Véase la Declaración Conjunta de la cumbre extraordinaria de los países integrantes del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla, El Salvador, 15 de junio de 2001. Disponible en <www.encuentropopular.org>

Los movimientos sociales del Cono Sur contra el mal llamado “libre comercio”

Gonzalo Berrón*
y Rafael Freire**

* *Coordinador
de la Alianza Social
Continental (ASC).*

** *Secretario General
de la Coordinadora
de Centrales Sindicales
del Cono Sur (CCSCS)
y Director Ejecutivo
de la Central Única
dos Trabalhadores (CUT).*

Los principales movimientos y organizaciones sociales de los países integrantes del MERCOSUR avanzan hacia estrategias comunes de lucha contra el libre comercio. Este avance, en algunos sentidos inédito pues no es larga la historia de articulación regional de todos los movimientos –sí de algunos, destacándose el movimiento sindical–, muestra una realidad de ritmos diferentes en cada país así como, a la vez, un proceso regional de consolidación de la lucha.

Mientras articulaciones sociales pioneras como las de Brasil permanecieron, durante 2003 y lo que va de 2004, en una situación de expectativa y observación ante el gobierno Lula –con acciones importantes, pero sin la intensidad que éstas asumieron a lo largo de 2002 y en los años anteriores frente al gobierno de Fernando Henrique Cardoso–, en el caso de Paraguay y Argentina las campañas contra el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) se consolidaron y realizaron sus “consultas”, poniendo de manifiesto con ello la consolidación

organizativa y política de los frentes sociales que luchan contra el libre comercio. Por otra parte, en Uruguay la resistencia a las privatizaciones marcó el tono de la oposición al ALCA, sin que esto implicara la consolidación de un bastión común y unitario de las organizaciones sociales.

Estos procesos se dan en un contexto signado por un lado por lo que es entendido como una victoria, a saber, el estancamiento de las negociaciones del ALCA; pero por el otro por la amenaza pendiente y los desafíos planteados hacia el futuro. En este sentido, la posición de los gobiernos de la región en el escenario global de las negociaciones comerciales dio, a partir de la asunción de Lula y Kirchner, un giro de ciento ochenta grados, adoptando posiciones más o menos firmes de defensa de los intereses nacionales y de la capacidad de un desarrollo autónomo. Esto se expresó en el nacimiento del Grupo de los 20 (G20) a escala global y, en la arena continental, con el viraje de las negociaciones del ALCA hacia un formato del acuerdo que cobró el nombre de ALCA light. Sin embargo, el lado oscuro de este posicionamiento es el doble juego de los gobiernos, siempre en el límite entre, por un lado, sostener posiciones soberanas y, por el otro, ceder a la presión para que los acuerdos avancen, con los riesgos y concesiones que esta opción conlleva. En esa encrucijada, los movimientos y organizaciones sociales tienen el desafío de mantener la presión y evitar que la balanza se tuerza hacia el lado de los sectores de la economía proclives a la apertura del modelo "primarista" de las economías de la región.

El libre cambio

Así como cuando, durante los años noventa, las resistencias sociales se concentraron y consolidaron contra el llamado "modelo neoliberal" en la escala nacional, sobre el final de esa década y ya en los primeros años de la actual, estas resistencias se concentran, a nivel internacional, en detener la avanzada neoliberal expresada ahora en la denominada "ola de libre comercio". Con todo, la comprensión de esto como un fenómeno complejo sólo será alcanzada ante la evidente emergencia de más y más acuerdos de "libre comercio" y la identificación de patrones y contenidos comunes en todos ellos. En esta perspectiva, así como el combate al ALCA fue lo que signó la entrada de amplios movimientos y organizaciones sociales en esa fase de la lucha, las negociaciones en el seno de la OMC y, más recientemente, los acuerdos con la Unión Europea dieron la marca y posibilitaron la comprensión total de la avanzada de las corporaciones y los gobiernos afines.

La constatación de esta avanzada múltiple entró plenamente a la estrategia de las resistencias sociales luego del II Encuentro Hemisférico de Lucha contra el ALCA realizado en La Habana, Cuba. En noviembre de 2002 se explicitó por primera vez en un plan de acción que la vigilancia sobre las negociaciones no se debe detener en el ALCA sino que también

“... durante los años noventa, las resistencias sociales se concentraron contra el ‘modelo neoliberal’ en la escala nacional, [...] ahora estas resistencias se concentran, a nivel internacional, en detener la avanzada neoliberal expresada en la denominada ‘ola de libre comercio”

debe considerar “las negociaciones en la OMC, los Acuerdos Regionales (Plan Puebla Panamá, *Andean Trade Promotion and Drug Eradication Act*-ATPDEA, CAFTA), los Tratados Bilaterales Comerciales y de Inversiones, y los planes de militarización (Plan Colombia e instalación de bases militares) y de endeudamiento externo”. Para señalar más adelante que “los contenidos del ALCA también están presentes en la nueva ronda de negociaciones de la OMC que se pretende relanzar en la V Cumbre de Ministros a realizarse en Cancún-México en septiembre de 2003”.

En enero de 2004 esta percepción se consolidó, cristalizándose en el objetivo de “luchar contra los TLCs bilaterales y subregionales (CAFTA, Países Andinos-EE.UU., UE-América Latina, y otros)”, y en el planteo estratégico de, para enfrentar esta realidad, “promover y fortalecer articulaciones subregionales que conectan diferentes actores (movimientos sociales, parlamentarios/as, juristas, académicos/as) para coordinar acciones y estrategias de resistencia al ALCA y los TLCs”¹.

Los movimientos y organizaciones sociales del MERCOSUR entraron recién durante este año a este escenario de complejización de las luchas porque en la región, a diferencia de otras como Centroamérica, la Comunidad Andina de Naciones, México y Chile, que tienen o negocian acuerdos bilaterales con EE.UU., la amenaza de un acuerdo que aglutine a las campañas en el marco regional sólo aparecerá nítidamente en el último período con la aceleración de las negociaciones del MERCOSUR con la Unión Europea.

En marzo de 2004, representantes de las campañas de los cuatro países más Bolivia se reunieron en Buenos Aires para protestar contra una reunión “informal de negociación” del ALCA y descubrieron que, coincidentemente, se realizaba en esos días una rueda de negociación del acuerdo UE-MERCOSUR. El fracaso en destrabar las negociaciones que signó a esta reunión contrastó con las declaraciones públicas de los gobiernos de la región que



referían al optimismo y apuro en concluir un acuerdo con la Unión Europea. La identificación de contenidos semejantes al ALCA en la parte comercial de este acuerdo puso en guardia y aglutinó a las campañas que rápidamente lo incorporaron a la agenda regional de luchas y fue objeto de la primera declaración conjunta de los cuatro países.

Por otra parte, en el plano nacional, las campañas plenamente concientes de los riesgos de cada negociación se debaten para conciliar la acumulación en torno al eje del ALCA –y el hecho de que ya existe, a nivel de la población, un grado cierto de conocimiento respecto del tema, al menos de la palabra, lo que ya significa un avance– con una lucha que se vuelve inmensa, tanto por sus diferentes frentes de batalla (ALCA, OMC, Deuda Externa, UE-MERCOSUR, privatizaciones) como por el complicado y en apariencia distante contenido de los mismos.

La situación de las campañas

Argentina

El proceso de la campaña contra el ALCA en Argentina se consolidó contra viento y marea, en el medio de la crisis política, económica y social más grande de la historia del país. Si a fines de 2001 el país estalló en pedazos y la fuerza social incontenible de los cacerolazos, los piquetes y el surgimiento de cientos de asambleas barriales marcaron el punto más alto de la indignación social y el rechazo al modelo *Menem-Delarruista*, el 2002 asistió, por un lado, al reflujo de la espuma de esta marea aunque, por el otro, significó la consolidación de un núcleo de actores sociales y políticos –algunos nuevos,

otros viejos— que se transformaron en referencia social de la izquierda: los piqueteros, sectores del sindicalismo y las organizaciones de derechos humanos históricas.

Estas tres vertientes, más militantes de izquierda sueltos y organizaciones no partidarias, se transformarían en los pilares sociales de la Autoconvocatoria No al ALCA, que en agosto de 2002, en el marco del Foro Social Temático de Argentina, realizó la primera asamblea nacional. A partir de allí la Autoconvocatoria iniciaba el camino de construcción de la “consulta popular” que, en el medio del marasmo argentino y de la urgencia de las luchas coyunturales, se hizo posible gracias a la acertada propuesta de unir al eje “No al ALCA” los de la deuda externa y la militarización. Con estas propuestas se logró sintonizar con los problemas de la coyuntura político-económica del país y atraer la atención de muchísimos argentinos, fundamentalmente movidos por un sentimiento de “defensa de lo nacional” y un “antinorteamericanismo” muy fuerte.

Las Jornadas de Consulta Popular se realizaron durante el mes de noviembre de 2003 y sus resultados fueron sorpresivamente exitosos, pues las condiciones de realización no eran las mejores desde el punto de vista de la disponibilidad de recursos y estructura militante. Se lograron 2.252.358 votos, escrutados en casi 5.700 urnas distribuidas en todas las provincias del país. La causa de este éxito se puede encontrar, por un lado, en la sensibilidad popular sobre el tema pero, por el otro, en el importante aporte de una militancia social y política que, con débiles lazos organizativos con la Autoconvocatoria, adhirió a la consulta votando o poniendo mesas para la votación. No hay otra forma de explicar, si no, esa gran afluencia de votos que se consiguió, lo que la transformó en la segunda mayor consulta después de la realizada en Brasil.

Sin duda, los desafíos que enfrenta la Autoconvocatoria en este 2004 están asociados a cómo dar un carácter organizativo más fuerte a ese caudal de voluntades expresadas en la consulta. Por otro lado, en lo político, y tal como lo viene haciendo, el desafío de continuar las movilizaciones y la presión sobre el gobierno Kirchner en lo concerniente a las negociaciones comerciales —no sólo respecto del ALCA sino también de los acuerdos con la UE y en la OMC— además de profundizar su acción sobre los vínculos con el FMI y la deuda externa.

En esta sintonía, se produjeron en lo que va del año dos jornadas de movilización y “asedio” contra las reuniones informales de negociación del ALCA realizadas durante el mes de marzo en Buenos Aires. Estas jornadas, preparadas en coordinación y con la presencia de las campañas del resto de los países de la región, plantean nuevas exigencias de organización y de desarrollo de la capacidad para hacer el seguimiento de las negociaciones con respaldo técnico, así como a su vez dar solidez a los materiales de divulgación, otro desafío en términos de estructura.

Por otra parte, es de esperar que el proceso de construcción de una segunda jornada de consulta popular (en la primera semana de julio) para exigir que el “gobierno consulte de forma directa al pueblo sobre el ALCA y otros acuerdos; la continuidad de los pagos de la deuda externa; la militarización; y la solución de la pobreza en nuestro país”², ayude a generar mejores condiciones organizativas para la misma.

Brasil

La clave del éxito de la campaña brasileña contra el ALCA es, sin temor a equivocarnos, la capacidad de coordinación y articulación de organizaciones y movimientos sociales de diversos tipos, pero todos pertenecientes al campo popular, detrás de un único eje. La necesidad de vencer las diferencias de enfoque, ideológicas y sectoriales y saber armonizar las fuerzas de cada uno en un trabajo común transformó a esta campaña en referencia continental de la lucha contra el ALCA.

Los resultados son sin duda llamativos. El amplio abanico de organizaciones sindicales, eclesiásticas, campesinas y no gubernamentales reunidas en el espacio común de la campaña logró, en el año 2000, la realización de un Plebiscito Nacional sobre Deuda Externa al que concurrieron a votar más de 6 millones de personas y, dos años más tarde, un segundo plebiscito, esta vez concentrado en el ALCA y la militarización, con la participación de 10 millones de brasileños. El movimiento reunió a más de 150 mil militantes en casi todos los estados, colocando urnas en fábricas, plazas, trenes, universidades, sindicatos, etc., teniendo además como uno de sus aspectos organizativos clave no sólo el involucramiento de las grandes estructuras de la iglesia, la CUT y el MST, sino también la activación de algunos mecanismos de movilización simples pero muy eficientes: una fuerte campaña de divulgación y debates públicos, junto con cursos masivos de formación de militantes.

“La necesidad de vencer las diferencias de enfoque, ideológicas y sectoriales y saber armonizar las fuerzas de cada uno en un trabajo común transformó a esta campaña en referencia continental de la lucha contra el ALCA”

Otro de los aciertos fue estimular el contacto con intelectuales de peso que apoyaron la campaña con análisis y posicionamientos públicos fuertes. En este sentido, también fue importante el trabajo en equipo con la Rede Brasileira pela Integração dos Povos (REBRIP), una red constituida por algunos de los movimientos y ONGs para dar seguimiento a las negociaciones comerciales internacionales y proporcionar análisis y fundamentos a la lucha contra el ALCA en particular, pero también en lo referente a la OMC y otros acuerdos y temas (entre otros cuestiones como el agua, los servicios, etcétera).

La consulta de 2002 coincidió con la elección del gobierno Lula. Luego de ella la campaña siguió con sus actividades, que en ese período apuntaron a la formación de un frente parlamentario y, como actividad de movilización, la realización de un petitorio para exigir la convocatoria a un plebiscito oficial para definir la participación de Brasil en el ALCA. Sin embargo, las expectativas del grueso de la militancia en el gobierno Lula, y el hecho de que la mayoría de los militantes pertenecía al mismo campo político, produjeron un descenso en el nivel de activismo y movilización de la campaña. No obstante, se reunieron 2 millones de firmas, que fueron entregadas a las autoridades parlamentarias y de gobierno el 16 de septiembre de 2003. En 2004, la campaña se planteó el desafío de exigir al gobierno la convocatoria a un plebiscito oficial para el 3 de octubre de este año.

Paraguay

Luego de varias tentativas desarticuladas, los movimientos y organizaciones sociales paraguayos construyeron su campaña y realizaron una sorprendentemente exitosa consulta popular, todo durante el año 2003. La campaña se ordenó en torno a tres pilares sociales: la Pastoral Social Nacional, los movimientos y entidades campesinos, y un núcleo articulado de ONGs mayoritariamente venidas del campo de los derechos humanos y ambientalistas, entre otras.

Se plantearon como objetivo recoger en la consulta popular 100 mil votos. Sin embargo, los resultados obtenidos superaron ampliamente las expectativas: participaron de esta iniciativa 162.676 personas distribuidas en los diecisiete departamentos del país. Ello demuestra no sólo la alta participación social, sino el nivel de involucramiento de las organizaciones que lograron estructurar y llevar adelante la consulta en todo el territorio nacional.

Sostenido en los pilares sociales mencionados, la coordinación de la campaña concentró sus esfuerzos, durante los tres meses previos a la consulta, en acciones orientadas a sensibilizar a la población y capacitarla, brindándole los conceptos básicos y mostrándo-

le las principales consecuencias de la firma del tratado a fin de que asumiera un mayor protagonismo y participara activamente en el proceso de la consulta.

Ese esfuerzo fue sin duda una de las claves del éxito. En esos tres meses, las capacitaciones fueron planificadas inicialmente en dos niveles: a monitores y a líderes referentes. Se realizaron veintitrés talleres de formación, en los cuales participaron 1.065 monitores y monitoras, la gran mayoría dirigentes campesinos, personas vinculadas a la iglesia católica, agentes de la pastoral, sacerdotes, catequistas, religiosas y jóvenes. Y ciento ochenta y dos talleres de formación general donde asistieron 15.489 personas. En total, se capacitaron 16.554 personas y se transformó a esta consulta en un verdadero trabajo de base.

La campaña paraguaya pudo colocar el tema en los diarios y en la agenda del debate público nacional, lo cual es considerado uno de sus logros más importantes. Los desafíos que tiene por delante giran en torno a las formas de capitalizar la movilización alcanzada, ampliarla y mantenerla, y avanzar hacia niveles de estructuración y articulación internacional crecientes.

Uruguay

En Uruguay la intermitencia de la campaña contrasta con el compromiso manifiesto de la gran mayoría de las organizaciones del campo popular de dicho país en su "No al ALCA". Un panorama en el que sindicatos, cooperativas y organizaciones rurales, estudiantes y ONGs hacían esfuerzos aislados en la movilización contra el ALCA parece encontrar un rumbo de unidad en las luchas sociales concretas que enfrentan los movimientos populares en el país.

La creación formal de la campaña data de 2002. Fue el soporte de los dos Foros Sociales Uruguay (2002 y 2003), de las movilizaciones contra la guerra y de las campañas de difusión y concientización sobre el ALCA, que incluyeron una "consulta de divulgación" a fines de 2003. Las actividades que ha realizado no lograron consolidar un espacio unificado de peso que dé autonomía a la lucha contra el ALCA. Sin embargo, Uruguay es el ejemplo de que esta lucha se puede articular en las resistencias puntuales contra los mecanismos que éste promueve, por ejemplo las privatizaciones.

La realización del referendo convocado por iniciativa popular el 7 de diciembre de 2003 es una expresión más del nivel de movilización contra la intentona privatista del gobierno Batlle. En esa oportunidad se aglutinó bajo la consigna "Contra el ALCA y por ANCAP" (ente petrolero estatal) a un amplio arco de partidos, organizaciones y movimientos de



izquierdas, entre los cuales estuvo la “Campaña nacional por la soberanía y contra el ALCA” y se realizaron distintas marchas y concentraciones frente al Ministerio de Relaciones Exteriores en Montevideo.

Previamente se había producido un proceso de recolección de firmas para solicitar una reforma constitucional que prohibiera que el servicio de agua potable brindado por la empresa estatal pudiera ser objeto de concesiones o asociaciones con capitales privados.

El 2004 es el año en que la izquierda intensifica su trabajo para alcanzar la presidencia del país. En este contexto, la campaña tiene como desafío mantener su nivel de atención y hacer valer el peso de la agenda de integración en el debate electoral de forma tal que los compromisos que asuman los futuros gobernantes estén ligados a una visión de rechazo al ALCA y la posibilidad de una integración alternativa.

Los desafíos

En este contexto, las luchas y la acción de los movimientos y organizaciones sociales de la región enfrentan, a nuestro entender, tres grandes desafíos.

Es necesario ampliar y consolidar las articulaciones sociales y la convergencia sobre ejes comprensivos y unificadores amplios siguiendo la experiencia de la tolerancia mutua y la madurez para la resolución de las diferencias, manteniendo la movilización y priorizando la información de la población y la formación y capacitación de los militantes sociales.

En el marco de la aparente firmeza de los gobiernos del MERCOSUR en el escenario de las negociaciones comerciales, se debe mantener la tensión y movilización de las campañas como única forma de evitar la defección y entrega de los intereses de nuestros países ante las insistentes presiones de las naciones o bloques más poderosos del globo. Debe quedar claro para los actores sociales que hasta los gobiernos más amistosos no sólo necesitan el apoyo, sino también la presión y la movilización popular, para cumplir con sus compromisos con el pueblo.

En el nivel macro, es necesario construir un modelo de integración alternativo al que hoy proponen los llamados “acuerdos de libre comercio”. Un tipo de integración que esté atenta a los intereses de los pueblos, que se construya desde la agenda de sus necesidades y no según las necesidades e intereses de los sectores más favorecidos de la economía global. Construir esta otra integración requiere, por empezar, priorizar el trato entre naciones pares y las relaciones más simétricas en términos de niveles de desarrollo. Por ejemplo, la profundización, apropiación e involucramiento de los movimientos y organizaciones sociales en experiencias como las del MERCOSUR es un imperativo político del momento, pues es la chance de que esos esfuerzos de alianzas entre “pobres”, dotados de contenido social, puedan transformarse en paradigmas de una integración alternativa. Estos esfuerzos, en el plano doméstico-nacional, plantean para los movimientos sociales la necesidad de fortalecer sus articulaciones político-sociales para combatir el pensamiento único y el continuismo de la ortodoxia económica neoliberal.

Nota

1 Plan de Acción de la Campaña Continental de lucha contra el ALCA, del III Encuentro Hemisférico de lucha contra el ALCA, La Habana, 26 al 29 de enero de 2004 <www.alcabajo.cu>

2 Declaración y Plan de Acción Frente al ALCA, la Deuda y la Militarización de la III Asamblea Nacional de la Autoconvocatoria No al ALCA, Buenos Aires, 24 y 25 de abril de 2004.

El movimiento contra el ALCA en Bolivia y en la Región Andina

Pablo Solón*

* *Investigador
Fundación Solón*

El Movimiento Boliviano de Lucha Contra el ALCA nace de la experiencia y los logros de la Guerra del Agua en Bolivia del año 2000. Al igual que en ese proceso, el movimiento busca desarrollar una articulación lo más amplia, democrática y horizontal posible de todos quienes somos afectados por los acuerdos de "libre comercio". Al igual que en la Guerra del Agua, hay una búsqueda para vincular la protesta con la propuesta, la consigna con el análisis técnico, la denuncia con las alternativas. Andar un camino no sólo en pos de futuros horizontes sino buscando logros concretos, victorias presentes y palpables que fortalezcan la organización y la movilización.

La Guerra del Agua fue la primera gran victoria contra el neoliberalismo en Bolivia desde 1985. Este triunfo fue seguido de otros, como la recuperación de la mina Huanuni, que estaba en manos de la empresa británica Alaid Délas, y la Guerra por la Recuperación del Gas de octubre de 2003. El Movimiento Boliviano de Lucha



© Clara Algranati

Contra el ALCA se inscribe en este proceso como producto y actor del mismo.

El encuentro con el movimiento internacional

Los que participamos en la Guerra del Agua lo hicimos con muy pocas vinculaciones con el movimiento anti-globalización a nivel mundial. Teníamos un conocimiento muy general de la relación entre los tratados internacionales y las leyes

de privatización en Bolivia. Era más un instinto que un conocimiento de estos acuerdos internacionales. Nosotros fuimos los primeros en sorprendernos del impacto que tuvo la Guerra del Agua en el movimiento contra la globalización corporativa.

La vinculación con los movimientos que cuestionan el "libre comercio" en el mundo se dio a través de la participación en varias reuniones internacionales. Una que marcó el inicio del proceso fue en marzo de 2001, cuando asistimos a la reunión de la red que hoy lleva el nombre de "Nuestro Mundo No está en Venta" y que agrupa a un conjunto de organizaciones que protagonizaron lo que fue la gran movilización de Seattle contra la OMC. En este evento se produce de forma muy concreta una vinculación entre la experiencia boliviana y los acuerdos de libre comercio, en particular el GATS o Acuerdo General sobre Servicios de la OMC y el proyecto del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA).

La devolución de las experiencias y lecciones aprendidas en charlas y reuniones con organizaciones campesinas, indígenas, de trabajadores y no gubernamentales lleva a la constitución de los comités contra el ALCA en La Paz y Cochabamba. La primera declaración de esta articulación se produce en abril de 2001 con motivo de la Tercera Cumbre de Presidentes de las Américas en Québec, Canadá. En esa declaración, firmada por cuarenta organizaciones, se realiza un rechazo frontal al ALCA a partir de la experiencia del NAFTA entre México, Canadá y EE.UU.

***“La defensa
y recuperación
del gas es
un tema central
en la campaña
contra el ALCA.
El gas es
el principal recurso
con el que cuenta
Bolivia, y sin
embargo el país
no es dueño de éste
por los procesos
de privatización
de la última década.
Si los hidrocarburos
no vuelven a manos
del Estado
es imposible pensar
en más empleos,
educación
y salud”***

El primer contacto con la Alianza Social Continental se dio en el II Foro Social Mundial de Brasil en el año 2002. En ese momento nos incorporamos a la por entonces recientemente constituida Campaña Continental contra el ALCA, que mostraba que la Alianza Social Continental estaba siendo rebasada por un fenómeno mucho más amplio: al igual que en Bolivia, en otros países se habían empezado a generar articulaciones de manera espontánea.

La organización contra el ALCA en Bolivia

El Movimiento Boliviano de Lucha Contra el ALCA se funda el 18 y 19 de mayo de 2002 en el I Encuentro Nacional “Los impactos del ALCA en Bolivia”, que congregó a más de 234 representantes de organizaciones, instituciones y sectores sociales de todo el país. Este Encuentro fue la culminación de un proceso de discusión en el que dieciséis grupos compuestos por diferentes organizaciones sociales y técnicas analizaron y discutieron los impactos del ALCA y las alternativas que se podían formular desde su sector o temática. En el I Encuentro cada uno de estos grupos expuso sus conclusiones a nivel del agua, la agricultura, los hidrocarburos, el medioambiente, la juventud, las mujeres, los asalariados, etcétera.

El nombre del movimiento fue producto de un proceso de discusión en el cual se decidió hacer énfasis en dos puntos. Uno, que era un “movimiento contra el ALCA”, es decir no para reformar el ALCA sino para derrotar al ALCA; y segundo, que era de “lucha” porque se apostó a que la movilización era el principal instrumento para cambiar la relación de fuerzas y evitar que las negociaciones continuaran.

El Movimiento de Lucha Contra el ALCA nació aprobando un Plan de Acción que hasta el día de hoy se mantiene. La principal estrategia es promover la movilización del conjunto de la población. Todas las líneas del plan de acción tienen ese objetivo.



© Clara Algranati

Uno de los puntos de partida es el monitoreo o la vigilancia de las negociaciones, que empieza por conocer y desmenuzar los diferentes acuerdos de libre comercio. Desde un principio nos propusimos entender los diferentes acuerdos y proyectos de acuerdos, y no quedarnos en el mero discurso. La experiencia de la Guerra del Agua nos había mostrado cuán importante es conocer la letra menuda. Este trabajo, lejos de haberse agotado, se ha ido complejizando más, no sólo porque al adentrarnos en un tema se abren nuevas dimensiones, sino también porque en la realidad han ido proliferando los distintos tipos de acuerdos y negociaciones a nivel mundial, continental, regional, bilateral e intercontinental. Para cumplir con este objetivo partimos de las capacidades instaladas de algunas de las organizaciones en temas como agricultura, inversiones, medicinas y otros. Al principio fue sólo una actividad de seguimiento y denuncia de las negociaciones, pero a partir de la Guerra del Gas nos encontramos ante la posibilidad de ejercer una presión para que el gobierno tenga en cuenta las posiciones de los movimientos sociales.

Nuestra motivación nunca fue entender los acuerdos con fines académicos o intelectuales. Nuestra preocupación siempre fue traducir nuestros conocimientos en palabras y ejemplos accesibles a la gente. Por eso la línea de acción de la información y comunicación es central en nuestra actividad. Hemos recurrido a casi todos los instrumentos disponibles: impresos, programas radiales, teatro, videos, programas televisivos, pinturas murales y festivales. Cada uno de estos mecanismos juega un papel muy importante, y si destacamos la presencia en los medios masivos de comunicación es porque creemos que la intervención en la radio y la televisión nos han permitido ganar a amplios sectores.

Bajar el ALCA a tierra

Nunca entendimos la campaña contra el ALCA como la denuncia de un acuerdo allí en las nubes. Siempre buscamos bajar a tierra la comprensión de este acuerdo en ejemplos y casos concretos. Por eso, otra de nuestras líneas de acción es la realización de campañas concretas y la búsqueda de ciertas victorias parciales que contribuyan al fortalecimiento del movimiento. Partimos del criterio de que la lucha contra el ALCA es la lucha contra un proceso que ya está en curso. La clave está en develar la esencia del ALCA en el sufrimiento, las demandas y la lucha cotidianos de la gente.

Algunas de las campañas que hemos emprendido son:

- La lucha contra la exportación de las aguas subterráneas del Altiplano Sud de Potosí hacia el norte de Chile, donde se han instalado transnacionales mineras del cobre que requieren del agua para procesar su mineral. Esta campaña ha logrado una importante victoria con la aprobación en abril del presente año de una ley que prohíbe la exportación de aguas de esta región.
- La campaña contra la demanda de indemnización de más de 25 millones de dólares interpuesta por la empresa norteamericana Bechtel-Aguas del Tunari en contra de Bolivia ante el Centro Internacional para el Arreglo de Disputas en torno a las Inversiones (CIADI) dependiente del Banco Mundial. Esta campaña viene mostrando la efectividad de la articulación de acciones entre organizaciones del sur y el norte.
- La campaña contra el Decreto Supremo 27040 que abría las compras del Estado a licitaciones internacionales como adelanto de lo que sería el ALCA. En este tema, fruto de la nueva correlación de fuerzas después de octubre de 2003, se ha logrado la sustitución de este decreto por otro que otorga preferencias a los productos nacionales y a sectores de los pequeños productores.
- La campaña en relación a la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y Erradicación de las Drogas (ATPDEA) de EE.UU., que nos permite mostrar de manera palpable las vinculaciones entre el libre comercio y las imposiciones de militarización en nuestro país.
- La defensa y recuperación del gas es un tema central en la campaña contra el ALCA. El gas es el principal recurso con el que cuenta Bolivia, y sin embargo el país no es dueño de éste por los procesos de privatización de la última década. Si los hidrocarburos no vuelven a manos del Estado es imposible pensar en más empleos, educación y salud. Por eso el gas se ha convertido en un eje articulador

capaz de desencadenar una insurrección contra Gonzalo Sánchez de Lozada en octubre de 2003. Aunque hoy es el tema más importante de la agenda nacional, aún sigue sin resolución porque los movimientos sociales exigen su nacionalización mientras las transnacionales amenazan con una multimillonaria demanda de indemnización utilizando los mismos mecanismos que el ALCA quiere generalizar para todas las Américas.

- Otro de los temas ha sido y es la Asamblea Constituyente. Cuando se fundó el Movimiento Boliviano de Lucha Contra el ALCA, existía el peligro de que se modificara la Constitución incorporando algunos artículos por los cuales los tratados de libre comercio iban a estar por encima de las leyes nacionales. Esta propuesta fue duramente criticada por el Movimiento, y finalmente archivada. Sin embargo, no nos limitamos a ver los aspectos negativos de la reforma a la Constitución, sino que en varios talleres con organizaciones campesinas e indígenas empezamos a discutir el planteamiento de la Asamblea Constituyente y lo que podrían ser las bases de una nueva constitución. Fue así que hicimos nuestra la marcha indígena por la Asamblea Constituyente de julio de 2002, y ahora que existe el compromiso de convocar a una Asamblea Constituyente pretendemos emprender una campaña sobre lo que debería aprobar esta Constituyente en torno a los tratados de libre comercio.

- Otro tema de campaña ha sido el Tratado de Libre Comercio entre Chile y Bolivia, que prácticamente se negoció en secreto y se pretendía suscribir en noviembre de 2003, durante la XIII Cumbre Iberoamericana. Este TLC era muy desventajoso para Bolivia, no sólo porque vendemos por valor de 22,6 millones de dólares mientras compramos de Chile por valor de 139 millones de dólares (sin contar el contrabando, que se estima puede ser el triple de esa suma), sino también porque el TLC incluía un capítulo de inversiones y servicios que sólo beneficiaba a las transnacionales instaladas en Chile. Después de octubre, este TLC ha sido suspendido.

- Por último, otro tema muy importante es el de la impunidad. El Movimiento Boliviano de Lucha contra el ALCA no solamente promovió espacios de reflexión sobre el tema de la militarización y la guerra, sino que a raíz de los hechos de febrero y octubre de 2003, en donde murieron más de treinta y cincuenta personas respectivamente, se apeló a las articulaciones internacionales de la Alianza Social Continental y la Campaña Continental contra el ALCA para promover la venida de dos Misiones Internacionales Contra la Impunidad conformadas por representantes de organizaciones defensoras de derechos humanos de varios países de América Latina. El impacto de estas misiones fue muy importante para mostrar de manera palpable la solidaridad internacional. En momentos en que escribimos este artículo Bolivia está nuevamente ante el peligro de un golpe de Estado y/o una confrontación violenta,

porque los militares se niegan a cumplir con una sentencia del Tribunal Constitucional que establece que cuatro militares que dispararon contra un albañil, una enfermera y una doctora sean juzgados en la justicia ordinaria.

“La combinación entre acciones parlamentarias con procesos de movilización y su vinculación a nivel internacional produjeron resultados muy favorables. La mayoría de los dirigentes que retornaron de Quito contribuyeron decisivamente a colocar el tema del ALCA en la agenda de los movimientos sociales”

Otro eje del plan de acción es el desarrollo de propuestas alternativas, que fue el centro durante el I Encuentro, donde se trabajaron algunos temas. Sin embargo no ha sido más desarrollado, a excepción de algunos temas como el agua, el gas y cómo encarar las negociaciones comerciales con EE.UU., donde se han hecho propuestas alternativas más concretas.

En cuanto a la línea de la consulta que en otros países fue muy importante, la coyuntura de ascenso social en Bolivia superó esa instancia y se convirtió fundamentalmente en una exigencia hacia el gobierno y el parlamento para que convoquen a un referéndum sobre la continuidad o no de su participación en las negociaciones del ALCA.

La nueva coyuntura

Después de la conformación del Movimiento Boliviano de Lucha Contra el ALCA, se dieron en junio de 2002 las elecciones nacionales que cambiaron la composición del parlamento, incorporando a casi un tercio de senadores y diputados de movimientos sociales y campesinos. Con este nuevo escenario, las acciones parlamentarias que antes eran casi impensables cobraron importancia, y se realizaron una interpelación parlamentaria al ministro de Comercio Exterior sobre el caso de Bechtel-Aguas Tunari contra Bolivia, una petición de informe oral al canciller de Gonzalo Sánchez de Lozada sobre su posición frente a la VII Reunión de Ministros del ALCA en Quito, y varias peticiones de informe escrito y gestiones para la aprobación de la ley que prohíbe la exportación de aguas del sudoeste de Bolivia.



© Clara Algranati

Estas acciones parlamentarias siempre estuvieron combinadas con acciones de presión social. Es el caso de la petición de informe oral sobre el ALCA al canciller, que dura dos días y se dio mientras se realizaba una marcha por las calles de La Paz y se organizaba la despedida de un *bus* con cuarenta y seis dirigentes de diferentes sectores sociales que viajaron a Quito para participar de las Jornadas de Resistencia al ALCA en dicho país. La combinación entre acciones parlamentarias con procesos de movilización y su vinculación a nivel internacional produjeron resultados muy favorables. La mayoría de los dirigentes que retornaron de Quito contribuyeron decisivamente a colocar el tema del ALCA en la agenda de los movimientos sociales.

El II Encuentro Hemisférico Contra el ALCA en La Habana, Cuba, es un momento muy importante en la integración del Movimiento Boliviano con la Campaña Continental contra el ALCA. Nosotros participamos con una propuesta que planteaba encarar el tema del libre comercio en sus múltiples dimensiones (ALCA, OMC y bilaterales) y en su vinculación con la deuda externa y los procesos de militarización, buscando desarrollar campañas concretas sobre aspectos de los tratados (inversiones, servicios, agricultura, etc.), sobre temas transversales (agua, transgénicos, etc.) y sobre casos concretos, como la lucha por la recuperación del gas en Bolivia.

Después de este proceso, el Movimiento Boliviano de Lucha Contra el ALCA se concentró en ver cómo vinculaba la temática del ALCA con la creciente movilización y

resistencia al gobierno de Sánchez de Lozada. En el III Foro Social Mundial en Brasil organizamos un seminario titulado “Rebelión en Bolivia” para mostrar que se avecinaba una situación extremadamente aguda y para promover una campaña de solidaridad con Bolivia.

Los hechos de febrero y octubre de 2003 confirmaron esa perspectiva. En febrero el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada intentó imponer un impuesto al salario que provocó un rechazo generalizado, un motín policial y un enfrentamiento con el ejército que culminó con la muerte de treinta y tres personas y el desistimiento del gobierno de implementar esta medida. En octubre, con la llamada Guerra del Gas, el resultado fue: más de cincuenta muertos por balas del ejército, un bloqueo generalizado de caminos acompañado de una insurrección en varias ciudades, el derrocamiento del presidente, y la posesión de un nuevo gobierno con la promesa de recuperar el gas, realizar un referéndum sobre el mismo y convocar a una Asamblea Constituyente.

Entre febrero y octubre se da el II Encuentro Nacional Contra el ALCA y la Guerra con la asistencia de 3.500 representantes de todo el país y la participación de 10 mil personas en la marcha de inauguración, además de la presencia de diecisiete invitados internacionales entre los que figuraba Adolfo Pérez Esquivel, premio Nóbel de la Paz. El II Encuentro tuvo un impacto de primera línea en casi todos los medios de comunicación. Este evento profundizó el plan de acción y determinó la incorporación del Movimiento Boliviano a la Campaña Continental contra el ALCA, a la Alianza Social Continental, a la Red Nuestro Mundo No está en Venta y al Grito de los Excluidos.

Es de destacar que el II Encuentro se da en uno de los períodos más difíciles del sindicalismo boliviano, pues las principales organizaciones se encuentran en conflicto y con divisiones internas. El éxito del evento radica en la apertura pluralista de su organización.

Por la gran acogida que tiene el II Encuentro se produce un debate en el Movimiento Boliviano de Lucha Contra el ALCA sobre su rol y carácter. Algunos quieren que el movimiento adopte resoluciones políticas no sólo sobre el ALCA sino también sobre la coyuntura y el proyecto político que persigue; otros opinamos que debe mantener su carácter específico y dejar que las organizaciones sociales, a través de sus mecanismos internos, sean las responsables de convocar medidas de movilización como huelgas y bloqueos. El debate termina reafirmando y profundizando las premisas adoptadas en el I Encuentro.

El Movimiento Boliviano de Lucha Contra el ALCA busca la unidad más amplia y para ello centra su accionar en el desarrollo de campañas y acciones concretas sin pretender llegar a acuerdos sobre temas ideológicos o declaraciones políticas que pueden fracturar

su unidad interna. Las resoluciones se aprueban en base al consenso y poniendo en primer lugar la unidad para la acción. No pretende “dar línea” a las organizaciones sociales ni a los partidos políticos. Aporta con análisis y propuestas de acción para que sean compartidas y en la medida de lo posible asumidas por todas las organizaciones. Es un espacio plural, no confesional, no gubernamental y no partidario. Acoge a todas las personas con o sin militancia partidaria, pero no a partidos políticos. Busca aprovechar las potencialidades y capacidades de todos sus integrantes sin tratar de uniformizar o promover un solo tipo de accionar, y orienta su actividad al logro de resultados concretos, victorias palpables como forma real de avanzar en la lucha contra el ALCA.

Los desafíos

Los triunfos de Cancún frente a la OMC y el estancamiento de las negociaciones del ALCA que se producen a partir de la VIII Reunión de Ministros de Miami en noviembre de 2003 promueven la proliferación de los TLCs y en particular para nosotros del TLC Andino con EE.UU., que abarca a Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia. Este nuevo mini ALCA andino es mucho más perverso que el ALCA original por sus contenidos y por el desbalance absoluto que existe entre las partes que lo negocian. Para enfrentar este nuevo peligro se pone en práctica la resolución del III Encuentro Hemisférico contra el ALCA y se organiza una articulación subregional entre las campañas de los países andinos. El primer Encuentro Andino se realiza en Lima y se elabora una carta al Congreso norteamericano respondiendo a la nota que Robert Zoellick, representante comercial de EE.UU., enviara a esta instancia el 18 de noviembre. Entre el 13 y el 20 de abril se fijan las jornadas contra el TLC Andino en los cuatro países, y nosotros en Bolivia organizamos juntamente con la Oficialía de Cultura de la Alcaldía de La Paz una Feria por la Vida y contra el ALCA y el TLC Andino con EE.UU. Más de 8 mil personas participan de esta feria, que comprende paneles de exposición sobre los impactos del ALCA, exhibición de productos que podrían ser afectados, música, danza, teatro, pintura mural, espacios infantiles y proyección de videos.

La presión social hace que el gobierno de Bolivia tenga una posición más cuidadosa frente al ALCA y que sólo participe inicialmente como “observador” en las negociaciones del TLC Andino con EE.UU. El gobierno de Mesa no quiere despertar la ira de los movimientos sociales, pero tampoco está dispuesto a cambiar su posición a favor de estos tratados. Por eso el Movimiento Boliviano de Lucha Contra el ALCA exige el retiro inmediato de estos “observadores” de las negociaciones del TLC con EE.UU. Esta delegación no asiste a las negociaciones para “observar” si ese acuerdo es malo o bueno, sino para ver cómo se incorporan mejor a ese proceso.

No nos oponemos a una negociación comercial con EE.UU. u otros países siempre que favorezca a los productores nacionales. Lo que rechazamos es que se incorporen temas como la protección a la inversión de las transnacionales, la apertura de las compras estatales, la privatización de los servicios, la propiedad intelectual y otros que comprometen la soberanía, la democracia y la vida de los bolivianos. El peligro que vemos es que la delegación "observadora" boliviana acabará diciéndonos que ellos no negociaron ese acuerdo pero que no hay más alternativa que firmarlo, porque los otros lo aceptaron y no podemos quedar aislados.

El Movimiento Boliviano de Lucha Contra el ALCA y toda la campaña continental enfrentan una situación crítica porque las negociaciones del ALCA tienden a reanimarse, hay una proliferación de TLCs y existe un recrudecimiento de las confrontaciones sociales con un uso creciente de la violencia. Enfrentarse al ALCA y a los otros tratados de libre comercio no es sólo enfrentar un tratado o un acuerdo internacional, sino interpelar un sistema de explotación y colonización que va a recurrir a todos los mecanismos que tiene a su alcance para aplastarnos mientras más exitosos seamos. A mayor incidencia de nuestra campaña, menos será una campaña y más será un torbellino de voluntades, demandas y sacrificios. En función de esa perspectiva, que implica no sólo la resistencia al ALCA y los TLCs sino la derrota de los mismos, aún nos falta mucho por aprender y andar.

Cronología de las convergencias y acciones contra el “libre comercio” y la guerra en Latinoamérica

Enero 2003 - mayo 2004

2003

ENERO

3 DE ENERO - PANAMÁ

La presidenta Mireya Moscoso sanciona las leyes por las que se aprueban el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Panamá y Centroamérica y el Protocolo Bilateral con El Salvador, que entrarán en vigencia en 30 días.

23 AL 28 DE ENERO - PORTO ALEGRE, BRASIL

Se inicia el III Foro Social Mundial (FSM) con una multitudinaria marcha contra el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y la intención norteamericana de invadir Irak. Bajo el lema “Otro mundo es posible, contra la militarización y la guerra”, se desarrollan alrededor de 1.500 paneles y talleres durante los 5 días del encuentro en los que participan más de 100 mil personas contándose 20 mil delegados acreditados de 130 países. Una nueva marcha contra el ALCA y por la paz en el mundo cierra el evento. La declaración final que adopta la Asamblea de los Movimientos Sociales llama a una jornada global contra la guerra para el próximo 15 de febrero así como, pronunciándose contra los TLC, convoca a la movilización frente a las previstas reuniones de la Organización Mundial del Comercio-OMC (Cancún, México) y del ALCA (Miami, EE.UU.). En este marco, la Comisión Nacional de la Campaña contra el ALCA de Brasil lanza la iniciativa para la recolección de firmas demandando la convocatoria a un plebiscito oficial sobre dicho acuerdo, entre otros temas.

27 DE ENERO - SAN JOSÉ, COSTA RICA

Se inicia la primera ronda de negociaciones del TLC entre EE.UU. y Centroamérica (TLCEU-AC o CAFTA por sus siglas en inglés). En rechazo a estas negociaciones, organizaciones sociales, campesinas, sindicales y ecologistas marchan hasta las afueras del hotel donde se lleva a cabo la reunión. Los manifestantes, entre otras cuestiones, plantean la defensa del monopolio estatal de la energía, las telecomunicaciones, el agua potable y la seguridad social.

FEBRERO

1º DE FEBRERO - CHILE

Entra en vigencia el TLC entre Chile y la Unión Europea (UE).

15 DE FEBRERO - JORNADA MUNDIAL

En el marco de la jornada global contra la guerra promovida desde la Asamblea de los Movimientos Sociales del III FSM, más de 30 millones de personas se movilizan en todo el mundo contra la inminente invasión a Irak. Según datos de las coordinaciones antibélicas, las manifestaciones se desarrollan en más de 600 ciudades alrededor del mundo. En Europa se registran movilizaciones en casi todas las capitales y grandes ciudades, siendo las más numerosas aquellas que tienen lugar en los países que se aprestan para la guerra como Gran Bretaña, Italia y España. En EE.UU. cerca de 1 millón de personas se movilizan en 100 ciudades y pueblos. También se realizan manifestaciones en distintas ciudades de África, Asia y Oceanía. En América Latina, 50 mil personas confluyen hacia las embajadas estadounidenses en Buenos Aires y en México DF. También se realizan manifestaciones en Uruguay y Brasil, incluyendo una marcha conjunta en la frontera entre ambos países. Otras movilizaciones tienen lugar en Lima, Perú; Caracas, Venezuela; Asunción, Paraguay; Santiago, Chile; Ciudad de Guatemala y San José de Costa Rica. Particularmente en El Salvador, Honduras y Nicaragua estas protestas contra la guerra se manifiestan también contra el ALCA, el CAFTA y el Plan Puebla Panamá (PPP).

MARZO

20 DE MARZO - JORNADA MUNDIAL

Con bombardeos sobre la ciudad de Bagdad, se inicia la invasión a Irak. En repudio a la intervención bélica se realiza una segunda jornada global contra la guerra. En diferentes ciudades de América Latina tienen lugar nuevamente movilizaciones; entre ellas se destacan las realizadas en Buenos Aires, México DF, Montevideo, Quito, Managua y Panamá.

ABRIL

2 DE ABRIL - EL SALVADOR

Se lleva adelante la tercera ronda de negociaciones del CAFTA. Para expresar su repudio a este acuerdo comercial y a la guerra contra Irak, militantes de diversos partidos de izquierda junto a diputados y alcaldes del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN), trabajadores, campesinos y empleados públicos, entre otros, marchan desde el centro de la ciudad hasta el hotel donde se lleva a cabo la reunión.

10 AL 13 DE ABRIL - BUENOS AIRES, ARGENTINA

Se realiza la II Asamblea Nacional contra el ALCA, que finaliza con la decisión de impulsar una consulta popular sobre dicho acuerdo, la deuda externa y la militarización. Participan en la asamblea representantes de 15 provincias del país e invitados de 11 países latinoamericanos. El sábado 12 tiene lugar una marcha contra el ALCA que se suma a la movilización promovida por la coalición Autoconvocados contra la Guerra para manifestarse en forma conjunta contra dicho acuerdo y la intervención militar en Irak, y marchar a la Plaza de Mayo.

MAYO

1º DE MAYO - JORNADA MUNDIAL

En el Día Internacional de los Trabajadores tienen lugar numerosas movilizaciones y actos en todo el mundo. En Latinoamérica, particularmente en Guatemala, Panamá, Honduras, Colombia, Uruguay, Bolivia y Nicaragua, se manifiesta también la oposición a los TLC, el ALCA, el PPP y la intervención militar en Irak.

6 AL 9 DE MAYO - CHIAPAS, MÉXICO

Se realiza el I Encuentro Hemisférico frente a la Militarización, en el que participan más de 900 personas de 28 países de los 5 continentes. El evento cierra con una declaración final que afirma el compromiso de impulsar una "Campaña por la Desmilitarización de las Américas y la construcción de una paz a la altura de la dignidad de nuestros pueblos".

13 DE MAYO - GUATEMALA

Miembros de la Coordinadora Nacional Sindical y Popular y de la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina (CONIC) ocupan la sede del Parlamento Centroamericano (PARLACEN) contra las negociaciones del CAFTA.

19 AL 21 DE MAYO - YAKARTA, INDONESIA

Se realiza una reunión donde participan la mayoría de las redes y organizaciones que impulsaron en distintas partes del mundo las movilizaciones contra la guerra de Irak. Luego de 3 días de debate elaboran la declaración

“Consenso de Paz de Yakarta” donde impulsan un plan de acción común frente a la globalización neoliberal y el militarismo.

23 DE MAYO - ECUADOR

Comienza la III Asamblea Nacional de Oposición al ALCA de la que participan, entre otros, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE). En dicho encuentro se avanza sobre la campaña a desarrollar en el país y la necesidad de realizar una consulta popular sobre el ALCA.

JUNIO

6 DE JUNIO - LA PAZ, BOLIVIA

Se inicia el II Encuentro Nacional contra el ALCA y la Guerra con una marcha hacia la casa de gobierno. Con más de 120 organizaciones y movimientos convocantes, este encuentro cierra con un documento donde se rechazan los TLC y las negociaciones de la OMC, el Plan Colombia y los planes de erradicación de la coca considerados como pretextos para promover la militarización de Bolivia y del área andina.

7 DE JUNIO - MIAMI, EE.UU.

Se firma el TLC entre Chile y EE.UU.

14 DE JUNIO - COSTA RICA

Se inicia la Jornada Nacional de Recolección de firmas contra el CAFTA, el ALCA y el PPP impulsada por la coalición Encuentro Popular. Esta jornada se enmarca en una campaña nacional que incluye también acciones de divulgación sobre dichos acuerdos, monitoreo de las negociaciones oficiales y la propuesta de realizar un Foro Nacional de Alternativas Populares.

JULIO

7 DE JULIO - EL SALVADOR

Frente a la realización de la decimocuarta reunión del Comité de Negociaciones Comerciales (CNC) –encargado de la negociación del ALCA– diversas organizaciones sociales, entre ellas la Red Sinti Techan y el Centro para la Defensa del Consumidor (CDC), se concentran en horas de la mañana frente a la sede de la reunión. Los manifestantes convocan a resistir el acuerdo comercial y reivindican otra integración para los pueblos latinoamericanos.

21 AL 24 DE JULIO - TEGUCIGALPA, HONDURAS

Se inicia el IV Foro Mesoamericano por la Autodeterminación y Resistencia de los Pueblos. Con la presencia de delegaciones de los países de la región (y de Europa y África) se acuerda un plan de acción conjunto y un documento en

el que se exige detener los tratados y megaproyectos de inversión que sólo privilegian los derechos del capital.

AGOSTO

12 DE AGOSTO - BOGOTÁ, COLOMBIA

Se realiza una multitudinaria manifestación convocada por la Asociación Nacional por la Salvación Agropecuaria (ANSA) con delegaciones de más de 20 departamentos de cerca de 200 municipios para expresar su repudio al ALCA y a cualquier tipo de TLC y por la soberanía alimentaria. La misma confluye con un paro nacional y una movilización convocados por el Comando Nacional Unitario (CNU) –que agrupa a diferentes centrales sindicales colombianas– contra la política neoliberal del gobierno y las privatizaciones.

21 DE AGOSTO - ECUADOR

En el marco de la Jornada Nacional de protesta convocada por el Congreso de los Pueblos, miles de personas marchan en todo el país para exigir cambios en el gobierno de Lucio Gutiérrez, que se detengan las privatizaciones y que el Congreso se pronuncie sobre la base militar de Manta, el Plan Colombia y el ALCA, entre otras cuestiones.

25 DE AGOSTO - PERÚ

Se firma un acuerdo entre Perú y el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) por el cual este país se convierte en miembro asociado al bloque regional.

SEPTIEMBRE

7 AL 14 DE SEPTIEMBRE - CANCÚN, MÉXICO

Se realiza la V Reunión Ministerial de la OMC, con la participación de los 146 países miembros de dicho organismo. Desde el primer día y hasta la clausura del encuentro tienen lugar diferentes movilizaciones, actividades y foros (campesino, de mujeres, indígena, de pescadores y de la convergencia de medios alternativos, entre otros) promovidos por diferentes delegaciones y movimientos sociales de distintas partes del mundo que se dan cita bajo el lema “descarilemos la OMC”. La primera movilización importante, convocada por Vía Campesina y a la que se suma el conjunto de los movimientos presentes, se realiza el día 10; sobre el final de la misma se inmola el delegado campesino coreano Lee Kyung Hae que portaba un cartel con la frase “la OMC mata campesinos”. El 13 se realiza la movilización unitaria más numerosa, en la que un sector de la misma derriba las vallas y entra en la zona cerrada por la policía. Por otra parte, diferentes ONGs (particularmente de la coalición “Nuestro Mundo No está en Venta”) ejercen presiones y también realizan protestas en el interior del recinto donde se desarrollan las negocia-

ciones, articulándose con las acciones que tienen lugar fuera del mismo. En este marco, a instancias de algunas delegaciones oficiales de países del Tercer Mundo, se constituye el llamado Grupo de los 20 (que finaliza incluyendo a 23 países) que se niega a avanzar en las negociaciones hasta que éstas resuelvan primero la cuestión de los subsidios y protecciones agrícolas que mantienen los países desarrollados. En este contexto, el día 14 la cumbre colapsa definitivamente ante la negativa de los países desarrollados de abordar el tema agrícola.

15 DE SEPTIEMBRE - BOLIVIA

Diversas organizaciones sociales aglutinadas en la Coordinadora por la Defensa del Gas inician medidas de fuerza en diferentes puntos del país en repudio a la decisión del gobierno de Sánchez de Lozada de exportar gas a EE.UU. por un puerto chileno y en rechazo al ALCA. Entre otras acciones, movimientos indígenas y campesinos bloquean caminos y rutas en las regiones de Pando, Beni, Los Yungas y el altiplano paceño. En la ciudad de El Alto, las organizaciones locales inician un paro cívico por tiempo indefinido.

16 DE SEPTIEMBRE - BRASIL

La Coordinación Nacional de la Campaña contra el ALCA entrega a las autoridades federales en Brasilia alrededor de 2 millones de firmas que exigen la convocatoria a un plebiscito oficial sobre el ingreso de Brasil a dicho acuerdo, una auditoría de la deuda externa y el archivo definitivo de la concesión de la base militar de Alcántara al gobierno de EE.UU.

18 DE SEPTIEMBRE - MANAGUA, NICARAGUA

Con motivo de la séptima ronda de negociaciones del CAFTA miles de nicaragüenses y representantes de Honduras, El Salvador y Guatemala se movilizan por el centro de la ciudad para denunciar que este acuerdo sólo favorecerá a las grandes empresas transnacionales norteamericanas.

19 DE SEPTIEMBRE - BOLIVIA

En las ciudades de La Paz, El Alto y Cochabamba, entre otras, se realizan diferentes movilizaciones impulsadas por el Movimiento Al Socialismo (MAS), el Estado Mayor del Pueblo (EMP) y la Central Obrera Boliviana (COB), en repudio a la exportación del gas y las negociaciones del ALCA.

OCTUBRE

10 DE OCTUBRE - GUATEMALA

En medio de una fuerte presencia policial, miles de campesinos e indígenas toman carreteras, paralizan distintos pasos fronterizos y realizan manifestaciones y plantones frente a diversas instancias gubernamentales en conmemoración al Día de la Dignidad y la Resistencia Indígena y Campesina. Rechazan

la firma de los TLC, el PPP y el ALCA, y exigen la puesta en marcha de la reforma agraria, entre otras cuestiones.

20 DE OCTUBRE - SAN JOSÉ, COSTA RICA

Unas 3 mil personas participan en una marcha contra el CAFTA y el intento estadounidense de establecer en el país una sede de la Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley (AICL).

20 DE OCTUBRE - EL SALVADOR

Diversas organizaciones sociales que integran el Bloque Popular Social (BPS) se concentran en el centro de San Salvador para protestar contra el TLC que el gobierno pretende firmar con EE.UU.

26 DE OCTUBRE - PARAGUAY

Se inicia la consulta popular sobre el ALCA a nivel nacional organizada por la Iniciativa Paraguaya No al ALCA, que nuclea a más de 40 organizaciones sociales del país, que se prolongará hasta el 9 de noviembre.

NOVIEMBRE

9 DE NOVIEMBRE - PARAGUAY

Culmina la Consulta Popular sobre el ALCA impulsada por la Iniciativa Paraguaya No al ALCA, que con la participación de más de 160.000 personas se manifiesta por abrumadora mayoría contra dicho acuerdo.

15 AL 17 DE NOVIEMBRE - MONTEVIDEO, URUGUAY

Con una movilización contra el ALCA se inicia el Foro Social Uruguay en el que participan más de 4 mil personas. La marcha "Por la Soberanía y contra el ALCA" es convocada, entre otras organizaciones, por la Federación de Estudiantes Universitarios de Uruguay (FEUU), el Plenario Intersindical de Trabajadores-Convenión Nacional de Trabajadores (PIT-CNT) y la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (FUCVAM).

19 AL 22 DE NOVIEMBRE - MIAMI, EE.UU.

Sesiona la VIII Conferencia Ministerial del ALCA que reúne a las delegaciones de los 34 países americanos que participan de dicha negociación, precedida por el fracaso de la reunión de la OMC en Cancún y por las diferencias en torno a este acuerdo intensificadas a lo largo de 2003, particularmente entre EE.UU. y el MERCOSUR (especialmente alrededor de los subsidios y protecciones agrícolas que el país del norte se niega a flexibilizar), así como también por la crítica postura venezolana y los planteos de los países de la Comunidad del Caribe (CARICOM). El día 20 una columna de 15 mil manifestantes, integrada mayormente por trabajadores metalúrgicos y textiles de EE.UU., Brasil y México, delegaciones campesinas y activistas del movimiento alterglobalización

de diversas partes del continente, marchan por el centro de la ciudad y llegan a las inmediaciones de la sala de reuniones para expresar su rechazo al ALCA. Al llegar al vallado policial son reprimidos con balas de goma y gases lacrimógenos. Al mismo tiempo se realiza una multiplicidad de actividades organizadas por diversos movimientos y agrupaciones sociales que incluyen decenas de paneles, debates y expresiones artísticas. El resultado de la reunión cristaliza en la aprobación de las líneas centrales del documento presentado al inicio de la misma por la co-presidencia EE.UU.-Brasil, que trastoca el esquema del ALCA continental y abre la posibilidad a los países de asumir diferentes niveles de compromiso permitiendo las negociaciones bilaterales o plurilaterales, las cuales no obligan al conjunto a someterse a los beneficios y obligaciones resultantes de tales acuerdos. Más allá de estas modificaciones, la propuesta –conocida en los medios de prensa como ALCA light o de dos pisos– establece un nivel mínimo de acuerdos a ser suscritos por todos los países y ratifica el año 2005 como fecha de entrada en vigencia del acuerdo continental. El representante comercial de EE.UU. anuncia en conferencia de prensa que acelerarán las negociaciones de un TLC con Centroamérica buscando incluir también a Panamá y República Dominicana, e iniciarán negociaciones con los 4 países de la Iniciativa Andina (Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia).

20 DE NOVIEMBRE - ASUNCIÓN, PARAGUAY

Con una marcha por la ciudad se inicia el Foro Social del Paraguay del que participan más de 60 organizaciones bajo la consigna "Otro Paraguay es Posible, No al ALCA".

20 AL 27 DE NOVIEMBRE - ARGENTINA

Se llevan a cabo las primeras Jornadas de Consulta Popular sobre el ALCA, la deuda externa y la militarización organizadas por la Autoconvocatoria No al ALCA. En las casi 5 mil urnas instaladas en todo el país participan más de 2.300.000 personas, de las cuales más del 90% se pronuncia contra la firma del ALCA, el pago de la deuda externa y la militarización en la región.

26 DE NOVIEMBRE - CARACAS, VENEZUELA

En el marco de la V Asamblea General de la Confederación Parlamentaria de las Américas, el presidente venezolano Hugo Chávez expresa que el ALCA constituye un mecanismo para la desintegración de nuestros pueblos y llama a constituir la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de las Américas (ALBA).

DICIEMBRE

7 DE DICIEMBRE - URUGUAY

Se lleva a cabo el referéndum sobre la derogación de la "Ley ANCAP" que promueve la privatización del ente petrolero estatal. La campaña desarrollada alrededor del mismo, que se iniciara en marzo de 2002, se articula con el rechazo

al ALCA bajo la consigna "Contra el ALCA y por ANCAP". El referéndum concluye con más del 62% de los votos a favor de la derogación de dicha ley.

12 AL 14 DE DICIEMBRE - SÃO PAULO, BRASIL

Se realiza la Conferencia Continental de Trabajadores contra el ALCA con la participación de 201 delegados de organizaciones sindicales, populares y jóvenes de diferentes países del continente americano que resuelven, entre otras cuestiones, constituir el Comité de Enlace de los Trabajadores de las Américas a fin de oponerse a dicho acuerdo y al pago de la deuda externa y la tutela del FMI.

16 DE DICIEMBRE - MONTEVIDEO, URUGUAY

En forma paralela a la Cumbre de Presidentes de los países del MERCOSUR, tiene lugar la V Cumbre Sindical de la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur (CCSC) que reafirma el compromiso de dichas organizaciones para decir "No al ALCA, Sí al MERCOSUR".

2004

ENERO

1º DE ENERO - CHILE

Entra en vigencia el TLC entre EE.UU. y Chile.

16 AL 21 DE ENERO - MUMBAI, INDIA

Se inaugura con una multitudinaria marcha la cuarta edición del FSM en el que participan más de 80 mil personas de 2.660 organizaciones y redes provenientes de 140 países del mundo. La declaración de la Asamblea de los Movimientos Sociales que sesiona en este marco convoca, entre otras cuestiones, a una nueva jornada internacional contra la guerra y la ocupación de Irak para el próximo 20 de marzo.

26 AL 29 DE ENERO - LA HABANA, CUBA

Se realiza el III Encuentro Hemisférico de Lucha contra el ALCA en el que participan más de mil delegados de organizaciones sociales y políticas de los 35 países latinoamericanos que reivindican su diversidad de raza, orígenes y culturas. Las jornadas de debate y articulación concluyen con una declaración final en la que rechazan el ALCA tanto en su versión pura como en la llamada light, a la carta o de dos pisos, así como denuncian los TLC bilaterales o regionales que impulsa EE.UU. El documento convoca además a fortalecer las campañas contrarias al "libre comercio", la militarización, la guerra en Irak y las transnacionales, y a alentar una integración continental alternativa así como plantea un plan de acción para el año 2004.

FEBRERO

3 AL 6 DE FEBRERO - PUEBLA, MÉXICO

Tiene lugar la reunión del CNC destinada a encausar las negociaciones del ALCA luego de las dificultades y cambios que significó la reunión de Miami. El encuentro culmina sin acuerdos fundamentales respecto de la implementación del ALCA luego de que los países miembros del MERCOSUR, Venezuela, Bolivia y los que componen el CARICOM rechazaran la desgravación arancelaria parcial (alrededor del 90%) que en materia agropecuaria ofertara EE.UU. como contrapartida a su negativa a eliminar los subsidios y las protecciones a la producción agrícola. El bloque hegemonizado por EE.UU. –en el que se alinean también Canadá, México, Chile, los países centroamericanos y los de la Iniciativa Andina– tampoco brinda una respuesta satisfactoria a los señalamientos en materia de inversiones y de fondos compensatorios para las economías pequeñas, así como no se llega a acuerdos en relación a acceso a mercados, servicios y compras gubernamentales. La cumbre finaliza además sin un consenso respecto de qué forma adoptará el llamado ALCA light resultado de la reunión de Miami. En rechazo a esta cumbre, entre otras acciones, se realiza una movilización impulsada por las más de 60 organizaciones sociales, campesinas, de trabajadores, juveniles y alterglobalización presentes que marcha por las calles de la ciudad en oposición al ALCA y levantando consignas contra el “libre comercio”.

4 AL 8 DE FEBRERO - GUAYANA, VENEZUELA

Se realiza el III Foro Social Panamazónico donde los participantes reafirman, entre otras cuestiones, su compromiso con la lucha contra el ALCA.

16 Y 17 DE FEBRERO - ECUADOR

Indígenas agrupados en la CONAIE se manifiestan en 7 provincias del país en contra de la aprobación de un TLC con EE.UU. y de la firma del ALCA. El gobierno reprime las protestas provocando la muerte de la indígena María Doraliza Lalvay.

26 DE FEBRERO - ECUADOR

El jefe del equipo negociador ecuatoriano del TLC con EE.UU. anuncia que a partir del próximo 18 de mayo se iniciarán las negociaciones.

MARZO

9 Y 10 DE MARZO - BUENOS AIRES, ARGENTINA

Se realiza una reunión informal convocada por EE.UU. con el objetivo de desbarbar las negociaciones del ALCA que fracasaron en la Cumbre de Puebla. Participan de la misma representantes del bloque hegemonizado por EE.UU., del MERCOSUR, de Venezuela y un delegado del CARICOM. La reunión cul-

mina apresuradamente el segundo día ante la imposibilidad de llegar a los acuerdos mínimos que permitan una nueva convocatoria del CNC. Durante esos días se realizan diferentes acciones impulsadas por la coordinación local (Autoconvocatoria No al ALCA) y la campaña continental con la presencia de representantes de diferentes países. El día 9 se realiza una movilización y un acto frente a la sede de la Cancillería (donde se desarrolla la reunión) exigiendo el fin de las negociaciones y en rechazo al ALCA en cualquiera de sus formas, la deuda externa y la militarización.

9 DE MARZO - COSTA RICA

Costa Rica y los países del CARICOM firman un TLC.

10 DE MARZO - ECUADOR

En el marco de las jornadas preparatorias del I Foro Social Américas en Quito se realiza un encuentro andino de coordinación regional de la campaña contra el ALCA y el TLC, que EE.UU. se encuentra negociando con diferentes países del área andina.

18 DE MARZO - CENTROAMÉRICA

En una acción impulsada por el BPS (El Salvador), el Consejo Nacional de Organizaciones Populares (Guatemala), la Central Única de Trabajadores (Honduras) y la Central Sandinista de Trabajadores (Nicaragua), manifestantes cierran los pasos fronterizos en Chinamas, El Poy, El Amatillo y Guasaule en protesta por la firma del TLC con EE.UU.

19 AL 21 DE MARZO - HUITIUPAN, MÉXICO

Alrededor de 3 mil indígenas y campesinos participan en el III Encuentro Chiapaneco contra el Neoliberalismo realizado en la localidad de Simojovel de Allende. La reunión cierra con una marcha contra los TLC, el PPP y la OMC; exigen la desmilitarización y desparamilitarización de la región y el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés.

20 DE MARZO - JORNADA MUNDIAL

Al cumplirse un año de la invasión a Irak, millones de personas alrededor del mundo salen nuevamente a las calles contra la ocupación militar de dicho país en el marco de la convocatoria impulsada desde la Asamblea de Movimientos Sociales del IV FSM. Las protestas se extienden por más de 300 ciudades de 60 países, siendo especialmente importantes las realizadas en EE.UU. y Europa. En Asia y África las movilizaciones más significativas ocurren en Tokio, Osaka, Seúl, Hong Kong, Bangkok, Nueva Delhi, Mumbai, Damasco, Bagdad, Cachemira, Dakar, El Cairo y Johannesburgo. En América Latina la convocatoria obtiene las mayores respuestas en São Paulo, Río de Janeiro, Porto Alegre, Santiago de Cuba, Managua, México DF, Lima, Buenos Aires y Santiago de Chile.

23 DE MARZO - COLOMBIA

El representante de Comercio Exterior de EE.UU. Robert Zoellick sostiene que espera que Perú y Ecuador puedan sumarse a las negociaciones del TLC con Colombia que comenzarán el 18 y 19 de mayo en Bogotá.

25 DE MARZO - REGIÓN ANDINA

Un amplio arco de movimientos y organizaciones sociales de los países andinos (Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia) envían una carta al Congreso de EE.UU. para rechazar el inicio de las negociaciones entre este país y los que conforman el área andina.

29 DE MARZO - PERÚ

La oficina comercial de EE.UU. habilita a Perú para el inicio de las negociaciones de un TLC con ese país.

31 DE MARZO - BUENOS AIRES, ARGENTINA

Tiene lugar una nueva reunión informal entre EE.UU. (junto a representantes del bloque que lo acompaña) y el MERCOSUR con el objetivo de destrabar las negociaciones del ALCA. En rechazo a este acuerdo y exigiendo el retiro de los representantes argentinos de las mismas se realiza una movilización y concentración de más de 3 mil personas frente a la sede de la Cancillería. El cónclave culmina sin acuerdo y con el aplazamiento de la reunión del CNC prevista inicialmente para el próximo abril en Puebla, México.

ABRIL

1º DE ABRIL - CHILE

Entra en vigencia el TLC aprobado con Corea del Sur.

3 Y 4 DE ABRIL - BUENOS AIRES, ARGENTINA

Colombia, Ecuador y Venezuela, países miembros de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y el MERCOSUR avanzan en la negociación de un TLC que comenzaría a regir a partir del 1º de julio.

13 DE ABRIL - CALI, COLOMBIA

Finaliza la X Reunión Ordinaria del Consejo Consultivo Laboral Andino integrado por las 16 centrales sindicales de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Estas organizaciones elaboran una declaración final donde rechazan los TLC, el ALCA, el PPP y la Iniciativa Andina, así como acuerdan impulsar y participar de un cronograma de acciones regionales contra dichos acuerdos.

15 DE ABRIL - REGIÓN ANDINA

Se realiza la primera Jornada de Movilización Andina contra el ALCA y los TLC bilaterales con EE.UU. Las movilizaciones y protestas son particularmente

importantes en Colombia donde, convocadas por la Central Única de Trabajadores, la ANSA y la Red de Acción frente al ALCA y al Libre Comercio (RECALCA), recorren buena parte de las ciudades del país. Se realiza también una importante movilización en Quito, Ecuador.

24 Y 25 DE ABRIL - BUENOS AIRES, ARGENTINA

Tiene lugar la III Asamblea Nacional Contra el ALCA que cuenta con la presencia de representantes de las campañas de Brasil y Uruguay y del ministro de Cultura cubano. Los participantes resuelven un plan de acción que contempla la convocatoria a unas Segundas Jornadas de Consulta Popular para los primeros días de julio próximo y a una movilización nacional para septiembre.

26 DE ABRIL - PANAMÁ

Comienza la primera de 4 rondas de negociación para un TLC entre Panamá y EE.UU.

30 DE ABRIL - BOGOTÁ, COLOMBIA

Se realiza el I Encuentro de la Gran Coalición Democrática con la participación de delegados de 220 organizaciones sindicales, sociales y políticas del país, quienes definen impulsar todas las tareas necesarias para derrotar el paquete legislativo del presidente Uribe, el TLC con EE.UU. y el ALCA.

Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).

Coordinación y revisión: José Seoane y Clara Algranati.

Relevamiento y sistematización a cargo de Juan Chaves, Marcelo Perera y Sol Denot.

Fuentes consultadas:

Cronologías del conflicto de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela elaboradas por el Observatorio Social de América Latina (OSAL) para el período enero 2003 - abril 2004.

Boletines Informativos de la Campaña Continental contra el ALCA <www.movimientos.org/noalca>, Red Internacional de los Movimientos Sociales <www.movsoc.org>, Alianza Social Continental <www.asc-hsa.org>, Encuentro Hemisférico de Lucha contra el ALCA <www.alcaabajo.cu>, Autoconvocatoria Argentina No al ALCA <www.noalalca.org.ar>, Fundación Solón <www.funsolon.org/TLCs/movimiento/indexmov.htm>, Grupo de Trabajo de la Asamblea Anti-Guerra <www.march20th.org> y Stop the War Coalition (UK) <www.stopwar.org.uk>

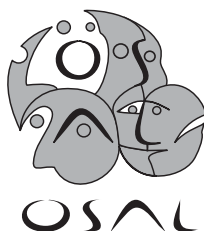
CUPÓN DE SUSCRIPCIÓN

LEA ATENTAMENTE LAS INDICACIONES DEL DORSO, COMPLETE Y ENVÍE EL SIGUIENTE CUPÓN (*utilice letra imprenta mayúscula*):
 Deseo suscribirme a la revista OSAL, para recibir en la dirección detallada más abajo, los 3 (tres) próximos ejemplares.

NOMBRE Y APELLIDO	_____
INSTITUCIÓN	_____
DOMICILIO DE ENVÍO: CALLE	_____
N°	_____
PISO	_____
DEPTO.	_____
OTRO DATO	_____
CÓDIGO POSTAL	_____
CIUDAD	_____
PROVINCIA/ESTADO/REGIÓN	_____
PAÍS	_____
TELÉFONO (_____)	_____
FAX (_____)	_____
OTRO (_____)	_____
E-MAIL (<i>en minúscula</i>)	_____
OTRO DATO RELEVANTE	_____

REGIÓN	SUSCRIPCIÓN INSTITUCIONAL	SUSCRIPCIÓN INDIVIDUAL	SUSCRIPCIÓN ESTUDIANTE*
AMÉRICA LATINA Y CARIBE	<input type="checkbox"/> u\$s 75,-	<input type="checkbox"/> u\$s 60,-	<input type="checkbox"/> u\$s 45,-
EUROPA, EE.UU. Y CANADÁ	<input type="checkbox"/> u\$s 90,-	<input type="checkbox"/> u\$s 70,-	<input type="checkbox"/> u\$s 60,-
ÁFRICA, ASIA Y OCEANÍA	<input type="checkbox"/> u\$s 100,-	<input type="checkbox"/> u\$s 80,-	<input type="checkbox"/> u\$s 70,-
ARGENTINA	<input type="checkbox"/> \$ 90,-	<input type="checkbox"/> \$ 70,-	<input type="checkbox"/> \$ 55,-

La suscripción incluye los gastos de envío. En el caso de los No Radicados en Argentina el envío se realiza vía aérea a través del sistema puerta a puerta de FedEx.
 * Los estudiantes deberán enviar, adicionalmente, una acreditación fehaciente de su condición.



SUSCRIPCION A 3 NÚMEROS DEL OSAL

Para enviar el presente cupón

Por correo:

CLACSO
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales
Av. Callao 875, piso 3, C1023AAB
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Argentina

Por fax:

(54 11) 4812-8459

Si desea enviar la información por mail puede hacerlo transcribiendo los datos solicitados en el cupón bajo el *subject* **suscripción** a **osal@clacso.edu.ar**

MODO DE PAGO

Para los NO radicados en la República Argentina

Enviar un cheque por correo certificado a nombre del "Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales". Sobre banco y plaza de EE.UU. expresado en dólares estadounidenses, a la dirección indicada arriba.

Por otra forma de pago comunicarse vía mail a **osal@clacso.edu.ar** o bien con la señora Cristina Camilleri a **crisca@clacso.edu.ar** indicando en el *subject* **pago OSAL**.

Para los radicados en la República Argentina

Podrán optar por abonar en nuestras oficinas o bien enviarnos un cheque por correo certificado a nombre del "Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales", sobre cualquier plaza de Argentina a la dirección indicada arriba.

También puede abonar a través de un giro postal; en tal caso, puede enviar un mail a **osal@clacso.edu.ar** indicando en el *subject* **pago de suscripción** o comunicándose con la señora Ivana Brighenti llamando a los teléfonos **(011) 4811-6588 ó (011) 4814-2301**